

Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez (El señor de las sombras)

Joseph Contreras - Corresponsal de Newsweek – Universidad de Harvard
Con la colaboración de Fernando Garavito

CAPITULO I

El misterio de los aviones fantasma

En el año de 1981, siendo director del Departamento de Aeronáutica Civil, Álvaro Uribe Vélez, el Candidato con mayor opción para ocupar desde el próximo 7 de agosto la Presidencia de Colombia, le otorgó una licencia a Jaime Cardona con el fin de que trabajara la ruta aérea Medellín-Turbo. Cuando Iván Duque Escobar, que era el gobernador de Antioquia en ese momento, se enteró de la autorización, puso el grito en el cielo. Como no conocía al funcionario que había cometido semejante despropósito, preguntó quién era. -Es-le contestó uno de sus asesores - uno de los hijos de don Alberto Uribe Sierra. -¿Y qué méritos tiene para que lo hayan nombrado? -Bueno -dijo el asesor-, es joven, tiene 29 años, y su padre ha sido siempre un liberal de raza mandaca. -Nada de eso tiene importancia -tronó el gobernador- A mí lo que me interesa es que sepa quién es Jaime Cardona. El asesor no supo qué contestar. En su fuero interno pensó que en Antioquia todo el mundo sabía quién era Jaime Cardona, un empresario vinculado estrechamente a la mafia. Poco después fue condenado por el delito de narcotráfico, y más tarde murió en un accidente aéreo, cuando su avión particular despegaba de la pista que había construido en su hacienda. Duque, un experimentado político casi veinte años mayor que el nuevo funcionario, pidió que lo llamaran. -Director -le dijo con una costumbre típica del país que permite dirigirse a alguien por el cargo que ocupa-, me he enterado de la licencia que usted le otorgó a Jaime Cardona. Quiero decirle, en caso de que no esté enterado, que se trata de un empresario vinculado a la mafia. Al otro lado de la línea, el gobernador oyó un silencio espeso. Y luego, cuando esperaba alguna reacción positiva, escuchó estupefacto que el hasta entonces desconocido hijo de don Alberto sostenía con voz fría y serena que el gobernador estaba mal informado y que el señor Cardona era un hombre de bien. Colgaron. De inmediato, el gobernador pidió que lo comunicaran con la Secretaría Privada del presidente Turbay Ayala, donde solicitó una cita. -Es urgente -le dijo al funcionario. Mientras el presidente lo recibía, Duque Escobar se dedicó a averiguar qué otras medidas había tomado Aerocivil en los últimos meses. Supo entonces que había otorgado licencias para la construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi y Urao, y en la hacienda "El 90", en Caucasia, propiedad, otra vez, de Jaime Cardona. Con esos datos entre el portafolio viajó a Bogotá. En el despacho del presidente, hizo un relato pormenorizado de las disposiciones. Para no comprometerse le dio el beneficio de la duda: -Es posible que por su juventud no sepa quiénes son las personas que están detrás de esos negocios. Pero Turbay, un viejo zorro político fogueado en muchas plazas, se tomó la cabeza a dos manos y con un gesto y una exclamación que en él son característicos, dijo con su inconfundible voz nasal: -¡Válgame Dios, mi madre! El gobernador salió convencido de que el asunto se resolvería en pocos días. Pero estaba equivocado. Aunque las licencias fueron derogadas, los archivos aparecieron misteriosamente borrados y el funcionario siguió en su puesto hasta el 7 de agosto de 1982, cuando el presidente terminó su período. Poco después, sobre la polémica actividad que él adelantó en Aerocivil, cayó el tenue manto del olvido. Pero algunas personas jamás la olvidaron. Por ejemplo, los parientes

de Fernando Uribe Sénior, uno de esos próceres discretos que se encuentran de vez en cuando en Colombia. Uribe había sido alcalde de Medellín y concejal de esa ciudad durante varios períodos hasta que, en enero de 1980, el presidente Turbay lo llamó a que lo acompañara como director del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, Aerocivil. El nuevo funcionario tomó su cargo con seriedad. En los primeros días de febrero ordenó clausurar algunos aeropuertos clandestinos por donde salían cargamentos de marihuana con destino al exterior. Veinte días después, un mes luego de haber tomado posesión, fue asesinado. El Colombiano del 26 de febrero atribuyó el crimen a las mafias. En la página 11 A de la edición de ese día, sostuvo que la muerte de Uribe Sénior obedeció a "represalias del narcotráfico". Pero en Aeronáutica no creyeron esa versión. El subdirector, Guillermo Ferro, y el jefe de Operaciones, Julio Otálora, se negaron a comentarla con un argumento peregrino: que, en otro sonado crimen, hacía poco tiempo había sido asesinado en Bogotá el jefe de Operaciones de Aerocivil, coronel Osiris de J. Maldonado. El Colombiano informó el 27 de febrero que la incógnita sobre los móviles no se había despejado. "Las causas siguen ocultas -dijo el periódico- mientras aumentan las versiones. La mayoría está de acuerdo en que el destacado personaje lo mató la mafia por cuanto durante el poco tiempo que llevaba al frente de la Aerocivil había tenido que proceder contra ciertas organizaciones y por la clausura de algunos campos de aterrizaje que fueron descubiertos. Además se dijo que Uribe Sénior estaba para culminar detallado informe respecto a una investigación administrativa que se adelantó contra determinadas entidades que ilícitamente utilizaban naves aéreas para el transporte de narcóticos".

Pasaron dos meses. Hasta que el 24 de marzo de ese año, dentro de la estricta milimetría burocrática impuesta por Turbay, el gobierno nombró para reemplazarlo a Alvaro Uribe Vélez, un joven liberal del grupo de Bernardo Guerra Sema. Guerra, un político elemental que había permanecido en el Senado durante varias legislaturas a punta de componendas y rifas de neveras, se alegró. Uno de sus pupilos llegaba, y llegaba pronto, a un cargo de representación nacional. Con sagacidad, extendió sus golosos ojos de batracio sobre la nómina. Quienes no lo conocían bien pensaron que Uribe Vélez permanecería muy pocos días en el cargo. -O lo matan o se lo comen vivo -fue el comentario en los mentideros políticos de Bogotá, donde la figura del padre y los hechos de la familia habían pasado prácticamente desapercibidos. Pero estaban equivocados. Uribe Vélez logró permanecer 28 meses largos en la dirección del Departamento sin sufrir ni un rasguño. Un año después del retiro de Uribe Vélez, el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ordenó a la Aerocivil "*suspender los vuelos de naves de narcotraficantes*" y señaló que en el pasado esa entidad había adolecido de una actitud pasiva y negligente. El 8 de septiembre de 1983, en la página 17 A, El Tempo informó sobre la medida: "El Consejo Nacional de Estupefacientes solicitó ayer a la Aeronáutica Civil suspender la operación aérea de la flota de aviones, helicópteros y avionetas de propiedad de Pablo Escobar y Carlos Lehder".

El Colombiano de la misma fecha fue más específico. En una noticia de primera página sostuvo que se había firmado un "acuerdo político sobre dineros calientes" y señaló que "la medida afectará a Carlos Lehder, Pablo Escobar y Jorge Ochoa quienes han sido señalados por las autoridades de Estados Unidos como cabecillas del cartel de la cocaína." Recientemente -añadió el periódico- el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla manifestó en desarrollo de un debate en la Cámara, que el parlamentario antioqueño Pablo Escobar Gaviria posee tres hangares en el aeropuerto de Medellín y una flotilla de aviones para transportar la droga".

Al día siguiente la noticia se hizo todavía más nítida. En la primera página de El Tiempo se dio cuenta de que, obedeciendo las órdenes del ministro, la Aeronáutica Civil había suspendido el permiso de operación a 57 aparatos. El periódico no precisó a quien pertenecían, pero la lista de los dueños apareció en El Colombiano (septiembre 9/83, página 9B): "Los aviones, de acuerdo con firmes indicios, pertenecen a Carlos Lehder, Pablo Escobar, Fabio Ochoa y Samuel Alarcón, entre otros, aunque ante la Aeronáutica Civil están registrados a nombre de otras personas". Esas "otras personas" se conocieron veinticuatro horas después: "En la lista de implicados -escribió otra vez El Colombiano en la página 7A, figuran Justo Pastor Rodríguez Gacha con cinco aeronaves, Alfonso Ramón Rodríguez Muñoz con tres, y Aeromercantil Líber y Luís Eduardo Marín Marín con dos cada uno. Entre las naves figuran doce helicópteros, veintiséis avionetas y cuatro aviones. Por tipos de aeronave aparecen dieciocho avionetas Piper bimotor, ocho avionetas Cessna monomotor, un avión Cessna monomotor, 12 un Discraft C-90, un D-C6, un Curtís C-47, nueve helicópteros Sioux, dos helicópteros Equeil y uno Bell". El 27 de septiembre, Ligia Riveros, una de las periodistas mejor informadas de Colombia y quien, precisamente por esa circunstancia se vio obligada a salir del país meses más tarde, dio cuenta en Cromos sobre una parte importante de la flotilla de aviones del mayor de los capos. "Dos aviones Piper Séneca de fabricación norteamericana están listos para partir en cualquier momento de la hacienda Nápoles, propiedad de Pablo Escobar, a veinte minutos de Puerto Triunfo. El juez décimo superior de Medellín dictó auto de detención contra el parlamentario, suplente a la Cámara de Representantes, por presunta autoría intelectual de la muerte de dos agentes de la policía. "La entrada a la Hacienda Nápoles se hace por una carretera con luces fosforescentes de señalización. Hay 10 mil árboles frutales y maderables y plantas ornamentales. Su zoológico tiene 1.500 animales de 40 especies. No es raro ver hipopótamos, rinocerontes (como "Chacho" que costó en África 50 millones de pesos y estuvo a punto de morir cuando llegó al país por obra y gracia de Page 4 un fusil sanitario del mderena), jirafas, faisanes, avestruces, antílopes, cebras, miniponys, búfalos, cigüeñas, tortugas, galápagos, elefantes de cinco toneladas, grullas... Pablo Escobar tiene concentrados en su hacienda de 632 fanegadas, animales de los cinco continentes. El día en que Cromos estuvo en el zoológico, su administrador, Héctor Barrientes, compró cinco faisanes y siete cisnes por setecientos mil pesos (\$5 millones del 2002). "La pista del aeropuerto es amplia y pavimentada, cerca al corral de los caballos árabes y de los miniponys de los 13 Estados Unidos. Su sistema de orientación es de los más sofisticados. Tiene dos aviones Piper Séneca III, bimotores de seis puestos, con tanques adicionales de combustible en las alas, que permiten una autonomía de vuelo de más de seis horas. Una de las aeronaves está en el hangar que tiene cataviento y un gigantesco tanque con gasolina. La otra, con matrícula HK - 2451P, está lista en la pista, que dispone de iluminación nocturna y banderas amarillas para guía del piloto. "La orden de Pablo Escobar, según los empleados, es tener listas las avionetas para viajar en cualquier momento. Por lo tanto el servicio de mantenimiento es permanente". Otro mundo. Pero con una enorme participación en el común y corriente, donde un funcionario cualquiera, en Aerocivil, en Bogotá, supo de la existencia de las naves, de las pistas, de los pilotos. Y no hizo ni se hizo una mínima pregunta. Ahora, ¿por qué ordenaban la detención de Escobar? El delincuente más poderoso del mundo cayó en la mira del juez 10° de Medellín, quien decidió detenerlo, "sin beneficio de excarcelación", junto con su primo Gustavo Gaviria Rivero, como autores intelectuales del asesinato de dos agentes de seguridad y control que se negaron a dejarse sobornar en Itagüí cuando descubrieron un contrabando de 19 kilos de cocaína. "Los representantes de la ley - cuenta Riveros- fueron acribillados desde una motocicleta el 30 de marzo de 1977 en el barrio La

Floresta. Si después de un juicio público es declarado culpable, el congresista tendrá que cumplir una condena de 15 a 25 años". Escobar se acogió a la inmunidad parlamentaria.

Pero esas noticias quedaron sepultadas bajo otras más urgentes. En Colombia los acontecimientos son vertiginosos, y no hay tiempo para pensar sobre sus causas, conocer a sus protagonistas o analizar sus consecuencias. Las causas siempre son secretas, los protagonistas casi nunca son los protagonistas, y las consecuencias se conocen cuando atropellan a la víctima. De manera que no volvió a saberse mayor cosa del asunto. En su libro *Los jinetes de la cocaína*, Fabio Castillo lo planteó sin mayor énfasis. "Uribe –escribió allí– le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de Aerocivil... Siendo Rodrigo Lara, ministro de Justicia, ordenó paralizar treinta aeronaves a los Ochoa, diez a Pablo Escobar, diez a Gonzalo Rodríguez Gacha y cuatro a Carlos Lehder Rivas Y sin embargo dijo que sólo se había inmovilizado una pequeña parte de la gran flota aérea de los narcotraficantes de Medellín". Y pare de contar. Pero el tema resucitó alrededor de la campaña política. Por eso, el 21 de abril del 2002, la Unidad Investigativa de El Tiempo trató de explicar algunas de las medidas tomadas por Uribe durante su gestión al frente de Aerocivil. Primero, sostuvo que "en el lapso comprendido entre marzo 24 de 1980 y agosto 6 de 1982 se otorgaron 562 licencias", pero que "no era el director el encargado de suscribirlas... sino las divisiones de Control Técnico y de Operaciones Aéreas". "De las licencias aprobadas -añadió el periódico-, 221 están activas (con documentos y antecedentes en regla) y 341 inactivas. Se revisaron en los archivos de inteligencia de un organismo de seguridad los antecedentes de los titulares de las licencias inactivas y ninguno tiene requerimiento judicial. La administración de Uribe también otorgó licencia de operación 15 a 95 pistas. Según la Aeronáutica, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Comando de la Brigada Militar del Ejército de la jurisdicción certificaron que sus propietarios no tenían antecedentes. En todo caso, en mayo de 1988 el entonces procurador general, Horacio Serpa, determinó que no existía ningún indicio que comprometiera la conducta de Uribe durante su gestión en la Aerocivil y en la alcaldía de Medellín". En un reportaje concedido a Caracol y a RCN el 17 de febrero del 2002, Uribe señaló que en la Aeronáutica hice "una gran labor que el país en su momento premió". "Siendo yo director -dijo-, ningún trámite de la Aeronáutica se podía realizar sin que el interesado entregara dos requisitos: el certificado de estupefacientes del Ministerio de Justicia y el visto bueno de la Brigada de la Jurisdicción». Y respecto de las licencias explicó que constituían "un problema técnico que manejaban funcionarios de la Aeronáutica. Conmigo trabajaban personas como el hoy general Edgar López. Todos los funcionarios de esa época están vivos». Los defensores de oficio de Uribe han hecho énfasis sobre su gestión en Aerocivil. El Tiempo investigó todo lo relacionado con "las licencias de pilotos, pistas, aerolíneas y aeronaves autorizadas durante la administración Uribe", y publicó sus conclusiones el 21 de abril de este año. "Durante ese lapso -marzo 24 de 1980 a agosto 6 de 1982-, se otorgaron 562 licencias. 'No era el director el encargado de suscribir la autorización de licencias', dijo la Aerocivil, y añadió que esa tarea era de las divisiones de Control Técnico y de Operaciones Aéreas. De las licencias aprobadas, 221 están activas (con documentos y antecedentes en regla) y 341 inactivas. Se revisaron en los archivos de inteligencia de un organismo de seguridad los antecedentes de los titulares de las licencias inactivas y ninguno tiene requerimiento judicial. La administración de Uribe también otorgó licencia de operación a 95 pistas. Según la Aeronáutica, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Comando de la Brigada Militar del Ejército de la jurisdicción certificaron que sus propietarios no tenían antecedentes. La información sobre licencias a aeronaves aún no ha sido entregada por la Aerocivil. En todo caso, en mayo de 1988 el entonces procurador general, Horacio Serpa, determinó que no existía ningún indicio que

comprometiera la conducta de Uribe durante su gestión en la Aerocivil y en la alcaldía de Medellín". Todo eso está muy bien. Pero lo que está definitivamente mal es que la investigación de la prensa haya dejado por fuera la presencia de Jaime Cardona, el asesinato de Uribe Sénior, las pistas rechazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, los testimonios de quienes vieron cómo las únicas veces que el director de la entidad se acercaba a los aeropuertos tenían que ver con la llegada de las cuadras de caballos para las dehesas de Fabio Ochoa y de sus hijos, y la labor de salvamento en que debió empeñarse el Ministerio de Justicia para evitar que en la Aerocivil el narcotráfico pudiera seguir haciendo de las suyas. Ahora bien, los escándalos de Uribe en la Aerocivil no tuvieron que ver únicamente con el narcotráfico. El 4 de enero de 1983, Nelson Sánchez Abaúnza escribió una documentada crónica en Cromos, en la que señaló que en esa entidad se habían extraviado 43 millones de pesos, aproximadamente 550 mil dólares de hoy en día.

Su relato fue escueto: "Esta es la historia de un contrato suscrito a un año, pero que mediante un anexo se prolongó a tres, cuatro, y hasta 26 años, con sueldos que alcanzan la no despreciable suma de \$ 12.111.578. Lo anterior corresponde al contrato que firmó Alvaro Uribe Vélez como jefe de Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, cuyo objeto fue el de una "consultoría para el estudio de sistemas y procedimientos administrativos contables y estadísticos", por valor de \$ 43.627.743 con un plazo para su culminación de doce meses (52 semanas) y que realizaría la firma Colasesores Ltda. "En las dependencias de la Aeronáutica Civil se le han sustraído doscientos folios al contrato. La firma contratista, en el momento de perfeccionar el negocio, se hallaba embargada por un banco. Si embargo en el lapso de la diligencia, la Aeronáutica expidió un certificado de disponibilidad de \$ 20 millones para la contratación del estudio. Al contrato se asoció a un ex alcalde de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, quien demostró posteriormente que su nombre fue utilizado de mala fe. De otra parte, el Fondo Nacional de Proyectos para el Desarrollo recomendó no dar a particulares la realización del inventario físico, que pueden hacer los mismos empleados del departamento. Al excluir el inventario físico, el monto del contrato se reduciría de \$43 a \$18 millones de pesos. Se acordó esta reducción, pero a pesar de todo se suscribió por la suma inicial. "El contrato fue suscrito a un año, pero un llamado 'profesional B', que no se sabe quien es, aparece con una dedicación, en semanas, de doscientos quince (cuatro años siete semanas) a razón de \$ 6.005 cada una, para un sueldo de \$1.291.075; un 'profesional A' quien según el contrato, trabajará doscientas veinticuatro semanas (cuatro años 16 semanas), con un sueldo semanal de \$ 6.928 para un gran total de \$1.551.872; un jefe de zona cuyo nombre se ignora, gozó de doscientas catorce semanas, con un sueldo semanal de \$5.543, para un total de \$ 1.186.202. "Al suscribir el contrato entre el DAAC y Colasesores Ltda, por \$43.627.743, se autorizó un sueldo durante 26 años". Uribe Vélez firmó un contrato por dicha suma con Colasesores y luego pidió permiso a la Presidencia para poder suscribirlo. El 3 de marzo de 1981, Horacio Moscoso Jefe de la División de Almacén del DACC, empezó a colaborar en la pronta ejecución de ese acuerdo, y en mensaje dirigido a Uribe Vélez dijo que era 'indispensable comunicar a la entidad competente del gobierno la intención de contratar una firma particular' y le recomendó 'no manifestar que ya está seleccionada la firma sino el hecho de que va a celebrarse contrato con una firma particular que tiene el visto bueno y la financiación del Banco Mundial'. "En nota marginal manuscrita Uribe Vélez le pidió a su antiguo asesor jurídico, doctor Hernando Herrera, 'considerar esto para el contrato'. "Cinco meses más tarde, el 11 de agosto del mismo año, se firmó el contrato 3403 por \$43.627.743 entre Álvaro Uribe Vélez como representante legal de la Aerocivil, y Gustavo Torres García representante legal de Colasesores Ltda". La investigación de la Procuraduría señaló que Uribe había firmado un documento que requería

la autorización previa de la Presidencia de la República, y formuló cargos al funcionario. "El 1° de julio de 1982 -sigue la crónica de Sánchez Abaúnza- el revisor de documentos de la Contraloría envió un memorando en que solicita, 'me informe bajo qué circunstancias o motivos el señor delegado de la firma Colasesores Ltda interviene en forma directa en el movimiento de las tarjetas de Kardex'. La Contraloría advierte que el empleado de Colasesores puede llegar a alterar cifras de las tarjetas. Tengo entendido que estos señores de Colasesores prestan servicios bajo contrato de asesorías y simplemente ellos pueden observar, preguntar, mas no participar en el movimiento interno de almacenes, situación reservada para funcionarios nombrados por el Departamento, concluye el memorando. "La primera cláusula del contrato estipuló un anticipo de veinte millones de pesos a los quince días de firmarse el documento. "Ni Alvaro Uribe Vélez ni ninguno de los funcionarios del DAAC verificó el estado financiero de Colasesores, firma que durante el perfeccionamiento del contrato se encontraba embargada por el Banco Real de Colombia. Este embargo consta en tres partes: juzgado 14 Civil del Circuito, Banco Real de Colombia y Cámara de Comercio de Bogotá". En carta dirigida a Cromos, Uribe explicó que "la entidad oficial contratante durante mi gestión, supervisó y administró el contrato por intermedio del doctor César Villegas, jefe de Planeación". Y es aquí cuando, relacionado con Uribe, aparece por primera vez este nombre. Cromos señala en su siguiente edición que "pese a los múltiples problemas que tienen los aeropuertos en materia de infraestructura y seguridad aérea para la Aerocivil es más importante el turismo que la inversión", y explica que en 1982, durante la gestión de Uribe, para la compra de equipo destinó veintitrés millones de pesos mientras que para viáticos ordenó veintidós millones quinientos mil. Un año antes (en la misma administración) la situación me todavía peor: para compra de equipo doce millones de pesos y para viáticos dieciséis millones y medio". ¿Cómo se gastaron esos viáticos? Villegas contribuyó con largueza en ese propósito. Uribe Vélez, lo comisionó para viajar a Montreal entre el 13 de septiembre y el 4 de octubre de 1980; el 20 de febrero de 1981 lo envió a Washington, donde permaneció hasta el 28 del mismo mes; entre el 6 y el 11 de julio del mismo año, estuvo en Lima; el 7 de septiembre me de nuevo a Washington, donde permaneció hasta el 12; y el 1° de noviembre viajó otra vez a Montreal, en esta ocasión con escala en Cancún a su regreso. De los viajes que se hicieron en 1982 no se tiene mayor noticia. Los archivos fueron borrados, y las memorias de la gestión administrativa de Uribe se convirtieron en un documento secreto, que no se consigue en biblioteca alguna. Uribe Vélez designó a Villegas como "profesional especializado de la Oficina de Planeación", el 29 de agosto de 1980. Seis meses más tarde, el 3 de marzo de 1981, lo encargó de la Jefatura de esa misma oficina, y el 10 de abril lo nombró en propiedad. Al referirse a los pormenores del "contrato fantasma", Uribe Vélez le explicó a Cromos que él había nombrado una comisión para averiguar por el paradero de dichos fondos, de la que formaron parte "Horacio Moscoso y César Villegas, 21 director de Planeación, un hombre honrado que debutaba la administración pública y que traje de Norteamérica para que me colaborara". Pero Villegas, su íntimo colaborador y su socio, no era tan honrado como él quería hacer creer. El país conoció con todo detalle sus comprometedoras relaciones con la mafia, en las que se originó su apodo de "El Bandi". Hijo de un sargento veterano de la guerra de Corea César Villegas nació el 28 de febrero de 1954, el mismo día que el Santa Fe, un equipo de fútbol al que se dedicó con entusiasmo. Fue estudiante pobre del Instituto Técnico Distrital, economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y especialista en transporte aéreo graduado en el Canadá. Cuando regresó al país, en 1980, Ernesto Samper, jefe de un pequeño movimiento político conocido como "Poder Popular", se lo recomendó a Uribe Vélez, recién nombrado en Aerocivil. En ese momento, Uribe era, según la revista Semana, "la mano derecha" del futuro mandatario. -Es un hombre inteligente -le dijo Samper-. Si usted quiere, puede hacer de él el mejor de sus

hombres. Era difícil prever hasta dónde llegaría la meteórica carrera de Villegas. Al terminar su gestión en Aerocivil enfrentó tres procesos abiertos por la Procuraduría alrededor de la expedición irregular de licencias de vuelo para empresas de narcotraficantes. Aunque los eludió sin problema, no logró que Virgilio Barco lo nombrara director de la entidad. Luego fundó la sociedad "VTS Proyectos e Inversiones". "V" era él. "T", era Turbay, Juan Manuel, ministro de Desarrollo de Samper y uno de sus hombres de confianza. "S" era Strouss, Jacquín, la esposa de Samper, quien sólo permaneció 22 días de 50 en la sociedad. Pero Villegas siguió adelante. Ya entonces se le consideraba el mecenas indiscutible de Alvaro Uribe Vélez y de Joselito Guerra de la Espriella. Era tan rico, que se dio el lujo de contratar el avión privado que trajo del Canadá al especialista que atendió a Samper con ocasión del atentado de que fue víctima en 1989. En la campaña de 1990 fue el gerente financiero de Samper y de su equipo. Pero cuatro años después el mismo Samper le pidió retirarse, para abrir campo al hombre que se convertiría en uno de sus peores dolores de cabeza: Santiago Medina. Logró no ser mencionado para nada en el proceso 8.000, hasta que Guillermo Pallomari, el contador del cartel de Cali, dijo en Estados Unidos que los Rodríguez le habían girado varios cheques con destino a la campaña liberal. La investigación permitió encontrar ocho de esos instrumentos, girados entre 1992 y 1994, por valor de 200 millones de pesos, provenientes de la cuenta personal de Miguel Rodríguez. La Fiscalía le dictó medida de aseguramiento, y un juez lo condenó a cinco años de cárcel por el delito de "enriquecimiento ilícito". El 4 de marzo, una semana después de haber cumplido 48 años, fue asesinado. El 5 por la mañana tenía una cita clandestina con un funcionario de la Embajada norteamericana en Bogotá "para hablar, entre otros temas, sobre Uribe". Aunque el crimen se atribuyó oficialmente a problemas relacionados con su actividad deportiva y el presidente de la Dimayor anunció que esa organización había quedado "sobrecogida" y que el hecho "enlutaba al país", algunos expresaron dudas sobre el particular. Se supo entonces que los vínculos de Villegas con los Rodríguez Orejuela seguían vivos, pero se comentó también que testigos excepcionales 23 del conflictivo pasado de Uribe Vélez comenzaban a desaparecer de manera sistemática. En efecto, la relación de Villegas y de su jefe en Aerocivil no se rompió cuando ambos se retiraron del cargo. Ya habían organizado una compañía para importar y vender cabañas de madera importadas del Canadá. En la constitución de la sociedad no figuró Uribe, quien ya había tenido tiempo de enterarse de los alcances delictivos de su nuevo amigo. Así pues, la empresa se llamó inicialmente "Taller de Embalse", y tuvo como socio al arquitecto Héctor Jaime Cuesta Escobar. Uribe quedó en la sombra. Poco después pasó a llamarse "VC Maderas", y se dedicó a comprar casas prefabricadas a una empresa canadiense, la Maison de Autrefois du Québec, y a venderlas en un mercado dominado en ese momento por los dineros de la mafia. Villegas le ofreció precios especiales a varios políticos, entre ellos al expresidente Alfonso López Michelsen, quien la compró por medio de su esposa, y al futuro presidente Ernesto Samper, quien según una destemplada aclaración que el constructor envió a un comentario de prensa en El Espectador, "casi no la paga". En esa misma comunicación Villegas dice que nunca fue socio de Uribe, que su socio fue el arquitecto Héctor Jaime Cuesta, y que en Antioquia sólo vendieron dos cabañas. Para terminar, reconoce que está siendo juzgado, "pero no por sus nexos comerciales sino políticos". Villegas estuvo estrechamente relacionado con el mundo político del país y sacó de él un notable partido. Cuando Rudolf Hommes era presidente de Fogafin, entidad encargada de privatizar el Banco Tequendama, actuó como apoderado del Banco de la Construcción de Venezuela, que terminó por 24 comprarlo. Ese negocio le reportó ganancias por millón y medio de dólares. Pero, en contra de lo que se ha creído hasta el momento, la participación más activa que tuvo en la campaña política del 94 no fue alrededor de la candidatura de Samper para la Presidencia de la República, sino alrededor

de la de Alvaro Uribe para la Gobernación de Antioquia. En efecto, el 24 de octubre de 1994 giró el cheque No. 6684889 contra su cuenta corriente número 03701791-0, del Banco de Caldas a favor de Alvaro Uribe Vélez, por valor de 5 millones de pesos. Una semana más tarde Uribe resultó electo como nuevo mandatario seccional. El cheque, girado por VC Inversiones (la empresa de las cabañas), fue consignado el 3 de noviembre del mismo año en la cuenta 01104863-4, cuyo titular era la Corporación Ideológica Rafael Uribe Uribe, entidad dirigida por Uribe Vélez. En la cuenta de VC Inversiones, Villegas manejaba algunos negocios oscuros. El 26 de enero y el 28 de junio del 94, por ejemplo, ingresaron a ella cheques por veinte millones de pesos, girados por Jairo Ortiz Molinero desde la cuenta número 8023024597-5. Ortiz Molinero era testaferro de los hermanos Rodríguez Orejuela. La gestión de Uribe Vélez en la Aeronáutica constituye un verdadero desastre. Con frecuencia se precia de haber sido el constructor del 60 por ciento del aeropuerto de Rionegro (La Nota Económica, marzo 15-abril 15/2002). No es rigurosamente exacto. El 14 de octubre de 1980, El Colombiano informa que, ante las denuncias formuladas por "graves irregularidades" en la obra, sería inspeccionada por una subcomisión de la Cámara de Representantes. "Los miembros de la subcomisión -escribió el periódico en su primera página- verificarán las denuncias que el ingeniero Felipe Estrada Escobar, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros hizo en la sesión de la Cámara de Representantes del 21 de agosto, sobre irregularidades en el contrato con la firma española Dragados y Construcciones. Las denuncias ya fueron trasladadas al Presidente de la República, al Contralor General de la Nación, al Procurador General de la República y al Consejo de Estado".

El resultado de la visita no produjo mayores resultados, ni el funcionario señalado presentó renuncia de su cargo. Pero lo cierto es que el 15 de octubre, también en la primera página, el mismo periódico señaló que "la subcomisión... enjuició duramente el papel cumplido por la Aeronáutica Civil, al permitir el cambio de los diseños originales. Consideraron los congresistas que la actitud asumida por Aerocivil daba amplias ventajas al consorcio Dragados y Construcciones en términos de tiempo y costos. Además señalaron que el contrato fue adjudicado a una firma que presentó mayores precios y una diferencia de tres meses en su ejecución, lo que deja ver mayores ventajas para el consorcio constructor". Al término de la gestión de Uribe Vélez, esos tres meses se habían convertido en dos años de retraso. En efecto, el nuevo director de Aerocivil, Juan Guillermo Penagos, declaró en Cromos (abril 26 de 1983) que "cuando yo entré, encontré la obra con un retraso de dos años". Los enemigos de Uribe, que los tiene -y grandes-, podrían hacer una ecuación elemental: si en 28 meses de gestión, la entidad que él manejaba se atrasó dos años, ¿cuánto se atrasará el país en cuatro años de una eventual Presidencia suya? La respuesta de uno de ellos fue fulminante: se atrasará toda la historia. En efecto, las resistencias que tiene Uribe son grandes. Más grandes aún que los entusiasmos casi místicos que despierta entre grandes sectores de la población de un país acosado por el desempleo, la corrupción y la guerra. A Uribe se le ha visto como el candidato preferido de los grandes monopolios, como el candidato señalado por los medios de información (sin tener en cuenta que en Colombia los medios pertenecen a los monopolios), como el candidato de los sectores delictivos más oscuros del país. Y aunque sus banderas políticas se han examinado con lupa, muy pocos han señalado que detrás de ellas no hay nada distinto de la palabrería tradicional de los políticos colombianos. Su lema de campaña, "Mano firme, corazón grande" suena un poco demodé en medio del sofisticado ejercicio publicitario de Colombia. Y, además, si se examinara su programa de gobierno a partir de un riguroso ejercicio académico, se encontraría muy poco, por no decir nada, sobre qué debatir. Un grupo de

profesores universitarios vinculados a la campaña de "Lucho" Garzón, el tercer candidato con alguna opción electoral, esquematizó el universo ideológico del candidato. Sin caer en la tradicional terminología de una izquierda que todavía hace de las suyas en el lenguaje político colombiano, en ese análisis se veía con claridad que para un apreciable sector de la opinión pública, con su propuesta de Estado Comunitario, Uribe representa la necesidad de centralizar al poder ejecutivo para lograr una unidad de mando en la guerra que se avecina. Su política "ayuda a que se profundice en Colombia un modelo económico caracterizado por la más grande acumulación y concentración de capital y tierra en unas pocas manos, mientras el capital financiero controla las arterias vitales de la economía.

Su proyecto de Estado es fascista, sustentado en elementos como la centralización absoluta del poder ejecutivo, el control y disminución del Congreso, el fortalecimiento del aparato militar, el desarrollo de la estructura paramilitar y la negación de las libertades democráticas", entre otros. Su propuesta de seguridad ha sido criticada duramente por las asociaciones internacionales de Derechos Humanos. En síntesis, "hoy se debe crear una milicia civil, dándole armas a un millón de desempleados para que patrullen los campos y proporcionen información al Ejército y la Policía".

Muchos colombianos no olvidan que Uribe formuló su propuesta ante un gremio que ha sido calificado como el más reaccionario del país, el de los ganaderos. En el Congreso Nacional de Fedegán, reunido en Cartagena en noviembre del año 2000, Uribe fué recibido por los participantes con el saludo falangista. Entre muchos miembros con una hoja de vida intachable, Fedegán agrupa a decenas de hacendados que se precian de mantener relaciones estrechas con los paramilitares, e inclusive de financiarlos económicamente.

De otra parte, Uribe ha manifestado en forma reiterativa que una vez se posesione como presidente de la República llamará a los cascos azules de la ONU para que intervengan activamente en el conflicto armado que vive el país. Esa propuesta, que no es viable dada la situación internacional de Colombia, provocó el rechazo unánime de los círculos políticos y académicos, pero fue recibida con beneplácito por amplios sectores de un país que no encuentra respuesta alguna posible para el conflicto que lo azota sin interrupción desde 1946 o 47. Esta polarización muestra con claridad el estado en que se desenvuelve la actual campaña política, sometida a 28 toda suerte de fuerzas contradictorias que amenazan con sumir al país es una confrontación irreversible.

Por último, las leyes que Uribe impulsó como senador desvelan a más de un analista. Entre ellas se cuentan la 71 de 1988, la 50 de 1990, y la 100 de 1994.

La 71 de 1988, que se conoce como "de reforma pensional", le entregó en 1995 a los grandes monopolios financieros del país, 708 mil millones de pesos.

La 50 de 1990, o "de reforma laboral", ajustó las normas vigentes en Colombia al modelo neoliberal puesto en marcha ese año por la administración de César Gaviria. Uribe Vélez, quien fue el ponente de las misma, la presentó como la clave para solucionar el agudo problema de desempleo que aquejaba al país. Sus resultados fueron muy distintos. El índice del mismo, que en 1990 estaba en el 12 por ciento, pasó en el año 2002 a ser del 20 por ciento. La ley 50 modificó el sistema de estabilidad laboral, eliminó el derecho de huelga en las empresas de servicios públicos, creó el empleo temporal y organizó los Fondos de

Pensiones, que han sido criticados severamente por los enemigos de la monopolización del capital.

La 100 de 1993, o Sistema de Seguridad Social, le quitó toda capacidad al Estado para atender la salud de los estratos más necesitados de la población, que quedaron por completo desprotegidos.

Esa norma, además, llevó a la quiebra al Seguro Social y puso en peligro el derecho a la jubilación de varios millones de afiliados.

En un determinado momento, la campaña de Uribe le propuso a los colombianos un decálogo para votar por el candidato: 1. Es un hombre capaz, preparado e inteligente, tiene buena memoria y férrea voluntad, además es íntegro y ético y moralmente; 2. Tiene personalidad definida; 3. Es imaginativo e innovador; 4. Cumple lo que promete, así lo ha demostrado a lo largo de su vida pública; 5. Ha desburocratizado, legislado y pacificado sin cometer abusos; 6. Como trabajador insigne tiene capacidad innegable de liderazgo; 7. Asume con valor todos los riesgos políticos y no hace demagogia barata; 8. No es áulico de nadie, ni permite cortes a su alrededor; 9. Tiene como prioridad la defensa de la vida, la honra y los bienes de los colombianos; 10. Con disciplina y esfuerzo, y sin negociar sus principios, ha logrado que sus éxitos sean duraderos.

Habría que estudiar hasta qué punto es válido ese decálogo a la luz de los hechos, el comportamiento, los amigos, los partidarios y las organizaciones que avalan al candidato.

Pero ese es un ejercicio que corresponde a los electores. Este libro busca que cada uno decida en conciencia.

CAPITULO II

Sobre mi caballo yo... y sobre yo mi sombrero

Ahora bien, ¿quién es este hombre recursivo, intemperante e inteligente, a quien en los círculos enterados de la política en Colombia se le comienza a conocer como "el señor de las sombras"?

La biografía oficial del candidato dice que nació en Medellín el 4 de julio de 1952, que está casado con Lina Moreno y que tiene dos hijos: Tomás y Jerónimo. Pero, como es habitual en ese tipo de documentos, no dice muchas cosas. No dice, por ejemplo, que es hijo de don Alberto Uribe Sierra, un paisa común pero no un paisa corriente. Antes de haber sido asesinado en un asalto que algunos, entre ellos el candidato, atribuyen a las Farc, y otros a ajustes de cuentas del narcotráfico, don Alberto tuvo tiempo de hacerse a algunas amistades singulares. En el libro *Mi vida en el mundo de los caballos* (Impresos Litográficos, Medellín 1988), donde Fabio Ochoa, el grueso jefe del clan, rinde homenaje a sus amigos "caballistas", y que, dado su estilo evidentemente fué escrito por él, se le ve como era, con su corroscia típica, su actitud arrogante y, valga la paradoja, su gesto desaliñado. La fotografía lo muestra en una justa de caballos, donde fué juez junto a José Juan Quintero y a

Ricardo Gaitán Ospina. Para alguien no iniciado en ese tipo de lenguajes y de actitudes, es prácticamente incomprensible lo que escribe Ochoa. El documento que sigue conserva su redacción ortografía y puntuación originales: "Gran juez, aficionado de tiempo completo, chalán como ninguno y transmite como Danilo. Las arrienda, las muestra y las disfruta (arrendó entre otras, a Sucesor) yo lo crié y fue mi discípulo en la pesebrera Ayacucho, pero se la pasó al maestro y le enseña al padre a hacer hijos; gran comerciante, sufrido, de muchos altibajos 'mis triunfos, mis derrotas' pero ahora sí se le montó a la vida y le robó el amor a las mujeres, de una habilidad sorprendente, con quien él se engancha lleva la peor parte, pero con honradez, o si no que me pregunten a mí, ya me mandó la vaca, parece machorra; bohemio y declamador, ha tenido maravillosas bestias, verbo y gracia: La Castalia, no la he vuelto a ver mejor, Petrarca, La Postal, Dulcinea, Scherezada, Mambrino, Tany, Meduza, etc, etc, que con su esposa Laurita y sus hijos las han lucido muy bien y han adornado todas las ferias, ha tenido mulas famosas como La Zarzamora que se la escogió a don Chepe Rojas en una partida de 200 muletos en Girardot, él mismo la arrendó y fue la mejor, no tiene casi ojo el pobrecito ¡que tal que viera! Irónico como ninguno, una noche en Armenia le dijo Alfredo Millar (Q.E.P.D.): "Ud. Cuando estaba juzgando tal competencia fue que no vio tal caballo que no le dio premio?" contestó: "si, yo si lo vi y mientras más lo veía, más me chocaba el H.P". "Alberto Uribe debía ser el Ministro de Agricultura de por vida, pues este si ha palpado, vivido y sufrido los problemas del campo, la reforma agraria, la violencia, etc., tantas güevonadas que inventaron los políticos y demagogos que no han salido de la carrera séptima; su hijo Alvaro es otro exponente de talla presidencial y Santiago ni se diga, y con El Pecosó que se tengan, fue el que más le heredó. Liberal, descendiente del indio Uribe, a Alberto sí se le puede decir paisa, liberal y macho".

Algún tiempo después, el 14 de julio de 1981, el gordo Ochoa escribe de nuevo sobre Uribe Sierra: "Ahora que empuño de nuevo el lápiz, ya Alberto ha hecho mil travesuras más, antes no dio al "travieso" como le decía él, a Luis Gonzalo (Q.E.P.D.); pues se fue a Méjico y trajo 7 caballos de rejoneo, se encontró con Conchita Cintrón y está encantado, la invitó con su familia y comitiva a visitar la feria de Agosto en Medellín ¡en hora buena Conchita, bienvenida!. También trajo helicóptero, tendré que escribirle un libro a él sólo, esta semana supe que se habían reunido él y Chica, que acaba de llegar de España, hecho todo un caballero rejoneador, e hicieron una reunión a alto nivel y a puerta cerrada para discutir varios puntos sobre la alta escuela Andaluza y Mejicana, no se sabe si saldría humo blanco, allá ellos".

La semblanza biográfica termina con una nota escrita el 23 de mayo de 1985: "Empuño de nuevo la pluma para hablar de Alberto (Q.E.P.D.); lo asesinó la FARC en su hacienda Guacharacas, se hizo matar pero con honor como era él, con su pistolita, disparando contra 30 asesinos con metralletas, armaditos con todas las de la ley y sus permisos desde lo alto, Dios los guarde y les perdone, que dañito hicieron, y ver que no ha faltado mandamás, vacas sagradas intocables, que viven del gobierno, sus coyunturas y sus roscas de por vida, que dicen que esto fue un ajuste de cuentas, estos H.P. son mas bandidos que los que lo asesinaron".

Ahí están algunos de los elementos esenciales para su biografía: caballos, helicóptero, bohemia, el amor de las mujeres, su esposa Laurita, Dairo Chica, sus hijos, el que más le heredó y el de talla presidencial. Y en el fondo el gordo Ochoa, arbitro y señor de estas vidas, estas honras y estas haciendas. Antes de que se supiera que el clan era el clan y que "La Margarita del 8" le pertenecía, Bogotá entera desfiló por los comedores de ese restaurante,

donde se vivía un ambiente rural tan caro a una ciudad atildada que sigue siendo campesina. Y allí, en una fotografía enorme colgada de una pared del fondo, se veían las siluetas inconfundibles de un hombre bajo y grueso vestido a la manera de la Antioquia tradicional, con su carriel, su corrosca y su zurriago, con sus tres hijos varones, rodeando a un mozalbete flaco y descolorido, extraviado en medio de esa abundancia de carnes, y de tanta sonrisa y socarronería. Una foto que bien hubiera podido ser un Botero, de Fabio Ochoa y de sus hijos alrededor del hijo de su amigo Alberto, el que tiene "talla presidencial", y que, según parece, acaba de posesionarse como alcalde de Medellín o de algo por el estilo. Pero esa fotografía desapareció misteriosamente. Debe estar en algún rincón a la espera del momento preciso en que podrá volver por sus fueros. Como estarán -pero al revés- las que fueron decomisadas con iguales y semejantes protagonistas en las Operaciones Milenio y Nueva Generación, o las que guardan -otra vez al derecho- las viejas matronas antioqueñas, que todavía existen, escondidas en alguno de esos álbumes de lenguajes secretos, con sus magnolias amarillas y sus recuerdos, útiles "para curar la tos y la tristeza". Pero también debe haber otra serie de fotos, tomadas posiblemente en Laureles, el barrio "bien" pero no "tan bien" como El Poblado. Por ese entonces, las familias de Laureles eran de clase media, y tenían que luchar a brazo partido contra la irrupción de los dineros de la mafia, que comenzaban a desbaratar muchas economías domésticas. Una de esas familias era la de Uribe Vélez. Ellos vivían en el segundo piso de una casa alquilada en la Circular 77, sometidos a los vaivenes del padre, que le debía plata a medio mundo pero que era honorable. Hasta que un día, cansado de la persecución de sus acreedores y de la indecisión de las muchachas (a quienes cortejaba con entusiasmo), provocada por la poca capacidad económica del pretendiente, cortó de raíz con sus problemas y apareció de la noche a la mañana con una ostentación de mentirijillas, hecha de casa elegante, hacienda en cada departamento, caballos de lujo y helicóptero como medio de transporte. ¿Qué cómo lo hizo? Es un misterio al que aún no se le ha dado cabal respuesta, pero que el candidato ha prometido aclarar en breve. En la entrevista que concedió a El Tiempo el 21 de abril del 2002, dijo que él respondía "por mi padre, por mi madre, por mis hermanos, por mis hermanas, por mi mujer, por mis hijos y por mí". Y añadió: "¿Cree que de otro modo me hubieran elegido tres veces senador y gobernador de Antioquia, o que me hubiera atrevido a manejar tantos temas controversiales? Yo me le he arrimado a la candela".

Y claro que se le ha arrimado a la candela. Con indudable habilidad, Uribe Vélez reconoce que era amigo de los Ochoa. -Sí - le responde a El Tiempo en la misma entrevista, cuándo el periódico lo interroga alrededor de sus vínculos con Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa. Tuvimos amistad por los caballos. Era amigo de ellos. Eso lo publicó muy bien la revista Semana. Es todo lo que tengo que decir y ahí están ellos (los Ochoa) para que les pregunten. Entonces se le ponen de presente las corridas en las que participaba Alberto Uribe, una de ellas a beneficio de Medellín sin Tugurios, el programa de vivienda de Pablo Escobar. La respuesta del candidato es ambigua: -Es posible. No lo negaría. Mi papá era caballista. Sabía manejar caballos de paso y rejonear en caballos portugueses. Ejerció ese oficio toda su vida. La última vez que lo acompañé fue a Manizales, a un festival que se hizo para las Damas Grises. Hacía obras de beneficencia con eso. Le encantaba e iba a todas las corridas, pero no hubo ninguna amistad con Escobar. Lo de los Ochoa era muy distinto. No fue que él se volvió amigo de ellos, sino que mi papá, de 5 o 7 años, andaba a caballo con don Abelardo Ochoa que era bisabuelo de estos muchachos. -Cree -le pregunta El Tiempo- que fue por la corrida benéfica que Medellín sin Tugurios publicó uno de los avisos de condolencia el día en que asesinaron a su padre? -Me vengo a enterar -contesta-. Nunca quise ver los periódicos, ni el cadáver de mi papá ni las noticias de los diarios. -Explica eso -

insiste el periódico- el episodio de que Pablo Escobar envió su helicóptero a rescatar a su padre y que inclusive, asegura El Mundo, usted obtuvo un permiso especial para que el aparato pudiera volar después de las 6 de la tarde? -A mi padre lo asesinaron las FARC el 14 de junio de 1983, casi a las 6 de la tarde. Él llegó a la finca Guacharacas, en donde no tenía sino amistad con los campesinos, y llegan las Farc, 12, 14 tipos con fusiles. Él se atrincheró y comenzó a disparar. En el intercambio de balas, lo mataron. A mi hermano Santiago lo hirieron... A mi hermana María Isabel, a quien iban a secuestrar, la escondió una maestra. Sin embargo hay un libro de la guerrilla en Europa que dice que allá nosotros teníamos una base paramilitar. Yo estaba casi llegando a la Universidad Autónoma Latinoamericana... La primera información que me llegó fue que mi hermano Santiago estaba gravemente herido y que mi hermana María Isabel estaba secuestrada. En esa tragedia familiar, ¿qué hace uno? Desesperadamente, "Mire, llamen a Helicol, al primer helicóptero que haya, ¡por Dios! Me monté casi de noche en el primer helicóptero que consiguieron y no pudimos aterrizar para rescatar a mi hermano. Tuve que regresar a Medellín e irme por tierra. El periódico El Mundo dijo al otro día que el helicóptero era del hacendado Pablo Escobar. Pues bien, no tuve relaciones con Escobar, ni cuando se usaba.

Hasta ahí ese fragmento de la entrevista. Pero en otra página de ese mismo día, el candidato le cuenta al periódico que su hermano Jaime estuvo detenido en 1986 en la IV Brigada de Medellín, porque, según informes de inteligencia, desde su radioteléfono de agrónomo se registraron llamadas a Pablo Escobar.

-¿Su hermano Jaime, quien falleció -le pregunta El Tiempo-, es la misma persona que 'estuvo detenida por la brigada acusado de nexos con Escobar? -Claro -contesta el candidato-. Hicieron escándalo porque era hermano mío, pero eso se cayó. Lo detuvieron con varios industriales por unas llamadas telefónicas con Pablo Escobar. Sin embargo, en los días en que aparecían esas llamadas, él estaba sin voz, interno en una clínica, con el problema de cáncer de garganta que lo mató el año pasado. Y apenas la Brigada vio ese error, una clonación de teléfonos, inmediatamente lo puso en libertad.

La muerte de Uribe Sierra se cuenta en El Tiempo con detalle. Quince minutos después de que él, y sus hijos Santiago y María Isabel aterrizaran en la hacienda a las 4 de la tarde (venían en "un helicóptero Hugues 500" manejado por el capitán Bernardo Rivera), llegan veinte hombres armados. El Tiempo sostiene que lo iban a secuestrar. El Colombiano, que iban a tratar con él "unos asuntos". Hay un enfrentamiento. Uribe les dispara y ellos lo matan de dos tiros en la cabeza (El Mundo afirma que de un disparo en la cabeza y uno en el pecho) y destruyen el helicóptero. (El Tiempo dice textualmente: "Los guerrilleros de las Farc dinamitaron el helicóptero", y El Mundo "ametrallaron y dejaron completamente inservible al helicóptero que estaba valorado en 20 millones de pesos"). Santiago huye y es herido en un pulmón. Un campesino lo recoge y lo lleva al hospital de Yolombó. Cuatro horas después, sin escolta, un inspector de Policía llega a la hacienda donde practica el levantamiento del cadáver. Debió llegar, no lo dice el periódico, absolutamente mojado. Porque "un segundo helicóptero (¿el primero era el de Uribe Sierra?), de propiedad del parlamentario Pablo Escobar Gaviria, despegó a las 6:45 de la tarde del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, con el fin de trasladar al joven herido hasta esta ciudad". Pero "debido a problemas atmosféricos, no pudo aterrizar". Regresó a Medellín a las 7:30 de la noche. De modo que el inspector era un héroe o tenía un estupendo paraguas. Finalmente, Santiago viajó en una ambulancia de la Cruz Roja, y María Isabel y el capitán Rivera en un vehículo de las Fuerzas

Armadas y en otro de la firma "Arinco". ¿Qué hace allí un helicóptero de Pablo Escobar? Y no sólo lo dice El Mundo, como afirma el candidato. Lo dice también El Tiempo.

La noticia de El Mundo es más completa. El 15 de junio, en la página 10A, señala que "desde Medellín había salido a las 6:45 un moderno helicóptero, de propiedad de Pablo Escobar, al mando de Jaime Sandoval, con el propósito de traer de urgencia a Santiago a esta ciudad, para ser internado en una clínica. El permiso especial fue otorgado por la Aerocivil, a petición del ex director de esa dependencia y ex alcalde de Medellín, Alvaro Uribe Vélez, por tratarse de un caso de urgencia y porque el aparato está equipado con sofisticados equipos electrónicos y radar". El Mundo publica en su página 10, un completo perfil de Uribe Sierra, donde pueden apreciarse algunas de las 39 peculiaridades de su personalidad y de su época. Vale la pena reproducir la crónica en su integridad, anotando de paso que en ella hay detalles significativos sobre los negocios a los que estaba dedicado. Y hay también otro detalle curioso (y falso). "Para el (helicóptero) su hijo, Alvaro Uribe Vélez, cuando era director de la Aeronáutica Civil, había negado su licencia de operación, por no dejar dudas de su pulcritud en el manejo del ente gubernamental". De donde se deduce que las dudas, que fueron obviadas, existían. Bajo el título "Antes muerto que secuestrado", dice el artículo: "No te vayas a asomar mijo a la finca de Guacharacas por nada del mundo, por allá hay guerrilla, es muy peligroso", le había dicho la semana pasada el hacendado Alberto Uribe Sierra a Jaime su hijo. "Sin embargo, Uribe Sierra, un hombre vital, ganadero, caballista y dueño o negociante de enormes fincas en toda Antioquia, ocho días después contradecía él mismo la advertencia que le había hecho a su hijo, e iba a Guacharacas a terminar su vida de 50 años dedicados al campo, cuando se opuso a ser secuestrado por guerrilleros y murió 'en su ley', como diría uno de sus hijos. "Uribe Sierra, padre del ex alcalde de Medellín, Alvaro Uribe Vélez y de otros cuatro hijos, toda su vida repitió en público y en privado que jamás se dejaría secuestrar. 'Antes muerto que secuestrado', fue una frase que el pronunció algún día recuerda un amigo. "Y este martes terminaron los 50 años de vida apasionada del hombre polémico y millonario en propiedades y amigos, que fue Uribe Sierra; en tanto que su hijo, Santiago, 40 recibió un balazo, y desangrándose en un recorrido de más de 105 kilómetros desde la finca hasta Medellín, vivió una dramática carrera contra la muerte. "El martes Uribe Sierra comenzó el día común y corriente, en su oficina, con los trabajos y negocios que lo habían convertido desde tiempo atrás en uno de los más conocidos hombres de negocios en Antioquia. Había sido heredero de una buena fortuna y caracterizado por su sagacidad para el negocio, sirviendo de intermediario en la compra de poderosas fincas, y con su actividad ganadera y caballística, había acumulado una enorme riqueza distribuida en distintas regiones de Antioquia. Tenía una casa finca en Niquía, Bello, con una plazoleta para exhibir sus caballos, hacer miniferias y atender a ganaderos y a negociantes de toda especie. "Nacido en Salgar, en el suroeste antioqueño, cuentan que Alberto Uribe Sierra era muy buen patrón, cumplía todas las obligaciones laborales con sus trabajadores y hasta una vez, en 1979, repartió un molino de caña y la mitad de la finca San Cipriano, sembrada de cañadulzales, entre varios aparceros que pedían reivindicaciones porque pasaban necesidades. La San Cipriano queda cerca de la hacienda Guacharacas, y en ella, hace dos meses un grupo de las FARC mató al mayordomo y a su ayudante. "Por lo demás, Alberto Uribe Sierra era un hombre de vitalidad extraordinaria. Como 'un volcán, la personificación del paisa dicharachero', lo calificó ayer Juan David Botero, quien fue uno de sus amigos. "Nadie sabe si era más mujeriego, o aguardientero, o buen conversador, pero en esos aspectos no tenía rival. Donde llegaba, con su charla se convertía en el centro de la reunión. Lo comparaban con un encantador de serpientes. "Como antioqueño de pura sepa (sic) toda su vida giró en tomo al campo, a tal punto que sus hijos dicen que el era un verdadero

"tierrero". Pero a la hacienda de Guacharacas hacía varios días que no iba aunque acostumbraba hacerlo unas tres veces al mes. Y el martes, aunque sólo una semana antes le había comentado Jaime los peligros de Guacharacas, al medio día en su oficina, en uno de esos impulsos repentinos que eran tan comunes en él, decidió viajar a esa hacienda del nordeste de Antioquia, situada en las vegas del río Nus, a sólo 10 kilómetros de Cisneros, junto a una abandonada estación del ferrocarril que muchos años antes sirvió de tránsito al tren ganadero, que transportaba los semovientes de los hacendados de la región. "El había sido un buen chalán, recorrió a toda Antioquia y buena parte de Colombia a caballo, pues ese era uno de sus 'hobbies' predilectos y cuando había puentes festivos, acostumbraba a salir con grupos de amigos a cabalgar por montañas duras. "Había participado en una cabalgata que desde Medellín fue a Manizales y volvió, durante una feria en esa ciudad. Pero sus viajes a las fincas los hacía en el helicóptero de su propiedad, el mismo para el cual su hijo, Álvaro Uribe Vélez, cuando era director de la Aeronáutica Civil, le había negado su licencia de operación, por no dejar dudas de su pulcritud en el manejo del ente gubernamental. Así que el martes, Alberto Uribe Sierra hizo equipar la aeronave e invitó a su hija María Isabel, de 24 años y Santiago, de 27. Él en oportunidades manejaba el helicóptero, pero esta vez llamó a su piloto de plena confianza, Bernardo Riveros. Un amigo de la familia Felipe Baquero, también fue invitado a la imprevista visita, pero a última hora, a las 2:30 de la tarde, ya a punto de abordar el aparato, desistió de su viaje porque había olvidado que esa tarde tenía que hacer aquí asuntos importantes. Fue como una corazonada, porque se libró de lo que pasaría antes de dos horas. Y el helicóptero se encumbró sobre el cañón del Valle del Aburra hacia el norte. "Además de la incursión en la finca San Cipriano, las guerrillas de las FARC también hace algunos meses se habían tomado a Providencia, un corregimiento de la zona, situado a media hora a pie de Guacharacas. Todo el mundo por esos lados sabía que la guerrilla andaba en la región y algunos hacendados había llevado a oficiales del Ejército para mostrarles los puntos por donde se desplazaban los alzados en armas y comunicarles su preocupación por lo desprotegida que estaba la zona en cuanto a Ejército y policías. Incluso habían enviado una carta al Procurador pidiéndole sus buenos oficios para que las fuerzas armadas dieran seguridad a la región. Pero por motivos que los hacendados desconocen, el problema siguió igual. "Uribe Sierra vivía tan inmerso en ese mundo de negocios alucinantes, que, relataba un amigo, hoy podía tener 23 fincas o 10 y amanecer mañana con 41. "En el momento de su muerte se dice que tenía nombre suyo 15 fincas, bien fuera propias o en negocio. Vivía consiguiendo dinero con agiotistas hasta el cuatro o cinco por ciento para invertir en tierras, comprar y montar haciendas, conseguir mayordomos y trabajadores. Además de caballista, rejoneador y ganadero, en cuanto al sector agrícola era 43 panelero, bananero y cafetero, con lo cual se ve claramente que sus negocios abarcaban todas las regiones ricas del departamento. Siempre hacía sus cosas en grande, porque hasta en el comer, el beber, el hablar y la parranda era exagerado. Andaba de vez en cuando con un grupo de músicos, merenderos y bambuqueros, y se embarcaba a veces en farras hasta las primeras horas del día siguiente, aunque parecía que el licor no lo afectaba, pues nunca se le vio una «rasca» degenerada y no gustaba de los borrachines de tiempo completo. "Amigo de todo el mundo. Sierra Uribe (sic), este martes, antes de aterrizar en su finca voló sobre otras haciendas de amigos, como acostumbraba hacerlo. Estuvo varios minutos sobrevolando esas propiedades ajenas, hasta que alrededor de las cuatro de la tarde aterrizó su helicóptero a sólo 100 metros de la casa de Guacharacas, una vivienda campesina reformada, con sus piezas amplias, sus balcones y sus cuartos para avíos y zurriagos. "El hacendado se sentó en un banco en el corredor a conversar con su hijo Santiago. Su hija se entró a la casa, y el piloto Riveros se recostó sobre uno de los bultos en un granerito, al lado de a casa, con intención de pegar los ojos por unos minutos. Pensaban

regresar a Medellín antes que comenzara a caer la tarde, porque Uribe Sierra no acostumbraba quedarse durmiendo en su finca por temor precisamente a la guerrilla que ya le había enviado boletas en numerosas ocasiones. "Fue a las 4 y 15 de la tarde, cuando padre e hijo vieron que venía corriendo un trabajador de la finca, y tras él dos hombres uniformados y con cachuchas. El ganadero gritó: 'las Farc'; el piloto anotó que estaban perdidos, en tanto que María Isabel subió al segundo piso. Dentro de la casa, también estaba una maestra. Todos, piloto, ganadero e hijo entraron a la vivienda corriendo. Uribe Sierra dijo: 'yo no me entrego'. Los insurgentes gritaron que 'salgan, que no les vamos a hacer nada'. Y se tomaron la puerta. Uribe Sierra, quién nunca tuvo un guardaespaldas, pero si se mantenía armado, sacó el revólver para enfrentarse a los insurgentes, pero éstos lo acribillaron de dos-balazos, uno en el cráneo y otro en el pecho. ¡El hijo, Santiago, también abrió fuego desde el segundo piso, en el último esfuerzo por defendersen (sic) de los alzados en armas. Pero al ver que su padre caía muerto y que era imposible llevarlo más al interior de la casa, decidió escapar en forma angustiada por la parte trasera de la casa. Mientras tanto, María Isabel y el piloto Riveros esperaban llenos de terror agazapados en un rincón de la casa. "Los guerrilleros persiguieron a Santiago. Él se arrojó al río y logró cruzarlo. Los alzados en armas dispararon en numerosas ocasiones y de todas las balas, una lo alcanzó en la espalda por un costado y le salió por un lado del pecho, rosándole (sic) un pulmón. "Quedó mal herido a la orilla del río. Dos guerrilleros llegaron hasta el sitio. El pidió que no lo mataran, que ya con ese balazo tenía para morir, que sólo era un comprador de ganado sin vínculos familiares con el hacendado que iban a secuestrar. Los dos hombres comentaron que 'se perdió el viaje', y se marcharon. Se unieron a otros diez o doce que estaban cerca de la casa. En total eran unos catorce o quince. Gritaron que saliera 'el gordito de bigote', haciendo referencia al piloto. La maestra que estaba en la casa fue la única que 45 salió y suplicó a los guerrilleros que se fueran, pues allí dentro no había nadie. Los hombres como que se convencieron. Ametrallaron y dejaron completamente inservible al helicóptero que estaba valorado en 20 millones de pesos, y viendo que no habían logrado nada se marcharon en forma apresurada. "El drama siguió para Santiago. Herido salió a una carretera. Hasta que cogió un camión y lo llevó a estación Sofía. En vista de que en Yolombó estaba el mejor hospital cercano, desde Sofía hasta ese municipio lo llevó un vehículo particular. En Yolombó recibió las primeras atenciones. "De otro lado, en la capital antioqueña era conocida la noticia de la incursión y se sabía que Santiago estaba herido. El hijo del ganadero muerto, ex alcalde Alvaro Uribe Vélez, en un helicóptero moderno del hacendado Pablo Escobar, viajó a la zona, después de conseguir un permiso especial de la Aeronáutica para que lo dejaran salir del aeropuerto Olaya Herrera, después de las seis y treinta. Por mal tiempo fue imposible aterrizar en Yolombó. Cuando volvieron a Medellín, en el aeropuerto al ex alcalde Uribe Vélez le comunicaron la infortunada noticia de la muerte de su padre. "Se organizaron dos ambulancias, una de la Cruz Roja y otra de la Defensa Civil que fueron encaminadas hacia Yolombó, acompañadas de una caravana de vehículos particulares con familiares y amigos de las víctimas. De Yolombó despacharon al joven herido y en Cisneros se le hizo una transmisión (sic) de sangre porque estaba muy mal y se pasó a la ambulancia de la Cruz Roja. Después de las dramáticas horas llegó a Medellín alrededor de las tres de la 46 mañana y fue atendido en una clínica particular, y salvado del peligro de muerte. Ayer se recuperaba satisfactoriamente. "El cadáver del hacendado Uribe Sierra fue traído también en la madrugada de ayer a Medellín. Su muerte, mientras tanto, despertaba reacciones de dolor y rechazo en los distintos círculos de Antioquia. Sus despojos mortales fueron velados en la sala de velación del cementerio Campos de Paz,, y en ese mismo camposanto fue sepultado a las cuatro de la tarde, en un entierro multitudinario, al cual se calcula que asistieron unas 10 mil personas, entre amigos,

familiares y dirigentes políticos, empresarios, algunos funcionarios del gobierno, y hasta varios campesinos trabajadores de las fincas del conocido ganadero. "La magnitud del sepelio sobrepasó la capacidad del parqueo de Campos de Paz y los vehículos llenaron los aparcaderos y avenidas cercanas, haciendo una cola que llegó hasta la glorieta de las carreras 80 y 81 con al avenida Guayabal. A unos 15 guardas azules que estuvieron en el sitio, les resultó difícil controlar el tráfico de vehículos. Y mientras la gente se agolpaba alrededor de la capilla y junto a la tumba última, una avioneta voló casi media hora sobre el camposanto y lanzó claveles rojos y margaritas blancas sobre el escenario triste. En ese mismo instante un poderoso helicóptero de Helicol cruzaba portando al dañado helicóptero del hacendado muerto. Y el hijo de la víctima, Alvaro Uribe Vélez, es una breve alocución dijo que el dolor y tragedia que afectaban a la familia eran muy grandes, pero era más llevadera gracias a las muestras de afecto y solidaridad de tantas personas. Alguien entre la multitud pidió un aplauso. Y hubo gente que aplaudió. Resultaba extraño ese palmoreo en un cementerio. Pero es que a Alberto Uribe Sierra, el hombre dicharachero y alegre, se le podía hacer una despedida inusual".

Todos están allí. Escobar, que no es un narcotraficante y un asesino sino un "hacendado"; los Ochoa, que no son delincuentes (uno de ellos extraditado a los Estados Unidos), sino unos buenos "muchachos"; las corridas, que no son esos espectáculos donde se vive un mundillo de apariencia, sino un motivo para obras "benéficas"; la sociedad, que no es un grupo humano reunido en torno a unos valores sino una partida de desalmados que corren detrás de una catarata de dinero; los helicópteros, que no son unos aparatos ruidosos que parecen "matapijos", sino el auténtico símbolo del poder; Medellín sin Tugurios, que no es un lavadero de dólares, sino una obra de profundo contenido social; los cementerios, que no son lugares de recogimiento sino escenarios para que pasen helicópteros y avionetas con claveles rojos, y para echar discursos; los negocios de moda; la trampa al centavo; la usura; hasta las inocentes "Damas Grises", que salen a relucir en este paseo, que no son las inocentes "Damas Grises" que todos conocemos sino unas señoras capaces de quién sabe qué.

En varias oportunidades, Uribe ha reconocido que su padre y Fabio Ochoa, el jefe del "clan" eran amigos, y ha atribuido esa relación al hecho de que Uribe Sierra era "finquero y caballista". Pero hay algo más en todo eso. Es cierto que por el lado Uribe, su parentesco con los mafiosos es muy lejano. Pero no lo es tanto por el lado Vélez. Doña Laura Vélez, su mamá, era prima segunda del gordo Ochoa. Don Tulio Ochoa, padre de Fabio, era primo hermano de don Martín Emilio Vélez Ochoa ("me topé con Martín Vélez, en qué semejante rasca" escribió De Greiff), abuelo del candidato. Valdría la pena transcribir, con su redacción y ortografía originales, otro pequeño capítulo de Mi vida en el mundo de los caballos, del grueso señor Ochoa:

"Los Vélez Ochoa.

"Medellín, Enero 29 de 1985.

"1920-1987-Salgar-Titiribí- Medellín (Antioquia).

"Martín Emilio (Q.E.P.D.) Gabriel (Q.E.P.D.), Ernesto Mario'(Q.E.P.D.), José, Luis Felipe, Roberto, Germán (Q.E.P.D.), Pacho mis primos, voy hablar de todos al tiempo, pues discriminándolos no se acabaría nunca y ellos se han pasado su vida juntos, con los mismos gustos, negocios etc. "Son nietos de don Vespasiano Ochoa de quien ya hablé, su papá se llama Eduardo Veléz Uribe (Q.E.P.D), titiribiseño de sepa y de toda la raza, un hombre alto, muy elegante, de una figura muy distinguida y de una educación muy refinada, innata, con

solo verlo infundía respeto. Se casó con doña Laura y tuvieron 21 hijos nada más apenas, y todos bien alentaditos a Dios gracias. "La afición de los Veléz Ochoa son los caballos, siendo también muy buenos hasendados (sic) nacieron en Salgar y cada uno fundó su finca, cuando vino la violencia conservadora los desterraron y se fueron a Titiribí, hoy dan gracias pues dicen que debido a ese destierro los hicieron ricos. "Siempre están juntos, desde Salgar, Titiribí, Medellín, hablando de caballos criticándolos, admirándolos, cambiando ideas y cambiando bestias, pues cada caballo de cada cual a pasado por las manos de todos, los han tenido muy buenos, en muías ni se diga, (de eso ya hablé), y yeguas de raza maravillosas, de las puras sepas Salgareñas. No se pierden una feria exposición en Medellín ni de vainas, sus hijos y sus sobrinos forman otra gallada grandísima.

"Los hijos de los Vélez Ochoa.

"Medellín octubre 29 de 1986

"1970-1987Medellín(Antioquia)

"A esta numerosa familia hay que ponerlos juntos, pues discriminándolos, no se acabaría nunca, a cual, más aficionado y conocedor. ' "Hijos de Roberto y Norma mi hermana: Roberto Luis, Germán, Mario, Juan Diego, Andrés y Angela María Vélez Ochoa a cuál más aficionados comerciantes, cambalacheros, cabalgateros, chalanos, Andrés es uno de los mejores rejoneadores del mundo. "Hijos de Gabriel y Belarmina, los Vélez Mesa: Gustavo (Q.E.P.D.), Humberto, Jorge, Gabriel, Miguel Ángel un gran arrendador, Eduardo, Beatriz, Angélica, Claudia y Mauricio el niño de la casa ¡pero ay ay ay! En esto de los caballos, vender, comprar, cambiar, etc...etc se las saben toíticas. Criadores de los mejores del país, todo lo que crían es campeón o de pista, no se qué se untarán pero los "envideo". "Los Vélez Toro, hijos de José y Raquel: Rafael, Jairo (Q.E.P.D.) vilmente asesinado en su plena juventud, Darío, Octavio, Eduardo, Jesusita y Amalia. También criadores de famosos aficionados. "Los Vélez González; hijos de Pacho y Blanca: Gabriel Eduardo, Víctor, Cesar, Jairo, Honorio, Sergio, Iván, Javier, Horacio, María Clara, Blanca Eddy y Olga. "Criadores famosos de campeones internacionales, verbigracia: Castañuela, Capricho, Candelazo, etc...chalanos, comerciantes y aficionados. "Los Posada Vélez hijos de don Juan Gregorio y doña Magdalena: Jairo, César, Jaime, Eduardo, Darío, Emiro (Q.E.P.D.), Amanda, Esperanza, criadores, chalanos, cabalgateros, comerciantes y aficionados. "Los Vélez González, hijos de Ernesto y Fany: Carlos Alberto, Gonzalo, Osear, Martín, Carmen Elisa, Patricia, María Teresa; criadores, comerciantes, y a cuál más aficionado. Los Vélez Vélez, hijos de Luis Felipe y Margarita: Juan Felipe, Rosa María, Blanca Margarina, Luz Helena, María Luisa y Gloria; criadores y aficionados de tiempo completo. "Las Vélez Uribe, hijas de Martín Emilio (Q.E.P.D.)y Alicia: Cecilia, Angela, Margarita, Consuelo, Amparó, Laura; criadoras y aficionadas, Laurita una gran amazona, madre de estos tres exponentes: don Alvaro Uribe Vélez, Santiago y Jaime Alberto (el pecoso)".

Pero lo del parentesco es lo de menos. Lo de más es la estrecha familiaridad que ha existido entre ellos, la cual ha desaparecido hoy como por encanto. Como la que existió con una familia tanto y más cercana, la de Roberto Vélez, primo de doña Laura, quien fue también una notable yerba del pantano, con hijo rejoneador (Andrés) y hacienda en Titiribí a la que fue invitado varias veces el primo segundo candidato. Sin embargo, hay documentos que demuestran que la relación entre los Uribe y los narcotraficantes es mucho más compleja. Por ejemplo, en la lista de los cuadros que se subastaron en Medellín para financiar la campaña de Belisario Betancur, figura que Alberto Uribe Sierra compró una de las obras por veinte millones de pesos. Veinte millones de pesos de 1982 equivalen a 310 mil dólares del año 2002. Pero el comprador sabía con precisión que adquiriría otros bienes intangibles. Y he

ahí que el nuevo presidente, una vez posesionado, nombró a su hijo Alvaro como alcalde de Medellín. Del cuadro, nadie guardó memoria. A lo largo de la campaña electoral, la figura de Alberto Uribe Sierra (don Alberto) se ha vuelto más y más precisa. Mantuvo muy buenas relaciones personales y de negocios con Pablo Correa Arroyave, uno de los tres Pablos de la mafia (Pablo Escobar, Pablo Correa y Pablo Correa Arroyave). Pero, a pesar de eso, fue un hombre pobre y siguió siéndolo hasta el final de su vida. Entusiasta de las "viejas costumbres patriarcales de los paisas" (el trago, las mujeres, la "parranda"), en el momento de morir dejó una deuda de 800 millones de pesos (el mismo candidato explica que debió entregar el helicóptero en que se transportaba, el que me "dinamitado", en dación en pago), y me un viva la vida y un embaucador de taberna. Pero no más. Quienes lo conocieron se ríen abiertamente cuando Uribe Vélez habla de las haciendas que tenía su padre, de sus negocios, de sus caballos. Las haciendas, los negocios y los caballos existían y, según parece, pasaron a sus descendientes. Pero ¿de quién o de quiénes eran? -Ahí está el patrimonio que dejó mi padre, ahí está el patrimonio que dejó mi madre, ahí está el patrimonio de mis hermanos, de mis hermanas, el de mi señora, de mis hijos, el mío, expuesto al riguroso examen de los colombianos –le contestó el candidato a RCN el 18 de marzo, a raíz de una serie de preguntas que se le formularon desde la página de opinión de El Espectador. A lo que un oyente anónimo, partidario de su candidatura, que intervino en el mismo programa, contestó: "Dice el doctor Uribe que ahí está el patrimonio de su familia. Como las declaraciones de renta son documentos reservados, sería muy importante que él mismo las publicara para aclarar de una vez por todas el lío en que quieren meterlo". Es posible que cuando se publiquen las declaraciones se aclare el origen de la fortuna. Porque a pesar de su helicóptero, de la hacienda Guacharacas y de su vocinglería, Uribe Sierra murió pobre. ¡Y con el helicóptero dinamitado! Y, sin embargo, sus hijos tienen hoy un cuantioso patrimonio, calculado en varios millones de dólares. ¿De qué manera un funcionario oficial de toda la vida, como lo ha sido el candidato, amasa una fortuna semejante? Solamente él tendría la respuesta.

De todo esto se deduce que el perfil de Uribe Sierra no fue el mejor. Pero, aunque no dice que su desenfadada actitud ante la vida lo llevó a acercarse con amoroso fervor a doña Laura; y aunque calla con prudencia que se casó dos veces y que en su segundo matrimonio, con María Elena Uribe, tenía, en el momento de morir, una hijita de ocho meses a quien llamaban "Confite" (El Mundo, junio 15, página 10, sección 1), el candidato lo admira sinceramente: -Admira -dice La Nota Económica- al general Rafael Uribe Uribe, y a su padre, Alberto Uribe Sierra, asesinado cuando las Farc lo iban a secuestrar. De él aprendió que el trabajo forma verdaderos hombres".

¿Cómo se formó este "verdadero hombre"? Sus comienzos son muy distintos de los que recogen las biografías oficiales. Digamos que al principio hubo dos Uribe. El primer Uribe es el niño que muestra cierta inclinación hacia la política. En Salgar, donde pasó sus primeros años, fue la sombra de doña Laura, una activista que hizo campaña por el voto de las mujeres y que fue concejal en 1958. Pero, curiosamente, no es alguien que se inclina hacia la tarea que mueve a todos los niños que en Colombia han sido: ser presidentes de la República para ayudarle al país, sino hacia la de los niños que crecen en medio de la trampa. El testimonio es de Héctor Abad, su compañero de curso en el colegio de los Benedictinos, en Medellín, y lo cuenta en Cambio. Resulta que los curas organizaron un reinado como los que organizan todos los curas que en el mundo, han sido, en los que no gana la más bonita sino la que consiga más dinero. Bueno, cuando estaba a punto de cerrarse la votación, con el triunfo indiscutible de la candidatura en la que Uribe manejaba al

electorado, llegó algún papá rico y giró un cheque por la otra. Y ahí me Troya. Uribe, contra todas las reglas establecidas por esa democracia de tafetán, quiso que el colegio desconociera la elección, habló de fraude y demandó a la elegida y a sus electores. El antecedente no tiene interpretación en contra: las elecciones se pueden desconocer, y lo que vale en ellas no es el resultado obtenido sino lo que quiera el dueño de la maquinaria. Claro está que el novel político no contaba con que había un prefecto de disciplina, que lo sancionó con la ley en la mano "por la insolencia de querer cambiar las más rancias costumbres electorales". ¿Qué cómo lo sancionó? Abad, quien relata el incidente de manera positiva para Uribe, no lo dice. También forma parte del primer Uribe el muchacho que obtuvo su título de bachiller en el Instituto Jorge Robledo. En 1969, cuando sus compañeros preparaban su fiesta de grado, recibieron la noticia de que no habría ninguna ceremonia. ¿Qué pasó? -preguntaron en el colegio. Y allá les contaron que uno de los más destacados alumnos de la promoción, Alvaro Uribe Vélez, había tenido diferencias con el rector y que lo había amenazado con poner un petardo dentro del Teatro Odeón el día del grado.

Por culpa de la intemperancia de Uribe, la del 69 es la única promoción del Robledo que no pudo graduarse con todos los honores: discurso del rector, entrega de diplomas, champaña caliente para los padres, ramos de flores para las madres, corbata para los graduandos, y, por la noche, baile de vestido largo bajo la mirada vigilante -y los cuchicheos- de las mamás de las prometidas.

El segundo Uribe se deja ver en las "tardes doradas de la mafia", a las que se refiere, en un excelente artículo, el escritor Alpher Rojas. Cuenta él un episodio del que fue testigo presencial. En una de las lujosas ferias de Armenia, cuando la ciudad se preparaba para su centenario. Rojas ve de lejos a Pablo Escobar, a Rodríguez Gacha, a los Ochoa que asisten al espectáculo. Dairo Chica, el consentido de la mafia, presenta su espectáculo de rejoneo. Las jacas encintadas son soberbias. Fabio Ochoa, "el obeso padrino de los nuevos ricos" imparte absoluciones y come mandarinas. "Tupac Amaru", el caballo de un millón de dólares, opaca con su silueta y con el pequeño lucero de su frente, a las otras cabalgaduras. Rodríguez Gacha, propietario del ejemplar, "disfruta las mieles de su popularidad". Y allí, en ese mismo sitio y hora está él, el candidato, "con sus magníficas cuabras caballares". "Allí está el 'doctor Uribe', como le decía El Mexicano, o 'Varito', como lo motejaba cariñosamente don Fabio. Y de ninguna manera distante, ni prejuicioso, ni tímido, sino francamente comprometido en el negocio turbio, desde la brevedad ambigua de su atuendo maicero y sus gafas de Harvard, intercambiando información pecuaria para modernizar y ampliar sus dehesas". "Daba la impresión -añade Rojas- de ser un amigo muy cercano de los padrinos caballistas. Me parece observarlo contemplando la conjunción jinete/caballo de Dairo Chica (el rejoneador de los narcos), con Venus, el espléndido caballo asesinado. Uribe alzaba su entrecejo con visible admiración, seguramente empezando a vislumbrar a un país, brioso y tonto a la vez, montado por él".

Volvamos un poco atrás. Uribe Vélez "admira" a su padre. Pero, ¿es admirable Uribe Vélez? Su biografía oficial lo muestra como un ejemplo digno a seguir. Bachiller del Instituto Jorge Robledo, "en 5° y 6° de bachillerato fue eximido de exámenes finales en todas las materias. En 6° fue declarado el mejor bachiller". "Abogado de la Universidad de Antioquia (en otra versión dice 'doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia'), en parte de su carrera tuvo matrícula de honor. Especializado en Administración y Gerencia de la Universidad de Harvard (1993), estudió Negociación de Conflictos en el mismo centro docente y en el mismo año, y en 1998 y 1999, me "sénior associated member, del Saint

Anthony's Collage Oxford üiversity, gracias a la Beca Simón Bolívar del Consejo Británico. Su excelencia académica le permitió ser eximido de exámenes finales en todas las materias durante los dos últimos años de bachillerato y recibió beca por excelencia durante buena parte de su carrera universitaria". En fin, un hombre de estudio. Por desgracia, algunos de sus postgrados no fueron tan útiles como él mismo lo hubiera necesitado. Por ejemplo, el de "Administración" que cursó en Harvard (¡en Harvard!) no contribuyó siquiera al adecuado manejo de su equipo de trabajo. Al término de su gestión como gobernador, un periodista que asistió a varios de sus consejos de gobierno como simple observador, y que tomó apuntes de las actuaciones de las que fue testigo, diseñó un primer "perfil psicológico" de Uribe Vélez. Revisando sus apuntes sacó en claro que el tono, la forma y la estructura de sus intervenciones no eran propiamente las de un demócrata. El clima que él creaba voluntariamente entre sus colaboradores era el de la desconfianza. El único que podía llevar la palabra era él ("parecía que le gustaba escucharse a sí mismo"), y la creatividad de los funcionarios era prácticamente nula. Su liderazgo era simplemente jerárquico. Su arma preferida era el sarcasmo, que esgrimía contra aquel que se atrevía a discrepar mínimamente de sus planteamientos, de modo que los aportes del grupo eran prácticamente inexistentes. De otra parte, mantenía una distancia enorme. Mantenía su relación con el grupo de trabajo a través de la televisión. Ordenó militarizar el edificio de la Gobernación y llenarlo de perros policías, que husmeaban en todos los rincones. Las prácticas de evacuación eran semanales. Celadores, perros, supuestas amenazas de bombas y evacuaciones sorpresivas cada semana, hicieron la vida burocrática de un grupo humano aterrorizado por los caprichos de su jefe. Cuando cambió el gobierno, cambió la actitud. Sin que nada anunciara que las condiciones de vida de la ciudad o del país habían variado en lo más mínimo, desaparecieron los perros, los guardias de seguridad volvieron a sus cuarteles, las ametralladoras se guardaron en el armario, y el gobernador caminó de nuevo por los corredores preguntándole a sus colaboradores su opinión sobre esto y aquello. Sin que este sea un concepto especializado, al leerlo podría pensarse que Uribe está lejos de ser el líder que requiere una sociedad en conflicto como la nuestra.

La biografía oficial añade que "Uribe Vélez, empezó su vida pública a temprana edad". Según ese documento, "en 1976, siendo gerente de las Empresas Públicas de Medellín el doctor Diego Calle Restrepo, fue jefe de Bienes, cargo desde el cual lideró la negociación de tierras y el traslado de la población al nuevo Peñol; de 1977 a 1978, en la Presidencia de Alfonso López Michelsen, fue secretario general del y Ministerio del Trabajo bajo la dirección de dos ministros: Osear Montoya y Juan Gonzalo Restrepo Londoño, con quienes trabajó activamente en el decreto 1468 de 1978 sobre libertades sindicales; luego me gerente liquidador de Mineros del Chocó; más tarde, de 1980 a 1982, director de la Aeronáutica Civil, cargo sobre el cual su "hoja de vida" no dice una sola palabra; en 1982 alcalde de Medellín (silencio absoluto), y concejal de esa ciudad de 1984 a 1986 y de 1988 a 1990; en el primero de dichos períodos me ponente de dos acuerdos: el de exención tributaria a las cooperativas, y el que creó a Metrosalud; como senador de la República en los períodos 1986-1990 y 1990-1994, me "senador estrella", "senador de mejores iniciativas" y "mejor senador"; gobernador de Antioquia en el período 1995-1997, "puso en práctica el modelo de Estado Comunitario, cuya principal característica es la participación ciudadana en decisiones fundamentales del Estado como la generación de empleo, la educación, la transparencia en el manejo de los contratos públicos y la seguridad pública; redujo en 34 por ciento el tamaño de la burocracia y en 35 por ciento el número de vehículos oficiales; creó 102 mil nuevos cupos escolares y capacitó a 40 mil personas en "negociación pacífica de conflictos"; un millón 200 mil pobres (dice "pobres") ingresaron al Régimen Subsidiado de Sralud;

pavimentó 939 kilómetros de vías, más del doble de lo que había pavimentado el departamento en toda su historia; gracias a la colaboración transparente de la ciudadanía con las autoridades, los secuestros se redujeron en 60 por ciento, y las vías que comunican a Antioquia con Bogotá fueron transitables". Y concluye: "Este año, convencido de que Colombia necesita un líder con autoridad moral y capacidad de decisión, decidí proponer su nombre como candidato a la Presidencia de la República para el período 2002-2006".

La autoridad moral de Uribe Vélez la avala Carlos Castaño. En su libro *Mi confesión* (La Oveja Negra, 2001, página 177), el jefe paramilitar afirma que no lo conoce personalmente pero que "la base social de la Autodefensa lo considera su candidato presidencial". "Ahí mi gente se equivoca", sostiene Castaño. Alvaro Uribe le conviene al país, pero no a las Autodefensas". Está claro. Según un hombre que reconoce haber cometido algunos de los peores crímenes que se han cometido en Colombia en los últimos años, "Alvaro Uribe le conviene al país". ¿Y por qué? Porque "en el fondo es el hombre más cercano a nuestra ideología". Según Castaño, la "filosofía" de Uribe no es otra que la de crear las Convivir, que se originan "en el mismo principio de las Autodefensas". "Se trata de unas cooperativas donde los ciudadanos colaboraban de manera organizada con las fuerzas armadas, suministrando información y en algunos casos portando armas amparadas para su defensa personal". Y luego insiste sutilmente en lo que es, en últimas, la razón de ser de su libro: los paramilitares no son el narcotráfico. Aquí está dicho de gruesa manera: "Como gobernador de Antioquia, Uribe Vélez logró sacar adelante 59 cooperativas de seguridad con las cuales nunca estuve de acuerdo. No voy a negar que a las Autodefensas les sirvió, pero no tanto se avanzó con ellas. Quienes las aprovecharon fueron los narcotraficantes, que se dedicaron a montar pequeñas Convivir en sus fincas. Era habitual ver cinco camionetas Toyota, con un 'narco' adentro escoltado de manera impresionante y sus guardaespaldas portando armas amparadas por el Estado. Uribe defendió las Convivir en forma honesta, porque él no veía más allá de los municipios cercanos al departamento de Antioquia. Allí la gente de bien les dio correcto uso, lo que validó en parte su propuesta. Pero con los 'narcos' sueltos era muy peligroso abrir ese camino, por esto siempre me opuse".

¿Están hoy los narcos amarrados? Por lo menos los vinculados a los grupos paramilitares están sueltos y armados. Nadie en Colombia, salvo Castaño, niega que los dos grupos sean uno solo. El primero tiene su origen en el MAS (Muerte A Secuestradores), que se fundó en Cali el 3 de diciembre de 1981. En el libro "Narcotráfico en Colombia" (Bogotá, 1991), se relatan los primeros pasos de esa nueva organización criminal. "El MAS me el resultado de una reunión sostenida entre 223 jefes del narcotráfico, en el cual cada uno se comprometió a colocar 10 hombres armados y dos millones de pesos para la 'empresa'. De esta forma el MAS inició su actividad delictiva con 2.230 hombres armados y un capital de 446 millones de pesos. De igual manera, hicieron saber que otorgarían recompensas a quienes delataran a los secuestradores; y, efectivamente, el 12 de enero de 1982 el MAS divulgaba radialmente desde Medellín su oferta de recompensar con 25 millones de pesos a quien diera información sobre una mujer presuntamente secuestrada por el M-19". Los investigadores no lo dicen, aunque todo el mundo lo sabe: esa mujer era Marta Nieves Ochoa, hija del gordo "patriarca" del clan de narcotraficantes y hermana de los amigos del candidato. "En síntesis -concluye el libro- el MAS, ente organizado y financiado por los narcotraficantes para enfrentar las pretensiones de los grupos guerrilleros, se desdibujó y se convirtió después en 'muerte a todo el mundo', dando origen a la modalidad organizativa y delincencial conocida como los paramilitares" (página 226).

Los paramilitares, valga decir el sector más agresivo de los narcotraficantes, apoyan a Uribe, "el hombre más cercano a su filosofía". Abiertamente, pero también de forma subrepticia. En Envigado, donde se concentró el poder de Escobar en un determinado momento y donde los Ochoa son propietarios de grandes extensiones de tierra, el principal aliado del primero de dichos narcotraficantes era Jorge Meza, quien antes de que se conocieran esos extraños vínculos alcanzó a ser alcalde del municipio. Uno de los hijos de Meza, José Ignacio, actual senador, trabaja bajo las directrices establecidas por Gustavo Upegui, el capo que reemplazó a Escobar desde el momento de su muerte, y que es propietario, entre otros muchos bienes, del Envigado Fútbol Club. Pues bien: Meza es uno de los sustentos fundamentales de la campaña de Uribe. Otro es Mario Uribe, senador, primo hermano del candidato e importante directivo de su campaña. El varias veces senador Uribe me amigo incondicional de Pablo Escobar, lo visitó en la represa del Peñol cuando el capo estaba "en la clandestinidad", y lo previno en alguna oportunidad para que lograra eludir la acción de la justicia. Otro, William Vélez Meza, quien aparece en el libro *Mí hermano Pablo*, de Roberto Escobar (Quintero Editores, página 160), reelecto en marzo para la Cámara de Representantes por el grupo político de Mario Uribe. «No solo Pablo -dice allí- terminó siendo traicionado por el gobierno, por sus amigos militares y policías, sino también por los políticos que se pagaron a su lado cual remora a un tiburón. Mi madre todavía me recuerda los casos de Santofimio, Jairo Ortega y hasta William Vélez, de quien asegura que llegó al Congreso gracias a Pablo. Según ella este señor Vélez estuvo a punto de robarle un carro a mi hermano que se lo había prestado para su campaña. Fueron varios meses los que duró Pablo buscando a este político para que por fin lo devolviera».

Otro, Jorge Bailen Franco, investigado en los Estados Unidos, quien en un homenaje que se le rindió al candidato lo comparó con don Juan del Corral y con Simón Bolívar. Otro más es Rubén Darío Quintero, cercano a los paramilitares, quien fue secretario de la Gobernación en época de Uribe y en las elecciones de marzo pasó de la Cámara de Representantes al Senado de la República.

Con Uribe están, además, la mayoría de los congresistas y políticos liberales vinculados al proceso 8.000. Aunque se trata de individuos a quienes las autoridades judiciales han dejado por fuera de la vida política, muchos de ellos han expresado en diversas formas su respaldo al candidato. El primero de todos. Fernando Botero Zea, quien ha viajado por lo menos en dos ocasiones desde México, donde reside, con el propósito de asesorar a Uribe en algunos temas específicos de su campaña. Botero estuvo implicado en el robo de millones de dólares girados por la mafia a la campaña de Ernesto Samper, que él desvió hacia sus cuentas en el exterior. Por su participación en esa actividad, doblemente delictiva, acaba de ser llamado nuevamente a juicio. También están con Uribe el tristemente célebre Alberto Santofimio Botero, el ex contralor Rodolfo González García, los ex parlamentarios César Pérez García, Tiberio Villarreal y Fuad Char, y el empresario Carlos Náder. Santofimio, Pérez García y Villarreal pagaron varios años de cárcel por sus vinculaciones con el narcotráfico. González García fue absuelto en un caso semejante por "razones de tipo técnico", pero jamás pudo demostrar su inocencia. Los Estados Unidos le retiraron la visa a Char cuando comprobaron que estaba vinculado al lavado de dólares producto del narcotráfico. Sin embargo, Uribe lo defendió con vigor cuando me interrogado por Newsweek sobre el particular. "El Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó la visa al senador Fuad Char porque se sospechaba que lavaba dinero", afirmó la revista (25/03/02). Y el candidato contestó: "Fuad Char votó a favor de la extradición de narcotraficantes solicitados por los Estados Unidos. Fuad Chad es un hombre respetable en su vida pública y privada".

A su turno, Náder, íntimo amigo de Uribe, tampoco puede entrar al territorio de ese país por sus relaciones con los narcos, y porque sobre él pesa una condena a seis años de prisión por tráfico de drogas, proferida por un tribunal norteamericano en enero de 1984, pero su esposa. Ana Trejos, quien es gringa, aloja al candidato y a su familia en sus visitas a Miami, y Náder mismo es su anfitrión en el lujoso apartamento que compró en Madrid, gracias a las comisiones millonarias e ilícitas que obtuvo como producto de los desfalcos en la construcción de la represa de Urrá. Náder es un hombre oscuro, que conoce muchos episodios del pasado de Uribe y que los guarda celosamente en su memoria para utilizarlos cuando lo crea útil para sus propios intereses. Y están con él, inclusive, las modelos más atractivas y deseadas del país. Natalia París, por ejemplo, quien vivió y tuvo un hijo con "José Fierro7", un pistolero al servicio del cartel de Medellín, que desapareció posiblemente como víctima de una vendetta de la mafia, o que se entregó a las autoridades de los Estados Unidos para servir como testigo de excepción contra algunos narcotraficantes prominentes.

Pero el caso más complejo de las personas que apoyan a Uribe es el de su segundo de abordo en la gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa. "¿Sabe por qué lo nombré?" -le pregunta Uribe a El Tiempo en el reportaje del 21 de abril-. Por firme y porque era una persona de quien no se podía decir que había tenido siquiera un negocio de un vehículo con el narcotráfico". Uribe habla de 1994. Pero entre 1997 y 1998 agentes de la DEA decomisaron en California 50 toneladas de permanganato de potasio. Las investigaciones relacionadas con el asunto, demostraron que esos insumos, suficientes para fabricar 500 toneladas de hidrocloreto de cocaína (en caso de que estuvieran destinadas a ese propósito), con un valor de 15 mil millones de dólares en el mercado, fueron importados por la empresa GMP Productos Químicos, con sede en Medellín, de propiedad de Pedro Juan Moreno Villa. Estos datos fueron ratificados por el jefe de la DEA, Donnie R. Marshall, en un documento del 3 de agosto del año 2001. En el momento del decomiso, Moreno era el secretario de Gobierno de Uribe Vélez en Antioquia. Durante esos años, según Marshall, «GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia». Interrogado por Newsweek, Uribe contestó: "Me di cuenta de eso sólo después de que mi período como gobernador había terminado. Si los cargos son ciertos, él debería ir a la cárcel. Si carecen de sustento, la DEA deberá rectificar el error. Yo creo que se cometió un error en este caso".

La primera noticia que se tiene de Moreno Villa se remonta a 1983. El 22 de agosto de ese año El Tiempo informa en su página 3A que "a las 3 de la tarde del pasado domingo se produjo un encuentro trascendental en la sede de la Cuarta Brigada en Puerto Berrío... Veinte ganaderos de la región se reunieron con el ministro Rodrigo Lara Bonilla y con el procurador Carlos Jiménez Gómez... Tuvo que ser un encuentro dramático porque entre los veinte ganaderos había dos o tres de los que aparecieron en la célebre lista que promulgó la Procuraduría como integrantes del MAS... Su presencia en masa ante el ministro y el procurador es ciertamente una respuesta a un rumor que circula en todo el país: un sector de los ganaderos está vinculado a la acción de limpieza de Puerto Berrío y del Magdalena Medio".

Seis días después, el 28 de agosto. El Colombiano publica en su primera página una noticia relacionada con la anterior: "Procurador ratifica enérgica posición frente al MAS". Allí se lee que "Pedro Juan Moreno Villa, en nombre del gremio ganadero de Antioquia envió un mensaje al procurador en el que le expresaba 'profunda satisfacción por cambio de actitud

asumida por su despacho en relación con la difícil situación de orden público y la seguridad de la región del Magdalena Medio' durante la visita que el alto funcionario hizo recientemente a la localidad de Puerto Berrío". En su página 12 A, el periódico incluye el texto de la carta de Jiménez Gómez: "Excusóme decirle no entiendo su mensaje ni lo que significan para usted comprensión y cambio de actitud, todo lo cual obligame a hacerle algunas precisiones que considero indispensables para evitar equívocos institucionales que podría traer graves males... Aprovecho esta ocasión para reiterar cuanto he venido diciendo al país anteriormente: que tengo que cumplir con mi deber, que sin ánimo persecutorio continuaré denunciando todos los fenómenos contrarios a la salud del país en una labor que no puede reconocer tregua alguna y que deploro los acontecimientos de justicia privada como la amenaza de una guerra civil que tenemos que detener entre todos si no queremos ver naufragar la nación en un río de sangre".

Con base en el relato de Al Giordano, un periodista independiente especializado en América Latina y director de The Narco News Bulletin (www.narconews.com) , podría reconstruirse la historia. En noviembre 17 de 1997, un barco chino arribó a los muelles de Long Beach, California, cargando 20 toneladas de permanganato de potasio, destinadas a GMP. Un mes más tarde, en diciembre 16 de ese mismo año, otra nave china, atracó en Oakiand, con destino a la misma compañía, y también con veinte toneladas del precursor. Y, como un cronómetro, un mes después, en enero 17 de 1998, una tercera nave se detuvo en Long Beach, también con un cargamento para Moreno, pero esta vez sólo con 10 toneladas de dicha sustancia.

El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (USCS por sus siglas en inglés) detuvo las embarcaciones. Según Marshall, 'no hubo ningún aviso previo a la DEA sobre el cargamento'. Y, de acuerdo con la ley 21 U.S.C. 971(a), 'cada persona' registrada que importa o exporta un químico especificado a, o desde, los Estados Unidos, requiere notificar previamente sobre la importación o exportación, con un plazo de hasta quince días antes de que la transacción tenga lugar'. El tema de los precursores químicos es grande. "Así como la planta de coca no crece en Norteamérica –dice Giordano-, el permanganato no se produce en Sudamérica. La cocaína como la conocemos no sería posible sin las exportaciones de este químico hacia los países productores, provenientes de Estados Unidos, Europa y China. Normalmente, cuando los oficiales estadounidenses decomisan una cantidad masiva, convocan a la prensa y la televisión y proclaman una 'victoria' más en la guerra contra las drogas". Pero con el cargamento destinado a Moreno Villa no pasó nada. Usualmente las compañías de los Estados Unidos deben notificar a la DEA de ese tipo de embarques. Cuando no lo hacen, las multas que se les imponen son enormes. El 14 de enero del año 2000, el diario Hartford Courant informó que Connecticut MacDermid Inc., pagó 50 mil dólares al gobierno federal por no reportar una venta de 500 kilos de permanganato de potasio. 'MacDermid vendió el químico a compradores legítimos', dijo el periódico. 'Pero el gobierno sostiene que falló al no notificar esa venta para exportación'. "Si se le hubiera aplicado la misma ley, Moreno habría tenido que pagar una multa de 5 millones de dólares. Pero, como se trataba de un aliado político de los Estados Unidos, las autoridades guardaron silencio". El asunto tardó tres años en ser denunciado. "La orden de suspender el zarpaje - escribió Marshall- estableció que la DEA creía que el mencionado químico podría ser mal utilizado, basándonos en la falla al notificar a la DEA del embarque, en la violación a la ley 21 CFR 1313.31, en las asociaciones entre la GMP y otras compañías químicas delictivas en Colombia y en otras prácticas de alteración de GMP". Pero, según parece, "los ojos de águila de los oficiales de aduanas en Long Beach y Oakiand quizá no se habían percatado de que

se paraban en el lugar equivocado: tres naves cuyo viaje no debió ser interrumpido. Marshall explicó porqué: "GMP es una compañía fundada en 1938 que distribuye productos químicos, con cuatro oficinas en Colombia. Su presidente, Pedro Juan Moreno Villa, ha trabajado en las juntas directivas de otras compañías en Colombia. Además, de 1995 a 1997, fue secretario de Gobierno en Antioquia".

Los propietarios del cargamento demandaron a la DEA para buscar la entrega de las 50 toneladas. El caso se sometió a la decisión del juez en lo civil Gail Randall. Dentro del juicio se preguntó por qué la compañía de Moreno no dio aviso previo a la DEA, y Marshall aportó una declaración según la cual «el permanganato de potasio y el ácido clorhídrico son químicos de la Lista II, que pueden ser usados para una variedad de propósitos legítimos, pero también para la manufactura ilícita de cocaína. Entre 1994 y 1998, GMP me uno de los importadores más grandes de permanganato de potasio en Colombia. Desde 1994 aproximadamente, la empresa tuvo negocios con Eland, una compañía de Hong Kong. Desde 1996 hasta 1998, Eland le vendió a GMP un exceso de 200 toneladas de permanganato de potasio... Obvio, hay otros usos legales para dicho producto, tales como la manufactura de tabletas impresas para circuitos electrónicos y otros objetos de alta tecnología, pero esos no son precisamente ningún soporte de la economía colombiana. Éste es precisamente uno de los agujeros por donde la ilícita industria de la droga desliza cada año 500 mil millones de dólares".

Según Marshall, los Estados Unidos tuvieron problemas con los reportes de algunos agentes colombianos que encontraron que GMP importaba grandes cantidades de permanganato, burlando permanentemente las leyes de ambos países. El jefe de la DEA escribió: «La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) es la agencia del gobierno de Colombia que emite, revoca y renueva los permisos de uso de químicos a individuos o compañías que manejan sustancias controladas. La DNE establece la cuota de químicos que pueden importar por mes los permisionarios. Si un individuo o una compañía quieren manejar una cantidad superior a cinco kilogramos o a cinco litros de un químico controlado por mes, debe obtener el permiso... En junio 10 de 1997, la Policía Nacional de Colombia inspeccionó los registros de la GMP y encontró que en nueve ocasiones, la compañía no había proporcionado la información requerida concerniente a la venta de 2.450 kilos de permanganato de potasio... «El 15 de diciembre de 1997 -siempre según Marshall-, la Policía Nacional de Colombia inspeccionó los registros computadorizados que la GMP tenía desde 1991, y halló 69 direcciones y teléfonos que no existían, y números telefónicos que no correspondían a las direcciones anotadas en las facturas. Había facturas que tenían la misma fecha a nombre de diferentes personas con la misma dirección y número de teléfono. Cada factura reflejaba una venta de 4,6 kilogramos de permanganato de potasio, por debajo la cantidad permitida. Pero la Policía descubrió que las personas anotadas en las facturas no habían adquirido en realidad el permanganato de potasio, aunque sus identificaciones personales habían sido utilizadas para obtener el compuesto. En una carta del 22 de enero de 1998, la Policía concluyó que la GMP 'podría ser culpable de vender sustancias químicas controladas, para lo cual se usaron direcciones ficticias así como nombres de personas existentes, y está realizando ventas de químicos controlados en cantidades mayores que las estipuladas por la Oficina del Director Nacional de Narcóticos sin tener una licencia de la Dirección Nacional de Estupefacientes'. Con documentos en mano. Moreno demostró, fotocopia en mano, que la Policía sacó, intencionalmente según él, cédulas de las personas nombradas en el expediente, y en las audiencias civiles de la DEA, declaró que "no se percató de que alguno de los químicos controlados de GMP fuera desviado para la

manufactura de cocaína u otra droga ilícita". Tiempo después, la Policía reconoció que en el caso de Moreno hubo equivocaciones y que, inclusive, se allegó información falsa o distorsionada. Pero antes de esa conclusión, Marshall alegó que "la compañía movilizó grandes cantidades de precursor de cocaína a través de pequeñas ventas de volúmenes justo por debajo de los cinco kilos permitidos antes de que los compradores deban obtener una licencia. La DEA cree que quien controle el mercado de permanganato de potasio en Colombia controlará el tráfico global de cocaína procesada. "Los precursores químicos incautados nunca llegaron hasta las bodegas de Moreno en Medellín: Pero de acuerdo con la DEA, doscientas toneladas fueron vendidas por la compañía en el tiempo en que Moreno era secretario de Gobierno de Alvaro Uribe en Antioquia. El caso concluyó en agosto del 2001. «Por la autoridad que se deriva de las leyes 21U.S.C. 971 y 28 CFR O.100(b), ordena que las suspensiones de los antes descritos embarques sean mantenidas. Los procedimientos han concluido. Esta orden es efectiva inmediatamente". El número de archivo del caso civil de la DEA es: FR Doc. 00-21482. La orden de Marshall puede consultarse por Internet en el sitio del Departamento de Justicia (solamente en inglés): http://www.deadiversion.usdoj.gov/fed_regs/notices/2000/fr08237.htm

La revista Cambio (mayo 24, 1999) aclaró en alguna forma este intrincado asunto. De acuerdo con los datos obtenidos por esa publicación, agentes de los dos gobiernos llegaron a la conclusión de que la empresa de Moreno había vendido precursores químicos a diferentes personas, cuyo destino final era la misma dirección, para lo cual no tenía autorización; que había importado permanganato de potasio en una cantidad superior a la autorizada; y que llevaba un doble libro de control para los negocios que realizaba con base en ese producto. Por eso, la Dirección Nacional de Estupeficientes "anuló el certificado de carencia de anotaciones por narcotráfico" a GMP y a Moreno Villa. La decisión me posteriormente confirmada. En carta al general Rosso José Serrano, ex director de la Policía Nacional, fechada el 12 de febrero del 2002, Moreno atribuyó la sindicación de la DEA a la enemistad del oficial, y sostuvo que "con hombría y honradez" acudió "a todos los tribunales nacionales e internacionales a los cuales usted (Serrano) me envió... y siempre salí airoso". De todas maneras, las investigaciones de la DEA demostraron que en los años en que Moreno Villa importó el producto desde la China, llagaron á Córdoba y Urabá cantidades apreciables del mismo con destino a Carlos Castaño. No hay todavía una decisión judicial de última instancia en tomo al asunto, por lo que no se puede decir con absoluta certeza que el permanganato de potasio de Moreno terminó en los laboratorios de procesamiento de cocaína controlados por Castaño. Pero los indicios permitirán reabrir una investigación, que quedó a mitad de camino.

Estos son, a grandes rasgos, los amigos del candidato. Y detrás de ellos la figura levemente aniñada de un hombre al que Patricia Lara describe como "hiperactivo, constante, buen estudiante y con alma de empresario", y quien, después de leer buena parte de las acusaciones que se le hacen, confiesa al oído de Apuleyo, que él "no tiene nada qué ocultar".

CAPITULO III

Crimen organizado, gobierno desorganizado

En marzo de 1996, más exactamente el día 11, el gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, sentó ante los Estados Unidos una enérgica protesta. Medios cercanos al gobierno norteamericano pensaron que se trataba de un nuevo señalamiento sobre las fumigaciones indiscriminadas. -Con seguridad es otra vez lo mismo -le dijo el encargado de la carpeta de Colombia a su asistente-, Prepáreme usted un memorando sobre lo que estamos haciendo en ese país. -No es todo el país -le contestó el asistente-. La protesta viene de Antioquia. - Bueno -le dijo el funcionario-. Mire a ver qué hace. Preocupado, el asistente buscó en sus archivos Narcotráfico/Colombia/Antioquia. Encontró, claro, una abultada documentación. Allí estaba prácticamente la historia extensa del cartel de Medellín y de Pablo Escobar, sus vinculaciones con la sociedad, las ramificaciones del negocio, la política oficial, referencias al problema médico, los efectos de la violencia, las manifestaciones más evidentes de la corrupción. Ante ese océano de documentos pulsó Estados Unidos/ Política/Drogas/Colombia. Una nueva avalancha apareció en su pantalla. Trató de precisarlo. Pulsó "Fumigación". Allí apareció que un gobernante de 15 años atrás, el señor Turbay, se había opuesto enérgicamente a permitir que se regaran los cultivos con paraquat, y que fue su sucesor, de apellido Betancur, quien le abrió la puerta a la medida. -Eternas gracias al señor Betancur -pensó-. Pero esta es historia antigua. Pulsó entonces un sitio y una fecha: Antioquia/1995. El material resultó menos abultado. En mayo de ese año encontró que las autoridades colombianas habían mostrado su preocupación por el incremento del cultivo de la amapola en el noroccidente antioqueño. -Es curiosa la costumbre latinoamericana de escribir "noroccidente" -pensó-. ¿No sería más sencillo decir noroeste? Pero no se detuvo en minucias. Eran las once de la noche y lo más significativo del problema tendría que estar Ha asistente-. La protesta sobre el escritorio de su jefe a las 8 de la mañana. De manera que volvió al informe. -Debe ser este -se dijo-. ¿Por qué otra cosa podría protestar un funcionario menor? Leyó. "Amapola, semilla de un nuevo cartel en Antioquia". Y allí se enteró de que la noticia era exactamente la contraria de la que esperaba. Era el gobernador, llamado Avaro Uribe Vélez, el que pedía la fumigación. -¿Cómo? -se sorprendió-. ¡Por fin un funcionario inteligente! Allí se decía que a comienzos de marzo de ese año el gobernador había propuesto al gobierno nacional fumigar los cultivos de amapola que comenzaban a proliferar en veinticinco municipios de ese sector del país. -¿Dónde quedará Antioquia? -se preguntó-. La sola referencia al "noroccidente" no me dice nada. Buscó un atlas. Y allí estaba esa especie de chip de computador que es el mapa de Antioquia encerrado en un círculo, en el extremo noroeste de Colombia. -¡Aja! Con que aquí la tenemos. "Antioquia -decía el informe-, ocupa la casilla número diez entre los 19 productores de amapola en Colombia. En otros, como en Tolima o Huila o Cauca, se han detectado hasta 5 mil hectáreas, mientras que en Antioquia sólo llegan a 157. -Eso se llama ser amigo -se dijo el asistente-. Nos convendrá estar atentos a la carrera del señor Uribe.

Después, el informe le reiteró algunos de sus prejuicios. El gobernador había propuesto la fumigación, pero el gobierno había dicho que no. -Tenía que ser Samper -exclamó el asistente-. ¿De ese tipo qué más podría esperarse? El informe concluía con unos datos muy pobres. "La mayor parte de los cultivos que han sido ubicados por la Policía en Antioquia -decía-, son de carácter doméstico y con una extensión entre las tres y las seis hectáreas... El gobernador Uribe le advirtió a los alcaldes que no entraría en polémicas. Que sea con fumigación o mecánicamente como se erradicarán los cultivos, lo deben decidir los científicos. Lo cierto es que al gobierno departamental no le temblará la mano para acabar con los cultivos ilícitos». -Ese es mi hombre -pensó el asistente-. Necesitamos a alguien a quien no le tiemble la mano. ¡Qué más da que sean 187 miserables hectáreas de amapola! Lo que importa es darles duro.

"Los mandatarios de los municipios afectados por este fenómeno -terminaba el documento-, alegan que la aspersión aérea produciría daños ecológicos irreparables en esas áreas, habitadas por pequeños parceleros y cultivadores, formas de producción muy diferentes a las otras partes del país donde se ha realizado la fumigación, caracterizadas por ser zonas semiselváticas". -Y, claro -pensó el asistente al borde del sueño-, si no me equivoco ¡aquí viene el procurador! Y, en efecto, ahí venía el procurador. En este caso era el de Antioquia, Fernando González Carrizosa, con sus eternos oficios aguafiestas. El procurador se mostraba preocupado por las consecuencias de una medida tan drástica sobre un problema apenas incipiente, y le preguntaba a Uribe si se habían evaluado los daños y si existía un programa de sustitución de 76 cultivos. La respuesta de este último, señalaba el procurador, no aclaraba para nada el asunto. El informe terminaba con la intervención del alcalde de un pequeño municipio, Urrao, a 170 kilómetros de Medellín, "donde la Policía destruyó en los dos últimos años, catorce sembrados con unas 800 mil matas". "En los dos últimos años -añadía-, han desaparecido cerca de veinte personas. Héctor Antonio Durango, el alcalde, dijo que era consciente de que las determinaciones que vienen del alto gobierno no se pueden impedir, pero que no está de acuerdo con la fumigación. En Urrao, dijo el alcalde, sería mejor la erradicación manual, pero el problema de la amapola es más de fondo. La gente de aquí está inquieta porque el 80 por ciento de las zonas donde hay cultivos, pertenecen a personas muy pobres a las que nunca llega la mano del Gobierno». Con esos pocos datos y algunos otros que recogió aquí y allá en medio del cansancio natural provocado por 18 horas seguidas de trabajo, el asistente preparó la carpeta, que puso sobre el escritorio de su jefe a las 8 en punto de la mañana.

A esa hora ya debía saberse con exactitud a qué se refería la protesta. Si el jefe pasaba antes por la oficina podría tranquilizarlo. Por lo que él había leído, Uribe parecía ser amigo. Pero el jefe no pasó. Esa mañana el tránsito había estado espeso, de manera que entró directamente a la oficina de Latinoamérica. Allí, el asesor del subsecretario le extendió la carta de Uribe. Le tomó dos minutos leerla. -¿Cómo? -preguntó el jefe apenas hubo terminado-. ¿De esto se trataba? El asesor lo miró socarronamente. -De eso se trataba. ¿Usted qué piensa? -¿Que qué pienso? Que los colombianos están locos. Se rieron. Y luego, con la carta cuidadosamente doblada en su portafolio, el jefe se dirigió a su despacho. Allí, el asistente lo esperaba radiante. -Señor -le dijo-, me parece que la protesta no debe ser protesta. El gobernador Uribe es un gran amigo de los Estados Unidos. -Sí -le dijo el jefe-. Pero está tan loco como todos los colombianos. -¿Cómo así? -se desconcertó el asistente-. ¿A qué se refiere usted? -A esta carta. Y, sin más ni más, se la extendió para que la leyera. El asistente no pudo contener la risa. Y cuando vio que su jefe también se reía, soltó una carcajada. La carta del gobernador era breve. Palabras más, palabras menos -le contó esa noche a su novia mientras comían en un restaurante de la Pennsylvania Av.-, Uribe le decía al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que a su vez había enviado un oficio a la Subsecretaría de Estado de los Estados Unidos, que Medellín, la ciudad de la eterna primavera, no estaba dispuesta a aceptar ningún trato despectivo, como el que le había dado Robert Gelbard cuando se refirió al apellido del ministro de Justicia. -Según parece -le explicó el asistente a la muchacha-, el ministro de Justicia se apellida Medellín. - Como apellidarse Washington -apuntó ella. -Exacto -dijo él-. Gelbard debió preguntar qué se podía esperar de alguien que llevara semejante nombre. Tú sabes como es Gelbard. Un verdadero idiota. Nosotros ya lo oímos como quien oye llover.

-Sí -dijo la muchacha que estaba haciendo su monografía de Ciencia Política precisamente sobre Colombia-, pero es el vocero de los Estados Unidos y, como tal, no puede ofender a

nadie. -Está bien -contestó él un poco amoscado-. Yo preparé hoy la respuesta. En ella el gobierno va a decir que reconoce la inteligencia y honestidad de un funcionario como Medellín, que no se ha visto envuelto en ningún escándalo, y que presenta disculpas a una ciudad que, según el gobernador, ha puesto 52.137 muertos en los últimos diez años en la guerra contra las drogas, ha sufrido 1.104 atentados terroristas y ha presenciado el asesinato de 694 policías, doce jueces y fiscales y cuatro magistrados. -La cosa no es para risas -anotó la muchacha-. Ni tampoco para que Gelbard diga estupideces como las que acostumbra. -Es cierto -dijo el asistente-. Aquí hay mucho muerto de por medio. El gobernador habla de uno de sus antecesores, Antonio Roldan Betancur, de un ex alcalde de Medellín, Pablo Peláez González, y del procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, todos ellos asesinados. Habla también de 13 mil delincuentes detenidos y procesados. Pero tienes que reconocer que el asunto que origina semejante filípica es insignificante. Colombia tiene demasiados problemas, y muy serios, como para que reaccione por bobadas. El gobernador lo que necesitaba era un escenario para que alguien lo oyera. Y lo logró. Pero el camino que escogió no fue el mejor. Hoy todo el mundo se rió de él en la oficina. -Puede ser -dijo la muchacha-, hay cosas mucho más importantes. Pero lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos no debería pedirle disculpas a una persona como Uribe. -¿Cómo así? -preguntó el asistente-. ¿Qué sabes tú de eso? -Muchas cosas -dijo ella haciéndose la interesante-. Sé, por ejemplo, que Uribe Vélez fue el encargado de la aviación civil en Colombia y que durante su gestión florecieron las pistas de aterrizaje y las licencias para aviones del narcotráfico. El cartel de Cali (no me vayas a decir que lo confundo con el de Medellín) contó en un determinado momento con dos Boeing 727, con un Caravelle y con tres Lockheed Electra, que viajaban impunemente por el mundo entero cargados de cocaína. -No sabía que fueras experta en aviones -le dijo él sorprendido-. -No lo soy. Ese fue el dato que pude sumar hoy a mi monografía. Pero lo que importa es la figura de Uribe Vélez. Me sorprende que ustedes no se hayan enterado de quién es ese individuo. ¡Al fin y al cabo burócratas! -No somos burócratas -contestó él molesto-. Sabemos más de lo que tú te imaginas. Apuesto a que no has oído hablar de Medellín sin tugurios. -Claro que sí -dijo ella-. Y si ustedes son tan expertos, deberían saber que ahí, precisamente ahí, estuvo metido Uribe Vélez. -¿Cómo? -preguntó el asesor-. No tenía ni idea. -Sí -dijo ella-. Medellín sin tugurios fue un programa que se inventó Pablo Escobar con el fin de lograr los votos necesarios para ir al Congreso. Consistía en darle casa a miles 80 de familias en la miseria, que no tenían dónde vivir ni el dinero necesario para adquirir una vivienda. En la práctica, Escobar regaló ese barrio y lo convirtió en su fortín electoral. Las gentes lo veían como un semidiós. Cuando lanzó su candidatura al Congreso, sabía que contaba con los votos suficientes para ser elegido. Pero como no tenía el aval de nadie, pensó en Luis Carlos Galán, el jefe del Nuevo Liberalismo. Que Escobar pensara que Luis Carlos Galán le iba a ayudar, es como si yo pensara que Clinton en persona me va a hacer la tesis. -Cuidadito con Clinton -dijo el asesor-. ¡Por allá ni te acercas! -Bueno -continuó ella-, lo cierto es que Galán lo expulsó en público de su movimiento, en una manifestación a la que asistían 5 mil personas. Entonces Escobar se acercó a un político sin escrúpulos, Jairo Ortega, creo, que lo incluyó en su lista y lo llevó al Congreso. En ese momento Escobar era un delincuente común. Después fue cuando se volvió un monstruo. -¿Y Uribe? -preguntó él-. ¿No era sobre él, el cuento? -Ah, sí -dijo ella-. En el momento del auge político de Escobar y del entusiasmo por Medellín sin tugurios, el alcalde de Medellín era Uribe Vélez. Cuando llegó a la Alcaldía, ya el barrio estaba inaugurado. ¿Tú has leído Los jinetes de la cocaína? -Claro -dijo él-. No conozco una sola persona del gobierno de los Estados Unidos que no lo haya leído. -Pues bien -continuó ella-. Es un libro que está plagado de equivocaciones y de injusticias contra un gran número de personas de bien. En él se dice que Uribe Vélez fue el encargado de

inaugurar el barrio. Equivocación, pero no injusticia. Porque Uribe Vélez no lo inauguró. Lo que hizo fue presentar el programa de Escobar en Bogotá. Durante su Alcaldía, que fue fugaz, viajó a Bogotá con una delegación de funcionarios y lo puso por el cielo, como ejemplo de los proyectos de vivienda social. Obvio, cuando le mataron al papá, uno de los avisos de invitación al entierro fue de Medellín sin tugurios. -Y tú cómo sabes todo eso -preguntó él afirmando. -Ah -dijo ella-, como sea voy a lograr que me den el summa cum laude. -Por lo pronto ya lo tienes conmigo -dijo él-. Y ahora comamos porque ya van a cerrar el restaurante. Esa noche, ella regresó a sus papeles. Trabajaba intensamente, como nadie podría imaginárselo. A veces le daban las dos, las tres de la mañana, leyendo, conectando unos datos con otros, planteando hipótesis, sacando conclusiones. Hoy, por ejemplo, había logrado hacer una serie de precisiones sobre la Alcaldía de Uribe en Medellín. Aunque se presentó como un fortín contra la politiquería, en realidad fue el reino de la politiquería. Nombrado por orden directa del presidente de la República, quien le quería agradecer a su padre el apoyo financiero que le había prestado a su campaña, el alcalde Uribe Vélez era un hombre joven, de 30 años, que no estaba demasiado dispuesto a obedecer las órdenes del gobernador del departamento, Alvaro Villegas Moreno. Por ese entonces, Villegas era ya un político maduro y zorro, que sabía por dónde iba el agua al molino. El prestigio del alcalde no era el mejor en Antioquia. Se lo había dicho al presidente y lo había comentado con sus colaboradores cercanos. -Estén atentos -les dijo-. En cualquier momento podremos sacarlo. De manera que comenzaron a seguirle los pasos. En un comienzo se sorprendieron. Parecía un funcionario eficaz, entregado por completo a su trabajo. Vieron cómo impulsaba el metro de Medellín, que Betancur había presentado como uno de sus grandes programas de gobierno. En pocas semanas logró firmar el contrato, un documento con muchos bemoles, claro está, que le abrió la puerta a la tragedia que vino después, llena de errores administrativos y de corrupción de la peor laya. Vieron también cómo imaginaba empresas y las ponía sobre el papel con facilidad y sin destino. Una de ellas, fue Metromezclas, que le costó algunos dolores de cabeza cuando se demostró que se la había dado en administración a sus colaboradores. La compañía resultó un fiasco y tuvo que liquidarse, por inviable, a mediados de la década de los 90. Su gerente liquidador. Pablo Arango, quien enfrenta hoy una investigación alrededor de esa gestión, es uno de los hombres de confianza de Uribe en su campaña para la Presidencia. -Qué cantidad de papeles -pensó la muchacha-. Todavía me falta aprender a seleccionar lo esencial. Siempre ha tenido tendencia a perderme en los detalles.

A la 1:30 de la madrugada volvió al libro que estaba leyendo: Narcotráfico en Colombia, de la Universidad de los Andes. ¿Cómo haría la cita en su monografía? Tendría que incluirlo en la bibliografía general y, al hacer referencia a él, sólo pondría, entre paréntesis, el nombre del autor, el año y la página. Repitió una o dos veces la lección recién aprendida. Y cuando son muchos autores, después del nombre del primero se añade et al. Así: (Carlos G. Arrieta, et al., 1991, página 221). En la página 221 se hablaba de la primera época de Betancur, cuando Uribe Vélez fue alcalde de Medellín. Se trataba de una sociedad complaciente. En ese momento, el contralor general era Rodolfo González García, detenido después por sus vínculos con el cartel de Cali y ahora partidario de la candidatura presidencial de Uribe, propuso que se aprobara una amnistía patrimonial que incluyera la economía subterránea. "Eso sería muy favorable para el fisco colombiano", dijo González. El senador Alvaro Leyva Duran, investigado por enriquecimiento ilícito por sus relaciones con el mismo cartel, presentó un proyecto de ley para ofrecerle una amnistía patrimonial a quienes no hubieran dado cuenta de sus bienes en sus declaraciones de renta y patrimonio antes de 1981. Y otro senador, Carlos Holguín Sardi, presentó un proyecto que proponía la emisión de bonos de

deuda pública hasta por cien mil millones de pesos, con amnistía patrimonial para quienes invirtieran en ellos. -En otras palabras -pensó ella-, no sabían qué hacer para que los dineros del narcotráfico le arreglaran los problemas a Colombia. La Andi, presidida por Fabio Echeverri Correa, ahora mano derecha del candidato en temas económicos, pidió que "se autorizara a las empresas registradas en las bolsas de valores para emitir un número determinado de acciones con el propósito de que fueran adquiridas por los capitales 'no registrados' y con el compromiso de no negociarlas durante un período determinado", y le propuso a los demás sectores económicos un acuerdo solidario para que la economía subterránea fuera indultada. Fenalco y Anif atendieron a ese llamado. Sabas Preteit, presidente de la primera y ahora uno de los más entusiastas partidarios de la candidatura Uribe, dijo que la amnistía patrimonial no debía ser incompatible con las políticas del gobierno. Y Pedro Javier Soto, presidente de la segunda, sostuvo que "la banca no podía atender con sus solos recursos a la producción colombiana en el futuro". La prensa fue unánime. Un conservador y aconductado periódico como La República, propiedad en ese entonces de la familia del expresidente Ospina Pérez (varios de cuyos nietos fueron condenados en Miami por lavado de dólares), respaldó editorialmente "la bondad social del proyecto", y sostuvo que "esos recursos caen muy bien al gobierno y al país ahora, para evitar movimientos de protesta de los grupos que no están recibiendo oportunamente su pago o que ven que no se realizan obras y programas por falta de fondos". Así las cosas -resumió ella-, en 1982 Colombia giraba en torno a las expectativas que le despertaba la economía subterránea. De ahí que no fuera raro que todo, la política, la banca, la industria, el fútbol, el comercio, los miserables y destechados, las Fuerzas Militares y la Iglesia y, obvio, el Congreso, todo participara en un determinado momento de esa euforia. Pero al margen de la misma, un país asombrado que no encontraba norte, veía con angustia cómo se precipitaba hacia el abismo.

El Espectador se opuso en un editorial a la amnistía propuesta. Dijo: "Ese es un castigo a la honradez y un premio a la picardía". Sin embargo, eran voces aisladas. La amnistía terminó por concederse, y torrentes de dineros aparecieron de pronto en situaciones ambiguas y en propuestas peligrosas. Una de ellas fue la de Carlos Lehder, quien lanzó en Armenia su propuesta de un "movimiento latino nacional", de corte fascista. El obispo, Libardo Ramírez, condenó de entrada la "vinculación de negocios sórdidos a la actividad política". Con ello trató de enmendar la bendición que dos años atrás le había impartido el obispo de Pereira, Darío Castrillón, a las actividades de Lehder. Castrillón, ahora candidato a Papa, estuvo en la inauguración de la Taberna Alemana, el establecimiento comercial que Lehder abrió en esa ciudad, lo bendijo, pronunció unas palabras y se dejó tomar fotografías con el narco. Tiempo después, cuando se le criticó por esa actitud, explicó que los dineros mal habidos se santificaban cuando pasaban por las manos de la Iglesia. Pero terminó en Roma, porque, recordó la muchacha que era católica, que todos los caminos conducen a Roma. -¿Inclusive los amplios y trillados del narcotráfico - pensó.

Miró el reloj. La 1:40. Todavía tenía tiempo para leer un rato. Sabía que en 1982 la situación en Medellín era difícil. Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso del mundo, era el dueño y señor de esa ciudad subterránea, lejana de los clubes y de las industrias tradicionales, ajena a la clase media, basada sobre el relumbrón del dinero. En torno a ella giraba la política. El capo sabía que en ese terreno no se movería una hoja sin su voluntad soberana. Los nombramientos, por ejemplo, no se le consultaban, pero se escogía cuidadosamente a aquellas personas que no llegarían a molestarlo. Cuando supo que el primer alcalde designado para su coto de caza privado, era el hijo de uno de sus conocidos,

socio del tercer Pablo, no hizo ningún gesto. -En conclusión, aprobado -pensaron quienes asistieron a la charla. En ese momento. Escobar, con interés por la política, fundó el movimiento "Civismo en marcha", a través del cual se dedicó a promover planes de vivienda, como el de Medellín 86 sin tugurios, a arborizar la ciudad, a iluminar estadios y a construir escenarios deportivos. Acostumbrado a proceder según su gana, consideró innecesario obtener los permisos correspondientes. Su política fue la de promover invasiones de predios públicos, y decidir luego, de acuerdo con la comunidad, qué necesitaba para su recreación. La respuesta me casi siempre la misma: canchas de fútbol. La administración municipal no sentó jamás ninguna protesta. Por ese entonces el cartel de Medellín ya era el cartel de Medellín. Lo habían fundado un año antes. Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder y los hermanos Ochoa. Comprobaron de entrada que podían manejar más del 50 por ciento de la producción de cocaína en el país. Fortalecido desde dentro, Escobar cortó una incipiente relación de negocios con el general Manuel Antonio Noriega, hombre fuerte de Panamá y hasta entonces protegido por los Estados Unidos, y se decidió por la política. En las elecciones parlamentarias de marzo del 82 resultó electo. "Escobar -leyó ella- quiso aprovechar su oportunidad como benefactor social para ocupar un escaño en el Congreso, vinculándose al parlamentario Jairo Ortega. Este hacía parte del 'federiquismo' antioqueño, del cual salió para engrosar las filas del santofimismo y, finalmente, las del Nuevo Liberalismo, con el cual hizo coalición para las elecciones de corporaciones públicas en 1982. Posteriormente, la dirigencia de este movimiento exigió a Jairo Ortega que retirara de las listas a la Cámara a su suplente Pablo Escobar Gaviria, por sus vinculaciones con el narcotráfico. Dicha solicitud no fue atendida y tanto Ortega como Escobar fueron expulsados del Nuevo Liberalismo. Finalmente, estos lograron una curul en la Cámara de Representantes: Ortega como titular y Escobar como suplente". -Esto ya lo sabía -dijo la muchacha-. Comienzo a repetirme. Lo mejor es que me duerma.

A la mañana siguiente, antes de salir para la Universidad, aclaró sus apuntes. Allí encontró un dato al que no le había dado importancia. Uribe sólo duró cuatro meses en la Alcaldía de Medellín. ¿Por qué?, se preguntó. Si tácitamente Escobar había aceptado su nombramiento, si había mantenido relaciones cordiales con el cartel, si era apenas uno más en un panorama dominado por el narcotráfico, ¿qué había provocado esa súbita caída? La respuesta la obtuvo esa tarde, cuando caminaba sin rumbo con su novio por las calles cercanas a la oficina. De vez en cuando hacían ese paseo, un poco al azar, sabiendo bien que cualquier camino los llevaría a Roma, mejor dicho, a un cafecito. -¿Sabes? -le dijo él-. Hoy estuve investigando sobre nuestro personaje. -¿Gelbard? -le preguntó ella haciéndose la desentendida. -Cómo se te ocurre -le respondió él-. Uribe. -Ah, ¿sí? -anotó ella-. ¿Y qué contraste? -Nada más y nada menos que la razón de su salida de la Alcaldía de Medellín. -Cuéntame -le dijo ella-. Ese es, precisamente, un tema sobre el cual no tengo ninguna claridad. -El gobierno presentó su retiro como el resultado de una crisis política. Ahí hay una gran cantidad de nombres que se me escapan. Lo cierto es que el nuevo presidente de la república, Betancur, anunció que le daría a su administración un "empujón paisa". -¿Y eso qué es? -Bueno, mira cuántas cosas no sabes. Los paisas son los habitantes tradicionales de la gran Antioquia. Según parece, son unas personas que andan siempre vestidas con algo que llaman carriel y que en vez de zapatos usan unas cosas que se conocen como corroscas. Aja -dijo ella sorprendida-. Me parece raro, porque en las fotografías yo siempre los he visto vestidos de lo más común y corriente. -Eso es para las fotografías -dijo él-. Pero cuando están en su casa o en el trabajo, se visten con carriel y usan corroscas, y toman agua caliente. -¿Agua caliente? -preguntó ella-. ¿Y eso para qué? -No tengo ni la menor idea -dijo él-. Pero debe ser hirviendo porque la llaman agua ardiente. Pero, bueno, eso es lo

de menos. Lo de más es que Betancur anunció que en su gobierno habría un empujón paisa, y seleccionó a un grupo de "escogidos" que le ayudaran a darlo. Entre ellos estaba Uribe. Lo nombró como alcalde de Medellín, que es la segunda ciudad en importancia después de Bogotá. El tipo tenía 30 años. En la política colombiana eso quiere decir, ni más ni menos, que lo señala como posible candidato presidencial. Algún día. Y comenzó a trabajar... -... y le ayudó a lo del metro, que era su programa estrella -interrumpió ella-. Eso ya lo sé. De modo que todo el mundo esperaba que siguiera ahí, hasta que se presentara la primera crisis política. -Sí. Que se presentó más pronto de lo esperado, y con un personaje que se veía lejano de todos esos tejemanejes y de todas esas camarillas. -Uribe -dijo ella. -Sí, Uribe. Ya te lo dije: el informe de la embajada dice que entre el gobernador, un señor llamado Villegas, y Uribe, no había química. Villegas era un político chapado a la antigua y Uribe era un muchacho tipo Harvard, que se había dedicado a criticar la politiquería. Cuando en Colombia alguien quiere surgir rápido, critica la politiquería. El gobernador nombró un funcionario que no le gustó a los jefes políticos tradicionales... -¿Tú sabes cómo llaman en Colombia a los jefes políticos tradicionales? -lo interrumpió ella-. Caciques. ¡Cómo te parece! ¡Caciques! -¿Caciques? -preguntó él-, ¿esos señores con pluma en la cabeza que en las películas hacen ao, ao, ao? -Esos. Pero sigue, te interrumpí. -Bueno. Los caciques, Ignacio Vélez Escobar, J. Emilio Valderrama, William Jaramillo y Federico Estrada Vélez... -El del federiquismo -anotó ella-. Y te juro que no te vuelvo a interrumpir. -Los caciques pidieron que hubiera una crisis general. El gobernador estuvo de acuerdo. Le mandó decir al alcalde que esperaba su renuncia protocolaria. Pero se lo dijo con muy poco protocolo: no lo hizo él, sino por medio de un secretario. Y, además, le anunció que lo ratificaría pero sólo cuando cambiara uno o dos miembros de su gabinete. El alcalde se puso furioso. Se negó a renunciar. Intervino el presidente. El alcalde habló con el gobernador. No llevó su renuncia y le pidió que le dijera qué cambios eran los que iba a 90 ordenar. El gobernador se negó a decirle ninguna cosa. El alcalde salió del despacho, furioso, y mandó su renuncia irrevocable. Y se fue. ¿No te parece muy raro? -Pues sí -dijo ella-. ¿Para qué tantas idas y venidas si tranquilamente le hubieran podido decir que se fuera? -No. Por ahí no es la cosa. La cosa es por el lado del fastidio entre alcalde y gobernador. Que no radica en que el uno fuera viejo y el otro joven, o que el uno fuera cacique y el otro no, porque ambos eran igualmente marrulleros y ambos igual de caciques. Pero acuérdate que Villegas se la tenía jurada porque conocía algunos de sus antecedentes, y por eso le había pedido a sus íntimos que "estuvieran atentos" para sacarlo en cualquier momento. Pues lo logró. Uribe salió, pero no por esa crisis mentirosa. Esa crisis fue la utilería para ocultarle al país entero, pero sobre todo a Escobar, la verdadera razón de su renuncia. -¿Y cuál fue? -preguntó ella sinceramente sorprendida. -Pásmate -dijo él-. Resulta que en ese momento el Cartel de Medellín, que apenas comenzaba a formarse, se sentía dueño de la situación. Los narcotraficantes estaban metidos en todas partes. Ya habían comenzado a infiltrar las campañas políticas. En el Departamento tenemos todas las pruebas contra Belisario Betancur. Ahí está, debidamente documentado, que recibió veinte millones de pesos de un individuo llamado Jader Álvarez, narcotraficante confeso, y que lo hizo delante de la cúpula de su campaña, integrada, entre otros, por los señores Hernán Beltz, que era el tesorero, y Augusto Ramírez Ocampo, que era el director nacional. Álvarez protagonizó después una horrible tragedia. En una vendetta de la mafia, le secuestraron los tres hijitos pequeños y se los mataron. La guerra que siguió fue a muerte. Pero, bueno, ese no es el cuento. El cuento es que los contactos de Uribe con la mafia nunca se interrumpieron. De manera que un día lo invitaron a asistir a una cumbre medio clandestina, que tenían los cuatro grandes. Escobar, los Ochoa (que actuaban como uno solo), Lehder y el más grotesco de todos. Rodríguez Gacha. Y Uribe fue. Y, para colmo, aceptó que le enviaran un helicóptero y que lo llevaran hasta el sitio del encuentro. No se ha podido

precisar bien la fecha, pero debió ser a finales de 1982. El Departamento tiene identificados a varios testigos. Villegas se enteró el mismo día, y puso el asunto en manos de Betancur. Al presidente no le quedó otro camino: ordenó que lo sacaran de la Alcaldía. Pero como su rabo de paja era enorme, decidió hacerlo lo más discretamente posible. De ahí la crisis politiquera, y todo ese cuento con caciques, y con protocolos y con renunciaciones. En palabras de mi jefe, que tú sabes hasta qué punto es crudo, a Uribe lo sacaron de la Alcaldía de Medellín por narcotraficante.

-Hay algo que no cuadra bien -dijo ella-. Si muchos colombianos, entre ellos buena parte del gobierno, estaban de alguna manera relacionados con el narcotráfico, ¿por qué el escándalo? -Porque Colombia es un país fariseo -dijo él con un tono levemente dogmático-. Y todavía no aprende. Fíjate tú el escándalo que han hecho por el lamentable símil de Gelbard entre Medellín y Medellín. Pero no dicen nada cuando se trata de plantear el problema de fondo. -¿Cuál de los muchos problemas de fondo? -preguntó ella-. Hay decenas de problemas de fondo. -No hay sino un solo problema de fondo. Pero sobre él, los norteamericanos no tenemos siquiera el derecho de pensar. Mejor cambiemos de tema.

Mientras caminaban en silencio, ella pensó que él tenía razón, que en los Estados Unidos nadie puede plantearse el problema de fondo. Pero no sabía, ni tenía por qué saberlo, que en Colombia tampoco. El desbarajuste de Colombia, dijo en alguna ocasión Myles Frechette cuando era el antipático embajador de los Estados Unidos en Bogotá, obedece en parte a que es un país dedicado a la simple apariencia. Desde 1984 Colombia se vio cada día más y más acorralada. La política entró en una dinámica de corrupción total. Los asesinatos se pusieron a la orden del día. El narcotráfico polucionó el lenguaje, el arte, la economía, la industria, la recreación, la vida en comunidad, la vida cotidiana. Poco a poco el país entró en una somnolencia de la que todavía no sale. Se comprobó hasta la saciedad la financiación de la política con dineros de la mafia. Galán fue asesinado, pero después... no pasó nada. Los criminales asesinaron a decenas de miles de personas de toda condición. El primer muerto, Rodrigo Lara Bonilla, provocó una conmoción, pero después... no pasó nada. Las guerrillas y los paramilitares financiaron su guerra contra el país con base en ese delito.

Cuando el embajador Tambs anunció que aquí lo que había era una narcoguerrilla, el escándalo estremeció los cimientos de la sociedad. Hoy, el jefe de la banda paramilitar confiesa que "las Farc compraron diez mil fusiles y los ingresaron por el Perú, y nosotros hicimos lo mismo con 4.500 armas provenientes de Centroamérica, todo con plata del narcotráfico" (Castaño, 2001, 205)... y no pasa nada.

Hubo una vez un país en el que la gente tenía un temple moral. Siquiera para el suicidio. "En marzo (de 1984), se lee en Narcotráfico en Colombia (Arrieta et al, 1991,233), Javier Ocampo Upegui, diputado del Movimiento Latino Nacional en la Asamblea del Quindío, reveló una grabación en la que una persona -que supuestamente era William Bedoya Vélez, secretario privado del procurador general- le manifestaba al poeta pereirano Luis Fernando Mejía que por un concepto desfavorable a la extradición de Carlos Lehder, un funcionario de dicha entidad exigía 30 millones de pesos. Días más tarde Bedoya Vélez se suicidó". Pero hoy no pasa nada.

El problema comenzó hace tiempos. En marzo de 1982 el gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar, reconoció en Cromos que "en Medellín, personas decentes conviven con los mañosos". "Hace seis o siete años -le respondió a Ligia Riveros Medellín, por razones que

no conozco en detalle, se convirtió en centro de importantes y grandes empresarios del narcotráfico. En esta ciudad, para nadie es un misterio, viven quince, veinte y hasta treinta narcotraficantes, personas que tienen vinculaciones en el exterior, concretamente en los Estados Unidos. Esas personas tienen asiento en Medellín, tienen sus negocios acá y además guardaespaldas amparados con el porte de armas. Eso ha llevado a que constantemente en la ciudad se presenten enfrentamientos entre las bandas de narcotraficantes y se produzcan vendettas que ya son bien conocidas en todo el país. El gobierno ha hecho mucho para preservar en Medellín el orden público y evitar que los señores vinculados al narcotráfico anden en la ciudad como Pedro por su casa". Esa permeabilidad de la sociedad se extendió rápidamente como un cáncer. El 6 de septiembre de 1983, Cromos publicó apartes de uno de los primeros programas de la prensa internacional sobre el narcotráfico en Colombia. En la cadena ABC, dos periodistas, Bill Redeker y William Sherman, precisaron una cifra de escándalo: "El tráfico de cocaína alcanza a los 34 mil millones de dólares anuales en los Estados Unidos", e hicieron algunas revelaciones sobre los capos colombianos. Redeker habló de Pablo Escobar. "A los treinta y tres años -dijo- es uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna cercana a los dos mil millones de dólares. Escobar, supuestamente, es propietario de una pequeña fuerza aérea de 10 aviones y media docena de helicópteros". Y sobre Fabio Ochoa, a quien en Colombia dieron en llamar absurdamente "el patriarca", señaló: "Adinerado hacendado y supuesto traficante de drogas. Sus hijos manejan sus negocios, mientras él viaja por el mundo comprando costosos caballos de exhibición". "Muchos de los grupos de traficantes -anotó-, viven y operan en Medellín". En ese momento interviene el director de la Policía de Medellín, coronel Gustavo Gutiérrez: "Estas personas dedicadas al tráfico de drogas son de origen humilde. A partir de un punto, empiezan a avanzar, a comprar grandes haciendas y cuadras de caballos, como en el caso de Fabio Ochoa, que es propietario de algunos de los caballos más raros del país". La cámara regresa a Redeker, quien sostiene que "Fabio Ochoa es considerado por muchos como el padrino del negocio. Y aunque la mayor parte de miembros del cartel rehusan comentar la fuente de su riqueza, o no se pueden contactar, en una subasta de caballos en las colinas cercanas a Medellín, Ochoa aceptó ser entrevistado por el corresponsal William Sherman: "-Algunos detectives han sostenido que usted y los miembros de su familia están entre los mayores traficantes de cocaína del mundo. "-Ochoa: Nada sé de las mentiras que está diciendo. Eso no me interesa. Soy muy conocido por todos los criadores de caballos del mundo. Mi vida ha sido honorable, de eso respondo. Entra Redeker: "Pero los oficiales colombianos dicen que es el tráfico de drogas y no los caballos lo que enriqueció a Ochoa, y que sus hijos manejan refinerías escondidas en el campo, en casas y apartamentos. Tratada químicamente la base, y convertida en polvo, está lista para la exportación... Pablo Escobar ha sido identificado por las autoridades norteamericanas y colombianas como el mayor exportador de cocaína de Colombia. Con una flota de aviones, la familia Escobar lleva a los Estados Unidos 1.100 libras de cocaína refinada todos los meses". Vuelve el coronel Gutiérrez: "En general (los capos) están muy apegados a las raíces, por eso son muy generosos con los de su propia clase". En un rápido close-up Redeker anota: "Finalmente el caso de Fabio Ochoa. Periódicamente patrocina subastas de caballos para recoger dineros para los pobres". E interviene Ochoa: "Beneficiará a los pobres sin casa, un programa que se llama Medellín sin Tugurios. Para concluir, Redeker hace una afirmación que nunca fue desmentida: "En esta forma el cartel esta logrando no sólo lavar su dinero sino también su imagen. Haciendo surgir el espectro de que Colombia, como Bolivia, su vecino sureño, pueda algún día ser controlada política y económicamente por el cartel de la cocaína. Crimen organizado, gobierno desorganizado". Valdría la pena recuperar esa frase. En el fondo de toda esta tragedia, los Ochoa y sus amigos hacen surgir el espectro de que

Colombia "pueda algún día ser controlada política y económicamente por el cartel de la cocaína. Crimen organizado, gobierno desorganizado". Hace poco Noticias Uno y El Nuevo Herald dieron cuenta, con un intervalo de diez horas, de la incautación por parte de la Policía y de la DEA, de un helicóptero, propiedad de Uribe Vélez y de otros, en la llamada operación Yará. En el complejo, de 500 hectáreas de extensión, las autoridades encontraron siete pistas de aterrizaje y 14 fábricas capaces de producir 20 toneladas semanales de cocaína. De acuerdo con el reporte del corresponsal del Herald. en Colombia, Gonzalo Guillen, el 11 de marzo de 1984, un año después de que Uribe saliera prácticamente destituido de la Alcaldía de Medellín, y en plena campaña electoral para el Senado de la República, las autoridades colombianas y estadounidenses dieron un rudo golpe contra el narcotráfico, que algunos han calificado como "el más grande en la historia".

En el operativo, las autoridades decomisaron un helicóptero Hughes-500, modelo 369D, con matrícula HK 2704-X (amparado hasta ese momento por la matrícula norteamericana N215-FA), que llegó a Colombia el 27 de octubre de 1981, importado por una empresa de Alberto Uribe Sierra. La licencia de operación y la matrícula correspondiente se le otorgaron un día después, luego de un trámite preferencial de cuatro horas que obvió tumos que comúnmente se demoran alrededor de veinte días. El director de Aerocivil en ese momento era Alvaro Uribe Vélez. Ese mismo día Aerocivil "concedió matrículas de bandera colombiana a tres de los seis aviones que la Policía decomisó durante el allanamiento. Uno de ellos fue el HK 2592P, en cuyo expediente figura un oficio de recomendación especial firmado por el entonces jefe de Planeación de la Aeronáutica Civil, César Villegas, principal asesor de Uribe Vélez". En ese momento el director de la Policía era el general Víctor Delgado Mallarino. El informó que el complejo, desde el cual se exportaba semanalmente hacia los Estados Unidos toneladas de cocaína, "pertenece a las organizaciones de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vásquez y Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes manejaban los poderosos carteles de Medellín y Cali. La dirección del operativo estuvo a cargo de los coroneles Jaime Ramírez Gómez (posteriormente asesinado por la mafia cerca de Bogotá) y Luis Ernesto Gilibert, hoy director de la Policía Nacional de Colombia". El helicóptero fue el mismo en que el padre del candidato viajó a su hacienda ocho meses antes, cuando fue asesinado en un supuesto ataque de las Farc. "El 28 de marzo de 1984, diecisiete días después del golpe a Tranquilandia y Villacoca, la oficina de Registro Aeronáutico de Aerocivil recibió una carta de la firma propietaria del helicóptero según la cual el aparato le había sido vendido a un hombre llamado Fidel Agudelo Chávez. Los anteriores propietarios advertían que no existían escrituras legales que acreditaran la venta, dado que estaban pendientes del avance del proceso sucesoral del finado Alberto Uribe Sierra'. "La carta venía acompañada por un documento suscrito ante un notario en febrero de 1984 por Agudelo Chávez y por Jaime Alberto Uribe Vélez (hermano de Alvaro recientemente fallecido), quien se comprometía a entregar el helicóptero en pago de una deuda que su padre había contraído con el presunto nuevo propietario de la nave". En el expediente oficial no aparece hoy ese traspaso. El rastro del helicóptero se perdió. Después de haber sido adjudicado a la Policía Nacional, la fiscalía ordenó devolverlo a los dueños "alegando que no hubo sentencia judicial alguna que condenara oficialmente su relación con el narcotráfico. Poco después del decomiso, Uribe Vélez le solicitó una cita a Enrique Parejo, ministro de Justicia de ese entonces, durante la cual le explicó que su padre no pertenecía al narcotráfico y que simplemente "le había prestado el helicóptero a un amigo". El informe de Noticias Uno, que se transmitió el domingo 21 de abril, fue elaborado por Ignacio Gómez, director de Investigaciones del Canal Uno, un acreditado periodista colombiano que se ha visto obligado a vivir durante largos

períodos mera del país por razón de las amenazas de que ha sido víctima. En las dos semanas previas a la emisión, Gómez recibió en el teléfono de su residencia particular quince grotescas llamadas de sicarios. Sin amedrentarse, el noticiero publicó su crónica, para la cual le pidió una previa respuesta a Uribe Vélez. El se negó, alegando que sus respuestas podían ser editadas. En consecuencia, se le propuso que hablara en directo, sin límite de tiempo. Respondió que contestaría "más tarde". Pero no dijo nada. Al día siguiente, sin embargo, aceptó varias entrevistas por la radio, en las que acusó al director del informativo, Daniel Coronell, de ser un testaferro de Noemí Sanín, también candidata presidencial. Coronell respondió enérgicamente. De inmediato recibió tres amenazas en su oficina y varias por su teléfono celular. A las 11 de la noche del lunes 27 un hombre lo llamó desde un aparato no registrado para decirle "te vamos a matar, hijo de puta". A las 9 y 30 de la mañana del día siguiente, otro hombre llamó al celular y le dijo que matarían a su hijita de pocos años. Coronell se vio obligado a sacar a la niña del país y a enviarla a vivir con unos parientes.

Todo eso se supo. Y, sin embargo, aquí no pasa nada. ¿Qué responde el candidato a las preguntas que acepta responder? El 21 de abril del año 2002, El Tiempo lo interrogó respecto de algunas de ellas. "Mire lo del helicóptero de la Gobernación -explica el candidato-. Decían que viajaba en él a la finca de los mafiosos. Y todo eso es falso". Hábíl. Pero no es la respuesta a la pregunta que se formula. Nadie ha hablado de un helicóptero de la Gobernación. Se ha hablado, sí, de un helicóptero de la Alcaldía, que en realidad no era de la Alcaldía sino de la mafia, en el que viajó el alcalde a una cumbre del cartel de Medellín. La situación es muy distinta. Uribe hace lo que hacen los encargados de los perros con los que se controla el tráfico de drogas en el aeropuerto de El Dorado. Que cuando quieren dejar pasar un cargamento, sacan los perros antiexplosivos. Los pobres canes husmean y husmean todos los equipajes, y nada. Así es fácil. El periódico le plantea el hecho de que el helicóptero en que viajó a la hacienda en la que fue asesinado su padre, era de Pablo Escobar. Él explica que, ante semejante emergencia, se montó en el primer helicóptero que le ofrecieron, sin preguntarse de quién era. -¿Una coincidencia? -Lo que se pidió fue a través de Helicol un socorro, un SOS -contesta-. Teníamos un lío descomunal. Por favor, póngase cualquiera en los pantalones de ese lío. Donde hubiera sido una persona con amistad con Pablo Escobar, ¿qué cree que hubiera pasado en 30 años de carrera política? ¿Medellín sin tugurios? Jamás tuve que ver con eso ni como alcalde ni como persona natural. Ahí están los testimonios de mis secretarios y de opositores, como el doctor Ramiro Valencia Cossio. En una página anterior del mismo día (21 de abril) El Tiempo informa que "no se ha encontrado evidencia que vincule al entonces alcalde Uribe con ese proyecto. Según el periódico Medellín Cívico, del que Escobar fue columnista y editor, el barrio se terminó en enero de 1984. El hoy candidato fue alcalde de Medellín entre septiembre y diciembre de 1982 y, aunque coincide con la época en la que Escobar realizaba trabajos cívicos, su administración no aparece vinculada a ellos". Pero "la única conexión con ese programa data del 13 de marzo de 1983, cuando su padre fue rejoneador en una corrida pro Medellín sin Tugurios, en la plaza La Macarena, transmitida por importantes cadenas radiales y en la que estuvieron los toreros Pepe Cáceres y César Rincón. En la jomada de beneficencia, una de las tantas en las que aparece Alberto Uribe Sierra, otros rejoneadores fueron Dairo Chica y Fabio Ochoa, hijo. Y aunque en ese entonces Escobar era congresista y sus actividades ilícitas estaban ocultas, el Nuevo Liberalismo, de Luis Carlos Galán, ya había rechazado públicamente la lista que lo llevó a la Cámara, esgrimiendo su oscuro pasado. Al otro día de la muerte de Alberto Uribe, entre los avisos de condolencias en los diarios, hay uno de Medellín sin Tugurios". -Hay otro incidente -plantea el periódico-, también

con un helicóptero decomisado en "Tranquilandia"... La matrícula es la misma del que poseía su padre, el HK 2704-X. -Mi padre fue socio de una empresa que tuvo un helicóptero. Él tenía fincas en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Utilizaba ese helicóptero para sus desplazamientos. Cuando la guerrilla lo asesino, ese helicóptero quedó medio destruido, y mi hermano Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa, y esa empresa salió de los restos de ese helicóptero. Mi familia no lo tuvo en su poder. ¡Hombre, por Dios! Eso lo hizo mi hermano Jaime, y todos confiábamos en él, que se murió el año pasado de cáncer en la garganta... Después, la Policía decomisó ese helicóptero u otro con los mismos números. -¿Ese helicóptero u otro con los mismos números? - repite el periódico. -Uno no sabe si es el helicóptero o es uno con los mismos papeles. Recuerdo que se hizo un escándalo, y la familia sacó un aviso en la revista Cromos de la época. En otra página de la misma edición, El Tiempo precisa algunos elementos del asunto: "El helicóptero, que perteneció a Aerofotos Amórtegui Ltda. -sociedad de Uribe Sierra- terminó involucrado en una investigación por narcotráfico. Se trata del Hughes 500 con matrícula HK 2704 X, el mismo en el que el padre de Uribe fue a su finca el día que lo mataron. El 6 de febrero de 1984, Jaime Uribe entregó el aparato a Pedro Fidel Agudelo Chávez, en pago de una letra por 25 millones de pesos firmada por Alberto Uribe Sierra y vencida el 10 de noviembre de 1983. Así reza un documento firmado por Jaime y por Agudelo. El traspaso quedó pendiente hasta tanto finalizara el proceso de sucesión de Uribe Sierra. Pero nunca se hizo, pues el 11 de marzo de ese año, la nave fue decomisada en la operación Yarí, conocida como Tranquilandia, el golpe que la Policía colombiana dio a un gigantesco complejo coquero en las selvas entre Caquetá y Meta. Tras su incautación -ordenada por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Rico (Caquetá)- la nave fue entregada a la Policía y 11 años después, la Fiscalía Regional de Bogotá precluyó la investigación y ordenó devolverla a sus dueños, «al no haber pronunciamiento alguno por parte de autoridad judicial». Para conocer el destino de la aeronave, se localizó a Carlos Amórtegui, socio de Uribe Sierra en Aerofotos Amórtegui, quien manifestó, a través de un familiar, que perdió la pista de la nave luego de que la Policía se quedó con ella. El director de esa institución, general Luis Ernesto Gilibert, dijo que se está rastreando el paradero del helicóptero. El hombre que recibió el helicóptero -Pedro Fidel Agudelo- y el que lo reclamó en su nombre - Sigifredo Cardona Cardona- no tienen requerimientos judiciales. Tampoco los tenían Amórtegui y el padre de Uribe, en 1981, cuando lo compraron".

De ese océano de palabras, dos cosas quedan en claro: una, que en el momento de la operación Yarí, el helicóptero capturado y decomisado por ser de la mafia (que entre otras cosas es el dinamitado y ametrallado en el momento en que muere Alberto Uribe Sierra), pertenecía a la familia Uribe Vélez; y dos, que el negocio que en el curso de 25 días, puso el aparato en manos del narcotráfico, fue celebrado por Jaime Uribe Vélez en representación de sus hermanos. A no ser que el helicóptero nunca su hubiera puesto en manos de la mafia sino que, en realidad, jamás hubiera salido de ellas.

Las relaciones de Alvaro Uribe con el tema del narcotráfico han sido estrechas. Pero, poco a poco, cuando vio las amplias perspectivas políticas que tenía ante sí, buscó la forma de darles un tinte académico. De ahí que en el Congreso de la República fue siempre un senador convencido de la soberanía del país para juzgar a sus nacionales, inclusive cuando esa posición puso en peligro la estabilidad institucional de Colombia. En diciembre de 1989 el gobierno Barco presentó ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional al que el país, una vez aprobado, debía convalidar por referendo. El tema se había discutido a lo largo de dos años, y tocaba puntos esenciales como el de una circunscripción electoral especial

para los grupos alzados en armas que, se suponía, facilitarían el proceso de paz. Los círculos políticos y del gobierno consideraban que en el articulado residía el buen éxito de la administración y estaban empeñados en lograr que fuera aprobado. Pero ninguno de ellos contaba con un as en la manga del narcotráfico. Cuando el asunto llegó al Congreso, el país vivía una crisis de proporciones provocada por el magnicidio de Luis Carlos Galán, ocurrido tres meses antes. El tema de la extradición, aprobada y aplicada por gobiernos sometidos de manera invariable a la amenaza del terrorismo, se trataba con enorme cautela. Fue entonces (30 de noviembre) cuando en la Cámara, un grupo de representantes, entre ellos Jairo Ortega Ramírez (quien había llevado al Congreso a Pablo Escobar, escogiéndolo como su suplente), Carlos Pineda Chillan, Ernesto Lucena Quevedo, Jaime Arizabaleta Calderón, César Pérez García y Tiberio Villarreal, incluyeron un artículo que sometía la extradición al referendo de los colombianos. A los narcos -y a sus congresistas- les importaba que el asunto quedara en manos del electorado porque sobre él podría influir por medio del terror. En ese momento, una serie de crímenes sin pies ni cabeza, con resultados demenciales en lo que se refiere al número de víctimas y a las pérdidas materiales, había sobrecogido al país. Atentados en centros comerciales, en calles concurridas, en edificios escogidos al azar, asesinatos porque sí, habían sometido al país al arbitrio de los delincuentes. Fue en ese momento cuando los narco-congresistas presentaron el texto de su artículo. El ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simmonds, sostuvo que, si lo aprobaba, el Congreso condenaría a los colombianos a una carnicería. Con ese proyecto les dijo el ministro a los representantes, ustedes están en peligro de convertirse en un órgano más del narcotráfico. Y les pidió que no le entregaran el país al delito, "atado de pies y manos". Los debates fueron superficiales. Los capos se habían apoderado de ese órgano legislativo. Sin escuchar para nada las razones del ministro, los representantes aprobaron la reforma con su "mico" al hombro, gracias a la ponencia positiva de Mario Uribe, un político de provincia cercano a Escobar y primo del senador Alvaro Uribe Vélez (hoy, el primer Uribe es uno de los cuadros directivos importantes de la campaña presidencial de su pariente). El gobierno necesitaba que la reforma fuera aprobada, pero sin el mico, y decidió confiar en la sensatez del Senado de la República. A mediados de diciembre el texto se sometió a la aprobación de la Comisión Primera. Las discusiones fueron cortas pero la reflexión extensa. Y las consecuencias tremendas. El 13 de ese mes, luego de 72 horas de espera, la Comisión aprobó el texto de la reforma y dejó viva la consulta sobre extradición. "El 13 de diciembre -escribió Sergio Ocampo en El Tiempo- entró en la antología de las noches nefandas del país". Valdría la pena reproducir algo de su excelente texto: "Fueron pocas horas. No obstante, para una explosión sólo se requieren segundos. Y eso fue lo que ocurrió esa noche: cerca de tres décadas de desbarajuste institucional emergieron violentamente... "La crisis colombiana tocó fondo: guerra declarada entre gobierno y Congreso, renuncia de las cúpulas de los partidos tradicionales, interinidad en el poder regional en diez departamentos. La gravedad de los hechos no fue solamente una sumatoria de situaciones críticas. La noche del 13 de diciembre fue quizá, el más fuerte campanazo para la institucionalidad colombiana, desmoralizada, resquebrajada, enferma de gravedad. "En una sola noche el país comenzó a afirmar que su Ejecutivo está al garete, y que el Congreso ya no es una casa de leyes, un lugar de representación nacional, sino una sociedad anónima, una empresa donde se lucran 400 socios. "También se abrieron grandes interrogantes en tomo de los partidos: ¿qué pasó con aquellos grupos que aglutinaban opiniones, que eran tribuna de propuestas, que eran colectores de inconformidad? "En una sola noche el país desnudó su verdad". Esa verdad era evidente. Más allá del abandono del proyecto por parte del gobierno, del divorcio entre presidente de la República y Congreso, del trabajo inútil de quienes invirtieron dos años en sacarlo adelante, los que gobernaban a este país eran los narcotraficantes. Y lo gobernaban

por el miedo. Desde 1983, cuando el senador Rodrigo Lara denunció que ocho parlamentarios se encontraban vinculados al narcotráfico (dos de la Guajira, dos del Magdalena, uno del Atlántico, uno de Antioquia y otro de Córdoba) (Arrieta et al, 1993, 230), nunca se había vuelto a hablar del asunto. "Un buen número de parlamentarios -escribió Ocampo- tienen o tuvieron nexos en el pasado inmediato con el dinero de los carteles. Cabe aquí diferencias, de todos modos, a otros dos grupos de congresistas que respaldaron la arremetida narcotraficante en el Congreso, sin estar implicados directamente. "Un primer grupo, el de los parlamentarios intimidados, con miedo concreto, e inclusive amenazados. Un segundo, el de los que actuaron exacerbadamente, aquellos que vieron en ese momento la mejor ocasión de cobrarle al presidente Barco su desprecio de tres años. "Este año el Congreso alcanzó su desprestigio absoluto. Más que nunca se sintió esa noche, el vacío de un líder, de una voz en el Parlamento, alguien con conciencia, con prestigio intelectual, con talla moral". Así las cosas, la reforma (con su mico) llegó a la plenaria del Senado. Y el líder que echaba de menos El Tiempo surgió sorprendentemente. No era un miembro del Congreso, aunque sí había sido parlamentario largos años. Se trataba del ministro Lemos. El 14 de diciembre, a pocas horas de cerrarse las sesiones del Congreso, se reunió con los 54 senadores de su partido, los liberales, y les hizo un "dramático llamado" a salvar el país. "El Senado -les dijo- es el último dique que queda para detener la avalancha de la delincuencia. Si ustedes fallan en este instante estelar de la historia del Senado, el país ya no tendrá protección ni defensa frente a los narcotraficantes. Ustedes son un grupo privilegiado, que tiene una inmensa responsabilidad que nunca antes Congreso alguno hubiera podido tener". Se trataba de una reunión informal. De manera que allí hablaron los partidarios del mico sin ningún tapujo. Uno de ellos David Turbay, procesado y condenado por sus vinculaciones con el narcotráfico; el otro, Federico Estrada Vélez, asesinado en oscuras circunstancias; y el último, Alvaro Uribe Vélez, candidato presidencial.

En ese instante crucial no había términos medios: o se estaba con el narcotráfico (por lo que fuera, por miedo, o por odio, o por conveniencia, o por complicidad), o se estaba con el Gobierno. Uribe no estaba con el gobierno. Para comenzar, sacó a relucir una posición "filosófica": no se pueden estar a favor de la extradición de colombianos para que sean juzgados en el exterior. Y luego propuso una fórmula inadmisibles: que se aprobara la reforma sin el mico, y que el gobierno aceptara convocar un referendo o plebiscito seis o siete meses después en torno al tema específico de la extradición, una vez la situación de orden público lo permitiera. Lemos se mantuvo en sus trece. Su exposición podría resumirse en la frase que recogió El Tiempo: -Si esa propuesta pasa-sostuvo-, las elecciones futuras ya no serán con papeletas sino con metralletas. La propuesta de Uribe fue un recurso desesperado para salvar el mico. La hizo con la voz quebrada y lágrimas en los 108 ojos. Pero no prosperó. Algunos senadores, con Gustavo Balcázar a la cabeza, ofrecieron respaldo a la posición del gobierno. Balcázar afirmó que votaría en conciencia, pero que públicamente decía que lo que ella le dictaba era negar la inclusión de la extradición en ningún referendo. -Sí -anotó Lemos-, La del senador Uribe y la de quienes lo acompañan, es la peor de las fórmulas posibles. Lo que ellos proponen es que el país se empeñe en una campaña que va a durar seis o siete meses, en la que van a estar directamente interesados los narcos. El gobierno no acepta eliminar la extradición ni hoy ni nunca. En ese momento se hundió el mico, y se hundió la reforma con él. El senador liberal Federico Estrada, y Mario Uribe, el ponente en la Cámara, sostuvieron "una tesis sin antecedentes en la historia constitucional del país": según ellos, la reforma ya era un hecho, inclusive sin sanción presidencial, con aquellos puntos aprobados por las dos corporaciones que no sufrieron modificación. Eran los últimos aleteos desesperados del narcotráfico por salvar su posición en el Congreso de Colombia.

Luego, los senadores que habían expresado su posición favorable al mico, creyeron conveniente explicarse en la plenaria. Antes de que la Corporación votara por "aplazar" el proyecto, Uribe, en un tono menos vehemente, "propuso que el referendo no coincidiera con las elecciones para que el narcotráfico no presionara, y que el gobierno decidiera cuándo hacerlo". Es a esa intervención a la que se ha referido en las numerosas ocasiones en que ha considerado prudente rectificar a un columnista. Le pidió a uno de los políticos tradicionales vinculados a su campaña, el presidente del Congreso en ese momento, Luis Guillermo Giraldo (coautor y beneficiario del llamado "Robo a Caldas") que escribiera un artículo en ese sentido. Obvio, Giraldo, como los perros antiterroristas de El Dorado con los que buscan cargamentos de droga, no encontró nada. Y su pinche ad usum, Apuleyo Mendoza, le sirve de tapete para que explique que "cuando ese proyecto llegó a la Plenaria del Senado yo me levanté y dije que era altamente inconveniente que ese referendo coincidiera con las elecciones parlamentarias porque entonces se corría el riesgo de que el narcotráfico presionara esas elecciones. Sostuve que ese referendo debía llevarse a efecto después de las elecciones de Congreso y las elecciones de presidente. ¿Cuál ha sido mi recorrido en materia de extradición? Cuando era gobernador de Antioquia dije que era necesario revivirla. Y ahora pienso que mientras Colombia tenga el lío del narcotráfico no le queda más remedio que aplicar la extradición".

Dice El Tiempo (21/04/02) que "se solicitaron al archivo del Congreso las grabaciones de esa sesión y en ellas consta la propuesta de Uribe, tal y como él la narra hoy. Pero también consta que no creía en la extradición como una estrategia efectiva para acabar con el narcotráfico". Claro: tal como él la narra hoy, ocultando lo que había dicho dos horas antes. Y en abierta contradicción con lo que le dictó a su amanuense en la revista Cambio (25/02/02). Traiciones de la memoria. Y, peor, paréntesis a la verdad.

CAPITULO IV

El candidato de los paras

El sábado 10 de junio de 1995, una bomba de regular poder explosivo mató en el parque San Antonio, de Medellín, a 29 personas y dejó heridas a 207. Ante un hecho de semejante magnitud: un atentado contra gentes que disfrutaban con su familia del descanso de fin de semana, el gobierno nacional ordenó una investigación especial y prometió tener resultados en 72 horas; la Fiscalía, la Policía y el Das unieron esfuerzos para adelantar una investigación conjunta que permitiera dar con el paradero de los delincuentes; la curia metropolitana condenó el hecho y ordenó que lo recaudado en una "misa de solidaridad cristiana" se le entregara a los afectados por la tragedia; el alcalde, Sergio Naranjo, dijo que se trataba de un hecho aislado; y el gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, pidió que se decretara el estado de conmoción interior. Ante esa curiosa intervención del mandatario seccional, el alcalde de la ciudad, Sergio Naranjo, tuvo que explicar que "una medida tan drástica, se convertiría por sí sola en otro elemento desestabilizador", y el representante a la Cámara, Benjamín Higueta Rivera, rechazó la propuesta y consideró que la conmoción interior era la "antesala para imponer la figura de los alcaldes militares". Esa era, claro está, la idea del gobernador. Un mes antes, el 10 de mayo, había aplicado la medida en Amalfi, una tradicional población del noreste de Antioquia. Los habitantes protestaron: en ese

momento se trataba de algo insólito, y su municipio sería el único que tendría alcalde militar en todo el territorio nacional. Pero el gobernador fue inflexible. -¿Cómo quieren ustedes que controle la violencia? -le preguntó a la delegación que lo visitó para pedirle que no los sancionara-. Yo no encuentro otra forma. Ustedes están en mitad de la zona roja y allá hay presencia de paramilitares, de bandidos del ELN, de narcotráfico y de delincuencia común. - Pero, señor gobernador-le dijo uno de los delegados-, lo único que ha sucedido en Amaifi en mucho tiempo es el atentado contra el anterior alcalde. Que, por fortuna, no tuvo ninguna consecuencia que lamentar. -Sí la tuvo -respondió el gobernador-. Si no se trata de algo grave, ¿qué calificativo le dan ustedes a la renuncia del señor Francisco Quintero? -Pero eso no es tan grave como para que usted nos mande a un militar -le dijo otro delegado-. La tarea del Ejército que se trataba de un ha sido efectiva y desde hace un mes no se presenta ningún acto violento. -Pues me alegro -concluyó enérgicamente el gobernador-. Pero, para mí, la situación sí es grave. Y es más. Donde un alcalde sea asesinado por razones de orden público general, u obligado a renunciar por una acción de los violentos, solicitaré el nombramiento de alcalde militar. De manera que pocos días después, Juan Francisco Díaz Quiñones, capitán del Ejército, llegó a Amalfí con instrucciones precisas. -El presidente Samper nos dio vía libre para que acabemos con la violencia -le explicó el gobernador-. La situación de orden público en ese municipio es sumamente grave. Las amenazas, el chantaje, el boleteo y la intimidación a las autoridades legítimas han provocado serias dificultades a la administración local y han hecho que sus habitantes entren en pánico. El capitán asintió sin decir una sola palabra. Para él se trataba de una orden. Y al día siguiente salió a imponer orden en un sitio donde, según el alcalde encargado, Jesús Iván Marulanda, no pasaba nada que sustentara semejante determinación. -La última noticia grave que tuvimos en este pueblo -le dijo un parroquiano al periodista de la televisión que visitó la zona- fue el nacimiento de Fidel Castaño. Pero no vaya a decir que le dije algo así, porque me matan. Porque Fidel Castaño Gil, el individuo que organizó el primer ejército paramilitar financiado por los narcotraficantes, nació en Amalfí. El periodista se limitó a reseñar en su crónica que "la comunidad y las autoridades creen que no existe una manifestación de violencia abierta ni hechos contundentes que lleven a pensar que el pueblo está cercado, o que el Ejército y la Policía hayan perdido el control del orden público". Ante el nombramiento del oficial, el senador Omar Florez Vélez calificó la medida de "ineficaz y anticivilista", y el representante a la Cámara, Manuel Ramiro Velásquez, dijo que el gobernador y el presidente habían sido asaltados en su buena fe. Pero, ¿fue asaltado el gobernador en su buena fe? De las medidas tomadas por él podría deducirse lo contrario.

Ante la oleada de violencia que sacudió al Urabá antioqueño en el año de 1994, el nuevo funcionario, que se posesionó el 1° de enero del 95, participó en una reunión promovida por los alcaldes de la zona, la cual se efectuó en Medellín el 17 de enero. En ella, los mandatarios municipales, recientemente elegidos, dieron cuenta de que seguía vigente el "Pacto de Apartado", que buscaba llegar a un entendimiento entre los grupos políticos para buscarle una salida al conflicto. Al recopilar los hechos recientes, las autoridades comprobaron que la zona estaba infestada de delincuentes comunes y de guerrilleros, que el enfrentamiento que habían protagonizado paramilitares y miembros de las Farc y del ELN en el norte del país parecía comenzar a trasladarse a esa zona, y que las masacres no daban tregua: dos en los pocos días transcurridos a partir del 1° de enero, con un saldo de once personas muertas en Turbo y Necoclí, que las autoridades atribuyeron a una disidencia del EPL, especie que fue rechazada por voceros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Algunos de los participantes dijeron que la escalada de violencia obedecía a la inminente elección de las directivas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Agro

(Sintrainagro), y todos expresaron su preocupación porque la primera víctima de los nuevos escenarios de guerra sería la población civil. Se denunció que habían comenzado los desplazamientos masivos de los habitantes, tanto que ya podía hablarse de un éxodo, y mientras unos denunciaron a la guerrilla, otros dijeron que eran los paramilitares los autores de la perturbación. Pero, en general, se pidió que el pacto político se convirtiera en una herramienta eficaz para garantizar la tranquilidad de la zona. Un día después, en Turbo, el gobernador presidió un "consejo de seguridad", al que asistieron siete de los nueve alcaldes del Urabá Antioqueño, representantes de la Iglesia y políticos locales. La alcaldesa de Apartadó pidió una "veeduría internacional" para la zona y propuso que se emitiera un comunicado en el cual se le exigiera a los actores armados pactar una tregua unilateral. Todos se estuvieron de acuerdo y comenzaron a trabajar en ese sentido. Pero el gobernador no quiso entender el mensaje emitido por esa reunión. Porque tres días más tarde lo que solicitó del gobierno fue la autorización para crear una Unidad Antiextorsión y Secuestro, Únase. En una reunión que sostuvo con el ministro de Defensa, Fernando Botero, se habló sobre la situación del Urabá y concretamente sobre las denuncias formuladas por representantes de la Iglesia Católica relacionadas con la presencia de miembros activos de las Fuerzas Militares en masacres dirigidas por los paramilitares. En presencia del comandante de la IV Brigada, general Jorge Enrique Mora Rangel, quien tres años después se convertiría en el comandante del Ejército, el ministro dijo que no conocía ese tipo de hechos, y cuando se le insistió en que el procurador de Antioquia había formulado denuncias similares, sostuvo que debería investigarse "a fondo" para sancionar a los responsables según el caso.

El 22 de febrero el país supo que la guerrilla había asesinado a cinco personas en una serie de asaltos en Urabá y había atentado contra una funcionaria judicial. Poco a poco se conoció que al Chocó, zona tradicionalmente tranquila, habían entrado nueve frentes guerrilleros, que se habían identificado diez bandas de delincuentes comunes, que el frente José María Córdoba de las FARC había declarado como "objetivo militar" a los campesinos que colaboraran con los paramilitares, y que estos habían declarado como "objetivo militar" a los campesinos que colaboraran con las Farc, y que la zona estaba fracturada en dos. Todo ello llevó al gobernador a pedirle a la guerrilla que declarara una "tregua unilateral". Pero no ocurrió lo mismo con los paramilitares. La información se centró sobre los hechos violentos atribuidos a los primeros. Secuestros, extorsiones, atentados, y asesinatos cometidos en San Pedro de Urabá, en la vereda Aguasprietas y en Valencia, con pérdidas materiales calculadas en 2 mil millones de pesos, llenaron el espectro informativo de esas semanas y prepararon al país para lo que habría de venir.

El primer anuncio tuvo que ver con los municipios del Valle de Aburra. El 18 de abril el gobernador decretó un "toque de queda para menores". Según esa medida, a partir del 1° de mayo ningún menor de edad podría circular libremente en Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Copacabana, Barbosa y Girardota entre las 11 de la noche y la 5 de la mañana. Los alcaldes de Medellín, Envigado y La Estrella, cías similares, sostuvo y La Estrella, la rechazaron. El primero dijo que el tiempo previsto para ponerla en marcha era demasiado corto, y el segundo afirmó que era apresurada y que se debía consultar a los padres de familia. A su turno, el procurador de Antioquia pidió "no maltratar a los jóvenes", mientras que el comandante de la Policía mostraba su total acuerdo y entusiasmo. El segundo anuncio se originó alrededor de la visita que el ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe, hizo al Urabá para instalar la "Comisión Verificadora de los Factores de Violencia" de la zona. Durante esa reunión el gobernador Uribe Vélez dijo que "como una contribución a la búsqueda de la paz

aplazaría la creación de cooperativas de vigilancia privada" en las que había trabajado intensamente su gobierno. Un análisis político originado en esas conclusiones se preguntó por qué el gobernador consideraba que sus cooperativas eran un factor de violencia. Pero como el asunto era apenas incipiente, pasó sin pena ni gloria. El tercer anuncio fue del 26 de julio. Conforme a la noticia publicada por El Tiempo el jueves 27, "el Gobierno Nacional no avalará un diálogo directo entre representantes de la sociedad de Urabá y miembros de los grupos paramilitares y la guerrilla, para una eventual pacificación de esta región. "Así lo dijo ayer el ministro de Gobierno, Horacio Serpa Uribe -añadió el periódico- durante la reunión de seguridad que sostuvo con dirigentes políticos y sociales, representantes del gremio bananero, comerciantes e Iglesia Católica, en las instalaciones de la Brigada 17 de Carepa. "A pesar de que (la noticia) les va a desagradar, quiero decir que el Gobierno no avala una solución de esa naturaleza. Esta posición es explicable porque algo semejante daría ocasión para que se desinstitucionalice la zona, que es lo contrario de lo que los dirigentes han solicitado". "El diálogo directo y el arreglo entre paramilitares y guerrilla en la zona bananera antioqueña significaría la repartición de ese territorio entre las Farc y Fidel Castaño, aclaró Serpa". Escéptico, el gobernador Uribe Vélez opinó que "la afirmación de Serpa no sería obstáculo para persistir en la búsqueda de la paz". En la noche del sábado 12 de agosto los paramilitares asesinaron a 32 personas en Uraba, dieciocho de ellas en la pavorosa e inolvidable masacre de Chigorodó. El país, aterrorizado, oyó cómo el presidente de Unibán y de la junta directiva de la Asociación de Bananeros de Urabá (Augura), Juan Felipe Gavina, le decía a Samper durante la visita de emergencia que realizó con nueve de sus ministros a la zona, que la preocupación de su gremio era "exclusivamente la seguridad". "Queremos sosiego", dijo Gaviria, antes de ceder la palabra al gobernador. Uribe Vélez sostuvo entonces una tesis que acentuaría aún más sus discrepancias con el gobierno central: -El Estado -dijo- debe tener absoluta firmeza y determinación para combatir los factores de violencia y negociar con sus principales actores cuando ellos demuestren una voluntad de diálogo». En ese momento ya había redondeado su idea en tomo a la hipotética solución de un conflicto que en Colombia no se remonta a 1948, como generalmente se ha creído, sino a dos años antes, cuando el partido conservador llegó al poder sin la posibilidad de ejercer una acción efectiva por cuanto era nítidamente minoritario en las cámaras. Los conservadores, dirigidos por Laureano Gómez, desataron una violencia extrema, lo que llevó al jefe indiscutible del liberalismo, Jorge Eliécer Gaitán, a presidir enormes manifestaciones en Bogotá para reclamar del gobierno de Mariano Ospina Pérez el cumplimiento de las garantías constitucionales básicas. Como vocero de un pueblo sumido en la angustia provocada por la violencia del régimen, Gaitán pronunció en 1947 uno de sus discursos memorables a favor de la convivencia y del respeto por los derechos ciudadanos, que desde entonces se conoce como "Oración por la Paz". Pero fue la "Manifestación del Silencio" (febrero 7 de 1948) la que conmovió de manera más honda la conciencia de los colombianos. En ella, cerca de cien mil habitantes de una ciudad que escasamente llegaba a 300 mil, desfilaron silenciosamente hacia la Plaza de Bolívar agitando un mar de pañuelos blancos. Gaitán habló entonces como único orador, ante una multitud que lo oyó en absoluto silencio. Su discurso no demoró más de doce minutos. Días más tarde, ante una de las primeras masacres que se presentaron en esta etapa de la violencia política en Colombia (febrero 15 de 1948), pronunció en Manizales su "Oración por los Humildes". El clima era espeso. Cuando lo asesinaron, millones de personas se volcaron sobre las calles para rechazar el crimen. En muchas ciudades del país, no sólo en Bogotá, hubo saqueos, muertes e incendios. El país había perdido a su más auténtico líder, y la lucha por el poder jamás volvería a ser la misma.

¿Qué pensaba Alvaro Uribe de una violencia en la que nació, creció y vivió desde siempre? Sus soluciones eran drásticas. Por ese entonces (volvamos a 1994) él mismo había sufrido el asesinato de su padre (fueran cuales fueran las circunstancias que rodearon a ese hecho), las heridas inflingidas a su hermano y el intento de secuestro de su hermana. Las amenazas que le llegaban a su despacho eran casi diarias. "Usted no va a salir vivo de aquí", le decían. Y le encimaban cuantos términos gruesos tuvieran a mano los criminales. De manera que él se sentía acorralado. Y cuando alguien se siente acorralado, arranca por la calle del medio. Para Alvaro Uribe la calle del medio tuvo dos sentidos: la organización de las Convivir, y la intervención internacional. Las Convivir. Alvaro Uribe, que ha sido su más caracterizado defensor, pasa hoy por ser el autor de la fórmula. En realidad no. Fue Rafael Pardo, ministro de Defensa de César Gaviria, quien dictó el decreto ley para "reorganizar la seguridad privada, regular las compañías de vigilancia y autorizar la creación de departamentos de seguridad en empresas rurales y urbanas". Para ese momento el gobierno de Gaviria estaba en su declive, y la nueva norma sólo alcanzó a entrar en vigencia. De manera que fue Fernando Botero, primer ministro de Defensa de Ernesto Samper, quien las puso en funcionamiento. Lo hizo mediante una "resolución", que fue demandada por inconstitucional. El asunto entró entonces en el terreno jurídico que es, aparte de la guerra, el escenario donde se cumplen -y no se resuelven jamás-, los temas que interesan a los colombianos. Botero propuso que se establecieran en todo el país llamándolas "Cooperativas de Seguridad", y pidió que se les dedicara a "informar a las autoridades (Policía, Ejército, Fiscalía y Procuraduría) de las irregularidades que se presentan en su área de acción con el fin de facilitar la captura de los delincuentes y ayudar en la judicialización de los procesos". Originalmente tuvieron una estructura elemental: una agrupación de ciudadanos, un comité coordinador y una central privada de comunicaciones, y sólo se habló de dotarlas con armas de corto alcance.

En un reciente debate por radio (Caracol, 05/04/02), Uribe señaló que era Horacio Serpa, su contradictor en la campaña por la Presidencia, quien había tenido el encargo de reglamentarlas. En el momento en que se pusieron en marcha, Serpa era ministro del Interior. Allí, Uribe informó que en el gobierno de Samper las Convivir habían sido 690, de las cuales 70 se habían puesto en funcionamiento en Antioquia. Serpa lo contradujo. Según él, en Cartagena se opuso resueltamente a su organización, con el argumento de que "vincular a los particulares, en contra de lo que dice la Constitución, a una lucha militar, era absolutamente inconveniente". En ese momento (1994) "las famosas autodefensas... se habían convertido en un grupo de maleantes que asolaban al país y creaban toda clase de inconvenientes. Hubo un gran debate nacional, y finalmente el gobierno, no el Ministerio que yo regentaba sino el gobierno, bajo la dirección del presidente de la República expidió una resolución mediante la cual se permitía la existencia de núcleos de ciudadanos que, por medio de instrumentos de comunicación, ayudaran a la lucha contra la subversión... Después (esas organizaciones) se convirtieron en bandas de maleantes que terminaron siendo eliminadas por la propia ley. Lo que plantea el doctor Uribe: un millón de habitantes vinculados a esta actividad, ya se ha probado dos veces, y en ambas se ha manifestado como lo más inconveniente, como lo más criminal, porque se convierten en bandas de asesinos, en bandas punitivas que terminan asesinando, secuestrando, etc... todo lo que pasó en diferentes partes del país y en algunas de Convivir que se crearon en el departamento de Antioquia". Uribe ripostó: "Que no me venga a decir el doctor Serpa que las Convivir de Antioquia se convirtieron en bandas de bandidos. Él las conoció, él fue muchas veces a Antioquia, lo llevaron a Urabá como ministro del Interior, y allí lo que hizo fue darles un gran apoyo. Lo que yo hice fue ceñirme rigurosamente a la ley de la administración

Gaviria y el decreto (sic) de la administración Samper, y organizar transparentemente a la ciudadanía para apoyar a la fuerza pública". Cuando surgieron las Convivir el problema fue puramente jurídico. Pero mientras las Cortes resolvían su arduo debate, Uribe, quien se acababa de posesionar como gobernador de Antioquia, decidió ponerlas en marcha sin dilación. De acuerdo con Plinio Apuleyo Mendoza, el más caracterizado periodista colombiano de extrema derecha, las Convivir "entran con mucha naturalidad en el esquema de Estado comunitario que se desarrolla en Antioquia. Si la comunidad se organiza y juega un papel nunca antes jugado en programas como la educación, la salud o la capacitación, la seguridad también es un asunto en el cual le corresponde intervenir" (Semana, 21/07/97). Y luego, dentro del juego malévolo de las palabras que acostumbra Apuleyo, añade una frase cuidadosa, con la que "vende" melosamente su idea política: "Urabá y muchos pueblos del norte y del sureste antioqueño están en la mira de la guerrilla. Secuestros, asaltos, asesinatos, milicias, camiones incendiados oscurecen un panorama que, de otro modo, resultaría cargado de luminosas promesas". Apuleyo fomenta certeramente el miedo. En la misma crónica sostiene que "las Convivir no se entienden si no se reconoce una triste realidad: la guerrilla puede estar en todas partes, lista para dar un zarpazo, mientras que soldados y policías, venidos de Boyacá o de Nariño, se mueven inseguros en tierra extraña. No saben en quién confiar y en quién no. Su labor preventiva o sus acciones de inteligencia son prácticamente nulas. En estas condiciones, quien mejor puede prestarles un servicio y protegerse a sí misma es la población. Tal es la idea de base que ha inspirado la creación en Antioquia de 71 Convivir. Hay 14 en formación y se espera que para fin de año todos los 125 municipios tengan la suya. ¿Qué hacen? Esencialmente una cosa: cuidar el entorno. Si un asociado, por ejemplo, ve dos hombres a la orilla del Cauca con atarrayas demasiado nuevas, informa de inmediato: podrían ser guerrilleros, no pescadores. En Rionegro, bonita zona salpicada de pinos y residencias campestres, 200 asociados a las Convivir protegen la zona. Cada uno, por medio de un radio portátil tan grande como un teléfono celular, puede comunicarse con una central a cualquier hora del día o de la noche. La central tiene a su vez contacto de radio directo con el Ejército y la Policía y con un vehículo que circula permanentemente por los alrededores. Basta la menor señal de alarma para que todos los asociados acudan, con más celeridad que la Policía, al lugar de donde provino. Los asociados pueden portar armas de defensa personal. De esta manera los secuestros han disminuido en un 70 por ciento. No hay, desde luego, relación alguna de estas actividades con las que en otras zonas del país desarrollan los llamados grupos paramilitares o autodefensas. Las Convivir tienen personería jurídica y sus miembros están comprometidos a respaldar la campaña de la gobernación llamada de 'neutralidad activa'. De hecho, no se les ha visto comprometidas en combate alguno con la guerrilla. Se han convertido, sí, en un muro de contención para aquella y en una fuente de vivos recelos para las ONG internacionales. Uribe Vélez y su activo secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, las defienden a capa y espada. Por ello mismo reciben de la guerrilla constantes amenazas de muerte. Una cosa es cierta: la mayoría de los antioqueños, desde los arrieros hasta los empresarios, parece contenta con el experimento adelantado por su gobernador y no aceptaría de buen grado que se regresara al viejo modelo político".

Pero la situación no era tan idílica. Por lo menos, no lo era para los arrieros y los empresarios con los que no habló Apuleyo. Mientras él escribía su crónica, la Secretaría de Derechos Humanos y Libertades, con sede en Madrid, condenó el 29 de julio de 1997 la visita de Uribe Vélez a España. En el comunicado que expidió esa organización con tal motivo se dice que el "promotor de las Convivir puso en marcha un modelo de Estado fascista, en el que se estimuló la participación de la ciudadanía con la cortina de humo de la generación de

empleo. Con el apoyo de Harvard, dice la organización, Uribe capacitó a 50 mil antioqueños en la "negociación pacífica de conflictos", proyecto que sirvió de base para crear las Convivir en 1994. "Estas cooperativas -dice el comunicado- fueron utilizadas por los terratenientes y los narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de 'tierra arrasada' en numerosas zonas campesinas y en la misma capital antioqueña. Fue con las Convivir que los paramilitares lograron su despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia en el Nudo de Paramillo e ingresaron al eje bananero de Urabá, asesinando y desplazando a miles de campesinos. "Para diciembre de 1996 la gobernación reconocía la existencia de cincuenta y seis Convivir en el mismo número de municipios. Sin embargo el Instituto Popular de Capacitación (IPG), de Medellín, registraba la existencia de setenta. Esta organización armada se estableció en zonas que comenzaron a ser adquiridas por parte de terratenientes y narcotraficantes, y coincidieron también con las principales zonas de cultivos ilegales en el departamento (ver Alternativa N° 5, dic/96)". En la consolidación del proyecto estuvo de cuerpo presente Pedro Juan Moreno Villa. Mucho menos sutil que su jefe. Moreno mostró la otra cara de esas organizaciones. En una carta de respuesta a Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartado, quien el 10 de abril de 1997 le había expresado al gobernador su inconformidad con la organización de una Convivir en su municipio, el entonces secretario de Gobierno condena a los defensores de los derechos humanos, a quienes califica de "ególatras". Se trata de un curioso documento, recuperado por Al Giordano, que vale la pena reproducir con su puntuación y redacción originales: "En relación con el mensaje mencionado (del 10/04/97 dirigido al gobernador), permítame demostrarle lo siguiente: cae usted en los mismos errores cometidos por los directores de conocidas asociaciones de defensa de los derechos humanos, en otras palabras: «Ellos creen que son profesores de una materia que no conocen y de la que luego piden explicaciones». Además de esto, su egolatría protagonista la lleva a difundir un mensaje a diferentes sectores de la sociedad, a los que usted envía su versión incompleta y deformada de la situación. Qué mejor sería si antes de dar su veredicto se hubiera usted tomado la molestia de consultar, analizar, comprometerse en el diálogo y, una vez que tuviera un criterio formado, basado en un análisis racional de los eventos, hubiera expresado su opinión sobre el particular. Quizá de esta manera su colaboración para alcanzar la paz sería más efectiva. Para su información, adjunto lo siguiente: 1. Un panfleto ilustrativo sobre las Asociaciones Convivir. 2. Una carta del pasado 20 de marzo enviada al señor Vivanco de Human Rights Watch, en la que encontrará información detallada sobre todos los tópicos que la molestan. El comandante de la 17a. Brigada, el general Rito Alejo del Río, podrá proveerla con detalles acerca de sus acciones y otras dudas que pudiera usted tener sobre el tema. Sinceramente, Pedro Juan Moreno Villa, Secretario de Gobierno".

El tono de la carta es quisquilloso. "Aquí no se puede discrepar". Pero la actividad de las Convivir se convirtió en un punto de choque. Mientras Uribe, Moreno y sus partidarios las defendían como la panacea de la seguridad y tranquilidad públicas, numerosas ONG's internacionales elevaron toda suerte de denuncias sobre su actividad. Se supo entonces que en un determinado momento el gobernador de Antioquia les había entregado armas de largo alcance que, ante una decisión de la Corte Constitucional, debió recoger de forma apresurada. La revista Business Week señaló que "estas milicias armadas dotaron con información de inteligencia a las fuerzas armadas y ayudaron a la policía a combatir el crimen... pero... (terminaron por transformarse) en escuadrones paramilitares que hicieron blanco no sólo en las guerrillas sino también en civiles sospechosos de simpatizar con ellas". En otras palabras, los dos hombres de Apuleyo que encuentran los informantes "a la orilla del Cauca con atarrayas demasiado nuevas", en este momento deben estar muertos. Como don Goyo, en el arroyo.

«Lo evidentemente claro de las Convivir -escribió María Isabel Rueda en la revista Semanas que su existencia no es tan clara: dicho de otra manera, no es ni blanca, ni negra, sino gris". Y para responder una pregunta que ella misma se formula, anota las características "blancas" y las "negras" de esas organizaciones. Hay que reconocer que las "blancas" son mucho más endebles que las negras. Pero, en un gran resumen, entre las "blancas" estarían su necesidad ("las Convivir surgieron de una necesidad de la población civil de defenderse"), la condición de su ejercicio ("son un mecanismo legal para que la ciudadanía no tenga que aliarse con expresiones criminales, sea la guerrilla o sean los grupos paramilitares, para defenderse"), sus funciones ("no tienen funciones ni ofensivas ni de ataque"), sus limitaciones ("no reemplazan a la autoridad, no pueden utilizar armas de fuego salvo las catalogadas como de defensa personal, deben tener licencia de funcionamiento"), y la respuesta que han obtenido ("si a la guerrilla le preocupa su existencia, es porque funcionan"). Entre las "negras" su indefinición ("artículos 39 y 42 del decreto ley que las creó, que las hace diferentes según el armamento que pueden portar"), su persistente incumplimiento de la ley ("de las Convivir que tienen ya más de dos años, no hay ninguna que haya cumplido con el requisito de renovar su permiso de funcionamiento"), la peligrosa personalidad de sus integrantes ("apenas a un 9 por ciento de cerca de los 10 mil hombres que actualmente las integran se les han examinado sus antecedentes penales"), su sinrazón política ("las Convivir son una violación del contrato social, porque representan una manera de devolverle al ciudadano la capacidad de ejercer la fuerza, a la cual renunció"), su ilegitimidad ("las autoridades deben mantener el monopolio eficaz y legítimo sobre el ejercicio de la fuerza"), la responsabilidad del Estado ("la ineficacia de la fuerza pública y los problemas de impunidad de la justicia no pueden convertirse en excusa para que el Estado deje de asumir su responsabilidad constitucional de defensa del orden social"), su presencia verdadera ("si deben estar armadas para ayudar a la fuerza pública, ellas participan en el conflicto armado como combatientes"), su peligro ("al contrario de servir para remover la indiferencia de la población, convierten a esa misma población en blanco de la insurgencia al no permitir distinguir quiénes participan directamente en el conflicto, y quiénes no"), y su actuación tendenciosa ("no es cierto que carezcan de color político: fueron concebidas «para realizar labores de apoyo a la fuerza pública en su tarea 'antiguerrillera', o sea que está señalado específicamente contra qué enemigo se tienen que dirigir").

Pero las Convivir tenían el cáncer por dentro. Y fue así como en octubre de 1996 el gobernador Uribe Vélez solicitó que se dotara a sus integrantes de armas de largo alcance, con el propósito, según dijo, de "convertirlas en grupos de reacción inmediata en apoyo de las Fuerzas Armadas". El rechazo a esa solicitud fue unánime. No sólo los sectores de izquierda se mostraron en contra. Un conservador caracterizado, como Ramiro Valencia Cossio, señaló que "la idea de armarlas desnudaba la verdadera naturaleza de tales asociaciones". El gobernador se defendió: -Este año -le dijo a Semana-, hemos recibido visitas de Amnistía Internacional y de Americas Watch, y ninguna de las dos organizaciones ha encontrado nada irregular en el funcionamiento de las Convivir. Desde que fueron creadas las asociaciones sólo se ha registrado un caso de extorsión, que fue rápidamente neutralizado. Hay consenso, en cambio, en el papel tan positivo que han jugado en materia de seguridad. Y no son pocos los finqueros que han podido regresar a sus fincas gracias a ellas. Ahora bien, ¿cuándo regresaron? Regresaron, lo afirma el gobernador, cuando las Convivir denunciaron a 75 guerrilleros del EPL y de las FARC, que fueron capturados, y cuando, gracias a sus informaciones, se dio de baja al hombre de confianza del cura Pérez, el comandante Juan Pablo, del ELN, famoso por su crueldad. Hoy, cinco años después,

valdría la pena investigar cuál fue el camino que tomaron esos 75 guerrilleros. A ojo cerrado, cualquiera podría decir que quienes no se plegaron a la nueva situación, están muertos. Y que los demás, la gran mayoría, forman parte de las fuerzas paramilitares.

Respecto del orden público, el segundo punto en importancia para el gobernador (después de las Convivir), fue el de la intervención internacional. El 20 de febrero de 1996, ante la reunión de los mandatarios seccionales con el presidente de la República, Uribe lanzó por primera vez su propuesta. -En realidad no es una propuesta -dijo el gobernador- Es, más bien, una alternativa que puede considerarse. La noticia de primera plana en El Tiempo fue escueta. El periódico recogió las declaraciones del funcionario antes de entrar a la reunión: "Todos los días sé de cosas más graves en Urabá y estoy convencido de que se necesita la participación institucional de la población civil. De ahí mi compromiso de asumir la política de impulsar las organizaciones Convivir. Estoy convencido que se necesitan alternativas extraordinarias como la de pensar en un apoyo internacional al Ejército y a la fuerza pública regular de Colombia para poder derrotar la criminalidad... Ante la incapacidad del Estado para tutelar la vida de los obreros de Urabá, acudiendo a los procedimientos convencionales, debe pensarse en el apoyo de fuerzas internacionales de la Organización de las Naciones Unidas". «No quiero entrar en polémicas con el gobierno –terminó Uribe-. Quiero simplemente sembrar la idea, proponer este debate, suscitar una reflexión nacional sobre este tema, ya que con los procedimientos convencionales con los cuales hemos venido enfrentando la criminalidad no hemos salido exitosos».

Aunque el alto gobierno oyó esa propuesta (o alternativa) como quien oye llover, Uribe siguió trabajando sobre ella, y ahora forma parte de su agenda internacional. Bajo un eventual gobierno suyo, la guerra en Colombia se verá enriquecida por la presencia de tropas extranjeras. Es posible que jamás llegue a concretarse semejante medida, porque, pese a todo, los mecanismos institucionales del país siguen siendo muy fuertes. Pero ahí está, en las insondables –e imprevisibles- obsesiones de un testarudo.

¿Cambió el panorama de la guerra durante la Gobernación de Uribe? Muy poco. En una visita que, por invitación de la Conferencia Episcopal, efectuó al Urabá la organización holandesa de defensa de los derechos humanos, Pax Christi, encaminada a decidir sobre la veeduría internacional pedida por los alcaldes, Liduvin Zumpwole, una de las tres representantes de la misma, señaló que «no hay voluntad de paz de los actores en conflicto; se sigue matando a las personas y es increíble que nadie diga nada». Así las cosas, dijeron las delegadas, "una misión internacional de observadores se vería impotente para trabajar en Urabá, debido al temor y la intimidación que allí existen y que se manifiestan en la impunidad y la ley del silencio imperantes". "Para Pax Christi -agregó la vocera- en la zona no se puede aplicar el término 'veeduría', toda vez que no existe un acuerdo en ese sentido entre las partes enfrentadas. El objetivo de una misión (de esa naturaleza) debe ser el de apoyar los esfuerzos de paz de la población civil, tratar de iniciar un diálogo entre las partes enfrentadas, estimular un acuerdo para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y denunciar las violaciones a ese Derecho". Sin embargo, los esfuerzos en que se empeñó la comunidad para buscar la ayuda no militar de organizaciones internacionales, siguieron a la orden del día. El 7 de marzo una nueva misión de Pax Christie inició un recorrido el Urabá. La presidía el obispo de Rotterdam, Adriano Van Luyn. Los delegados se reunieron con representantes de la iglesia, con las autoridades municipales, delegados de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Fiscalía, empresarios y trabajadores, autoridades policiales y del Ejército, comerciantes y líderes comunales, y estudiaron la

posibilidad de integrar una "Comisión Internacional de Observadores". «Nuestra ayuda será de solidaridad con la población inerme. Trataremos de aportar una forma para la reconciliación de las partes en conflicto», dijo Van Luyn, y anunció que esperaban "poner en práctica en Urabá la experiencia que la organización tiene en varias regiones de conflicto en el mundo, como el Medio Oriente, la ex Yugoslavia, Sudán, Sudáfrica y Chechenia". Pero la visita no condujo a nada. Y el 26 de febrero de 1996, seis días después del anuncio de la "internacionalización del conflicto" hecha por Uribe Vélez, la guerrilla incendió la casa de la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia, ubicada en el municipio de San Roque, y protagonizó nuevos ataques, que fueron respondidos por los paramilitares con sevicia. En un ataque sangriento, las autodefensas dejaron catorce parroquianos muertos en Segovia. Ante las masacres continuadas de marzo y abril, Samper anunció que su gobierno estaba "en pie de guerra" con la subversión, precisó que se crearían "zonas especiales de orden público" (la primera en Urabá), señaló que la Policía no se retiraría de ningún municipio, y oyó impasible cómo los altos oficiales del Ejército informaban que esa institución estaba en capacidad de ganar la guerra. El gobernador de Antioquia, Uribe Vélez, sostuvo que ante esa noticia consideraba innecesario insistir en su propuesta de internacionalizar el conflicto. Una vez en Medellín, Uribe se reunió con sus asesores y resolvió que no: que el Urabá antioqueño no sería declarado "zona especial". ¿Por qué esa determinación? No se obtuvo ninguna respuesta. Pero resolvió, eso sí, que se tomarían una serie de medidas restrictivas: impidió que los establecimientos públicos funcionaran más allá de las 12 de la noche, prohibió utilizar motocicletas entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, determinó que los "parrilleros" no podían usar cascos, y aplicó con rigor la prohibición de vender licores a menores de edad. ¿Suficiente para la tremenda situación de orden público que vivía la zona? Tal vez no. Pero, según el PC, no podía proceder de otra manera porque aún no había terminado el avance de los paramilitares. A finales de marzo, los hombres de Carlos Castaño llegaron al Bajo Cauca antioqueño. Los siete municipios de esa zona denunciaron ante las autoridades departamentales la presencia de grupos extraños. Como "por razones de seguridad" los mensajes iban sin firmas, se dijo que eran anónimos y ningún funcionario atendió a esas quejas. En los primeros días de abril los paramilitares atacaron a Valdivia, uno de esos municipios, y mataron a diez vecinos. Luego se dejaron ver en Cáceres, donde secuestraron a un maestro y en Taraza, poblado en el que asesinaron a varios campesinos, acusándolos de colaborar con la guerrilla. El 22 de abril, personas sin identificar mataron en Segovia a quince personas. En una noticia publicada el 2 de mayo en El Tiempo, se dio cuenta exacta de una de las razones de esos ataques: "los paramilitares están adquiriendo las mejores tierras de la zona y tienen aterrada a la población civil que huye despavorida dejando sus casas y trabajo". Entonces, en un nuevo mensaje dirigido al gobernador con copias a la Procuraduría, la Personería, la oficina de Derechos Humanos y la Cruz Roja, precisaron su indignación por la indiferencia del Ejército y de la Policía, acantonados en dos bases militares, una en Taraza y otra en Caucasia, y acusaron a los alcaldes de esas localidades de «hacerse los de la vista gorda». Pero nada detuvo el avance de la tragedia. El miércoles santo los paramilitares asesinaron a diez personas, entre ellas, dos niños, que se encontraban en el billar El Golazo, del barrio Policarpa, de Apartado. Unos días más tarde, el domingo 5 de mayo, cuando los vecinos de Pueblo Bello descansaban preparándose para el comienzo de la semana, llegó la guerrilla. Una columna de las Farc mató a nueve personas, entre ellas dos niñas, e incendió parte del casco urbano, compuesto por 50 casas de madera y paja. Luego, se dirigió a Alto de Mulatos, donde mató a otras siete personas. Los relatos fueron espeluznantes. Los hombres, comandados por "El Manteco", sacaron a los pobladores de sus camas, los amarraron y los mataron a machetazos y con disparos en la cara. Luego quemaron los cadáveres. El gobernador habló por radio: -El discurso de

rechazo -dijo- se nos agotó. Esta matanza demuestra que el Estado tiene una tremenda debilidad para derrotar a los criminales. Y luego reclamó de nuevo ayuda internacional y reiteró sus tesis sobre las asociaciones de seguridad: -No podemos seguir rasgándonos las vestiduras por un falso concepto de soberanía. Hay que organizar a la comunidad en asociaciones de seguridad, porque mientras no haya integración van a seguir avanzando los violentos. El alcalde de Turbo repudió el hecho y anunció que se tomarían medidas. Cuarenta y ocho horas más tarde, en Medellín, se reunió el Consejo de Seguridad. Ante el ministro de Defensa, que lo presidía, el gobernador insistió: -Es necesario que tropas extranjeras se encarguen de la seguridad en la región bananera. -La posición del gobierno nacional -dijo el ministro- sigue siendo la misma: un rotundo no a la fórmula que implique solicitud u ofrecimiento para la presencia de fuerzas militares extranjeras o internacionales en Urabá. En Urabá se debe crear una "zona especial de orden público". Pero el ministro fue derrotado. El Consejo acogió la idea del gobernador y le ordenó elaborar un proyecto de cooperación internacional para la Fuerza Pública, el cual sería presentado a las Naciones Unidas. El 11 de mayo, sábado, Uribe anunció la creación de la primera zona especial de orden público en el país, en los municipios de Segovia y Remedios. De inmediato, el comandante de la Brigada XIV del Ejército, con sede en Puerto Berrío, asumió el control de la región. Se dispuso que la Brigada contara con retenes para llevar un registro detallado de todas las personas que ingresaran y salieran de los municipios, y se la autorizó para otorgar salvoconductos de movilización, que las personas tendrían que portar en lugar visible. El decreto prohibió también el tránsito nocturno de cualquier clase de vehículos, y suspendió todos los permisos para el porte de armas de fuego, con excepción de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el DAS y la Fiscalía. El resto de la historia sigue los mismos derroteros. Nuevas masacres, nuevos crímenes, más "investigaciones exhaustivas", más violencia, menos espacios políticos. El avance paramilitar durante la gestión de Uribe fue dramático. En Mi confesión (Castaño, 2001, página 222), el jefe de las autodefensas reconoce que hacia 1994 "apenas entraban" al Urabá. Y luego dice: "Los momentos más violentos se comenzaron a vivir en 1995 y 1996, cuando la guerra entre las FARC y el EPL se recrudeció. Las Autodefensas aprovecharon este conflicto y ejecutaron selectivamente a individuos colaboradores de las FARC y el EPL, prolongándose el enfrentamiento militar entre ambas guerrillas y nosotros hasta la extinción del EPL. Las guerras no son limpias y ninguna puede serlo... La degradación del conflicto alcanzó el máximo al hacerse excesivas las masacres. Se provocaban como carambolas, un golpe incitaba otro golpe. Cada fin de semana los grupos armados nos contestábamos entre sí con ejecuciones masivas de colaboradores o simpatizantes... Aquella época fue terrible para mí como persona y comandante. Se vivía una guerra de una orda (sic) contra otra orda (sic), bestias contra bestias. Confieso que no era capaz de ver los noticieros y creo que allí fallecieron tanto inocentes como culpables". Luego, Mauricio Aranguren, quien hace la entrevista, le lee al paramilitar las cifras de la violencia en Urabá: "Durante 1995 en Urabá los actores armados realizaron seis masacres con un saldo de 86 muertos. Además, se presentaron 952 asesinatos en casos aislados, inferiores a cinco individuos. La serie de masacres comenzó después de que la guerrilla de las FARC asesinara a seis personas, entre ellas dos soldados vestidos de civil en Apartado. Los paramilitares contestaron con una masacre de 18 personas en una discoteca de un barrio habitado por miembros de la Unión Patriótica, brazo político de las FARC en Chigorodó. La respuesta de este grupo guerrillero no se hizo esperar y estos ejecutaron a 11 personas en Apartado y 19 más en el municipio de Carepa. En medio del estupor nacional por lo que sucedía allí, se vivieron unos días de tregua y luego las Autodefensas de Córdoba y Urabá ajusticiaron a seis miembros de la UP en Turbo. La cadena de muertes concluyó el 20 de septiembre de 1995, cuando las FARC penetró nuevamente en Apartado y perpetró la

masacre conocida como 'Bajo del Oso' donde detuvo un bus y obligó a todos los pasajeros a bajarse, empujándolos contra el piso, amarrándoles las manos y ejecutando a las 26 trabajadores de esa finca bananera". Y lo mismo durante 1996 ("En el primer semestre de 1996 la situación no cambió..."), aunque ese año se acabó el EPL. Pero la tragedia de Colombia se puede ver, con toda claridad, en el testimonio del asesino confeso (Castaño, 2001, página 229): "El Ministerio del Interior les pagó cerca de cuatro mil millones de pesos a estos guerrilleros (del EPL) para que se reinsertaran y a la postre ingresaran a las Autodefensas. A raíz de la crisis política del momento la negociación favoreció al presidente Ernesto Samper, pues se acabó la guerrilla del EPL. Seiscientos renegados de la guerrilla se cambiaron de bando y se colocaron el nuevo brazalete". ¡Cuatro mil millones de pesos del patrimonio común, para que 600 individuos abandonen un grupo criminal e ingresen a otro, más criminal todavía! A su turno, el Ipec (Instituto Popular de Capacitación) señala que en 1996, en Antioquia, "se registraron 55 masacres en las cuales murieron 342 personas, en su mayoría campesinos. En ese momento Apartado registró el mayor número de masacres con un saldo de 52 personas muertas. Le siguieron Medellín, Mutatá y Turbo. Lo peor del caso es que en un 27.27 por ciento de las registradas no tienen autores determinados y muchas de ellas se habrían cometido por negligencia de las autoridades militares". En todos estos crímenes estuvo involucrado un conflicto de tierras prácticamente insoluble. Durante la Gobernación de Uribe se arrasaron los incipientes movimientos campesinos del Urabá y creció el desplazamiento. Dos terratenientes involucrados directamente en los conflictos fueron Javier Uribe, en la vereda Peñas Azules, y Gilberto Arbeláez, en Guacas. El 20 de enero de 1996, ante una exigencia del ELN, el gobernador Uribe anuncia que "mientras se desempeñe como mandatario continuará promoviendo la creación de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir)". Su posición hizo carrera. El 17 de mayo, ante la IX asamblea de afiliados de la Asociación de Ganaderos del Atlántico y Zona Norte (Asoganorte), Rodrigo García, presidente de la Federación de Ganaderos de Córdoba, les pidió "empuñar las armas" en su defensa, y puso como ejemplo la situación de Córdoba en donde "gracias a ese mecanismo, se vive ahora un oasis de paz". En la misma reunión, Jorge Visbal Martelo, presidente de Fedegán, pidió "reformular la Constitución para dotar a las fuerzas militares y al Estado de un marco jurídico que le permita actuar sin el fantasma de la Contraloría o de los organismos de derechos humanos, que parecen sólo defender los derechos de los delincuentes". Y Pedro Juan Moreno, en representación del gobierno de Antioquia -dice El Tiempo- "fue enfático en recomendar a los ganaderos de la costa atlántica 'la conformación de las asociaciones Convivir, con el fin de reducir los altos índices de inseguridad. Moreno dijo que en el Urabá antioqueño fueron conformadas 32 asociaciones con 30 y 40 personas cada una. Recordó que 'no son grupos de choque sino de inteligencia y colaboración con las autoridades'". Pues bien. De acuerdo con el informe del Convenio Cinep & Justicia y Paz (1998), esos "grupos de inteligencia y colaboración con las autoridades" participaron activamente en la escalada de violencia que vivió Antioquia en la Gobernación de Uribe Vélez. "Por ejemplo -dice el informe-, en el trimestre de julio-septiembre de 1996, de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país 104 corresponden al departamento. En el primer semestre de 1998, las víctimas de violaciones a los derechos humanos fueron 207 de las 668 en la totalidad del territorio... Cifras que representan los niveles de violencia alcanzados en uno de los departamentos con mayor presencia de la fuerza pública y de las Convivir". Párrafo seguido, el Informe trae un dato revelador: "En Antioquia el proyecto de instauración de las Convivir ha sido claramente abanderado por el ex gobernador Alvaro Uribe Vélez incluso en contra o sin el conocimiento de las autoridades municipales. A pesar de que los alcaldes además de ser elegidos popularmente son los responsables del orden público local, la creación de las cooperativas

de seguridad no les son ni siquiera comunicadas. Muchos de ellos se enteraron de la existencia de estas organizaciones armadas, gracias a la información de prensa, y así lo manifestaron en carta al gobernador (Uribe) los alcaldes de San Jerónimo, Mutatá, Copacabana, Jardín, Río Negro, Anorí, Andes, Necoclí y Puerto Berrío". Luego el Cinep transcribe apartes de la entrevista que le hizo El Colombiano al personero de Medellín, Rafael Alberto Patino, el 4 de marzo de 1998: "Nos tocó el período gobernado por Alvaro Uribe Vélez -dice Patino-, quien insistió en una propuesta de fuerza y choque frente a la situación de orden público que vivía el departamento. Al principio de 1995, Antioquia tenía dos o tres zonas difíciles, y culminando el período de este gobierno, el departamento todo está en guerra. La administración municipal nunca tuvo noticia formal de las asociaciones Convivir... Durante el gobierno de Uribe Vélez se crearon unas Convivir ovejitas, que eran las de mostrar, a las que debía tapárseles muchas cosas, camuflándose en ellas las Convivir lobo, organizadas por el Ejército nacional sin tener competencia alguna. En mi opinión, todas las Convivir que están funcionando son ilegales".

En el mismo informe pueden leerse algunos datos de importancia. Por ejemplo, a raíz de la masacre de 10 personas en La Herradura, que ocurrió el 14 de agosto de 1997, las autoridades judiciales hicieron un allanamiento a la sede de las Convivir, donde "decomisaron tres armas de fuego al parecer utilizadas en el delito". El 10 de enero de 1998, el CTI capturó a cuatro integrantes de las Convivir acusándolos del crimen. El Cinep reseña algunos casos similares, ocurridos durante la gobernación de Uribe Vélez, que valdría la pena reproducir. "La Fiscalía regional de Medellín llamó a juicio a Juan David González Quiceno, integrante de la mayor cooperativa comunitaria de vigilancia rural del departamento de Antioquia, la Acepal, por su presunta responsabilidad en el homicidio agravado de dos indigentes: Giovanni Alberto Fiórez Manco y Juan Bernardo Ossa Marín, abaleados el 11 de noviembre de 1997 en el atrio de la iglesia de La Veracruz de Medellín. "En agosto de 1997 fueron capturados ex miembros de las Convivir Los Girasoles y de la Convivir Acepal cuando fueron sorprendidos en el momento en que asaltaban dos camiones. Otros tres integrantes de estas organizaciones fueron sorprendidos cuando recibían una alta suma de dinero producto de una extorsión. Además, existen marcadas sospechas de la posible participación de miembros de la Convivir Los Girasoles en el asesinato de ocho personas en la ciudad de Medellín. Por lo anterior se le suspendió la personería jurídica a las mismas. "En la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia fue radicada una diligencia del fiscal delegado, quien luego de estudiar una serie de denuncias presentadas ante su despacho, observó la presencia y conformación de un grupo de justicia privada en el municipio de Amaga, que extiende su radio de acción a otros varios municipios del suroeste antioqueño, que irrumpen en la población en vehículos con hombres fuertemente armados que se dedican a desaparecer jóvenes y campesinos de la región. Este accionar criminal se le atribuye a la Convivir Cooperativa Las Garzas, integrada básicamente por ex policías de ese municipio. "En el mes de septiembre de 1996 se entregó a la Fiscalía el reconocido paramilitar José Alirio Arcila Vásquez, quien en sus diferentes manifestaciones ante las fiscalías de Medellín y Bogotá afirma haber sido integrante de la Cooperativa Convivir Los Sables perteneciente al municipio Ciudad Bolívar ubicado al suroeste antioqueño, donde era el segundo hombre al mando, bajo la dirección del ex capitán del Ejército Ciro Alfonso Vargas, y entre los meses de enero y mayo de 1996 reconoce haber participado de manera conjunta con los grupos paramilitares en la comisión de más de 40 homicidios entre los meses de enero y mayo de 1996. El mismo paramilitar afirma que la Convivir del municipio de Amaga, de nombre Las Garzas, al mando del sargento Castro, entregó a los paramilitares una lista con más de 60 nombres, fotografías y direcciones de personas señaladas como colaboradores de la

guerrilla, quienes fueron asesinadas. El confeso paramilitar agrega que de la acción conjunta entre las Convivir y los paramilitares al mando de Carlos Castaño, tenían pleno conocimiento el mayor del Ejército de la IV Brigada de Medellín de apellido Clavijo, el mayor Óscar Zuluaga y el sargento del B-2 de inteligencia Miguel Salinas, porque en varias oportunidades se reunieron con el señor Carlos Castaño para planear ciertos homicidios de defensores de derechos humanos. Ha dicho igualmente ante las autoridades, que el señor Castaño se encuentra detrás de las Convivir a las cuales financia. El 29 de octubre, un juez regional de Antioquia condenó a Arcila Vásquez, a seis años de prisión. "Al señor Luis Alberto Villegas Uribe, fundador y presidente de la Cooperativa Convivir El Cóndor, con sede en el corregimiento de San José del Ñus del municipio de Maceo, Antioquia, se le impuso medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva por colaboración con actividades de grupos paramilitares en el sector. De las pruebas recaudadas por la Fiscalía consta que el señor Villegas es un ganadero de la región, quien se encargaba de la recolección de cuotas para el funcionamiento de las Convivir y de dar información a los grupos de autodefensa. También se presume su participación en la coordinación de algunas masacres ocurridas en la zona del nordeste antioqueño. Al parecer, en los vehículos de las Convivir se desplazaban los miembros de las autodefensas y todo indica que no sólo el señor Villegas Uribe tenía relación con los grupos al margen de la ley sino también miembros de la fuerza pública de los municipios de Santo Domingo, Museo y San Roque y los corregimientos de Cristales y San José de Ñus... "Investigaciones adelantadas por la Fiscalía de Medellín indican que los señores Óscar Restrepo Silva y Henry de Jesús Restrepo López, integrantes de la Convivir Las Guacamayas, operan permanentemente con paramilitares del Magdalena Medio y narcotraficantes, se les ve fuertemente armados, y mantienen relaciones de amistad con el estado mayor de la brigada de Puerto Berrío y con la Policía. A los mencionados se les sindicó de la muerte de Hilder Alfonso Corredor Rivillas y Gabriel Antonio Monsalve Salazar, en hechos ocurridos el día 27 de junio de 1995. El día 29 de julio del mismo año son asesinados Elías Alberto David Jaramillo y Hernando Abad Martínez, y se involucra en esas muertes a Óscar Restrepo y a Félix Gaitán, miembro de la misma Convivir... "Otro declarante señala que esta misma Convivir es la responsable de la muerte de Darío Aguinaga y de la desaparición de un joven apodado Toto', y afirma que al señor Restrepo y a los otros miembros de las Convivir se les ve patrullando permanentemente con alias Moreno, alias Conejo y alias Condorito, reconocidos paramilitares del Magdalena Medio. "Otro declarante con reserva afirma ser testigo del hecho de que la Convivir Las Guacamayas ha llevado paramilitares a la zona, los entrenan en Caño Baúl, Santander, durante tres meses, y luego comienzan a operar bajo las órdenes de Félix Gaitán. Que la mayoría de los miembros son reservistas y que el señor Restrepo es el encargado de pagarles. Que la mencionada situación se incrementó desde cuando asignaron al general Faruk Yanine Díaz como comandante de la XVI Brigada, cuando los carros entraban a la Brigada se abastecían de remesas y salían para los campamentos de las autodefensas. El mismo testigo cuenta que él me llevado a trabajar a la finca del señor Salomón Valencia, pero una vez allí se dio cuenta que era la base de un grupo paramilitar y al poco tiempo se le advirtió sobre la presencia del señor Félix Gaitán, paramilitar del Magdalena Medio, quien visitó la finca fuertemente escoltado y agrega que llevaron una señora y tres muchachos, los torturaron, a la señora le rasparon el estómago y con motosierra partieron a los otros tres. A los pocos días mataron dos jóvenes menores de edad. A uno le decían 'Pollo' y el otro respondía al nombre de Carlos. Después mataron a un anciano trabajador de Félix Gaitán porque decía que este era mafioso. Con estos hicieron polígono, después los destrozaron con la motosierra y los metieron dentro de unos costales. "El mismo testigo advierte que la XIV Brigada es parte del grupo porque entran y salen de las fincas de Valencia y Gaitán. "En un informe de

inteligencia del Cuerpo Técnico de Investigación se asegura que la acción conjunta de los paramilitares y la Cooperativa Convivir Las Guacamayas, además de las acciones ya referidas, son culpables de la muerte de Luis Alfonso Martínez, Alfonso Pelees, Darwin Cifuentes, Miguel Amariles, Ramón Agudelo, Francisco Toro y Henry Jiménez Arroyabe. El informe ratifica que los integrantes del grupo paramilitar son en su mayoría los mismos miembros de la Convivir en cuestión, de la cual hacen parte Carlos Gómez, Rogelio Becerra Carmena, Teódulo Palacios Rentarúa, Rafael Díaz Palacios, Luis Alberto Arrieta, Salomón Valencia y Algiro Tamayo, quienes gozan de pleno respaldo de las autoridades locales, de la Policía y del Ejército. "En el curso de la investigación se reciben otras declaraciones con reserva de identidad que continúan narrando diferentes hechos de sangre contra más de 30 campesinos, cometidos por grupos paramilitares en asocio de la Convivir Las Guacamayas, no sólo en Puerto Berrío sino además en los municipios de Maceo, San Roque y el corregimiento de Cisneros... El 19 de marzo de 1997 el capitán del Ejército Ernesto Camacho les manifestó que tenía conocimiento de que estaban colaborando con la Fiscalía y 'que ya tenían gente para que los tiraran al río'... "El 2 de diciembre de 1996 ejecutaron extrajudicialmente a Walter Balaguera, Filiberto Ruiz y Fair Gualdrón, estos últimos en presencia de sus seis hijos, el menor de 8 años de edad. De las muertes se sindicó a presuntos muertos de la Convivir Renacer... "El 4 de febrero de 1997, integrantes de un grupo paramilitar con apoyo de unidades del Batallón Contraguerrilla No 43, adscrito a la XTV Brigada y miembros de una cooperativa de seguridad Convivir, quienes portaban armas de corto y de largo alcance, algunos con capuchas, incursionaron en la inspección de policía de San Francisco y durante más de cuatro días detuvieron arbitrariamente a 40 campesinos, entre ellos a quince menores de edad, a quienes sometieron a tratos crueles y amenazas verbales, y torturaron al campesino Antonio. Al abandonar la población, ejecutaron extrajudicialmente a cuatro campesinos, a quienes descuartizaron y castraron, llevándose consigo a otro campesino cuyo paradero es desconocido". Todo ello en algunos pocos meses de la larga gobernación de Uribe Vélez, quien en numerosas ocasiones ha dicho que de las Convivir que se organizaron bajo su mandato sólo dos "tuvieron problemas". En el reportaje que le concedió a Patricia Lara, y que fue publicado el 6 de abril 145 en Lecturas Dominicales de El Tiempo, el candidato rechaza la afirmación de la periodista, quien ha dicho que "las (Convivir) que no se disolvieron se transformaron en paramilitares", y sostiene que eso no ocurrió en Antioquia. Allí, dice, "las controlamos. Nunca fueron clandestinas. Procuramos que estuvieran bien dirigidas y que fueran verdaderas empresas de seguridad para el campo. Hubo problemas en dos de ellas. Las sancionamos y a una le cancelamos la personería". En los informes de la Fiscalía que recoge el Cinep se mencionan ocho Convivir. La diferencia es significativa. Como el hecho de que Salvatore Mancuso, actual "comandante" militar de las Autodefensas, haya formado parte de una de esas organizaciones, como lo demuestra el informe de labores de la Superintendencia de Seguridad (1996), donde se lee (página 63) que a la Convivir que lleva el nombre de dicho individuo, se le entregaron quince subametralladoras, quince pistolas de 9 mm., y quince fusiles. Sobre ese dato todavía no se ha pronunciado el candidato. Cuando Uribe se retira de la Gobernación las cifras relacionadas con la seguridad son dramáticas. De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en Antioquia sólo dos índices disminuyeron levemente: piratería terrestre y delitos contra la vida y la integridad personal. Los demás, delitos contra el patrimonio económico, casos de terrorismo, entidades oficiales o privadas afectadas por terrorismo, secuestro extorsivo, hurto calificado a residencias y hurto a entidades financieras, se dispararon sin control alguno.

En el folleto de promoción de su campaña presidencial, se lee textualmente que "la política de seguridad (del gobernador Alvaro Uribe), con apoyo a la fuerza pública y colaboración transparente de la ciudadanía, redujo el secuestro en un 60 por ciento y las vías fueron transitables". Por el contrario, en los cuatro años el secuestro aumentó en un 268 por ciento, a un promedio de 67 por ciento anual. Sobre las demás cifras, silencio absoluto. La campaña de Uribe para la Presidencia de la República se inició en firme la noche del 29 de abril de 1999. En un banquete que congregó a mil quinientas personas, el candidato le rindió homenaje a los generales Fernando Millán y Rito Alejo del Río, llamados a calificar servicios cuando se les acusó de tener nexos con grupos paramilitares. Frente a una mesa donde tomaban asiento los más caracterizados voceros de la extrema derecha: Jorge Visbal, presidente de Fedegán; Harold Bedoya, ex general y ex candidato; Pablo Victoria, congresista en trance de desaparecer; Fernando Londoño, abogado del ex ministro Fernando Botero, condenado por enriquecimiento ilícito a favor propio; Plinio Apuleyo Mendoza, ex izquierdista converso; Hernán Echavarría Olózaga, empresario de azulejos; Fernando Devis Morales, presidente de Augura; y Pedro Juan Moreno, Uribe Vélez pidió que se dialogara de igual a igual con las guerrillas y con los paramilitares, y precisó que respetaba el fuero presidencial para remover a los oficiales de las Fuerzas Armadas, pero discrepaba de que esa prerrogativa se le traspasara a las fuerzas insurgentes.

María Isabel Rueda, en Semana afirmó que "todo el mundo" había interpretado que "la asistencia de Alvaro Uribe a ese banquete correspondía a la búsqueda del escenario apropiado para lanzar su candidatura presidencial, o por lo menos, su sonoro regreso a la vida política nacional". Y El Tiempo, siempre tan acomodaticio, reseñó el acto bajo un título significativo: "Uribe, ¿en el lugar y hora equivocados?". Ocho días más tarde Rueda, periodista cercana a las tesis del candidato, indicó que era un error que "un presidenciable como Alvaro Uribe se ubique tan tranquilamente en una postura que de ninguna manera consulta la realidad nacional. Es tan grave convertirse en idiota útil de la guerrilla, como en idiota útil de la tendencia de un poder autoritario en el seno de nuestras Fuerzas Militares". Y, luego de oír el discurso de Uribe, añadió: "Lo que a mi parecer no le quedó claro fue finalmente qué era lo que pensaba: ¿al fin no, o al fin sí? Porque en su discurso fue enfático al afirmar que el banquete era un acto de homenaje, pero también uno de protesta, porque asegura que 'lo grave de esta ocasión es que la solicitud atendida proviene de la insurgencia, con base no en providencias de la justicia de Estado sino en sus prevenciones, prejuicios y estrategias', siendo así que un párrafo antes había dicho que 'aunque hay determinaciones que duelen y se deploran, su aceptación, llana y simple, en el estamento armado, es indispensable como premisa del orden democrático', y porque asegura en su discurso que se debe reexaminar el concepto, y lo escribe en mayúsculas, de hacer la paz en medio de la guerra, lo que sólo conduce a la conclusión de que es mejor hacer la paz en medio de la paz, y a la sensación de que nos están dando un consejo medio bobalicón". En ese entonces, Rueda, como muchos otros observadores, pensaba que la paz era un proceso serio en el que se debían comprometer a fondo todas las fuerzas vivas del país. Pero el estruendoso fracaso de la propuesta de Andrés Pastrana, que mostró en el curso de pocos meses sus deleznable pies de barro, llevó a que un grupo humano desesperado y acosado por los escenarios de la hecatombe y por sus crueles protagonistas, diera un vuelco de 180° y se reuniera en torno a un hombre que, desde el comienzo, le apostó al fracaso del proceso de paz. ¿Por qué? Tal vez porque esperaba que todos termináramos por darnos un porrazo, para sacar de su cubilete de mago una propuesta más cercana a su forma de ver el mundo: un proceso de guerra.

Alvaro Uribe, pacificador de Urabá

Algunos tienden a creer que, al igual que ocurre con la guerrilla, los paramilitares no son un Estado dentro del Estado sino que son el Estado. En una entrevista con Newsweek (04/04/02), Salvatore Mancuso, su "comandante" militar, sostuvo que en el norte del país, donde ellos dominan en territorios que equivalen dos y tres veces a la superficie de Portugal, han tenido que armarse y defenderse y construir escuelas y clínicas "porque el Estado ha fallado en cumplir con sus deberes constitucionales". Contra esa tesis facilista se han expresado distintos voceros de la mal llamada "sociedad civil". "El Estado colombiano -dice Eduardo Posada Carbó en su ensayo sobre "El lenguaje del conflicto en Colombia" (Posada, 2001, 36) -, a pesar de sus imperfecciones, es representativo de amplios y significativos sectores de la sociedad nacional en niveles que marcan contrastes notables con quienes le disputan tal autoridad. Su legitimidad se pone periódicamente a prueba, y por lo general se renueva en esas ciclos electorales que limitan de cualquier forma el mandato democrático de sus sucesivos gobiernos -una variable adicional en su ya compleja estructura-. Se trata además de un Estado cuyos esfuerzos reformistas deberían merecer mayor crédito. Muchos de sus críticos siguen empecinados en referirse al régimen restringido del Frente Nacional (1958-1974) como origen de todos los males presentes, como si, primero, la elección popular de alcaldes introducida en 1986 y, después, la Constitución de 1991 no hubiesen introducido cambios - sutiles y drásticos- en la estructura del poder político en Colombia. Cambios que vinieron acompañados de un proceso de paz cuyos buenos éxitos también merecen mayores reconocimientos. Como consecuencia, el Estado y la política colombiana han adquirido en la última década una mayor complejidad y dinámica, poco apreciada por el lenguaje generalmente obsoleto de nuestros formadores de opinión... Es importante subrayar la necesidad de revisar tan arraigados estereotipos sobre el Estado colombiano. En ellos se origina gran parte de la confusión intelectual que existe sobre la naturaleza del conflicto".

Claro está que nadie le pediría a Mancuso una discusión teórica sobre el particular. Pero lo cierto es que él y sus 8 mil hombres (que al final del año 2002 serán, según sus propias palabras, cerca de 26 mil), ejercen sobre el territorio un poder que sólo puede discutirse desde un punto de vista formal. El 13 de diciembre del 2001, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Claudio Grossman, expresó en Bogotá "su preocupación por la violencia desatada por los grupos de autodefensas, reflejada en la ejecución de masacres, asesinatos selectivos, actos de extorsión y desplazamiento masivo, como consecuencia de las llamadas limpiezas sociales". En una conferencia de prensa, Grossman, quien señaló que "subsisten indicios graves que dan cuenta de la cooperación de agentes del Estado con los grupos de autodefensas", habló coloquialmente del problema: «Hay autores confesos de actos graves contra civiles -dijo-, que se desplazan por todo el país concediendo entrevistas a los medios de comunicación y hasta toman tinto en lugares públicos de poblaciones como Barrancabermeja, como si nada hubiera pasado». En el exterior tiende a creerse que la violencia paramilitar obedece casi que exclusivamente a razones de preeminencia territorial, y así se expresa con relativa frecuencia. Pero no. Un caso dramático es el de los reinsertados del ELN, que se reunieron en 1994 alrededor de la Corriente de Renovación Socialista (CRN). Sus integrantes han sido eliminados de manera sistemática. La lista completa de los antiguos guerrilleros la conocen tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas.

Hace poco, esas ejecuciones extrajudiciales tuvieron un nuevo episodio. El 3 de marzo del 2002, un grupo de paramilitares torturó y asesinó a cinco campesinos cerca de la finca "La

Galleta", en Montebello, Antioquia. Los antecedentes del crimen tienen que ver de manera estrecha con el proceso de paz en Colombia.

Al terminar la administración Gavina, el gobierno y un grupo de guerrilleros del ELN firmaron un acuerdo: estos últimos dejaban las armas, y el primero les facilitaba su reincorporación a la vida civil. En desarrollo del mismo, siete familias compuestas por antiguos miembros del ELN recibieron la finca "La Galleta", donde crearon la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda. Dentro de ese grupo figuraban Ubemey Giraldo Castro, John Jairo Muñoz Zapata, Leonel Pascual Sánchez, Pastor Jaramillo Cadavid, José Evelio Gallo Gallo, Guillermo León Calle Giraldo, Guillermo León Valencia Agudelo, José Aristizábal, Fabián Tamayo Gil, Heriberto de Jesús Londoño Sánchez, Juan Julio Sepúlveda Agudelo, Mario de Jesús Muñetón y Nelson Alfredo García Giraldo. Sus problemas comenzaron el 23 de enero del año 2000. A las 4:30 de la mañana de ese día, un grupo de paramilitares fuertemente armados, que vestían uniformes del Ejército Nacional, llegaron a "La Galleta". Los individuos pintaron insignias y letreros alusivos a su organización, gritaron que en esa finca vivían los autores de las "pescas milagrosas" ocurridas en la Glorieta Don Diego (ubicada entre los municipios de El Retiro y la Ceja), sacaron a los campesinos de sus casas, los amenazaron y retuvieron a Guillermo Adolfo Parra López, director del colegio rural, a Wilfredo Cañaverl, hijo del presidente de la junta de Acción Comunal, a José Evelio Gallo, a Ubemey Giraldo Castro y a John Jairo y David Muñoz Zapata. Al terminar el asalto, destruyeron o robaron varios elementos y le advirtieron a los moradores que seguir en la finca sería para ellos "muy peligroso". En la vereda El Cairo, ubicada entre Montebello y Santa Bárbara, le dieron muerte a Parra López y dejaron en libertad a los hermanos Muñoz con la orden de que avisaran que los demás retenidos serían asesinados. El cadáver de Wilfredo Cañaverl apareció en La Ceja. Días después se supo de los otros dos secuestrados, cuando el Ejército convocó a una rueda de prensa para informar que dos miembros del ELN habían sido dados de baja en Carmen de Viboral en enfrentamientos con las tropas regulares. Los medios pudieron comprobar que los presuntos guerrilleros no eran otros que José Evelio Gallo y Ubemey Giraldo. Los cadáveres vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. En su informe, los militares dijeron que "los subversivos portaban una subametralladora mini-uzi con silenciador, dos proveedores para la misma, granadas de mano y minas antipersonales" y que pretendían dinamitar una torre de energía en la vereda La Madera, del Carmen de Viboral". El Ejército trasladó los cuerpos a la morgue del Carmen donde se practicó la diligencia de inspección de los cadáveres por parte de la Fiscalía. El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) comprobó que Giraldo y Gallo habían sido torturados. Por la noche, desconocidos violentaron los candados de la morgue y sustrajeron los cuerpos. En las paredes dejaron inscripciones del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Los pobladores de "La Galleta", aterrorizados, empezaron a abandonar la región. Dos meses después, el Ejército realizó prácticas bélicas en "La Galleta", hostigó de nuevo a sus moradores y los amenazó. En el transcurso del año 2001, Antonio Sema, administrador de La Galleta, testigo de los hechos, fue asesinado, y Jairo Hernando Sánchez, hijo de uno de los socios, secuestrado y desaparecido. La investigación que inició la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía llevó a que la entidad ordenara la captura del coronel Miguel Ángel Sierra Santos, comandante del grupo mecanizado Juan del Corral, del capitán Carlos Alirio Buitrago Bedoya, del sargento segundo Emigdio González Patemina, de los cabos primeros Jesús Humberto Blandón Vargas y Sandro Fernando Barrero, y de los soldados Yamil Escórela, John Jairo Giraldo, Alfonso Mercado, Ricardo López y Diego Quiceno. Luego dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra los dos cabos primeros, y en noviembre los calificó como "coautores responsables de los delitos de homicidio agravado en

concurso y de secuestro extorsivo". Los demás implicados aún se encuentran vinculados al proceso. La Procuraduría les adelanta una investigación disciplinaria. Este año se presentó un nuevo episodio. El viernes 3 de marzo un grupo paramilitar ingresó a las casas cercanas a "La Galleta" y retuvo a Salomón Castañeda, a su hijo Mauricio Castañeda (padre y hermano de Enoc Castañeda, antiguo trabajador de la finca), a Abelardo Ríos y a otros dos campesinos de la región. Ese mismo día aparecieron los cadáveres de todos ellos, con evidentes signos de tortura. Ese fue uno de los casos que dieron pie para que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Mari Robinson, afirmara el 21 de marzo en Ginebra que "La impunidad de que disfrutaban los responsables de las acciones paramilitares y la limitada eficacia del Estado a la hora de combatirlos explica en gran medida la fortaleza cada vez mayor de estos grupos". El panorama del paramilitarismo en Colombia es angustioso. Para comenzar, está en manos de una serie de locos. Un testimonio impresionante es el del filósofo francés Bernard-Henri Lévy sobre su visita a Carlos Castaño. Aunque extenso, vale la pena leerlo en su integridad. Lévy, un intelectual reconocido mundialmente, ofrece un testimonio sustancialmente distinto del que han dado los periodistas colombianos que han entrevistado al jefe paramilitar, que han encontrado siempre a un hombre discreto, casi encantador, que recibe la comunión de manos de un cura católico (Aranguren, 2001, 193) después de confesar los peores crímenes que se hayan cometido en Colombia en mucho tiempo. El artículo de Lévy fue publicado en XXX el 6 de junio del año 2001 bajo el título "Las guerras olvidadas, 4. Colombia". La traducción es de José Manuel Vidal. Y dice: "Carlos Castaño, alias Rambo, es el otro actor principal de esta guerra. También él, a la cabeza de un auténtico ejército, reina en los estados de Urabá, Sucre, Magdalena, Antioquia, Cesar, Córdoba, Cauca y Tolima, sobre territorios todavía más vastos, donde se le imputan crímenes horribles. "No me presenté ante él como periodista. A través de diferentes canales le mandé decir que era 'un filósofo francés trabajando sobre las raíces de la violencia en Colombia'. Al cabo de varios días, recibí un telefonazo, fijándome una cita para el día siguiente en Montería, la capital de Córdoba, el estado donde tuvo lugar la matanza de Quebrada Nain. Montería. Un toyota. Un chofer mudo. Y tres horas de malas pistas, en dirección a Tierra Alta. Finca Milenio, Finca El Tesoro... Las aldeas de Canalete, Carabatta, Santa Catalina... Estamos en el corazón de la zona de los finqueros, esos grandes propietarios que, en los años 80, fueron los que crearon estas Autodefensas de Córdoba y Urabá, que, ahora, se llaman paramilitares, el embrión del ejército de Castaño. "Estamos, si mis deducciones son buenas, en el límite sur de Córdoba y de Urabá, por donde pasa la línea del frente con las FARC. "El Tomate, un pueblo con su estadio de fútbol aplastado por el calor, sus billares, su gallería para los combates de gallos. Y, de pronto, un gran portalón de madera y otro y otro. Tiendas, cabañas de colores caqui, un garaje de jeeps, una pancarta gigante: «La mística del combate integral», un tejado de caña, bajo el que están reunidos una treintena de hombres con sombreros tipo ranger, hombres blancos, algún negro, un intenso tráfico de armas que transportan de una tienda a otra y, en medio de este inmenso campamento, en el umbral de la tienda más grande, rodeado de hombres en uniforme y con armas, un pequeño personaje nervioso, muy delgado y que me dice, a guisa de presentación: Carlos Castaño. "-Entre, señor profesor. "No hay ironía en su voz, sino, más bien, una consideración por aquel que él piensa que es una autoridad universitaria que viene a visitarle a la selva. "-Yo soy un campesino. Todos aquí somos campesinos. Con un gesto sencillo y casi como disculpándose, señala a los comandantes que tomaron asiento, como nosotros, alrededor de una mesa. "-Quiero decírselo inmediatamente. Lo que a mí me interesa, aquello por lo que me levanté, hace 20 años, contra las FARC, es la justicia. Soy un hombre justo. "Habla rápido, muy rápido. Sin darme ocasión de plantearle preguntas. Tiene una voz juvenil que no tiene nada que ver con el uniforme, los galones, y la boina que lleva

en la cabeza. "-Díselo tú, Pablo, dile que soy un hombre de justicia. "Pablo, que está a mi lado, lo dice. Coloca su sombrero sobre la mesa y confirma que el señor Castaño es, en efecto, un hombre de justicia. "-La droga, por ejemplo. "Es él el que aborda, de inmediato, la cuestión de la droga. "-No quiero causarle daño a este país. Me sienta mal hacerle daño. Pero, ¿qué puedo hacer yo, si este conflicto está vinculado a la droga y si no se puede entender en absoluto si no se piensa continuamente en clave de droga? "Los comandantes opinan de nuevo. "-Pero, atención. Donde se plantea la cuestión de la justicia es en que nosotros no somos los traficantes. Le prohíbo decir que somos traficantes. Sólo estamos detrás, protegiendo los campesinos que cultivan. Porque, ¿qué se puede hacer cuando una tierra es estéril y sólo se puede cultivar eso? ¿Es que vamos a prohibirle a los paisanos que se ganen la vida? Le observo que habla como Ríos y como las Farc. "-No. También le prohíbo que diga eso. Porque la diferencia es que nosotros, con los beneficios de la droga, hacemos el bien. El Bien. ¿Por dónde ha venido usted? ¿Por la ruta de Tierra Alta? ¡Nosotros somos la ruta de Tierra Alta! Es con el dinero de la droga con el que hemos hecho la estupenda carretera de Tierra Alta. "Carlos Castaño se calienta y se embala. El sudor le cae sobre el rostro. Hace grandes gestos y despliega una energía considerable para que entienda perfectamente que es él el responsable de esta ruta y que es un hombre de Justicia. "-¿Me explico? "-Claro que sí, perfectamente. "-¿Tú crees que entiende? "-Sí, jefe, parece que entiende. "La verdad es que cada vez le veo más excitado. Con nervios. "-La injusticia me vuelve loco, loco. Le pongo otro ejemplo. El ELN. Las negociaciones con el ELN. Y esa idea de darles también a ellos una zona. ¿Cómo es posible que Pastrana, el presidente Pastrana, pueda pensar en entablar negociaciones con el ELN, que es una organización de secuestradores, asesinos y torturadores? "Le hago caer en la cuenta de que su organización practica, también ella, los atentados ciegos contra los civiles y, sobre todo, contra los sindicalistas, esta misma semana, sin ir más lejos. Se sobresalta. "-¿Atentados a ciegas nosotros? Jamás. Siempre hay una razón. Los sindicalistas, por ejemplo. Impiden trabajar a la gente. Por eso los matamos. "-¿Y el jefe de los indios de Alto Sinú? ¿También impedía trabajar a la gente el pequeño jefe indio que había bajado a Tierra Alta? "-La presa, impedía el funcionamiento de la presa. "-¿Y el alcalde? Me dijeron en Tierra Alta, cuando hacía la ruta de Quebrada Nain que, justo antes de las elecciones, las Autodefensas asesinaron al alcalde. "-Lo de los alcaldes es otra cosa. Nuestro trabajo consiste en llevar el poder a los representantes del pueblo. Cuando hay alguien en Córdoba que se obstina en querer presentarse en contra de nuestra voluntad, le amenazamos. Es verdad, le mandamos una advertencia, como es normal. "-Sí, pero a este alcalde en concreto no sólo lo amenazaron, sino que lo mataron... "-Porque robó dos millones a la ciudad. Y, después, acusaba a otros. Hacía recaer en otros la responsabilidad de sus robos. Corrupción y mentira juntas. Era demasiado. Por eso hubo que ser implacable. Y además... "Se toma un respiro. Después, con una voz estridente, casi femenina y como si estuviese en posesión de la irrefutable prueba de la culpabilidad del alcalde, añade: "-Además, llevaba un chaleco antibalas. Así de simple. "La conversación dura dos horas y siempre en este tono. Castaño habla tan rápido ahora, con una voz tan aguda, que me tengo que inclinar cada vez más a menudo hacia mi compañero, para que me repita lo que ha dicho. Habla del presidente Pastrana, al que respeta, pero que no le respeta y eso le desespera. De Castro, que ha castrado a su pueblo, y esta imagen le hace reír con una risa de demonio. De todos esos militares, expulsados del Ejército, que, como los generales Mantilla y Del Río, se pasan a las Autodefensas. Pero, ojo, con una condición, porque él les pone una condición, para no volverse loco: que no hayan sido expulsados por corrupción. "Habla de la injusticia y otra vez más de la injusticia. De la letanía de injusticias y de disfuncionamientos del Estado. Pero allí está él, Castaño, para suplir al Estado desfalleciente. El es su brazo, su servidor fiel y no

correspondido. Y, por fin, habla del crimen de Quebrada Nain y de todos los crímenes que se le adjudican a sus sicarios. Y no suelta ni una palabra de arrepentimiento. Lo máximo que concede es que, a lo mejor, su ejército quizá haya crecido demasiado deprisa y que en la matanza de la que le hablo 'les faltó [sic] profesionalismo'. "Pero lo que repite una y otra vez es que, si un hombre o una mujer tienen aunque sólo sea una vaga vinculación con la guerrilla, dejan de ser civiles, para convertirse en guerrilleros vestidos de civil y, por lo tanto, merecen ser torturados, degollados, o son merecedores de que les cosan un gallo vivo en el vientre en lugar de un feto... "Carlos Castaño tiene cada vez más calor. Y está cada vez más febril. Este olor de supositorio que invade la tienda... Esa forma que tiene de sobresaltarse cuando oye un ruido... "-¿Qué pasa? "-Nada, jefe, es el generador, que se ha vuelto a poner en marcha. "Y su manera de gritar, cada cinco minutos: 'Un tinto, Pepe, un café'. Y un soldado, aterrorizado, se lo lleva. Y él vuelve a hablar a un ritmo endiablado. Un último cuarto de hora para gritar. Y después se calla, se levanta y se calla. Titubea un poco. Se agarra a la mesa. Me mira con una mirada tan fija que me pregunto si no está sencillamente borracho. Se repone. Me ofrece una gran cartera negra, repleta de discursos y de videos. Sus lugartenientes están a su lado. Sale, dando tumbos, bajo el sol de mediodía. Un psicópata frente a unos mafiosos. Una historia llena de ruido y de furor contada por bandidos o por este guñol asesino. "Una parte de mí me dice que siempre ha sido así y que los observadores más sagaces siempre han descubierto a los gordos animales perentorios, faroleros, hinchados de su propia importancia y poder, que reinaron sobre el infierno de la Historia de los tiempos pasados: el grotesco Arturo Ui, de Brecht; el pobrecillo Laval, de Un castillo al otro; García Márquez y su caudillo; la desnudez fofa del Himmier de Malaparte, en Kaputt... "Pero otra parte de mí no puede deshacerse de la idea de que hay aquí, en cualquier caso, un cambio, una degradación energética, una caída. No puedo dejar de pensar que jamás se había visto una guerra reducida a este enfrentamiento de magnates y de monigotes, de clones y de payasos. El grado cero de la política. Es el estadio supremo de la bufonería y el estadio elemental de la violencia descamada, sin disfraz, reducida al hueso de su verdad sangrienta. Incluso los monstruos se desinflan cuando se terminan las épocas teológicas". Es esta gente la que tiene en sus manos a Colombia. Con el dinero que obtienen de la comercialización de cocaína, le pagan 180 mil pesos mensuales a sus 14 mil efectivos, construyen malos caminos como el de Tierra Alta, educan a sus hijos en Europa y compran el más sofisticado armamento que sea dable encontrar hoy en el mercado de armas. Poco antes de las elecciones para el Congreso celebradas en marzo, Salvatore Mancuso, el alter ego de Castaño, declaró a la AP que la confrontación en Colombia será todavía peor y que su organización se prepara para esos nuevos episodios mediante el entrenamiento de nuevos militantes. Según él, las autodefensas comenzaron hace diez años con 850 individuos, y a finales del año 2002 tendrán 12 mil más, para completar un ejército de 26 mil. El Ejército regular está compuesto por XXX soldados. En la entrevista Mancuso se define como "él primero entre iguales", rechaza la calificación de "terroristas" que les ha dado el gobierno de los Estados Unidos, e invita a funcionarios de ese país a visitarlos en sus campamentos para que comprueben que los paramilitares son "un grupo surgido de la necesidad de defenderse uno mismo". "Estamos recomendando a la gente a quién votar", dijo Mancuso. Y vaticinó que por lo menos el 30 por ciento del Congreso quedaría en sus manos. Esa cifra fue ampliamente superada. El 12 de marzo del 2002, El Tiempo reprodujo un comunicado de Mancuso en el que anuncia el éxito de los paramilitares en esas elecciones. "Podemos afirmar -dijo-, con los datos a la mano, que la meta original del 35 por ciento ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las AUC». Se supone, en consecuencia, que no menos de 90 congresistas hayan sido auspiciados y elegidos por los paramilitares. Estos grupos, según el periódico, "no apoyan directamente a

ningún candidato presidencial, aunque no ocultan su simpatía por el derechista Alvaro Uribe, líder en las encuestas de preferencia electoral".

Sobre el particular, Newsweek le preguntó a Uribe: "Algunos colombianos ven en usted al candidato favorito de los grupos paramilitares". Y él contestó: "Nunca me he reunido con ningún miembro ni de las fuerzas paramilitares ni de la guerrilla. (El jefe paramilitar) Carlos Castaño ha dicho claramente que no me conoce. Una vez, hace muchos años, me reuní con (el jefe militar de las AUC (Salvatore) Mancuso, cuando era un ganadero, pero no he vuelto a hablar con él desde que se unió a los paramilitares". Y luego, cuando el periodista insistió sobre el tópico, afirmó: "No voy a responderle a eso. Si tengo vínculos con los grupos paramilitares, ponga una demanda ante las autoridades que correspondan".

¿Tiene Uribe vínculos con los paramilitares? La respuesta no es fácil. En una interesante apreciación sobre el problema político de Colombia y sus protagonistas, el profesor César López Ocampo, de la Universidad Nacional, sostuvo el 29 de enero del 2002 que no participa de "la consabida táctica macartista, tan común entre los grupos radicales izquierdistas, que se han dado a la tarea de desprestigiar a Alvaro Uribe Vélez, endilgándole inexistentes vínculos con grupos paramilitares o presuntas políticas complacientes con estos sectores, eventualmente llevadas a cabo durante la época en que se desempeñó como gobernador de Antioquia. Creo que quienes así actúan lo hacen de mala fe, pues lo cierto es que más allá de hacer correr rumores, nunca han podido demostrar que ello haya sido cierto. Es más: muchos de esos que tanto criticaron la conformación de las famosas cooperativas de seguridad rural Convivir, con el argumento de que eran ejércitos privados al servicio de ganaderos y latifundistas, en no pocos casos han estado prestos a solicitar autorizaciones para conformar personales guardias armadas, con el argumento de que no confían en la seguridad que les puedan garantizar los cuerpos legítimos del estado. ¡Que curioso! Este ha sido también el argumento de los sectores que han apoyado el paramilitarismo en el país... ¿y no fue acaso también éste el argumento de Tiro Fijo, Sangre Negra, Chispas, Tarzán y otros cuantos 'comandantes', así como también el de las agrupaciones políticas que los 'adoptaron', al momento de justificar la existencia de las así llamadas 'repúblicas independientes' (Marquetalia, El Pato, Guayabero, Río Chiquito, etc.)? Me resisto a aceptar la doble moral de quienes consideran ético y justo tener un arma para su defensa, pero consideran inmoral e injusto que el vecino también tenga una, solamente porque el primero considera que él sí es bueno, pero que su vecino no lo es. Personalmente me encuentro al lado de quienes creen que los civiles no debemos estar armados, y me duele, por ejemplo, que a la entrada del edificio en donde habito haya un 'celador' armado que la administración contrata privadamente. La seguridad que me puede brindar ese celador debería brindármela la policía, pues ésta es su función y para ello pago impuestos e igualmente los pagan mis conciudadanos. Pero sé que así no son las cosas, por ello mismo me motivo a luchar porque en un futuro así sean; también por ello no comparto la tesis de que la solución al conflicto armado sea la de armar a los civiles, ni siquiera de la de educarlos en el manejo de las armas, así la intención sea solamente la de prestar colaboración armada a la fuerza pública. En este punto es claro entonces que no comparto las tesis del doctor Alvaro Uribe. Sin embargo, me es claro también que su planteamiento tiene, en el marco de la realidad actual del país, una lógica válida, como lo es la necesidad de restituir la confianza entre la ciudadanía y la fuerza pública. Y si bien en este último aspecto pudiera estar de acuerdo, lo cierto es que 166 creo firmemente en que esa confianza debe fundamentarse en el carácter civilista de la fuerza pública, no fomentando una mentalidad guerrerista en los civiles". Sin embargo hay algunos indicios que muestran por lo menos un comienzo de entendimiento

entre Uribe y Mancuso y su grupo de asesinos. En efecto, el candidato tiene una hacienda de ochocientas hectáreas en Córdoba, ubicada a 45 minutos de Montería, donde levanta más de 1.500 cabezas de ganado. Es a ella a la que se refiere en su entrevista con Patricia Lara, publicada en Lecturas Dominicales de El Tiempo el 6 de abril de este año: "A pesar de que se dedicó a la vida pública —dice Lara—, nunca abandonó dos de sus profesiones de reserva: adiestrador de caballos criollos y buen administrador de fincas. Por eso, una de las primeras cosas que hace a diario, después de trotar una hora y de relajarse con yoga, es llamar al administrador de su hacienda de Córdoba para preguntarle cuánta leche ordeñó, cuántos temeros negoció, de qué peso y a cómo". Esa propiedad, es el comentario general en la región, está vigilada por paramilitares de Mancuso, dueño a su vez de la hacienda vecina.

Un buen administrador de fincas cuida juiciosamente los linderos. Se pasa una vaca, le corren una cerca, se agota una acequia, cualquier cosa. Y si el buen administrador de fincas es la persona que, ad portas de la Presidencia de Colombia pregunta cuánta leche ordeñó el mayordomo, es de suponer que se enterará de que dos toros medio cimarrones rompieron un alambrado y se pasaron a la propiedad de don Salvatore. ¿O no? Y si don Salvatore es un buen administrador de fincas, como parece que es ("se convirtió en ganadero después de estudiar en Bogotá", dice Newsweek, al contrario de lo que hacen los malos administradores, que se convierten en contabilistas o pilotos o gigolós después de estudiar en Bogotá), pues se entiende que entre los dos se hablen para resolver su asunto. ¿O no? Es posible que no. Pero también es posible que sí, máxime si la comunicación entre ellos es frecuente. Porque lo es. La mantienen a través del actual gobernador de Córdoba, Jesús María López Gómez, y de Eleonora Pinedo, cuya candidatura a la Cámara de Representantes apoyó el jefe paramilitar con todo su entusiasmo. Durante la campaña, las fotografías de El Meridiano de Córdoba mostraron la estrecha cercanía entre Pinedo y Uribe Vélez. Este juego de dominó no tiene pierda. Dos va con dos y cinco con cinco, y hacia cada uno de los lados hay un as que quiere ser presidente. Sólo que este dominó está pésimamente jugado. Y la mantienen también gracias a Jorge Honorio Arroyabe, diputado a la Asamblea de Córdoba, y propietario de uno de los aviones privados que utiliza el candidato en sus giras. Arroyabe es hermano de Mario Arroyabe, un exitoso hombre de negocios que le vende helicópteros a Mancuso. En marzo del año 2002 se habían dado palabra sobre la compra de tres de esos aparatos, cada uno por la suma de cinco millones de dólares. A Alvaro Uribe lo protegen veinte y más guardaespaldas. Menos en Córdoba. En su hacienda, a la que va con alguna frecuencia (la última vez en XXX), los vecinos lo ven cuando, "meditando en esas cosas de la patria" se hunde en el horizonte... solitario. Desde hace años, él mismo lo afirma, no ha visto a su vecino: "¿Conoce a 'Marulanda', a 'Gabino' o a Castaño?", le pregunta Patricia Lara en su reportaje en El Tiempo. Y él responde: "No. Mi padre llegó en 1961 a unas tierras entre Antioquia y Córdoba y hace años vi a Mancuso, cuando era un simple finquero en Montería. Pero no hablo con la guerrilla ni con las autodefensas". Sin embargo, la actividad en el filo de la navaja que Uribe desarrolla en este terreno no siempre ha pasado desapercibida. Una clara alusión a la simpatía con la que el candidato mira a los paramilitares aparece en el folio 66 de Asfades, seccional Bogotá. Allí se lee que, siendo gobernador de Antioquia, Uribe Vélez reintegró en 1997 a dos funcionarios suyos, acusados por la Fiscalía como presuntos asesinos de los estudiantes Jorge Iván Alarcón y Edgar Augusto Monsalve. El gobernador, señala el informe, se interesó personalmente por la suerte de los implicados y sostuvo de viva voz la necesidad de liberarlos. En el tomo II de Colombia nunca más - Crímenes de lesa humanidad un libro cuya publicación, en noviembre del año 2000, fue respaldada por la Unión Europea, la tarea de Uribe Vélez aparece reseñada entre las páginas 563 y 566.

En la entrevista con El Tiempo varias veces citada (21/ 04/02), el candidato desvirtúa la seriedad de la publicación. "¿Cómo explica -le pregunta el periódico- que ONG's en Europa denuncien líos de tierras entre su familia y campesinos, y lo acusen a usted de masacres de labriegos?". "¿Cómo se explica -contrapregunta el candidato sin responder- que me denunciaron por haber asesinado a sindicalistas de la gobernación de Antioquia que están vivos? ¿Por qué? El país ha tenido una diplomacia guerrillera desacreditando todo lo que se les opone. Extiendan esta investigación a las zonas campesinas, donde he intervenido. Pregunten en Maceo, Antioquia, sobre la finca de caña que mi padre y yo entregamos amigablemente a un sindicato de trabajadores en junio de 1979. Sin embargo, en Europa, con unas ONG, la guerrilla alteró tres años la fecha de la muerte de mi padre para vinculamos a una masacre por recuperar esa tierra. Pero El Tiempo no se ha distinguido jamás por su arte de la contrapregunta. De manera que lo deja salir por la tangente y se limita a plantearle otro asunto: "-El ELN quemó Guacharacas, la finca de su familia, ¿no? "- Siendo gobernador, año 85, el ELN incendió esa finca y mató al administrador. Hubo un robo masivo de semovientes. ¿Qué tuvo que hacer mi familia? Abandonarla y malvenderla. Como la guerrilla decía que yo era paramilitar, le pedí a la Fiscalía: "Por favor, investiguen. ¿Con qué resultado? Un fallo inhibitorio".

El informe patrocinado por la Unión Europea, que no es cualquier ONG, es diciente. De él ya hemos citado varios apartes. Tal vez valga la pena reproducirlo aquí en su integridad. La redacción es la original: "La represión a la organización campesina cobró entre sus primeras víctimas al sacerdote Jaime Restrepo (enero/88) y a la hermana Teresa Ramírez (febrero/89) junto con muchas personas más. Estos crímenes ejecutados por grupos paramilitares en connivencia con la Fuerza Pública serían el comienzo de una etapa en la cual se intensificarían las acciones del paramilitarismo en la región, atacando especialmente a quienes reivindicaban el derecho a la tierra, bajo el pretexto de considerarlos agentes de la insurgencia. Fue así como las agresiones se dirigieron en contra de la población campesina organizada y en especial de sus líderes. "La lucha por la tierra mantenida por los campesinos durante las décadas anteriores, en este período comenzó a tener algunos logros, al conocerse algunas resoluciones judiciales de extinción de dominio en beneficio de algunas familias campesinas integradas a esta lucha. Un ejemplo fue la finca San Antonio, del corregimiento de Cristales, en cuyo caso fueron entregados títulos de propiedad a los campesinos. La propiedad de esa hacienda pertenecía antes a Julio Vélez, al parecer familiar del ex gobernador de Antioquia Alvaro Uribe Vélez, quien fuera el mayor promotor del paramilitarismo bajo la forma de las Asociaciones Convivir. "A mediados del 93 se intensificó la acción del paramilitarismo y a partir del 95 aún más, por medio de masacres, hasta que por último estos grupos tomaron directamente el control del territorio. Lo anterior coincide con fallos, jurídicos a favor de los campesinos. "Desde 1995 aumentaron intensamente, los asesinatos selectivos y las masacres. Según un testimonio: «masacraban, se iban, hasta que a lo último ya entran es a tomar directamente el control desde la región de San Roque y los municipios aledaños, Santo Domingo, Caracoli, Cisneros, Yolombó". "El desarrollo del paramilitarismo en esta región se dio con el apoyo y patrocinio de terratenientes y de políticos de la región, quienes siempre rechazaron la organización campesina. "Un ejemplo es el caso de la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, ubicada en el municipio de San Roque, la cual se ha considerado como un epicentro de la violencia desatada contra la población. La finca ha sido objeto de acciones de la guerrilla, incluyendo el intento de secuestro de Alberto Uribe Sierra (padre de Alvaro Uribe Vélez) hecho que termina con su muerte. La finca Guacharacas, al parecer, fue prestada inicialmente para el funcionamiento de una base militar de la XIV Brigada (Batallón Palagua). Posteriormente, al

desmontarse esa base militar, continúa la acción de la insurgencia, pero se conforma allí una base de paramilitares. Según lo describe un testimonio 'Ahí hay una cuestión que entra un grupo insurgente, se toman eso, queman la finca, se llevan un ganado, y es cuando viene la represión contra el campesino en la región'. "Alvaro Uribe Vélez, quien era gobernador de Antioquia en 1995, estuvo involucrado en casos de conflicto de tierras. Su período de gobierno coincide con la arremetida paramilitar sobre la población campesina en toda esa región. Por otro lado este funcionario fomentó y apoyó abiertamente las Asociaciones Comunitarias de Seguridad, Convivir, grupos que en lugar de proteger, se constituyeron en grupos armados que respaldaron una contra-reforma agraria en beneficio de terratenientes, de narcotraficantes y del desarrollo de megaproyectos; estos grupos en lugar de contribuir a la disminución de la violencia, por el contrario aumentaron las cifras de víctimas por violación de derechos humanos, con intensa actuación de los grupos paramilitares. "Para diciembre de 1996 la gobernación reconocía la existencia de cincuenta y seis Convivir en el mismo número de municipios. Sin embargo el Instituto Popular de Capacitación (IPC), de Medellín, registraba la existencia de setenta. Esta organización armada se estableció en zonas que coincidieron con tierras que comenzaron a ser adquiridas por parte de 172 terratenientes y narcotraficantes, coincidiendo también con las principales zonas de cultivos ilegales en el departamento. "Otro aspecto que agudizó el drama de los pobladores de la región fue la declaración de los municipios de Segovia y Remedios como Zona Especial de Orden Público, decisión del gobierno departamental de Alvaro Uribe Vélez... El fin era contener la ofensiva guerrillera, pero los efectos necesariamente se revirtieron a las comunidades, restringiendo políticamente la libertad y agudizando la situación socioeconómica. Esta política contrainsurgente, mezclada con intereses particulares se tradujo en aumento de los atropellos de los militares contra la población civil y coincidentalmente en aumento de las incursiones paramilitares. Fue así como se realizó el exterminio del movimiento campesino y se presionó a la población para que se polarizara apoyando las acciones paramilitares; por consiguiente se acrecentó el fenómeno del desplazamiento de los habitantes de la región. "Otros terratenientes involucrados en conflictos por la tierra y de los que se tiene referencia, son Javier Uribe en la vereda Peñas Azules, y Guacas, de un abogado Gilberto Arbeláez; estos también figuran involucrados en conflictos de tierras recuperadas por la lucha campesina. "Las incursiones paramilitares se incrementaron a la par con la represión del Ejército hasta ir quedando la región bajo un total control militar y la misma denuncia de los crímenes se fue convirtiendo en actos heroicos de alto riesgo. En la vereda San Antonio se le dijo a la población 'ni modo de denunciar, porque nosotros venimos directamente pagados por el gobernador de Antioquia, el doctor Alvaro Uribe Vélez; nosotros somos directamente mandados por él'. "Hacia 1996 se intensificó la persecución paramilitar. Se dice que Gerardo Montoya Molina, alcalde del municipio, estimulaba a los pobladores a apoyar la conformación de grupos de seguridad privada Convivir, que en definitiva eran grupos paramilitares. Los operativos los comenzaba el Ejército, en especial grupos contraguerrilla, con patrullajes y hostigamientos periódicos; estos amenazaban a los pobladores diciendo 'no nos digan nada a nosotros; díganse a los que vienen mas atrás; esos no van a llegar a preguntarles; ellos van a llegar a darles directamente en la cabeza si no dicen nada'. Cuando se retiraba el Ejército, a los dos días llegaban los paramilitares en camionetas, en cantidad de 80 a 100 hombres armados, llevándose el ganado, quemando las casas, amenazando de muerte y cometiendo los crímenes. "De esta manera se llevó a cabo el desplazamiento de las comunidades de las veredas del municipio de San Roque, y los pocos que permanecieron, quedaron a la merced de los designios de estos grupos paramilitares. "La complicidad del Ejército ha sido tan clara, que en el corregimiento Cristales el paramilitarismo

vivía haciendo las leyes, al igual que el resto del municipio. Cristales queda a 45 minutos en carro del casco urbano de San Roque, donde el Ejército permanecía acuartelado". Al preguntarle por las denuncias de la UE, Uribe Vélez contestó: "Una lástima que se publiquen libros basados solamente en la guerrilla. Mis familiares Vélez son muchísimos pero hasta hoy no conozco uno solo que se llame Julio, con finca en Cristales y promotor de paramilitares. Mi padre, mis hermanos y yo, nunca hemos tenido conflictos de tierra; hemos sido empresarios del campo con espíritu cristiano. En junio de 1983 la FARC asesinaron a mi padre en la hacienda Guacharacas, hirieron a mi hermano y una maestra evitó el secuestro de mi hermana. En 1995, el ELN incendió la finca, asesinó al administrador y hubo un robo masivo de semovientes; mi familia la abandonó y malvendió. Por solicitud mía en 1995 la Fiscalía investigó nuestro comportamiento en la región y dictó un auto inhibitorio a mi favor. La zona de orden público de Segovia la decreté a instancias de la Fiscalía para que el Ejército evitara una nueva masacre paramilitar, Introdujo orden público pero no cercenó libertades. Las Convivir buscaron organizar a la ciudadanía para apoyar la fuerza pública y los detractores les imputaban toda suerte de delitos". Sin embargo, las masacres no se evitaron. Durante su gestión se desarrolló la llamada Operación Retorno, que provocó en el Urabá la muerte de más de un centenar de miembros de la Unión Patriótica, partido legalmente constituido que agrupaba a gentes de la izquierda democrática y a ex guerrilleros reinsertados.

En su libro Poder Capitalista y Violencia Política contra las Alternativas Populares y Democráticas en Colombia, Luis Alberto Mata contrasta esa agresión con la respuesta que le dio Uribe Vélez a El Tiempo el 3 de febrero del año 2002: "Hoy Urabá -dijo el candidato- es una zona donde hay una gran convivencia entre el empresariado y los trabajadores". Esa convivencia se logró, sin lograrse, sobre el cadáver de miles de personas. Sin que importe mucho su origen, las masacres se dieron una tras otra en una región acorralada por el terror. El 8 de agosto fue asesinado el alcalde de San Carlos. El crimen no se pudo atribuir sino a las "fuerzas oscuras", porque en la zona tenían asiento guerrilla, paramilitares, delincuencia común, e inclusive, dice la noticia publicada en El Tiempo al día siguiente, "efectivos del Ejército y de la Policía". Las autoridades locales dijeron que desconocían la existencia de grupos de seguridad privados en la zona. Y eso no es todo. Los indígenas zenúes, de Necoclí, fueron desplazados de sus regiones por "fuerzas oscuras". El 12 de agosto hubo 18 muertos en Chigorodó, a manos de "fuerzas oscuras". El 29 del mismo mes "fuerzas oscuras" mataron a diecisiete trabajadores del banano en Carepa. A raíz de la misma, el gobernador Uribe Vélez participó en Apartado en una "Semana por la Paz y la Convivencia" durante la cual un experto internacional dictó un cursillo a alcaldes, personeros, maestros y dirigentes gremiales sobre "resolución de conflictos".

Ahora bien, los conflictos no se resolvieron. Y las "fuerzas oscuras" siguieron haciendo de las suyas. El 14 de septiembre seis miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados a machete en Turbo. A raíz de ese crimen, el ministro del Interior, Horacio Serpa, y el gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe, tuvieron una diferencia fundamental. Uno y otro se reunieron en Apartado con los alcaldes de la zona para recibir las conclusiones de la Comisión Facilitadora de Actores de la Violencia. Dentro de estas figuraba, en primera línea, una según la cual "la solución negociada es la única salida para el conflicto en Urabá. Todos los esfuerzos deben dirigirse a ese objetivo". El documento añadía que "los grupos violentos deben respetar las normas del derecho internacional humanitario, en especial del Protocolo II, adicional a los convenios de Ginebra", sugería la "creación de zonas neutrales donde se proteja a los pobladores que no hacen parte del conflicto armado, y de una zona sanitaria

asistida por miembros de la Cruz Roja Internacional, para ayudar a los combatientes heridos o a la población enferma o que haya desertado", pedía la "creación de un organismo internacional de veeduría, para observar el cumplimiento o infracción del derecho internacional humanitario", e insistía en la "búsqueda de un mecanismo de acercamiento de los grupos en conflicto, con mediación de la iglesia Católica y de las Organizaciones No Gubernamentales". El ministro Serpa sostuvo entonces que "los diálogos entre autoridades regionales con guerrilleros y paramilitares constituyen una solución facilista que el gobierno nacional no respaldará porque conducirán a la convivencia, no entre los ciudadanos, sino entre los actores que están por fuera de la ley". "Hablar con los guerrilleros es fácil, -dijo el ministro-. A la vuelta de la esquina uno encuentra un contacto. Hablar con los paramilitares también es facilísimo: a la vuelta de la otra esquina se encuentra otro contacto. Pero ¿qué pasará con los jueces? ¿Y qué va a pasar con los alcaldes del futuro, quienes no van a tener la capacidad espontánea de participar en las actividades comunitarias y las órdenes llegarán en papelitos?". Para terminar, Serpa dijo que "el gobierno presentó un plan de paz a los grupos alzados en armas, a través del diálogo útil que permita instancias de reconciliación, y a las autodefensas se les han ofrecido salidas jurídicas mediante el sometimiento". Uribe Vélez no estuvo de acuerdo. Dijo que la solución estaba en los diálogos regionales. "No se trata de buscar paz y salvos ni se trata de quedar bien con la guerrilla ni con las autodefensas. El proceso para construir soluciones para llegar al diálogo regional tendría como objetivo no el convivir con los violentos, sino buscar la paz en la región sobre la base de que ellos se comprometan a observar rigurosamente la Constitución y las leyes". Sin embargo, el 20 de septiembre, a raíz de una masacre que dejó como saldo 26 muertos en la zona bananera de Urabá, el gobernador denunció ante la ONU a sólo una de las tres o cuatro partes de las "fuerzas oscuras": a las FARC. La tragedia lo movió a incrementar el pie de seguridad y a sentenciar que era "necesaria la cooperación ciudadana para la captura de los criminales y para interceptar sus mentes de abastecimiento económico y logístico". "Este crimen merece el repudio de la humanidad", dijo.

Todo crimen merece el repudio de la humanidad. Por ejemplo, el crimen de organizar a los ciudadanos para que entren masivamente en el conflicto. Desde hace algunos años, en Colombia se ha tejido una cadena, con cinco eslabones fuertemente atados: MAS, Autodefensas, Convivir, paramilitares, narcotráfico. Curiosamente, y por distintas razones, Alvaro Uribe aparece de manera sistemática cuando alguien trata de aproximarse a cualquiera de ellos. Como pariente y amigo de los Ochoa, y también como funcionario de la administración Turbay en un cargo que era esencial para el desarrollo de los propósitos del narcotráfico: el de director del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, Uribe debió enterarse de la conformación del MAS. "Muerte a secuestradores (Arrieta et. al., 1991,214) surge dentro del marco de democracia restringida que caracterizó al gobierno de Turbay y se puede definir como la búsqueda de mecanismos organizados y coordinados de control militar por parte de los narcotraficantes sobre sus intereses económicos estratégicos (su propia seguridad y la de sus propiedades), dentro de un contexto de ilegalidad. Esta estrategia les permitió crear vínculos más sólidos que los del soborno con algunos sectores de las Fuerzas Armadas debido a la coincidencia en el anticomunismo y en la ubicación de otros enemigos comunes". Es en ese terreno ambiguo entre la política y la delincuencia común donde se desenvuelven muchos procesos colectivos en Colombia. La lucha contra el comunismo, convertida en bandera desde el año de 1930, ha reunido a su alrededor a los más tenebrosos actores sociales, sin que el Estado y los estratos pudientes se den cuenta de que esos amigos tienden a convertirse con facilidad en sus peores enemigos. Así pasó con los Autodefensas, que en poco tiempo pasaron a ser organizaciones manejadas por los capos

de la mafia que ejecutaron sus peores crímenes apoyándose en sus efectivos. A su turno, las Convivir, que tuvieron -y tienen- en Uribe Vélez su principal defensor, han sido denunciadas por las asociaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos que, torpemente, tratan de desvirtuarse en el país como "brazos desarmados de la subversión internacional". A propósito de una desafortunada declaración del gobernador Uribe Vélez, Amnistía Internacional lo rectificó con energía: "El gobernador de Antioquia -escribe desde Londres Susan Lee, directora del Programa América de ese organismo- (Semana, octubre de 1996) asegura que Amnistía Internacional, en su reciente visita a Colombia, no encontró nada que objetar en cuanto a las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir)... Muy por el contrario de lo señalado por el señor Uribe Vélez, la organización considera el surgimiento de las Convivir como un hecho muy preocupante dentro del contexto de los derechos humanos en Colombia y del aumento de la actividad paramilitar, y así lo señalamos en diciembre de 1994 cuando el gobierno colombiano lanzó el Plan Integral de Seguridad Rural, que incluía la creación de las Convivir. En dicha oportunidad, Amnistía Internacional expresó su preocupación en el sentido de que dichos grupos podrían convertirse en el vehículo ideal para el crecimiento y legitimación disfrazados de los grupos paramilitares. Dichas organizaciones ofrecen a los grupos paramilitares la oportunidad de constituirse en entes legítimos; lo que crea el peligro de que continúen con su estrategia paramilitar bajo un manto legal... Amnistía Internacional teme que el resultado final de esa labor de 'vigilancia rural' no sea otra cosa que una repetición de la historia: la formación, nuevamente, de grupos de autodefensa moldeados por las fuerzas armadas para asumir un papel central en la guerra sucia. La colaboración entre los grupos paramilitares y las fuerzas armadas ha sido ampliamente documentada en casos de violaciones a los derechos humanos investigados por nuestra organización y por organismos oficiales colombianos como la Fiscalía General de la Nación. A pesar de que las autoridades aseguraron que las Convivir solo recibirían armamento 'en circunstancias excepcionales', muchas de esas asociaciones no sólo están ya fuertemente armadas sino que cuentan con armamento para uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. La declaración dada por el señor Uribe Vélez a su revista en el sentido de que 'se dotará a las Convivir con armas de largo alcance con el fin de convertirlas en grupos de reacción inmediata en apoyo de las Fuerzas Armadas', es sintomática del grado de presión que existe para convertir a dichas asociaciones en un ambiguo recurso de creación estatal, cuya forma de operar se acerca a la de los grupos paramilitares. El 'derecho legítimo a la autodefensa', preocupación genuina de la ciudadanía colombiana que vive los efectos de la violencia en el país, no puede ser confundido con la creación, fomento, apoyo y dirección de grupos paramilitares destinados a la guerra sucia: el asesinato, 'desaparición' o tortura de aquellos bajo sospecha de ser colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, los integrantes de organizaciones legales de izquierda, o aquellos que tengan la mala fortuna de constituir un impedimento ante grandes intereses económicos que recurren a la acusación de 'subversivo' para ponerle fin radical al problema. La falta de medidas efectivas por parte del Estado colombiano para garantizar la seguridad de la ciudadanía no justifica la creación de organizaciones que puedan conducir a la legitimación de la violencia paramilitar en Colombia".

En ese caldo de cultivo han proliferado las acusaciones por vínculos con paramilitarismo y narcotráfico. Uribe Vélez no se salvó de una de ellas. Cuenta Alternativa (diciembre, 1996), que el 31 de marzo de 1995, él y su hermano Santiago pidieron una investigación a la Fiscalía sobre su posible vinculación al grupo paramilitar "Los doce apóstoles", que en ese momento "estaría reactivado bajo la sombrilla de 'Autodefensas de Córdoba y Urabá'". La entidad no encontró mérito para abrirles investigación, y la justicia penal militar "dejó en

libertad, por vencimiento de términos, a oficiales y soldados que también estaban involucrados". Y sigue Alternativa: "Juan Diego y Mario Vélez Ochoa, primos del gobernador, no corrieron, sin embargo, con igual suerte. Se encuentran huyendo para eludir las órdenes de captura en su contra -correspondientes al proceso 1805 de la Dirección regional de Fiscalías-, por su supuesta participación en un grupo paramilitar conocido con el nombre de 'Grupo de Don Efraín'. Además, los organismos de derechos humanos han señalado con insistencia a la finca "Guacharacas" –propiedad de la familia Uribe Vélez en San Roque- como epicentro de la violencia desatada en el municipio. La finca ha sido objeto en varias oportunidades de acciones de la guerrilla... Algunos campesinos advierten que la finca puede dar pie a una segunda Bellacruz. El denominador común de todo esto, sobra decirlo, es el narcotráfico. Y con su enorme poder corruptor el narcotráfico puede tocarlo todo.

CAPITULO VI

Anécdotas de un trompadachín

-El 30 de octubre de 1994, Alvaro Uribe fue elegido como gobernador de Antioquia en medio de un escándalo. En el curso de pocos meses había hecho una campaña fulgurante, en la cual, como representante de la nueva política, desafió el poder omnívoto de los grandes caciques regionales, Bernardo Guerra Serna, liberal, y Fabio Valencia Cossio, conservador, pero en el momento de la elección mostró -y con creces- las mismas viejas mañas de sus rivales. A la manera del Partido Comunista, donde el secretario de Juventudes tiene por lo general más de 70 años, con sus 42 años cumplidos, Uribe era un joven que se enfrentaba a los vicios de la política tradicional. "Llamado para los más altos destinos", "senador estrella" en la pasada legislatura, "candidato a cualquier ministerio", Uribe resolvió regresar a la arena electoral y recorrió el departamento planteando alternativas. A quienes le preguntaban por qué había preferido esa opción, dejando de lado al nuevo presidente de la República, Ernesto Samper, su jefe político por muchos años, les contestaba invariablemente que el gobernador de Antioquia era un funcionario con mayor poder que cualquier ministro. Antioquia, en ese entonces, tenía un presupuesto de más de 450 mil millones de pesos, una nómina de 8 mil empleados y una sólida economía. El gobernador sería el encargado de sacar adelante a "una de las regiones más productivas -y a la vez conflictivas- del país". La campaña no había sido fácil. El apoyo del candidato a la administración conservadora de Juan Gómez Martínez y de Luis Alfredo Ramos, le había quitado el respaldo de los sectores tradicionales de su partido, agrupados en torno al viejo zorro político regional. Bernardo Guerra. Durante años, Uribe formó parte de las toldas electorales de este hombre elemental, que no hacía política sino mecánica. Como representante suyo llegó a la Jefatura de Bienes de las Empresas Públicas, a la Secretaría General del Ministerio del Trabajo, a la dirección de la Aeronáutica Civil y a la Alcaldía de Medellín. Luego lo usó como trampolín para llegar al Concejo de su ciudad y al Senado de la República. Sin embargo, en un determinado momento, cuando el "clientelismo" parecía agotarse, le dio la espalda a su mentor electoral y abrió toldo aparte. Muchos pensaron que era un suicidio. Pero no. No sólo Antioquia sino el país entero estaban hasta aquí de los caciques y de sus rifas de neveras y sus sancochos sabatinos, de manera que la propuesta de Uribe se vio como una salida. A la cabeza de "la nueva política" y de una lista disidente, Uribe obtuvo en 1985 treinta y nueve mil votos para el Concejo de Medellín. En 1990 consiguió una de las votaciones más altas para el Senado (90 mil votos), y en 1992, cuando comenzó la circunscripción nacional, logró 65 mil. Con esas cifras a su haber se convirtió en una real alternativa frente a Guerra Serna. Cuando el

Congreso fue revocado, Uribe decidió cambiar radicalmente su imagen de amigo de las triquiñuelas y de los saraos. En enero de 1991 viajó a Harvard a estudiar un postgrado. Según El Tiempo, de su paso de un año por la Universidad (regresó en enero del 92 después de estudiar administración de empresas), "le quedaron las ganas de aplicar los modelos de eficiencia del sector privado y la influencia de su maestro, Robert Fisher, eminencia gris en materia de negociación, y uno de los intermediarios en el proceso de paz salvadoreño".

Al volver al Senado lo hizo como un nuevo tecnócrata, capaz de enfrentar los grandes retos teóricos. Años después fijaría en una entrevista las condiciones ideales del congresista y del Congreso. Este último, según él, debería ser bicameral pero más pequeño, y tendría que estar integrado por personas honradas, dedicadas y estudiosas, que buscaran "profundizar el compromiso ético y moral que le recupere credibilidad" a la institución. En esa legislatura fue ponente principal de uno de los grandes proyectos de la década: la ley 100 de seguridad social. La prensa se quedó boquiabierta. ¡Qué juventud y qué capacidad las tuyas! "Ni su juventud, ni su corta estatura, ni su cara de niño, han sido impedimento para que Uribe logre lo que se propone - escribió Semana-. A pesar de lo mucho que le ha rendido hasta ahora, su carrera está lejos de terminar". Pero su tarea legislativa no fue aceptada por todos. Lo cierto es que las leyes que él defendió (la 71 de 1988, o Reforma Pensional; la 50 de 1990, o Reforma Laboral; y la 100 de 1993, o Sistema de Seguridad Social), fueron una herramienta importante dentro de la concentración financiera del capital. Con base en la ley 71, que aumentó la edad y el tiempo de jubilación de millones de colombianos, los grandes grupos económicos se apoderaron de los fondos privados de pensiones y de cesantías, que en 1995 sumaban 708 mil millones de pesos, y los convirtieron en vehículos de especulación financiera. A su turno, la ley 50 ajustó la legislación laboral al modelo neoliberal, y convirtió a los trabajadores en una mercancía sujeta a las leyes del mercado. El propósito enunciado por el ponente: activar el empleo, se derrumbó en la dura realidad. Hoy, empleo y subempleo sumados, llegan en Colombia al 52 por ciento, una de las peores cifras de América Latina. La ley 50 acabó con la estabilidad laboral de los trabajadores, eliminó el derecho de huelga en las empresas de servicios públicos, criminalizó la protesta popular, creó el empleo temporal y organizó los fondos de pensiones, que pasaron las cesantías de los trabajadores a los grandes monopolios y provocaron la quiebra del Seguro Social, un patrimonio de todos. Y, por último, la ley 100 convirtió a la salud en un negocio rentable y especulativo, que acabó con la posibilidad de que los estratos más necesitados del país tuvieran acceso a ese servicio esencial. Decenas de hospitales, algunos de ellos fundados hace más de cien años, debieron cerrar sus puertas. La cobertura de la seguridad social que se logró a través de la ley 100 fue mínima. Con la expectativa de que "algún día" se extenderá a todo el mundo, dos o tres generaciones de colombianos morirán en el inmediato futuro sin ninguna asistencia médica.

Sin embargo, Uribe salió del Congreso con una impresionante aureola de eficacia. Sus compañeros de bancada lo eligieron como "el mejor senador", y los medios lo calificaron de "senador estrella", todo lo cual le permitió aspirar a un ministerio de primera línea en el gobierno de Ernesto Samper. Desde siempre, Uribe fue uno de los más firmes aliados del cuestionado ex presidente. El 14 de febrero de 1987, cuando era apenas un senador primíparo que formaba parte del movimiento de Democratización Liberal, declaró en El Colombiano que Samper era la garantía de un rompimiento generacional. "En una reunión larga y provechosa, el Directorio del Sector Democrático adoptó la posición de apoyar la línea ideológica coordinada por el doctor Ernesto Samper Pizano. Se observa que allí existe la gran posibilidad de una ruptura generacional. La gran posibilidad de romper la fila india con

un programa de avanzada muy interesante para el país. Desde luego se están buscando con otros sectores del Liberalismo acuerdos hacia un bloque regional con miras a la Comisión Política Central". Para muchos, el samperismo de Uribe pertenece a la reserva del sumario. Pero lo cierto es que Uribe estuvo estrechamente vinculado al Poder Popular, el grupo con el que su sujeto político aspiró en 1990 a la candidatura presidencial, y con el aval de ese movimiento llegó no sólo al Concejo de Medellín sino en tres ocasiones distintas al Senado de la República. La primera, en 1986; la segunda, en 1990, mandato que fue revocado; y la tercera, después de la Asamblea Nacional Constituyente, para una corta legislatura de dos años. "Uribe Vélez, (dijo Semana en plena crisis política (15/10/96)), formó equipo con Ernesto Samper y siempre lo respaldó en las consultas liberales. Incluso cuando Luis Carlos Galán le propuso unirse a su movimiento rehusó hacerlo por lealtad con Samper. Se distanciaron, sin embargo, en la campaña presidencial de 1994, cuando el candidato se abstuvo de apoyar la Ley 100. En una manifestación en Bello fue sometido al desaire de tener que escuchar en la tarima, al lado del candidato, toda clase de críticas a su proyecto, sin que le dieran acceso al micrófono para defenderlo. Aunque no tuvo lugar un rompimiento público con su jefe, el hoy Presidente, la relación se enfrió. Ahora, durante el proceso 8.000, ha sido criticado por algunos sectores en Antioquia por su discreción en la crisis política. El se defiende, asegurando que su obligación como gobernador es obrar ante todo por el bien del departamento y eso es lo que está haciendo". Esa es la versión para el público que, como siempre, tiene visos de realidad. Pero hay algo más detrás de bambalinas. Cuando las sesiones del Congreso de 1994 estaban por terminar, Samper, en ese momento presidente electo, le insinuó que le gustaría sancionar la ley de Seguridad Social, en la que su grupo había trabajado con dedicación y entusiasmo. Pero el ponente, Uribe, se negó a dilatar los debates de tal manera que la discusión final sólo pudiera darse en el siguiente período. La ley fue sancionada con premura por César Gaviria, antagonista de Samper, sin pensar que a la larga se convertiría en uno de sus grandes lastres políticos. Ernesto Samper siempre tuvo a Uribe como uno de sus más fieles amigos. Como lo dice Semana, a lo largo del proceso 8.000, que estuvo a punto de acabar con el régimen y con el país, Uribe lo acompañó sin sombra de duda. En las visitas que el mandatario hizo a Antioquia, se les vio siempre juntos, como partícipes de un mismo proyecto. Claro está que Horacio Serpa, el ministro del Interior, estuvo aún más cerca por razón de su cargo. Pero el prestigioso gobernador de Antioquia no le negó nunca su concurso, y sustentó siempre, en público y en privado, la ortodoxa versión samperista sobre la honestidad con que se habían manejado los asuntos financieros. De esa manera, Uribe Vélez, quien había recibido el apoyo económico de César Villegas y de otros individuos de similar y peor catadura, no planteó jamás ninguna duda en torno a la presencia de dineros calientes en la política. Por eso, tal vez, Uribe se sintió a gusto como el intérprete de la política del régimen en Antioquia y respaldó con entusiasmo las directrices sobre seguridad que dio Fernando Botero, en ese entonces ministro de Defensa. Botero fue el autor intelectual de la segunda y definitiva etapa de las Convivir, y Uribe Vélez su ejecutor y más decidido partidario. Esa comunión de intereses no se rompió siquiera después de que Botero resultó gravemente implicado en el ingreso de dineros de la mafia a la campaña. Aunque la justicia demostró que los fondos del cartel de Cali que él decía haber solicitado por intermedio de Santiago Medina, su testaferro, con destino a la aspiración presidencial de Samper, se habían desviado hacia sus cuentas personales en el exterior, Uribe siguió viéndolo como su mentor y amigo. Tanto así que Botero trató de actuar como su asesor en temas cruciales de la campaña, e inclusive se reunió con él durante la reciente visita que hizo el candidato a Ciudad de México en donde vive el ex ministro. Si Uribe triunfa en carrera presidencial, es posible que la reivindicación de Botero, en veremos por nuevos y complejos procesos judiciales, llegue en un determinado momento a ser completa. Así, la hipotética

sucesión de Uribe en el 2006 como presidente de la República, tendría tres competidores liberales: Fernando Botero Zea, libre ya de toda atadura penal, Enrique Peñalosa Londoño y Juan Manuel Santos Calderón. Claro está que todos estos cálculos a la postre resultan ridículos. En febrero de 1997, Semana veía el proceso electoral bajo una óptica muy particular: la de su feroz antisamperismo. Leer el artículo es hoy, apenas cinco años después, una curiosidad arqueológica. "En la actualidad -decía- hay seis precandidatos liberales: Horacio Serpa, Alfonso Valdivieso, y Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, Alvaro Uribe Vélez y Vargas Lleras. De estos, solamente tres están contemplando la posibilidad de participar en la consulta popular: Horacio Serpa, Juan Manuel Santos y Alvaro Uribe Vélez. Los otros la descartan... Como este (Serpa) despierta muchas resistencias, las fuerzas antiserpistas aglutinadas alrededor de un antiserpa le garantizan a cualquier candidato una votación muy respetable y un puesto fijo en la fila india del partido para el 2002... Alvaro Uribe, quien está a punto de retirarse de la gobernación de Antioquia, se le medirá a la consulta popular... Según una encuesta realizada por Semana, el mano a mano Horacio Serpa-Alvaro Uribe arrojaría hoy un resultado de 56 a 27 por ciento a favor de Serpa... quien aparece en la encuesta con un 37,7 por ciento en el primer lugar. Lo sigue, muy lejos, un pelotón de cuatro integrado en su orden por Andrés Pastrana con 13,5 por ciento, Noemí Sanín con 12,9 por ciento, Alfonso Valdivieso con 11,8 por ciento y Juan Manuel Santos con 10,1 por ciento. Rezagados en otro pelotón aparecen más tarde Humberto de la Calle con 5,4 por ciento y Carlos Lleras con 4,6 por ciento. La conclusión de lo anterior es que Serpa prácticamente triplica a quien le sigue, que es Andrés Pastrana... Los cuatro nombres que lo siguen tienen cifras tan cercanas los unos a los otros que el margen de error no permite llegar a conclusiones definitivas sobre quién llegará a la segunda vuelta a la par con Serpa. Horacio Serpa tendría 51 por ciento contra 26 por ciento de Pastrana. Si algo han demostrado las encuestas en los últimos dos años es que todo puede cambiar de un momento a otro y que nada está definido a estas alturas. Al iniciarse el gobierno la camiseta amarilla la tenía Noemí Sanín, posteriormente el portador fue Antanas Mockus. Hasta hace poco era Alfonso Valdivieso y en este momento parece ser Horacio Serpa". Horacio Serpa, el más vigoroso defensor de Samper, corrió desde siempre con el sambenito de haber sido su escudero, término que, en los círculos de sus malquerientes, se lee como "cómplice".

Sin embargo, Uribe Vélez no estuvo mucho más lejos de todo ese tejemaneje. Si el poderoso gobernador de Antioquia hubiera dicho una sola palabra en contra del mandatario, es posible que la Presidencia de Samper se hubiera derrumbado. Pero él prefirió guardar discreto silencio, un silencio que convirtió en apoyo efectivo, y que mostró con lealtad cuando, en 1998, al terminar su gestión, fue el director de la campaña de Serpa. Ese gesto: regresar desde Oxford para vincularse a una aventura incierta, le valió el agradecimiento de los círculos cercanos al gobierno. Samper considera que, con Uribe en la Casa de Nariño, la política económica que él puso en marcha, destrozada por Pastrana y su equipo, volverá por sus fueros. Aunque Serpa se aproxima más a sus tesis sociales, Uribe participa de su visión de la economía. De manera que no le es indiferente un eventual triunfo de su discípulo. Como se dice coloquialmente en Colombia, gane quien gane, Samper cae parado. Pero toda esta historia menuda tiene antecedentes. En la Alcaldía de Medellín, en el Senado, en la Gobernación de Antioquia. En la Alcaldía, donde a raíz del escándalo del viaje en el helicóptero de la mafia, duró apenas cuatro meses, Uribe se mostró como un intérprete local de las grandes políticas del gobierno, saltándose a la bartola al gobernador Alvaro Villegas Moreno. En el informe que presentó el 14 de diciembre al Concejo de la ciudad, pocos días antes de su renuncia, Uribe señaló que en Medellín él había "creado instrumentos de apoyo

a los programas del gobierno nacional". Punto por punto habló de su programa de casas sin cuota inicial ("la administración entregará en los próximos días las primeras casas sin cuota inicial construidas por Corvide"), de su reforma tributaria de bolsillo ("pasamos de 22 mil a 40 mil matriculados en industria y comercio"), de la descentralización ("solicitud de cesión de derechos de peaje, estudio de nuevos esquemas financieros para grandes y pequeñas obras: el metro, el túnel Medellín-Rionegro, la vivienda popular, todo ello utilizando la valorización, el crédito a los contratistas y la financiación- concesión"), de la salud ("anteproyecto que autoriza la creación del servicio seccional metropolitano"), pero sobre todo de la seguridad ("acciones concretas contra los malhechores, que... deberán revivir la tan ansiada sensación de tranquilidad"). "Metro Seguridad -añadió el alcalde- como ente oficial que es, se opone a los excesos antidemocráticos de la seguridad privada, y ha nacido con rentas propias y con normas sui géneris que aseguran la participación voluntaria de los ciudadanos y el funcionamiento institucional desburocratizado". Y como conclusión, un apunte que pasó desapercibido en ese momento pero que, con el tiempo, adquirió toda su dramática perspectiva: "Advierten ustedes, honorables concejales, que hay un equipo de colaboradores relativamente jóvenes, intelectualmente independientes, con cuya llegada se ha querido interpretar el sentimiento de propiciar que valores escépticos y lejanos se alisten a servirle a la patria en misiones delicadas y complejas, en nombre del cual les expreso nuestra profunda gratitud". Seguridad, participación voluntaria de los ciudadanos, obras faraónicas (el metro, el túnel), reformas tributarias de bolsillo..., la posible presidencia de Uribe Vélez sale de esa remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En otras palabras, de la Alcaldía en la que él presidió un equipo que se alistó para servirle a la patria en misiones delicadas y complejas. Sin importar que, prácticamente a la salida del Concejo, el funcionario se embarcara donde se embarcó, y pretendiera embarcarnos a los demás en semejante paseo. En su informe al Concejo, Uribe se ve como es: quisquilloso y levemente falaz. En verdad, si alguien hubiera leído sus palabras en ese momento se hubiera preguntado cómo un funcionario impuesto por un dudoso cheque de su padre a favor de la campaña presidencial de Belisario Betancur, que resultó triunfador, y por Bernardo Guerra Sema, podía encabezar un equipo de jóvenes "intelectualmente independientes". Pero, al igual que el papel, los oídos de los políticos lo aguantan todo. Y máxime si el funcionario se presentaba a sí mismo como el intérprete de una profunda forma de ser colectiva, la de los paisas, tan cara al temperamento de la región más conservadora de Colombia.

"Experto en dos artes que parecen opuestas –escribe Patricia Lara en El Tiempo—', manzanillismo y retención de estadísticas, Uribe, que es mal bailarín y carece de sentido del humor, ama la poesía y el vallenato. Como buen paisa, se precia de ser madrugador, honrado, trabajador, cumplidor de su palabra y más querendón que expresivo. Dice que si es Presidente, impregnará su mandato con esos valores antioqueños. Pero como tantos paisas, comenzando por su padre, es brioso y, a la brava, se vuelve difícil. Tanto que, por ejemplo, es famoso el encontrón que tuvo con Fabio Valencia Cossio el día que lo eligieron gobernador cuando, al verlo en la silla del Registrador en medio de un conteo de votos reñido, creyó que estaba influyendo en su contra y lo golpeó con los puños". Parece ser que a Uribe le dan de cuando en vez algunos ataques de mala memoria. Porque la historia no es exactamente como se la cuenta a la periodista. Candidato de los sectores más diversos (lo apoyaron William Jaramillo, Piedad Córdoba, Luis Guillermo Vélez, Omar Flórez, algunos políticos de la Nueva Fuerza Democrática, otros del Movimiento de Salvación Nacional y unos más de la Anapo), se enfrentó rudamente desde un comienzo al liberalismo oficialista, que apoyó a Jaime Henríquez, un político gris pero con un alto número de electores. El día de su inscripción -contó la prensa- lo hizo bajo una tremenda "silbatina de líderes obreros

que acompañaban a otro candidato". Se enfrentó también a "la poderosa máquina electoral del senador conservador Fabio Valencia Cossio", quien apoyó a Alfonso Núñez Lapeira. El programa de Uribe parecía una colcha de retazos. Ofreció sentar las bases para una pacificación social, habló de un gobierno suprapartidista y recalcó la necesidad de defender la unidad antioqueña, y en una enumeración exhaustiva dijo que trabajaría por el Programa Alcaldía- Excelencia, la descentralización administrativa y fiscal de la educación, un Icfes de evaluación regional, la aplicación del nuevo sistema de seguridad social, la salud para los sectores más pobres, la construcción de hospitales públicos, el plan vial de apertura y la terminación de las vías iniciadas, el Tapón del Darién, las carreteras estratégicas, la navegación por el río Magdalena, los bosques y recursos hídricos, la defensa de la biodiversidad de la zona limítrofe con el Chocó, un plan de desarrollo forestal, servicios públicos capitalizados con acciones del sector privado, tarifas más favorables, teléfonos y electrificación rurales, masificación del gas, banco de agua, publicación de todas las compras hechas por los municipios, compra de un millón de hectáreas prometidas por el presidente Samper, construcción del puerto de Urabá y del Centro de Convenciones de Oriente, sesenta mil subsidios de vivienda a través del Inurbe, defensa del monopolio departamental de licores, liberación de su comercio, y fomento al empleo productivo. Pero donde hizo énfasis fue en su programa bandera: la seguridad. "Conseguir la paz es una tarea prioritaria de cualquier gobierno, como ingrediente para el desarrollo. Los mandatarios seccionales también pueden crear condiciones para la distensión. El problema de la seguridad ciudadana puede combatirse con las siguientes estrategias: desarrollar una pedagogía de la tolerancia; propiciar el liderazgo democrático con amplia participación popular y con programas específicos de reinserción; diálogos regionales de paz, serios, sin retórica ni propaganda; el gobernador debe ser coordinador eficaz, de las demás autoridades encargadas de la autoridad ciudadana; rescate del menor infractor a través de propuestas al Ministerio de Justicia y apoyo a comisarías de familia y programas de Libertad Asistida". En una palabra, recalcó, "ejercicio de la autoridad, sin autoritarismos".

Pues bien. Llegó el domingo 30 de octubre, día que El Colombiano llamó "de las cuentas claras y el chocolate espeso". Los resultados fueron inciertos. El 31 de octubre, el jefe conservador Fabio Valencia Cossio, hermano del gobernador Ramiro Valencia Cossio, y pariente de buena parte de la nómina departamental, pidió una investigación al Consejo Electoral, para que esclareciera "lo ocurrido la noche del domingo en el Centro de Cómputo Electoral de las Empresas Públicas de Medellín, por la presencia de personas ajenas a la Registraduría". De acuerdo con la información de El Colombiano, Valencia Cossio, afirmó que hubo un "súbito cambio de los resultados electorales en el departamento", que hasta las ocho de la noche daban como ganador a su candidato, Alfonso Núñez Lapeira. "Un hecho sin precedentes en el departamento es la declaratoria de nulidad de 132.295 votos", dijo Valencia. Y añadió: "En las elecciones de 1991, en las que se presentaron siete candidatos, hubo 7.297 votos nulos, el 1.2 por ciento del total, mientras que el porcentaje de este año alcanzó a ser del 16.82 por ciento de la votación, incremento que equivale al 1.726,7 por ciento, con cuatro candidatos en el tarjetón". En su denuncia, Valencia afirmó que "la recepción y procesamiento de datos tenía que estar confiada exclusivamente a funcionarios de la Registraduría Departamental del Estado Civil y no en un emisario del también candidato a la Gobernación de Antioquia, doctor Alvaro Uribe Vélez. Se trata del senador Mario Uribe Escobar quien desde las 8:00 p.m. del día 30 de octubre estuvo recibiendo personalmente dicha información electoral, en abierta violación de la ley y en flagrante desatención de la imparcialidad que debe signar todo el proceso electoral. Tal circunstancia la pude constatar personalmente al hacer presencia en el lugar (10:00 p.m.), sin que autoridad electoral alguna

me explicara a satisfacción las razones por las cuales se le permitió al senador Uribe Escobar el acceso directo a la información, como único dirigente político en el lugar y sin la debida acreditación electoral. Ante tal evidencia, dejé verbal y enérgica constancia ante los procuradores delegados... que no pude formalizar por las agresiones de hecho y de palabra de que fui víctima por parte del candidato Alvaro Uribe Vélez. "De los hechos en mención, fueron testigos presenciales el señor procurador regional, doctor Fernando González Carrizosa, los procuradores delegados, el general Luis Ernesto Gilibert Vargas, comandante de la Policía Metropolitana, los señores José Ochoa Restrepo, Héctor Arango Moral, delegados del registrador nacional del Estado Civil, y el señor Hernán González Vásquez Jefe de la División de Desarrollo Informático de las Empresas Públicas de Medellín. "En consecuencia, el Movimiento Antioquia Unida no reconoce el triunfo unilateralmente declarado por el doctor Alvaro Uribe Vélez, y ejercerá inmediatamente los recursos y acciones legales pertinentes". El senador Mario Uribe, luego de rechazar las acusaciones, aportó un nuevo dato: "Luego del incidente protagonizado por el doctor Fabio Valencia Cossio, irrumpió en la Registraduría su hermano, el doctor Ramiro Valencia Cossio, gobernador de Antioquia, quien enterado de los acontecimientos recomendó a aquel su retiro inmediato... Rechazo, por faltar a la verdad, las aseveraciones del doctor Fabio Valencia Cossio. Por supuesto, en su momento aportaré las pruebas pertinentes". Pero no llegaron las pruebas. Lo que llegó fue un resultado apretadísimo, que provocó una catarata de reclamaciones ante el Consejo Electoral: 290. Según el último escrutinio departamental, la ventaja de Uribe Vélez sobre Núñez Lapeira fue de 894 votos. El 9 de noviembre el registrador nacional del Estado Civil manifestó a Colprensa que se trataba de "una pelea de grandes señores que no han debido hacer tan bochornoso espectáculo. En el Centro de Cómputo, donde se cumple una función técnica, hay auditores de los partidos, pero no puede entrar cualquier político gritón por muy importante que sea". El político gritón Uribe Vélez concedió entonces una rueda de prensa. "Lo más importante es que en el futuro se garantice la pureza del sufragio -dijo-. Haré realidad mi lema de 'un poquito de poder para todos' e impondré una época de transparencia democrática". Y sin tiempo para pensar que la polémica era con el conservatismo y no con sus copartidarios, remató: "invito al liberalismo antioqueño a dirimir las controversias mediante procesos democráticos".

La situación parece calcada de lo que se vive hoy en día. Prensa amiga, lema desabrido, palabras solemnes, respuestas elusivas. Sobre el incidente, Uribe dijo que su campaña, que tenía dos delegados en el Centro de Cómputo, recibió la noticia de que allí se encontraba el senador Valencia Cossio. Reconoció entonces que se trasladó al lugar y lo agredió verbalmente. "Le ofrezco excusas al pueblo antioqueño, no a Fabio Valencia. Yo no voy a aparecer como muchos políticos negando las fallas en que incurrimos y, parodiando a José Ortega y Gasset, debemos dejar de ser tolerantes cuando se trata de cumplir los principios y la decencia". Según Uribe Vélez, cuando todos salieron se enteró de que el gobernador del Departamento, Ramiro Valencia Cossio, había llamado al registrador a cuestionar una diferencia matemática entre los datos suministrados por el órgano electoral y unos cálculos que poseía la Gobernación. "Yo expresé mi tesis de que ninguna de las ramas del poder público tiene injerencia en otras -dijo Uribe-, e hice la denuncia pública y ante las autoridades competentes". Y remató: "Prefiero manejar las nuevas situaciones con prudencia y de cara al futuro. Soy un combatiente de la democracia, pero ajeno a los rencores. No soy hombre de odios. Tenemos lealtades con el pasado pero son muy superiores nuestras esperanzas con el futuro". Entonces el gobernador terció en el asunto y explicó: "Desde las 6:20 p.m. del domingo, empezaron a demorarse los datos de los resultados de las votaciones para gobernador en el departamento. Hacia las 7:15 de la noche recibí una llamada del senador

Fabio Valencia, quien me preguntaba por las demoras de los boletines. Yo le contesté que tampoco teníamos nada. Poco después recibí otra llamada de mi hermano, quien me dijo que, como gobernador, debía establecer por qué estaba el senador Mario Uribe, de la campaña de Alvaro Uribe en el centro de cómputo. Me comuniqué con el delegado de la registraduría, Héctor Arango, a quien puse al corriente de los hechos y le dije que si se dejaba entrar a uno, tenía que dejar entrar a los representantes de todos los movimientos políticos. "Poco después recibí una llamada en mi despacho. Un escolta de la Policía me previno sobre la posibilidad de un problema de orden público en el Centro de Cómputo donde el senador Fabio Valencia era acorralado en ese momento. Me dirigí allí de inmediato. Cuando llegue, encontré a diez o doce dirigentes liberales muy agresivos. Les dije que me dejaran manejar la situación y les aseguré que solucionaría el problema. Yo prefiero no decir lo que pasó a la entrada, porque eso debe estar grabado por los camarógrafos. En el séptimo piso del edificio, donde funciona el Centro de Cómputo, encontré, entre otros, al candidato Alvaro Uribe Vélez y al senador Mario Uribe. "Me acerqué al doctor Alvaro Uribe, el no me aceptó el saludo de mano. Seguí con la mano tendida y el doctor Uribe fue muy duro conmigo. No obstante conservé la tranquilidad y le dije que moderáramos el tono, que arregláramos la situación. Él me dijo que yo no era imparcial. Le contesté que si yo no era imparcial había otras instancias y agregué que manejáramos las cosas con calma. Me dijo que no. Le dije que a lo mejor él sería mañana el gobernador y que situaciones como esas había que manejarlas con tranquilidad. Me contestó que no le diera lecciones y que él me las iba a dar cuando fuera gobernador. Yo le dije que estaba bien, que yo las aceptaría porque sé que me he equivocado muchas veces. Preferí dirigirme al senador Mario Uribe quien se hallaba más tranquilo y le propuse arreglar la situación para evitar que todo lo que había marchado bien, se fuera a dañar. El senador Uribe me propuso una solución: que el senador Fabio Valencia no deje ninguna constancia -yo no había visto a Fabio- y todos nos vamos. Yo le dije que no había ningún problema. "El senador Valencia aceptó la propuesta. A la salida del Centro de Cómputo el senador Mario Uribe me manifestó que no había recibido información sobre los resultados, y yo me mostré dispuesto a proporcionársela. Yo le fui dando toda la información a la campaña de Alvaro Uribe a través de Mario. "En eso salieron las declaraciones del doctor Alvaro Uribe, violentas, contra mí. En ese instante me llamó el ministro, Horacio Serpa. Yo le conté toda la historia y le dije que no entendía cómo, después de la solución, el doctor Uribe insistía nuevamente en el problema. Después aclaré el asunto con el senador Mario Uribe. A mí me parece que fue una información mal intencionada que le dieron al doctor Alvaro y, digamos, él reaccionó de esa manera al hablar con Caracol". Sin el compromiso regional de El Colombiano, El Tiempo informó el 6 de noviembre que "una serie de hechos ocurridos en el sitio donde se contabilizaba la votación, que fueron desde la agresión verbal hasta casi la agresión física, tienen la elección (del gobernador de Antioquia) en manos del Tribunal Nacional de Garantías, de la Procuraduría Regional y del Consejo Nacional Electoral". Luego, el relato es sustancialmente idéntico. Pero, ya al final, añade algunos elementos significativos: "Tan pronto se vieron Uribe Vélez y Valencia Cossio la discusión se calentó aún más. Uribe fue 'especialmente agresivo' según reconocen todas las partes. Hubo incluso intercambio de frases de grueso calibre. Entre comitiva y comitiva, el salón se había llenado de personas. Entre ellos estaba el comandante de la policía metropolitana, Luis Ernesto Gilihert, quien se interpuso entre los dos cuando la situación ya iba para gorpiza segura. Finalmente todos abandonaron el salón dejando un delegado de cada campaña". Pero párrafos más adelante el periódico trae una pequeña anécdota que ha pasado desapercibida por completo. En efecto, cuando la senadora Piedad Córdoba, con el respaldo de la Dirección Liberal, acusó al alcalde electo, Sergio Naranjo, por enriquecimiento ilícito y por haber mantenido vínculos con Pablo Escobar, Bernardo Guerra Serna, Alvaro

Uribe, Mario Uribe Escobar y Omar Flórez "cerraron filas en tomo al funcionario" y se negaron a aceptar la orden de no colaborar en su gobierno. "Sin pruebas no se puede acusar", dijeron ellos. Naranjo anunció que demandaría a la parlamentaria ante la Corte Suprema de Justicia. Ante esos episodios en que se ve claro que es verdad aquello de "pueblo pequeño, infierno grande", muchos se preguntarían ahora, si sería igualmente válida una sentencia que dijera "infierno pequeño, pueblo grande".

Así pues, estamos ante un trompadachín. Ediciones MacMillan publicó a finales del siglo pasado un libro sobre Pablo Escobar, titulado *Whitewash*. En él su autor, el investigador inglés Simón Strong, describe un encuentro con Uribe Vélez, que Alternativa resume de la siguiente manera: "(...) Me encontré con Uribe Vélez en el sótano-comedor de un hotel de Bogotá en marzo de 1994 para discutir sobre política y tráfico de drogas. En ese entonces era senador. Uno de los congresistas que acababa de ser elegido bajo su tutela política era William Vélez, quien había sido uno de los primeros políticos aliados de Escobar en Envigado (...) \ Cuando mencioné la conexión con Vélez, el encanto juvenil y a veces superior de este señor se evaporó junto con la sonrisa. (...) Después de que aparentemente se había calmado un poco le pregunté sobre su jefatura en la Aeronáutica Civil. Eso fue todo. El hombre pequeño saltó con furia (...) corrió hacia las escaleras a través del lobby y no se detuvo hasta escapar en los brazos de sus guardaespaldas que habían parqueado afuera de la terraza. Luego, pensando mejor acerca de abandonar una entrevista grabada de esa manera y rodeado por sus guardaespaldas con el fin de apoyarlo e intimidarme, insistió en que continuáramos. "Yo soy honesto", repetía sin cesar. Yo nunca había sugerido otra cosa (...) Uribe Vélez, al cual le fue permitido entrar a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Harvard, era un fuerte contendiente para la Gobernación de Antioquia en 1994, conectado muy de cerca con Ernesto Samper, y estaba esperanzado en ser el candidato liberal a la Presidencia en 1998 o en el 2002".

Pero el caso más inmediato de la intemperancia y quisquillosidad del candidato es el de *Newsweek*. Joseph Contreras, corresponsal de la revista en el Caribe y Suramérica, narra así ese encuentro: "Todo comenzó con una llamada. O lo que Luis Plata llamaría un voice mail. "Cuando volví a Miami de un viaje a Costa Rica, el sábado, 2 de marzo, pasé por mi oficina y encontré un mensaje interesante en el contestador. La persona se identificó como Luis Plata, y en un inglés absolutamente perfecto se presentó como el "executive director" de la campaña Uribe 2002. Me contó que él había conseguido mi nombre a través de un ejecutivo de la edición internacional de *Newsweek*, y quería averiguar si yo tendría algún interés en entrevistar al candidato presidencial. Llamé al señor Plata a su celular inmediatamente, y después de un intercambio de llamadas se fijó la cita para el martes, 12 de marzo. "Viajé a Bogotá el domingo 10. Hacía casi diez meses que no había trabajado en Colombia, y a partir del colapso del proceso de paz el 20 de febrero, empecé a hablar con mis editores sobre Uribe y les propuse publicar un perfil del candidato con dos meses de anticipación a los comicios de fines de mayo, ya que todos mis contactos y colegas colombianos apostaban al ex gobernador paisa como el próximo presidente de la República. "Por lo tanto la llamada de Plata me vino como maná caído del cielo. Según él, Uribe había concedido una sola entrevista a la prensa norteamericana, concretamente a Andrew Seisky, de la agencia *The Associated Press*, antes del fracaso de los esfuerzos de Andrés Pastrana en búsqueda de un tratado de paz con las FARC. "Ya me habían hablado del mal genio del veterano político, de su prepotente trato con las secretarías, los asesores y otras personas que dependían de él, de su rechazo a preguntas que tocaran el tema de sus nexos con paramilitares y narcotraficantes. Pero una cena con su "executive director" en la víspera de la

entrevista alteró un poco mis expectativas. Resulta que Luis Plata es un yuppie de pura cepa, egresado de la Harvard Business School, que abandonó su carrera diplomática para hacerse una pequeña fortuna durante el apogeo de la revolución dot.com. Disfrutamos una comida placentera en una trattoria en plena zona norte. Plata se mostró como un hombre cosmopolita de 38 años, que había vivido en el Lejano Oriente y tenía entre sus antepasados a don Pepe Sierra. "Pensé para mis adentros: "-Bueno, si Uribe ha nombrado a una persona tan culta y cortés en un puesto importante dentro de su estado mayor, eso habla bien del hombre de la mano firme y el corazón grande. "Al día siguiente llegué al Hotel Dan Cariton a las seis y media de la tarde, acompañado por el fotógrafo italiano Piero Pomponi. Mientras esperábamos a Plata en el lobby, Pomponi me señaló al presidenciable, que estaba parado frente a los ascensores. Me sorprendió bastante su aspecto físico: en lugar de encontrarme con un hombre robusto de 1.83 metros y unos 90 kilos como lo imaginaba, vi a un señorito flaquito y bajo que llevaba gafas y que recordaba a un maestro de matemáticas, que tuve como estudiante de preparatoria. A media distancia, el supuestamente temible candidato no poseía ni la más mínima presencia o carisma. Si me lo hubiera encontrado por la calle sin su acostumbrada falange de escoltas, dudo que me hubiera fijado en la figura del famoso Alvaro Uribe Vélez. "Una media hora más tarde subimos con Plata a la suite presidencial del Dan Cariton. Allí se encontraban un par de señoras, cuyos nombres no recuerdo, y el "campaign manager" de Uribe, Fabio Echeverri Correa, un empresario de Medellín que se ha convertido en el brazo derecho del puntero presidencial. Un rato después se presentó el ex director del canal CM&, Ricardo Galán, pero a pesar de ser supuestamente el director de Comunicaciones de la campaña, se retiró muy pronto. "Quince minutos después apareció el doctor Uribe. Llevaba puesta su vestidura clásica: camisa blanca de mangas largas, pantalones grises y una corbata roja. Recibió con una gran sonrisa un libro sobre el Mossad que el fotógrafo Pomponi le regaló. Al principio, le hice unas preguntas obvias y predecibles en cuanto a su estrategia para combatir el narcotráfico y la guerrilla, la postura que asumiría frente a los paramilitares, y la eventual llegada de tropas norteamericanas. La onda estuvo buena durante los primeros veinte minutos, y el candidato llegó al punto de invitarme a su departamento natal para comer "unos frijolititos" con su familia. "Pero en pocos segundos el ambiente comenzó a pudrirse. No le gustaron para nada mis preguntas sobre los antecedentes dudosos de algunos allegados y patrocinadores suyos, como el empresario antioqueño Pedro Juan Moreno y el senador Fuad Char. Pero estalló por primera vez cuando toqué la figura de su hermano Santiago y su oficio de criador de reses bravas. "-Digamos si -le pregunté- ¿su hermano Santiago mantiene relaciones sociales con los hermanos Ochoa, ya que esa familia también tiene un negocio de crianza de reses bravas? "-No, no me mezcle, ¡eso no se lo acepto ni como pregunta! -gritó un indignado Uribe que comenzó a señalarme amenazadoramente con el índice-. ¡Los socios de mi hermano Santiago son totalmente honorables! ¡No acepto eso! "La calma volvió por un plazo breve, pero el candidato se enojó de nuevo cuando le hablé de una supuesta campaña de intimidación contra periodistas que lo habían criticado en sus columnas y reportajes. La furia del político me asombró: nunca en los 22 años que llevo como corresponsal de Newsweek me había encontrado con un tipo tan explosivo y volcánico como él. "-Usted vino aquí para hacer fábula de mi carrera como político -dijo el candidato-. No acepto estas preguntas. Los periodistas siempre me han insultado. No acepto que la prensa internacional venga para repetir estas calumnias en mi contra. No tenemos nada más que conversar. "Traté de cambiar el ambiente con preguntas sobre sus estadías en las universidades de Harvard y Oxford, pero el furioso candidato las rechazaba, diciéndome que no tenía ningún interés en tratar esos temas. Por fin el señor Echeverri Correa declaró que la entrevista había terminado. Me levanté para dar la mano a Uribe y a sus asesores y despedirme. Noté en ese

momento que Plata estaba intensamente pálido. Cuando extendí mi mano derecha hacia el candidato, él se negó a tomarla. Y antes de irnos, Uribe le devolvió repentinamente su regalo a Pomponi, explicándole que no tenía tiempo en estos días para leer esos libros. "Así terminó mi encuentro con Alvaro Uribe Vélez.

Propenso a la cólera. Patricia Lara lo interroga (El Tiempo, 21/04/02): "-Sus colaboradores dicen que usted 'se ofusca muy feo'. "-Soy muy exigente, muy acosón y me exijo a mí mismo. "-Al no contestar preguntas agresivas, da la impresión de que teme salirse de casillas. ¿Se tiene miedo a sí mismo? "-Siempre he hecho esfuerzos para controlarme. Uno es humano y las reacciones no pueden dejarse desbocar como caballo sin rienda. He procurado tener rienda. "-¿Y si se suelta la rienda? "-Grave. Se desboca el caballo, y un caballo desbocado no se sabe dónde va a caer, se tira por un precipicio o le hace daño a alguien". Del cruce de hechos y de respuestas, se pueden inferir algunas sencillas conclusiones. Trata de controlarse pero, según parece, le queda bastante difícil. Si se le suelta la rienda, como se le soltó en esas tres oportunidades, se puede tirar por el precipicio o hacerle daño a alguien. En esos rasgos hay un cierto perfil psiquiátrico. "-¿Es de extrema derecha? -le pregunta Lara. -No soy de extrema derecha ni de derecha. Soy un demócrata que cree en la autoridad. Participo de los objetivos de la socialdemocracia: crear empleo productivo, profundizar la descentralización y avanzar en la seguridad social. Soy amigo de la intervención del Estado, no para obstruir, sino para garantizar equidad. Por eso, y porque no acepto importaciones desbocadas que arruinen nuestros sectores productivos, rechazo el neoliberalismo. Creo en el Estado comunitario, con creciente participación ciudadana". Y luego, la pregunta obligada: "-¿No teme ser elegido como resultado de la rabia del país? "-Insistiremos -dice él- en una pedagogía del ejercicio sereno de la autoridad". Para añadir más adelante: "-Voy a disuadir a los violentos. Tengo una propuesta de seguridad democrática para proteger a todo el mundo: al líder sindical, al periodista, al maestro, al de izquierda, al de derecha. El país necesita recuperar la autoridad, no cambiar de bando. Mi política de seguridad será tan firme para disuadir a los violentos como comprometida para restablecer los derechos humanos". Al confrontar las dos situaciones, la real que lo enfrenta súbitamente con cualquier interlocutor, y la ideal que plantea la necesidad de disuadir a los violentos, la pregunta que cualquiera podría formularse es: ¿Podrá Uribe disuadirse a sí mismo?

Sus ejecutorias en la Gobernación de Antioquia no fueron otras que las de un energúmeno. Llegó a ese cargo nimbado por la gloria. Cuando apenas completaba la mitad de su mandato, Semana le hizo un perfil elogioso: "Lo primero que llama la atención sobre Alvaro Uribe Vélez es su cara de niño. Teniendo en cuenta la imagen que está proyectando como un hombre de mano dura, su apariencia física es un gran contraste. Detrás de sus modales de muchacho bien educado hay un hombre de mucho talento, una disciplina férrea y grandes ambiciones. En estos momentos en que los colombianos son pesimistas y no creen prácticamente en nada, él es exactamente lo contrario. Irradia un gran optimismo y tiene profundas convicciones, que contagia automáticamente a sus interlocutores. Es un hombre que siempre habla en serio. 'Trascendental' sería la palabra más adecuada para describirlo. Él mismo se autodefine como 'cansón', por su indiferencia a la frivolidad y el chisme. Pero si bien puede no ser la persona más entretenida para tener en una fiesta, su seriedad impresiona. Tiene una cultura muy poco común para estas épocas. Es un poeta frustrado y un experto en folclor antioqueño. Es un gran estudioso y conocedor de la historia colombiana y diserta sobre el tema como una versión 'sardina' de Abelardo Forero Benavides. Cita de memoria frases enteras de discursos de Uribe Uribe, López Pumarejo, Jorge Eliécer Gaitán y

Alberto Lleras. Cuando le falla la memoria tiene que recurrir a la billetera en la cual guarda algunas de estas frases como compañeras permanentes. Frases de presidentes conservadores no hay. Si intelectualmente es trascendental, políticamente está pasado de moda. Es liberal a la antigua. Cree en el liberalismo con el mismo fervor que se tenía en Colombia en los años 30 ó 40. Vibra y se emociona cuando habla de los logros de su partido, en los últimos 100 años como si fueran propios. Político vitalicio... fue el primero de cinco hijos, y desde muy niño se reveló como un político en potencia. Dicen que cuando apenas comenzaba sus estudios le preguntaron qué quería ser cuando grande. Contestó: presidente de Colombia. Y que cuando le preguntaron lo mismo a uno de sus hermanos dijo: hermano del presidente. Ya lo había convencido". Pero esa imagen bonachona no lo acompañó en la Gobernación. Podría pensarse que sólo es producto de su medio ambiente.

El Colectivo de Derechos Humanos "Semillas de Libertad" (CODEHSEL) publicó el 19 de abril un estudio en el que sostiene que "el uso desproporcionado de la fuerza, y la violación sistemática de los derechos humanos, es la característica sociológica determinante de la población civil en Medellín". Para ellos, la ciudad es "la otra Palestina". "Hoy - comienza la monografía-, la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos que se presenta en los diferentes barrios de la ciudad de Medellín es alarmante. Los grandes cinturones de miseria que bordean la 'gran ciudad' habitada por miles y miles de personas desplazadas por razones políticas y económicas, creen haber encontrado la salvación 210 y la protección del Estado, pero la realidad es otra y después de construir sus refugios se encuentran en una ciudad de gobernantes que no los quieren porque la afean. Por consiguiente se les estigmatiza de ser milicianos y guerrilleros. A esa problemática se suma la falta de empleo, de educación y de salud, por lo que no todo termina ahí. La represión oficial se ciñe a una persecución constante de jóvenes, que no encuentran alternativas de empleo pues la realidad en Medellín es que el desempleo mal contado ronda el 22 por ciento y el subempleo el 35 por ciento, aproximadamente, gracias al cambio de reconversión en la producción, de una ciudad industrial a una ciudad de servicios produciendo un estrangulamiento laboral". "...Perfilada para ser el reflejo de Nueva York... (para llegar a su) futuro, vislumbrado hacia el año 2020, se tendrán que hacer grandes barridos y cercenar en lo posible la vida de quienes no representan sino una carga y un estorbo... El desarrollo urbanístico se implanta a la fuerza... La violencia que se ejerce en numerosos barrios (se explica) en el abuso desproporcionado de la fuerza por parte de quienes representan el Estado y al mejor reflejo de lo que hoy es Palestina, podríamos (verlo) en la presencia de ejércitos (que) llegan a implantar el terror con tanquetas bien equipadas, helicópteros artillados, ametrallamientos y hostigamientos. (Hay) retenciones masivas de personas, y en muchos casos se han presentado ejecuciones extrajudiciales. Estos son los hechos que deben soportar día tras día miles y miles de pobladores del gran cinturón de miseria de las comunas". Y luego una premonición oprobiosa de lo que le podría ocurrir a Colombia en el inmediato futuro: "Bajo el velo de la impunidad total irrumpe en los barrios la siniestra figura del control paramilitar. Miles de jóvenes son obligados a participar de la red que se viene construyendo en la ciudad, imponiendo nuevas conductas morales de comportamiento para las mujeres y los jóvenes (formas de vestir, no se puede llevar pelo largo, no se puede utilizar determinada ropa, ni aretes colgados en la piel), imponen horarios de entrada y salida de sus hogares. ¡Vaya moral!... Estos grupos actúan sin control o en muchos casos con el apoyo y la tolerancia de la fuerza pública... La ciudad cuenta con circuitos de seguridad, cámaras de video que llegan hasta lo más alto de los barrios. Los grupos paramilitares o bandas de sicarios, van cometiendo y sembrando en los grandes barrios el terror con todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Se presentan casos de mutilación y desmembramiento de personas para

exhibirlos públicamente". "Hoy el lenguaje oficial es el de acabar con el terrorismo, a través del terror. Nosotros, los organismos de derechos humanos, consideramos que la salida al conflicto interno colombiano no se resuelve implementando teatros de operaciones, ni normas que atentan contra la libertades individuales y contra los derechos humanos, ni utilizando medidas coercitivas de encierro en las nuevas cárceles de seguridad... no es con grilletes en las manos y en los pies como se puede resolver la pobreza del pueblo colombiano, no es con la utilización de torturas como las vienen aplicando en las estaciones de policía asentadas en los barrios populares. "Algunos hechos muestran la dura situación por la que están atravesando los barrios de Medellín: "En Medellín en el año 2001 fueron asesinadas 4.414 personas (El Colombiano, 13/01/02). En el presente año van asesinadas 1.257 personas en el Valle de Aburra (El Colombiano 09/04/02). "En el año 1994, con el decreto 1356, surgieron las Cooperativas armadas de vigilancia Convivir. Es necesario señalar que inicialmente los miembros que componen estos grupos (pertenecieron) al desarticulado DOC (Departamento de orden ciudadano) y a los reinsertados o desmovilizados. "En el mes de agosto de 1998 más de 200 miembros de las 39 cooperativas armadas de vigilancia, ante la caída del decreto que los legitimaba, anunciaron que se reunirían a la red ilegal de las AUC o paramilitares (El Colombiano 14/03/99). "Nos asalta una gran preocupación en lo pertinente a la propuesta del candidato presidencial Alvaro Uribe, el cual pregona armar a un millón de ciudadanos para trabajar en coordinación con las fuerzas de seguridad, como delatores o informantes... Hacemos estas denuncias basados en testimonios directos de las víctimas en los barrios populares, que hoy no saben ante quien acudir para la protección de sus derechos fundamentales. Nuestra obligación ética y moral es poner en conocimiento de la comunidad internacional y nacional los crueles hechos que día tras día enlutan y tiñen de sangre la dignidad humana y la conciencia moral de la humanidad".

Pero la historia viene de antes. Y no se limita sólo a Medellín sino a todo el territorio de Antioquia y, más allá, al de Colombia. Fue Alvaro Uribe, como gobernador, quien creó las "asociaciones de vigilancia rural". La noticia aparece en El Tiempo el 7 de marzo de 1995: "La primera asociación de vigilancia rural que se crea en el país, empezará a operar en el oriente de Antioquia. Así se determinó luego de un consejo comunal de gobierno, realizado en La Ceja. Alvaro Uribe Vélez, gobernador del departamento, presidió el encuentro con la comunidad del oriente antioqueño. A la reunión también asistieron unas ciento cincuenta personas. La asociación, que tomó el nombre de Convivir del Oriente, tendrá como sede a Rionegro y funcionará en Guarne, El Carmen, Marinilla, Santuario, San Vicente, El Retiro, La Ceja y La Unión. Esta región del departamento ha sido considerada tradicionalmente pacífica y es la que más desarrollo ha tenido en los últimos años en el departamento. Allí, además del aeropuerto José María Córdova, tienen asiento importantes empresas. Igualmente, es una zona donde están ubicadas hermosas fincas de veraneo y establecimientos públicos de primera categoría. Sin embargo, la zona se ha convertido en los últimos meses en un centro de operaciones de bandas de asaltantes y la guerrilla ha intensificado su presencia. Así mismo, se han presentado algunas incursiones de grupos de autodefensas. Sobre si emplearán o no armas, Pedro Juan Moreno Villa, ¿] secretario de Gobierno del departamento, dijo que esta es una decisión que tomará a su debido tiempo la comunidad misma... El gobernador expresó que no se podía vacilar en apoyar a esta asociación toda vez que el departamento 'está hoy amenazado por el avance del secuestro, de la extorsión y la violación general de los derechos humanos'. Confío en que esta primera asociación se convierta en modelo y que todas las que se vayan a crear estarán ajustadas a la Constitución y a las leyes".

Regiones en paz, armas, decisiones de la comunidad, asaltos, seguridad, hermosas fincas, Pedro Juan Moreno, avance del secuestro y la extorsión. Y detrás las Convivir. Los hechos hablan por sí solos. Para el gobernador, la cooperación ciudadana sólo podía ser posible a través de las Convivir. Mientras las organizaba en cada uno de los municipios de su jurisdicción, el país asistió a un debate en torno a ellas. En Semana, María Isabel Rueda se preguntó si las Convivir no repetirían el "grave antecedente" de los grupos de autodefensa. Las autodefensas se organizaron en 1989 y su primera preocupación fue la de diferenciarse con claridad de los grupos paramilitares. Sin embargo, la dinámica del conflicto las llevó a refundirse en un solo grupo con ellos, y terminaron por convertirse en una "fábrica de sicarios", de donde salieron los asesinos de Luis Carlos Galán y de Jaime Pardo Leal. "De no especificarse la naturaleza de las Convivir -dijo Rueda-, y de no reglamentarse urgentemente y con seriedad su funcionamiento, no por ser legales se evitará que estas asociaciones degeneren en un detonante más de la violencia y del desorden social que imperan hoy en el país". Y añadió: "Es previsible que los miembros de las actuales Convivir terminen engrosando las filas de la ilegalidad en el paramilitarismo, con lo cual se estaría borrando con el codo algo que se quiso lograr con su creación: legalizar aquellos grupos que de lo contrario estarían al margen de la ley. La realidad es que las Convivir existen en Colombia, y que no son precisamente un grupo de boy scouts que se comunican por clave a través de rudimentarios radios, y que espían a los enemigos con binóculos made in Taiwan. Ese es un juego de niños. Y las Convivir son un juego de guerra". Luego expone una serie de argumentos en pro y en contra, entre ellos que "el reconocimiento del fracaso de las autoridades en sus deberes de protección no puede consistir en pasarle una cuenta de cobro a la ciudadanía prohibiendo las Convivir, bajo la siguiente premisa: no podemos protegerlos, pero tampoco permitiremos que ustedes ayuden a protegerse"; y que el principal defecto de esas organizaciones "no consiste en su condición de organismos de vigilancia y seguridad privada, sino en su carácter de instituciones armadas paralelas a la fuerza pública, que ejercen funciones de control policivo que pueden degenerar en la arbitrariedad y el desconocimiento de los derechos y libertades que pretenden proteger".

Como siempre, no se llegó a ninguna conclusión. En el mini debate que Serpa y Uribe sostuvieron por Caracol el 5 de abril de este año, el segundo insistió en su tesis: "Mi propuesta de seguridad es democrática. ¿Cuál es su objetivo? Proteger a todos los ciudadanos, independientemente que sean empresarios o sindicalistas, propietarios del campo o campesinos trabajadores, de izquierda o de derecha. Es una propuesta de seguridad democrática, para recuperar esa protección efectiva. A la ciudadanía hay que protegerla frente a la agresión del guerrillero y del paramilitar". Y Serpa, el mismo día, le replicó que todas esas eran palabras para ocultar lo inocultable: que las organizaciones paramilitares apoyan la campaña de Uribe Vélez, y que "esas organizaciones, bajo presión, pueden dejar en las urnas entre uno y dos millones de votos". Los paramilitares "hacen campaña en distintas regiones, con presencia de agrupaciones armadas ilegales... que ponen el fusil en la cabeza a la gente". Uribe dijo sentirse "triste" por las declaraciones de Serpa, subrayó que en los últimos años se ha acentuado la "debilidad institucional" y que "Colombia está dividida hoy entre una serie de colombianos atemorizados por la guerrilla y una serie de colombianos atemorizados por los paramilitares". Ante ello, dijo, "se necesita reconstituir el Estado de derecho, uno de cuyos componentes es una activa participación ciudadana". Toda esta discusión, la que fue y la que vendrá, sale de la tarea de Uribe como gobernador de Antioquia. Tres meses después de que organizara la primera Convivir, en su apreciación de los hechos nacionales Semana le dio a Uribe el honor de "subir". El 20 de

junio de 1995 escribió: "Sube el gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, quien la semana pasada y ante los indicios cada vez más consistentes de que se está desatando una escalada terrorista en Medellín, pidió al gobierno nacional la declaratoria de conmoción interior para esa ciudad. El objetivo de dicha declaratoria sería el de dictar medidas de emergencia que facilitarían, entre otros, desactivar una red de jóvenes dedicados a acciones terroristas, contra quienes las autoridades no han podido proceder adecuadamente debido a su condición de menores de edad. La propuesta del gobernador permitiría prevenir a tiempo una ola de atentados que podría sumir a Medellín en una pesadilla similar a la vivida en el pasado". Ya vimos en otro aparte la respuesta que le dio el gobierno. La preocupación por lo que puede representar un eventual gobierno de Uribe se ha extendido hasta los más rigurosos escenarios internacionales. En abril de este año, Mary Robinson, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declaró en Ginebra "estar alarmada por la proposición de uno de los principales candidatos presidenciales en Colombia de armar a un millón de civiles para restablecer la seguridad en el país". El despacho de la AFP sobre el particular me enfático. La señora Robinson "lamentó la actitud de algunos políticos colombianos que cierran los ojos sobre las actividades de los grupos paramilitares, e incluso los consideran legítimos. "La alta comisionada declaró haber comprobado en 2001 una expansión y una consolidación de los grupos paramilitares en Colombia 'que están entre los más violadores de los Derechos Humanos' y destacó 'sus vínculos persistentes con funcionarios y fuerzas de seguridad'. Más preocupante aún es el hecho de que amplios sectores de la sociedad colombiana consideren las actividades paramilitares como una opción legítima y que algunos candidatos políticos parezcan admitir esas actividades, como lo demuestra la proposición de uno de los principales candidatos de armar a un millón de civiles".

Por intermedio del coordinador del Programa de Derechos Humanos, Luis Carlos Restrepo ("El derecho a la ternura"), la campaña de Uribe sostuvo que era "irresponsable dar una información de estas características. En un documento que el candidato le envió a la señora Robinson y a Andreas Kompass, de la oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia, se les explicó la propuesta de cooperación ciudadana con la fuerza pública y no se mencionó para nada que las personas que integren de manera voluntaria esta iniciativa estén armadas. Vamos a pedir una rectificación". A su turno El Tiempo informó que el ministro de Defensa, Gustavo Bell, respondió en Ginebra que "la ONU desconoce los esfuerzos hechos" y pidió "entender las limitaciones de un Estado confrontado por la barbarie y el terror. Mientras el ministro intervenía, dijo el periódico, un manifestante entró en la sala con el cuerpo desnudo pintado de rojo. «Stop terror» (Paren el terror), decía la pancarta que exhibió".

Hay otra serie de documentos importantes que valdría la pena conocer en su integridad. Uno de ellos es la carta que envía el periodista Dick Emanuelsson, experto en temas sindicales: "He cubierto el movimiento sindical colombiano desde el 1983. Mucha gente que entrevisté está muerta. La macabra cifra de 172 sindicalistas asesinados el año pasado, es interesante en el sentido, que casi el 25 por ciento eran de Antioquia, el departamento que me la cuna de las Convivir. "Me pregunté, cuando Alvaro Uribe presentó su proyecto sobre convertir a los celadores / vigilantes en agentes de seguridad y al servicio de la inteligencia militar en su lucha contra la guerrilla, si él había consultado a los trabajadores de la vigilancia privada. Entrevisté, entonces, el presidente del sindicato SINUVICOL, Carlos Gómez. Con él fui a entrevistar a tres vigilantes en la noche. Todos están horrorizados por la propuesta de Uribe. Temen, lógicamente, convertirse en blancos militares de la insurgencia". El asunto tiene múltiples facetas. Pero hay otras más que son imposibles de descuidar. Una de ellas tiene

que ver con la administración del Departamento. Uribe se precia de haber sido un gran gobernador. Las cifras parecen demostrar lo contrario. "A 31 de diciembre de 1994 -dice un experto en el tema- Antioquia tenía una deuda pública departamental que ascendía a 56.896 millones de pesos, que representaba con respecto al total de la deuda de los departamentos de Colombia, el 11,418 por ciento. Terminado el mandato de Uribe Vélez la deuda ascendió a \$309.058 millones de pesos, o sea que la elevó en un 543,19 por ciento y pasó a representar el 19,713 por ciento del total de la deuda de los departamentos. Estas cifras constan en el documento que produjo la Federación Nacional de Departamentos, denominado 'La Crisis Fiscal de los Departamentos', publicado en marzo 26 de 1999 y habla por sí solo. "El segundo tema tiene que ver con un contrato por valor de 370 mil millones de pesos a precios de 1997, para la construcción del Túnel de Oriente, para lo cual se reunieron sesenta firmas de ingenieros de Antioquia y hasta la fecha (febrero del 2002), a pesar de estar firmado el contrato, no se ha podido ejecutar por la sencillísima razón de que no tenía disponibilidad presupuestal. Es decir, cometió un peculado por aplicación presupuestal diferente, y/o celebración de contrato sin requisitos legales esenciales, cuyos procesos duermen el sueño de los justos en el despacho del Fiscal General de la Nación. Este hecho lo inhabilita para ocupar la Presidencia, en primer término porque demuestra irresponsabilidad, ya que embarcó al Departamento en la multimillonaria demanda que hoy afronta, y en segundo lugar porque tiene en graves problemas a más de sesenta firmas de ingenieros antioqueños cuya capacidad operativa se ha visto afectada".

Varios aspectos esenciales de la crisis provocada por la gestión de Uribe en la Gobernación fueron tratados por Ramón Elejalde Arbeláez, en tres artículos que vale la pena transcribir, pese al tono "oficialista" a favor de la gestión del actual mandatario seccional. Cuándo y cómo se endeudó Antioquia. "La crisis que hoy vive el Departamento de Antioquia tiene también mucho que ver con el endeudamiento a que fue sometida la región por sus distintos gobernantes. Prestar dinero sin mejorar los recaudos o simplemente prestar para que el que "venga arree", es una imprevisión del gobernante. Hoy la Nación, como las regiones, viven una difícil situación fiscal producto de administradores que se han dedicado a prestar dinero para gastar y generalmente para gastar mal. "Antioquia no ha sido ajena a esas nefastas políticas de trabajar "al debe", hagamos un breve análisis de la evolución de la deuda pública del departamento entre los años de 1992 y 2001: "Bajo la administración de Juan Gómez Martínez (1992-1994) se contrataron empréstitos por un valor de \$76.461'527.250, de los cuales se desembolsaron recursos por valor de \$ 69.715'204.402. De los créditos recibidos el 56% lo aportó el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA- y el resto la banca privada y se pignoraron las rentas por consumo de licores nacionales, consumo de cerveza y vehículos automotores. Como puede observarse el manejo de la deuda pública fue prudente y proporcional a los ingresos del Departamento. "En la gobernación de Alvaro Uribe Vélez (1995 -1997) la banca entregó a la administración departamental la suma de \$384.780'944.907, es decir un 452 por ciento más que al gobierno anterior. En este trienio hay un cambio brusco en el manejo ortodoxo de las finanzas del estado y del origen del dinero, ya que por primera vez el IDEA deja de ser la fuente de recursos de Antioquia, como que solamente prestó el 22 por ciento de los recursos de la deuda pública, frente a un 78 por ciento que desembolsó la banca privada. El comportamiento de la deuda pública en el gobierno de Uribe Vélez fue el siguiente: En su primer año de gobierno, es decir en 1995, se endeudó en \$48.318'183.797, un 55 por ciento más que en 1994 y muy cercano a la deuda adquirida durante 221 todo el mandato de Juan Gómez Martínez. En su segundo año de gobierno, 1996, se adquieren créditos por \$95.521'242.608, es decir un 98 por ciento más que el año anterior. Finalmente en 1997, último año de la gestión gubernamental de Alvaro

Uribe Vélez, la deuda pública del Departamento de Antioquia contratada fue de \$240.941'518.502, es decir que se incrementó en un 152 por ciento con respecto al año inmediatamente anterior. Uribe respaldó estos créditos con las rentas que generarían los impuestos a los licores nacionales, al registro, a los vehículos automotores y al consumo de cerveza. Estos créditos fueron además entregados al departamento en las condiciones financieras más onerosas para la región, pues se suscribieron a una tasa del DTF + 4,03 las del primer año, al DTF + 4,29 en el segundo año y al DTF + 3,54 en el último año. "Es de anotar que durante el año de 1997, último del gobierno de Uribe Vélez, el Departamento (EDATEL) pudo invertir la suma de \$47.488'983.973, producto de la capitalización de las Empresas Públicas de Medellín en la Telefónica de Antioquia. Es decir que no solamente gastamos prestando a manos llenas, sino depreciando los activos del Departamento de Antioquia. "El descontrolado préstamo de dinero por parte del Departamento de Antioquia hizo que pasáramos de pagar, por concepto de servicio de la deuda, una suma de \$29.810'000.000 en 1.994 á \$122.141'890.000 en 1998. "En la gobernación de Alberto Builes, el Departamento prestó recursos por la suma de 192.618'949.189, es decir un 50 por ciento menos que en el período anterior, el IDEA aportó un 39 por ciento y el resto fue con el sector privado. Builes también recibe por concepto de la venta de acciones de EADE y EDATEL la suma de \$121.287'770.550. "En la actual administración, la de Guillermo Gaviria Correa, se ha dado un cambio radical en el manejo de la deuda pública, buscando aliviar la pesada carga que ésta representa y sanear las finanzas del Departamento. "Las cifras son contundentes. La opinión pública juzgará". El segundo artículo se titula "Valorización: ¿Improvisación o ruina?" "Catastróficos los problemas que vienen enfrentando cerca de quince mil familias campesinas en Antioquia, por once obras de valorización decretadas por la Asamblea Departamental, ante iniciativa del ex gobernador Alvaro Uribe Vélez. "Sancionadas las ordenanzas disponiendo las obras, las resoluciones de distribución de la contribución por valorización fueron decretadas así: nueve por Uribe Vélez (Bolombolo - Santa Fe de Antioquia; Don Matías - Entrerios - Santa Rosa; Guatapé - San Rafael - San Carlos; Puente Gabino - Gómez Plata - Carolina; La Metida - Concordia; Fredonia - Puente Iglesias; El Cinco - Venecia - Bolombolo; Jericó - La Cascada - Jamaica - Tarso y La Fabiana - La Mesa) y dos por Alberto Builes (Urrao - Betulía y Caucasia - Nechí). Dos obras decretadas durante el gobierno de Uribe Vélez y cuya distribución de contribución le correspondió a Guillermo Gaviria (Andes - Taparte; Llanos de Cuivá - San José de la Montaña), tuvieron o tendrán un tratamiento más social y justo al momento de derramar la contribución entre los beneficiados. "Del total de las obras decretadas solamente se encuentra concluida y en buen estado la vía Jericó - La Cascada - Jamaica - Tarso y concluidas parcialmente y en pésimo estado, es decir con la inversión totalmente perdida, las vías El Cinco - Venecia - Bolombolo; La Fabiana - La Mesa; Fredonia - Puente Iglesias; Puente Gabino - Gómez Plata; La Metida - Concordia; Bolombolo - Santa Fe de Antioquia y Guatapé - San Rafael - San Carlos. Las vías Urrao - Betulia y Caucasia - Nechí, que son las que más problemas tienen, se hicieron con financiaciones 'en el aire' y hoy presentan un retraso del ochenta por ciento y enfrentan la triste realidad de que su terminación es totalmente imposible a no ser que la Nación salga en su ayuda, lo cual parece improbable. Pero en ambos casos, como en los anteriores donde las vías ya no sirven, se les está cobrando a todos los 'beneficiados' (¿?) la contribución de valorización. "Unas obras imprevistamente decretadas, donde escasamente han pagado o están al día en sus pagos un veinte por ciento de los propietarios y donde por lo menos un cincuenta por ciento enfrenta la posibilidad cierta de ver perdidas sus propiedades por procesos coactivos que va a tener que iniciar el Departamento, van a llevar a la ruina a muchos pequeños campesinos que creyeron en las propuestas de los gobernantes de turno y al departamento de Antioquia

que va a tener que enfrentar muchas demandas de empresas constructoras. Es tan dramática la situación de los pequeños propietarios, que para todas estas obras se distribuyó una contribución cercana a los 115.692 millones de pesos, de los cuales 39.000 millones ya están en mora de recaudar y a la espera de un proceso coactivo para su cobro, con todas las 224 consecuencias que esto entraña para familias pobres, en una economía en recesión. "Políticamente tiene que existir un responsable de este descalabro. Las responsabilidades deben comprender la verdad sobre la planeación y los estudios de factibilidad de las obras hoy en ruinas y si éstas se deterioraron por defectos en la construcción o por la falta de mantenimiento posterior, pero aquí existe un innegable detrimento al patrimonio del Departamento y al de los 'beneficiarios' (¿?) de las 'obras'. "La Administración Gaviria Correa estudia varias propuestas para solucionar los problemas de las familias campesinas afectadas, tales como la flexibilización del estatuto de valorización, facilitar el pago de la contribución mediante la utilización de los predios gravados con programas de reforestación del Gobierno Departamental y permitir el sostenimiento de las vías por los mismos beneficiarios para que de esta manera paguen la deuda". Y el tercer artículo, "Bancos Cooperativos: otro desastre", dice: "Durante el trienio del doctor Alvaro Uribe como gobernador de Antioquia, el Departamento decidió abrir en aquellos municipios que no contaban con entidad bancaria, unos bancos cooperativos que le ayudaran a estas entidades territoriales en su desarrollo. Igualmente tomó la determinación de apoyar a algunos de éstos con dineros estatales, provenientes del Fondo de Desarrollo de la Comunidad - Fodes-. "Fue política de gobernador Uribe Vélez prestar hasta cuarenta y dos millones de pesos por oficina de banco cooperativo que lo requiriera, en condiciones financieras 225 sumamente favorables, ya que los créditos se entregaron al D.T.F., para ser colocados al D.T.F. + 2, cuando en la banca comercial estaba al D.T.F. + 6 y hasta el D.T.F. + 12, lo que en su momento originó las críticas de la Superintendencia Bancaria. Como era de esperarse, la propuesta financiera del Departamento llevó a un crecimiento desmesurado a algunos de estos bancos, crecimiento que después ayudó a su quiebra. "Fueron catorce los Bancos Cooperativos que recibieron apoyo económico del Gobierno Departamental presidido por el Doctor Uribe Vélez: Coosedeco, Cofamiliar, Cooperativa de Ahorro y Crédito Crear, Fedean, Confiar, Codea, Coopiantioquia, Coopetraban, Coofinep, Coficrédito, Cootrabaco, Cooperativa de Ahorro y Crédito La Suya, Socialcoop y Cortaban, algunas de ellas obtuvieron otro crédito adicional como Confiar, Coopiantioquia, Coofinep y Coficrédito. Estos créditos fueron por la suma de ochocientos setenta y ocho millones, diez y seis mil trescientos noventa y ocho pesos (\$ 878'016.398,00), de los cuales el Departamento tiene casi perdidos, incluidos intereses, la suma de seiscientos veinticuatro millones, dos mil seiscientos cuarenta pesos (\$624'002.640,00), hoy en proceso jurídico para su recaudo. "De los Bancos Cooperativos beneficiados con los recursos de los contribuyentes antioqueños cancelaron todos sus créditos o están a paz y salvo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crear, Fedean, Confiar, Coopetraban, Coofinep, Codea, Cooperativa de Ahorro y Crédito La Suya y Socialcoop, lo que obviamente indica que los demás son deudores morosos del fisco regional, pero lo que es más grave, todos los deudores se encuentran en proceso de liquidación desde hace cerca de cuatro años y las deudas del Departamento serán canceladas luego de pagar a los trabajadores, a la DIAN y a los asociados, es decir que los antioqueños debemos esperar en un cuarto lugar, a que quede alguna 'chichigüita' para recuperar algo de nuestro dinero, lo que los más optimistas ponen en duda.. "Coopiantioquia y Coficrédito gozaron de un especial tratamiento al recibir de los dineros de los antioqueños doble préstamo, a Coopiantioquia primero le hicieron un crédito de cuarenta y un millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos (\$ 41'666.663,00) y luego le prestaron treinta y siete millones quinientos mil pesos (\$ 37'500.000,00), ambos en mora y en

cobro jurídico y a Coficrédito le hicieron primero un préstamo de trece millones ciento veinticinco mil pesos (\$ 13'125.000,00) y luego otro de veintisiete millones quinientos mil pesos (\$ 27'500.000,00), obviamente que ambos créditos están en mora y en cobro jurídico. "El caso de la Cooperativa de Trabajadores de Colcafé -Cootrabaco-, es de los más graves: le prestaron la suma de ciento veinte millones y jamás pudo pagar un peso y la recuperación del dinero es imposible. Increíble que desde el estudio de los estados financieros para prestar el dinero de todos los antioqueños, no se hubiera tenido la previsión de saber la caótica situación de la institución para hacer el desembolso. "Estos Bancos Cooperativos no sólo arrastraron con su quiebra a los dineros públicos, es decir a los dineros de los contribuyentes, sino que también se llevaron por delante a muchos ahorradores y comerciantes que creyeron en ellos y en el gobernante de turno que les llevó a sus municipios una solución bancaria que resultó ser un completo fiasco". Todo lo cual termina, sin que haya terminado todavía, en la noticia que publicó El Espectador en su edición del 5 de mayo de este año: "Con el propósito de examinar el pasado disciplinario de los aspirantes a la Presidencia, El Espectador formuló un derecho de petición ante la Procuraduría para que informara si los candidatos Alvaro Uribe Vélez, Noemí Sanín, Luis Eduardo Garzón, Haroíd Bedoya Pizarro y Horacio Serpa tenían investigaciones. Según el organismo, 'los señores Serpa, Garzón, Sanín y Bedoya no registran en curso investigaciones en su contra'. Los candidatos que sí tienen investigaciones son Ingrid Betancur y Alvaro Uribe. A la primera, el organismo le tiene un proceso disciplinario por resolver. Uribe tiene 47 procesos: 20 en indagación preliminar, 16 investigaciones y 11 pliegos de cargos, todos por presuntas irregularidades en celebración indebida de contratos durante su gestión como gobernador de Antioquia".

Todo en la campaña de Uribe Vélez es equívoco. Pero una equivocación más no la resiste Colombia.

EPILOGO

De viaje

FERNANDO GARAVITO - COAUTOR DE ESTE LIBRO.
COLUMNISTA DE «EL ESPECTADOR». ESCRITOR.

A bordo del avión que me lleva hacia un destino que aún no conozco, siento cerca de mi hombro la pesada respiración de mi vecina. Es una mujer entrada en años, gruesa, de rasgos vigorosos, quien sólo después de sentarse se despoja, con enorme dificultad, de un abrigo negro de abotonadura hasta el cuello. Cuando logra terminar una faena que hubiera podido culminar con mejor éxito en el pasillo, en su doméstico saco de lana gris y en su blusa de grandes pepas blancas dibujadas sobre un escueto fondo trajinado por el uso y los detergentes, descubro algunos rasgos de esa vida tal vez sin sobresaltos. Mujer y saco de lana gris y pepas blancas y un escueto "café", dicho con sequedad a la azafata. Pienso. ¿Qué sabrá esta mujer de Colombia, de la hecatombe que vivimos, de sus crueles protagonistas acostumbrados a la muerte como uno de sus asuntos cotidianos? Tal vez nada. Al entrar, superando las dificultades de dos lenguajes herméticos, me explica que viaja a reunirse con su marido. "Él trabaja en Los Ángeles -le entiendo-. Voy a verlo unos días antes de irme del todo para Zurich". -¿Y qué hacía usted en Colombia? -Visitaba a mi hija. Ella se casó con un paisa. Debo confesar que la estructura de la frase la obtengo a partir de la palabra paisa. La dice con todas sus letras, dando cuidadosamente el paso entre la a y la i y acentuando con suavidad la última de las vocales. Me suena más o menos a paisa, con

doble tilde para escándalo de académicos y gramáticos. La conversación naufraga entonces (¿qué más podría decirle a una mujer como esta?) y ella se duerme. Pero yo permanezco vigilante en tomo a las últimas imágenes que tendré de mi país posiblemente durante años. Mientras las luces de la cabina indican que hay un pasajero que requiere de alguna ayuda, que nos aproximamos a un banco de nubes, y que –por fortuna- nadie puede fumar hasta que termine la travesía, sé que abajo, en esas montañas que brillan bajo el dorado sol del atardecer, bajo nuestro incomparable "sol de los venados", transcurre una de las guerras más cruentas que haya vivido América Latina en toda su historia. "Tal vez la del Chaco haya sido peor", pienso como consuelo. "O la de El Salvador". Pero en ninguna de ellas se vio jamás el grado de sevicia del que hace gala la nuestra. Esta misma mañana leí en El Espectador que Alirio Uribe Muñoz, defensor de los Derechos Humanos y, como tal, exiliado, denunció en París que en los tres últimos años hubo en Colombia diez mil muertos, un millón de desplazados, entre 12 y veinte asesinatos políticos diarios y más de diez mil secuestros. Multiplico: veinte asesinatos políticos por 365 días, igual 7.300 asesinatos políticos en un año; por tres años, igual veintiún mil novecientos asesinatos políticos en tres años. Veintiún mil novecientas familias golpeadas, veintiún mil dirigentes cívicos y sindicales asesinados.

Sé que en mi maleta van los conceptos más diversos sobre la guerra. "La guerra". Cuando se vive fuera del país, como comenzaré a hacerlo yo mismo tan pronto me baje de este avión, es fácil hablar de "la guerra". Pero esto que vivimos los colombianos no es una guerra. Es una hecatombe, una masacre continuada que nos acorrala, que no nos da tregua. ¿En qué guerra se aceptaría que un asesino, como Salvatore Mancuso, declarara que su ejército de sicarios "no ejecutará mas de tres personas al mismo tiempo"? ¿Dónde se ha visto? Pero esas fueron las declaraciones que, letra por letra, le dio el 13 de febrero a Margarita Martínez, enviada especial de la Associated Press. Pienso que mi ámbito inmediato, poblado de victimarios, cambiará dentro de pocas horas. Cuando en Colombia alguien dice Mancuso, el interlocutor siente repudio o miedo. Pero, de ahora en adelante la palabreja no le dirá nada a nadie. Mancuso, el jefe militar de los paramilitares (aunque suene cacofónico) es doméstico. Como la roya. Los paramilitares también lo son. Cuando hable en la Universidad tendré que explicar qué cosa son las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y me veré obligado a hacer breves perfiles biográficos de los asesinos. Mancuso, por ejemplo. "Nacido en 1965 -diré-, propietario de grandes extensiones de tierra, hijo de un inmigrante italiano, ex alumno de Pittsburg, secuestrado por las Farc en 1983, comandante de los paramilitares desde agosto del 2001". Y pare de contar. Dentro de ese resumen no podré enumerar todos y cada uno de sus crímenes, que harían, con creces, el segundo tomo de la nueva historia extensa de Colombia, la cual se inició, sobra decirlo, con Mi confesión (Carlos Castaño, 2001, 328 páginas). Pero sí podré hablar de sus declaraciones. Las que le hizo a Martínez, por ejemplo, en las que sostuvo que su organización pasó de 850 hombres en 1992, a 14 mil en el 2002, y que el próximo año llegará a 26 mil, seis mil de los cuales comenzaron ya su entrenamiento, mientras que otros seis mil lo harán en abril. ¡Veintiséis mil combatientes! Los estudiantes me harán una pregunta obligada: ¿dónde ubicarlos? Afirmaré entonces, soto vocee, que son el grupo a través del cual un ejército regular en desventaja, como el nuestro, viola los derechos humanos, masacra campesinos, y controla extensas zonas del país, antes en manos de la guerrilla. Ahí comenzará la polémica. "¿Tiene usted alguna prueba que le permita hacer esa afirmación?", me preguntará un profesor de derecha. Y yo tendré que decirle que no, que en Colombia nunca hay pruebas, y que la forma más socorrida de los corruptos para eludir sus responsabilidades es la de pedir que se muestren las pruebas.

Todo el mundo sabe que paramilitares y grandes sectores del Ejército son sólo uno, pero "no hay pruebas". Hace poco, lo dijo Alirio Uribe en París, en las investigaciones que se adelantaron alrededor del atentado del que fue víctima el dirigente sindical Wilson Borja, la pista culminó en miembros del Ejército vinculados a los paramilitares. ¿Qué habrá pasado con eso? Que buscarán pruebas hasta que el delito prescriba.

En los municipios dominados por los miembros de las Autodefensas se asiste a su connivencia con los soldados. Los militares que abandonan las filas saben que encontrarán abrigo seguro bajo las órdenes de Mancuso. En diciembre del año 2000, el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, dijo que 40 suboficiales y oficiales de baja graduación, dados de baja por mala conducta, habían ido a parar a los batallones de las Autodefensas. Pero sólo fue un anuncio porque en Colombia, y esta es una segunda característica del país, las autoridades no hacen denuncios sino anuncios. Pues bien. Los soldados y los "paras" se saludan de lejos, se tratan de "compás", extrañamente sus horarios nunca se cruzan. Cuando los paramilitares atacan, se sabe que las autoridades sólo llegarán al sitio en cuestión, después de que los primeros se hayan puesto a salvo. Entonces entran los batallones y el comandante declara que el crimen no quedará impune y que se iniciará una investigación exhaustiva. No es función del comandante hacer ese anuncio, claro está. Pero es que esa es una tercera característica del país más extraño del mundo: entre nosotros los comandantes hablan de todo un poco, dominan cualquier tema, y tienen una opinión formada sobre cada asunto, grande o pequeño, que expresan en voz alta sin pararse en pelillos.

El día declina. Mientras Manuela se entretiene con su gameboy atisbo por la ventanilla de la izquierda. Para ello debo atravesar la espesa cortina de piernas, torsos y sánduches de mis vecinos. Desde hace años el paisaje en Colombia ya no es el mismo. Antes estaba hecho de vacas y de hortalizas, y las grandes plantaciones eran siempre de productos necesarios para un buen desayuno, café, azúcar, árboles frutales. Ahora no. En mi equipaje llevo también un estudio de Ismael Roldan (Universidad Nacional, revista de la Facultad de Medicina, 2000, páginas 77-88), en el que encontré una explicación de la que tendré que echar mano una y muchas veces. "Desde los años 80 -escribe él-, los dineros del tráfico se emplearon en muchas regiones de Colombia para comprar tierras. En la adquisición de varios millones de hectáreas, los traficantes vieron no sólo una manera de invertir dineros ilícitos, sino una oportunidad de inserción en la sociedad local. Cuando se encontraron en esas áreas con la presencia de los grupos guerrilleros, promovieron y financiaron la formación de grupos armados para combatirlos. Fue en la confrontación rural entre los nuevos hacendados y los guerrilleros donde se gestaron las fuerzas irregulares que hoy azotan la vida rural de la mayor parte de Colombia. Paramilitares, como se les conoce actualmente, y guerrilleros, ambos, se han nutrido de los dineros del tráfico y fue este el que proveyó las condiciones financieras, técnicas y de debilitamiento institucional para que el conflicto colombiano escalara hasta el punto actual".

Ahí están todos los elementos del desastre. Los elementos del desastre, como el libro de Mutis, ¿de Mutis?, que no son los elementos de mi propio desastre. El primer elemento de mi desastre es mi mala memoria. Sin mi biblioteca a mano dudaré de escribir cualquier cosa. ¿De Mutis? ¿De Cote? ¿De quién podrá ser ese libro, que alguna vez leí con entusiasmo? Ah, los viejos amados libros que ya no volverán. Como las golondrinas. Volverán los amados mamotretos, en tu balcón sus letras a enredar... Y sólo en ese momento, al darme cuenta de que no recuerdo con precisión cómo dice el tercer verso de Bécquer, descubro la dimensión de mi desastre. Sé que rescaté a Rulfo, como la viuda que en el incendio de su casa se

decide por salvar al gato en contra del Picasso que cuelga en sus paredes, porque frente al museo majestuoso y estático de Borges, por ejemplo, (¡de mi amado Borges!), Pedro Páramo es la vida que se nos entrega en cuentagotas. Sé que viene Tabucchi, pero no todo Tabucchi, sino el verdadero, el de Sostiene Pereira. Y pare de contar. Pero, eso sí, vienen decenas de documentos como el que Ismael Roldan me entregó en la Universidad hace algunos días, y al que le faltaron dos páginas, en el que se dibuja la miseria de un país destruido en su desastre: narcotráfico, guerrilla, paramilitares, debilidad institucional. Cuatro personas distintas y una sola hecatombe verdadera. En Colombia todos lo sabemos. Mancuso, por ejemplo. De pronto, sin saber cómo, un mes antes de las elecciones parlamentarias de marzo le dice a Martínez que su ejército de mercenarios apoya a "determinados candidatos", y que tiene la orden de impedir a los demás hacer campaña. "Nosotros -dijo-, ganaremos al menos el 30 por ciento de los escaños en el Congreso" (un mes más tarde sostuvo que habían superado esa cifra y que "sus congresistas" llegaban al 35 por ciento). De manera que una de las instituciones menos respetadas del país, el Congreso de la República, caerá todavía más hondo. Casi tan hondo como un país donde, según Mancuso, el paramilitarismo surgió a raíz "de la ausencia de fuerzas de seguridad del gobierno en muchos lugares, lugares del tamaño de Francia, España y Portugal juntos". "Hemos crecido -concluye Mancuso- porque mucha gente, como nosotros, estaba harta (harta es la traducción de la agencia, pero en Colombia se dice 'jarta') de los abusos de los rebeldes y de la falta de protección del Estado" (Martínez, AP, 13/02/02). La falta de protección del Estado. Ese es el argumento más fácil para acabar precisamente con lo poco que queda de Estado. Las tonterías que dice Mancuso sólo caben en la cabeza de Mancuso. Esa tesis ha hecho carrera entre nosotros. Se dice que en Colombia el Estado no protege a nadie. Que siquiera es capaz de protegerse a sí mismo. Que en ese inmenso territorio de un millón 300 mil kilómetros cuadrados y con 43 millones de habitantes, todo el mundo está a la deriva. Pero el asunto debe tomarse con extremo cuidado. Cuando la prensa escribe que el Estado se acabó (y yo mismo lo he hecho), escribe a favor de Mancuso. Peligroso. Pero a la deriva están muchos. Hace poco lo estuvo, por ejemplo, el arzobispo de Cali. Su caso lo planteó Alirio Uribe, en París, ante el Coloquio sobre la Paz en Colombia, convocado por la Asamblea Nacional. Según él, el asesinato del prelado, el hecho atroz del 16 de marzo, "marca el comienzo de un período de guerra sucia en la que los objetivos designados (son) los organismos y personas comprometidos con los derechos humanos".

Volando a 9 mil pies de altura sobre el Río Magdalena (el piloto anuncia en este mismo momento que su línea plateada puede verse con nitidez por la ventanilla), sé que los objetivos designados somos todos. Obvio, para los defensores de los derechos humanos los primeros serán los defensores de los derechos humanos, y para los periodistas, los periodistas, y para los políticos, los políticos, y para los militares, los militares. Pero no: somos todos. Si en Cúcuta, Cali y Urabá, como él dice, "desaparecieron las oficinas de defensa y promoción de los derechos humanos", lo cierto es que allá, y en el resto del país, desaparecieron hace mucho los derechos humanos. En ese sentido, ¿qué importancia pueden tener las oficinas? Desde hace años un serio investigador colombiano, el profesor Eduardo Umaña Luna (Premio Nacional a la Investigación Científica, Universidad Nacional, 2001) ha denunciado las iniquidades de un estatuto que no opera en ninguno de sus artículos, y ha demostrado, con cifras y estadísticas, que la defensa del derecho a la vida ha dejado por puertas otros derechos esenciales: al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, sin los cuales la vida no es vida.

Mientras mi vecina de la blusa de pepas se inquieta en su silla ante un movimiento brusco de la nave, pienso que una cosa es la vida y otra muy distinta la supervivencia. En Colombia no vivimos porque estamos empeñados en sobrevivir. Y así esto se convierte en un trabalenguas, en esa supervivencia se nos va la vida, gastada, claro está, en un oficio mucho más duro que el de Pavesse, en el que juegan miserias, envidias, odios infundados, disparos al blanco, disparos al aire. "Yo, señor - escribió De Greiff- soy acontista. Mi profesión es hacer disparos al aire...". En Colombia los viejos estudiamos otra historia. En mi texto, el de Henao y Arrubla, se sucedían los presidentes unos a otros como las cuentas de un rosario, y los sucesos que protagonizaban eran más o menos los mismos, una guerra civil, un proyecto de Constitución, un enfrentamiento con el Congreso, unas memorias administrativas. Pero la que estudian mis hijos es muy distinta. Dos horas antes de mi viaje recibo por internet el texto de la conferencia que Paúl Wolf dictó a los alumnos de la Universidad de la Sabana, en Bogotá, el 20 de marzo. Sé que va ahí, junto a los discos con el juego de Harry Potter, de Manuela, y con aquellos que guardan los artículos más consistentes de mi archivo, que me van a ayudar a encontrar un trabajo en un espacio que no es el mío. Pero me duele recordar que lo último que leí antes de abandonar a Colombia haya sido precisamente ese texto, en el que Wolfie cuenta a un grupo de jóvenes apenas uno o dos años mayores que Fernando, que hoy nuestra historia es otra historia, y que las 21 guerras civiles que tuvieron como protagonista al coronel Aureliano Buendía son apenas la visión romántica de un escritor que se enamoró de las palabras. Para Wolf son significativos una serie de hechos que apenas comienzan a manejarse masivamente en la academia. Cuenta él, por ejemplo, cómo y dónde nació la guerra fría en América Latina. Dice que fue en Bogotá, en 1948, y en la Resolución 32 (o "Acto Final") de la Conferencia Panamericana. "Por su naturaleza antidemocrática y su tendencia intervencionista -señala uno de los considerandos-, la actividad política de comunismo internacional o cualquier doctrina totalitaria es incompatible con el concepto de libertad americana". Y en el momento de recomendar medidas respalda el marco legal, internacional y homogéneo que permita "erradicar e impedir actividades... que tiendan a derrocar sus instituciones por fuerza, a fomentar desorden en su vida política doméstica, o a molestar... el libre y soberano derecho de sus pueblos a gobernarse ellos mismos". En ese documento se identificó al enemigo. De ahí que se le haya atribuido precisamente a ese enemigo el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el carismático líder liberal, el cual ocurrió precisamente durante la Conferencia. Durante años se sostuvo en todos los ámbitos que la muerte del caudillo y la explosión de ira colectiva que destruyó monumentos históricos y edificios civiles irrecuperables, fue dirigida desde la sombra por la mano siniestra del comunismo y por la diestra de Fidel Castro, en ese entonces un joven estudiante, alumno de los jesuitas. Hasta ahora, cuando el gobierno norteamericano permite consultar los archivos de la CÍA de esa época, en los cuales se comprueba que fue esa organización la que asesinó a Gaitán y provocó la revuelta. Daniel Samper, un prestigioso periodista colombiano exiliado desde hace años en España, lo denunció en una columna de prensa que no tuvo mayor eco. La voracidad de los acontecimientos que se viven en Colombia ha pretendido convertir a Gaitán, un líder de estatura latinoamericana, en un santón al que un grupo de ancianos decrepitos le rinden culto cada año, el día en que se conmemora su asesinato. El 9 de abril de 1948 parte en dos nuestra historia política. Antes el país avanzaba por el cauce lleno de rápidos y de peñascos próximo a la catarata. Después, se precipita por el torrente. Tal vez debería reflexionar más despacio sobre ese proceso, pero las luces de la cabina se prenden anunciando tormenta. De 1948 en adelante el bache entre la historia oficial y la historia verdadera se volvió insuperable. Luego de un rápido recuento, donde aparecen la colaboración de Colombia en la guerra de Corea, la compra de armamento obsoleto a los Estados Unidos, la cruenta guerra civil de 1948 a 1953, la desmovilización de los que él

llama "bandoleros", el pacto que dio origen al Frente Nacional y la revolución cubana, Wolf trae algunos datos de importancia. Cuenta, por ejemplo, que en 1960, por invitación de Eisenhower, se reunieron en Camp David los presidentes latinoamericanos. Alberto Lleras gobernaba en Colombia y veía cómo el prestigio momentáneo que había logrado la hermética burguesía bogotana al encabezar el golpe contra Rojas Pinilla, se le deshacía entre las manos. Pero Lleras era un hombre lúcido, capaz de mirar mucho más allá de sus narices. De modo que, sabiendo bien lo que decía, sostuvo ante sus pares que la misión militar norteamericana acantonada en Colombia (por ese entonces todas las naciones latinoamericanas tenían "misiones" acantonadas en sus territorios), no entrenaba al Ejército "de acuerdo con sus necesidades". El testimonio, dice Wolf, aparece en el comunicado de la Casa Blanca del 7 de abril de 1960, donde se añade que para Lleras había pocas posibilidades de una guerra entre estados latinoamericanos o de un despliegue del Ejército colombiano hacia el extranjero. ¿Entonces?, debió preguntarle alguien. Y él respondió que la misión de los militares en nuestros países era "prepararse para una guerra de guerrillas, ya que "si el presidente (Eisenhower) y Khrushchev eran capaces de mantener la paz, los comunistas utilizarían a terceros para fomentar el conflicto, incluyendo la actividad de guerrillas en las áreas débiles del mundo". El asunto, sobra decirlo, resultó profético. El Departamento de Estado -sigue la cita de Wolf- tenía la misma idea. El comunicado añade que "aunque las bandas de la guerrilla no pueden describirse como controladas en un ciento por ciento por los comunistas, estos manejan unas cuantas y han infiltrado otras. La situación general puede explotar peligrosamente si los comunistas deciden volver a utilizar la violencia". De ahí que la conclusión de Wolf sea certera: en Colombia el programa contra la insurrección comenzó más temprano que la insurrección misma.

La vida en los aviones es monótona. Cuando los pasajeros acaban de devorar la comida de plástico que les sirven, hay siempre un momento de silencio. El ruido de las turbinas se oye entonces entre paréntesis, y su única razón de ser es la de servir de fondo a las exclamaciones de asombro de un niño de pocos meses que juega en las rodillas de su madre. Hay algo de bienestar en la penumbra que todavía no requiere de luces. Alguna mujer lee bajo la lamparilla, otra conversa con su marido, un hombre se levanta para estirar las piernas, pero nada perturba esa cierta placidez del ambiente, que adormece. Lo que había que hacer se hizo, y se hizo hasta lo imposible. Entonces el dique contenido de palabras, pensamientos, afectos y emociones se rompe súbitamente, y el espacio estrecho en el que competían adquiere la placidez de una llanura. Ese es el momento para dormir sin pesadumbres ni arrepentimientos. Ya vendrá lo que habrá de venir, que será duro, el desarraigo, la pobreza, la lucha por la vida. Pero ese será el capítulo de mañana. El de hoy, el de este momento, tiene que ver con el hecho de haber dejado atrás las nubes negras de la tormenta, el de encontrar cómo hay una cierta tranquilidad en los visos que deja el sol sobre los espaldares. Sé bien que aquí no hay un sueño: hay una duermevela, en la que me veo a mí mismo como un nuevo personaje de Alicia, al que efectivamente decapitó una orden perentoria de la Reina de Corazones. (¿De Corazones?). Pero no soy solo yo. Somos un batallón de decapitados, de descamisados, de discapacitados, de incomunicados, de seres asesinados. Tal vez la pesadilla provenga de la lectura de Wolf, quien cuenta cómo la Alianza para el Progreso, que puso en marcha el presidente Kennedy para enfrentarse a la agresiva política de Khrushchev cuando este resolvió que la misión del Soviet Supremo era extender a todo el mundo la revolución comunista, se convirtió en una herramienta para recolectar información sobre posibles subversivos. En ese momento la aguda confrontación le indicó a la CÍA la conveniencia de "disuadir a la subversión matando a los líderes subversivos en la medida en que fueran surgiendo, como una forma de amedrentar a los

otros subversivos potenciales". Hubo dinero a rodos, pero fue selectivo: abundante para las regiones que manifestaran "buena conducta", y mezquino para aquellas que por su independencia y su carácter se hicieran mirar con desconfianza. En febrero de 1962, al finalizar el gobierno de Lleras, el general William Yarborough informó que en Colombia había unos 8 mil "torpes e ineptos comunistas", que "no representaban una amenaza real para el gobierno». Sin embargo, siempre según Wolf, el funcionario recomendó a Washington "asignar cinco destacamentos de las Fuerzas Especiales, de doce hombres cada uno, para dirigir brigadas colombianas "de contraaguerrilla", y enviar especialistas en guerra psicológica. Ese fue el origen del Plan Laso (Latin American Security Operation), que buscaba "exterminar a los bandoleros comunistas. El Plan Laso seguía el modelo de guerra de baja intensidad utilizado en Vietnam bajo el mote de 'Programa Fénix' que, se estima, asesinó entre veinte y cuarenta mil civiles" en ese período. Dentro de ese programa se desarrolló la "Operación Marquetalia". Lo que quiso ser una acción cívico-militar, se desarrolló dentro de una dinámica de ataque militar. Y "lo que había sido un movimiento de autodefensa... se convirtió en una guerra de guerrillas". Wolf cita un informe sobre el Plan Laso publicado en 1963. "En Colombia, el ministro de Guerra, general Ruiz Novoa, anunció recientemente al Congreso que el problema de bandolerismo no tiene ahora inspiración política con intereses domésticos. Aunque comenzó como resultado de la rivalidad entre los partidos políticos, hoy en día está influenciado y dirigido desde fuera del país, con centros de dirección ubicados en zonas urbanas que controlan actividades subversivas dentro del territorio. Esa es subversión en la forma más pura". Desde "fuera del país". Tal vez desde Cuba. O desde Moscú. Era necesario luchar contra esa agresión con toda el alma. La "Operación Marquetalia", que reunió a 16 mil soldados, comenzó el 1° de mayo de 1964, una vez el presidente Guillermo León Valencia le anunció al país que antes de fin de año su gobierno acabaría con las "repúblicas independientes", denominación ideada por Alvaro Gómez Hurtado (Sánchez, 2001, 75), quien, como periodista experto en titulares, fue siempre un mago en condensar en una sola palabra cualquier situación por compleja que fuera. Pero Valencia no pudo acabar con las "repúblicas". Y, por el contrario, de la de Marquetalia salió fortalecido el ejército de un hombre que, según su propia confesión, entró a la lucha armada cuando sufrió el despojo de unos pobres domésticos que eran su sustento. Ese hombre era Pedro Antonio Marín, que después se llamó Manuel Marulanda y que luego hizo famoso su alias de Tirofijo. Un hombre y un ejército. Las FARC son hoy uno de los grupos armados más poderosos del planeta y se han convertido en uno de los centros de atención del Departamento de Estado, que las ha ubicado en un lugar de privilegio dentro de su plan mundial contra el terrorismo. De la época de Marquetalia surgen los "manuales" de la CÍA. Wolf trae a cuento algunos de sus principios. Para la agencia, por ejemplo, el "contraterrorismo" es distinto del "terror defensivo". El primero se origina en la imposibilidad de los gobiernos de luchar contra la violencia por medios legales, mientras que el segundo se justifica cuando aquellos se ven obligados a recurrir a la violencia para contrarrestar precisamente la violencia. En tal caso sería importante que los agresores sean "fácilmente identificables", porque, de no ser así, el "terror defensivo" convertiría a los gobiernos en blancos de críticas y acusaciones de represión, lo cual no es deseable para nadie. Paramilitares, guerrilleros, soldados regulares e irregulares, narcotraficantes, delincuentes comunes y menos comunes, políticos corruptos y funcionarios sin conciencia, ladrones de cuello blanco y sin cuello y con cuello de garza, asaltantes de camino y depredadores del presupuesto, enemigos públicos números uno y números dos y mil quinientos, Y nosotros en medio.

¿Sabrá esta mujer con quién está casada su hija? ¿Cuántos crímenes habrá cometido el hombre que entierra las rodillas en mi espalda? Y este niño, ¿cuántos cometerá? Antes de

que se acabe la hecatombe, ¿cuántos muertos engrosarán las estadísticas oficiales, cuántos secuestrados, cuántos heridos irrecuperables, cuántas familias desoladas, cuántas miserias silenciosas, cuántos millones más de desplazados, cuántas promesas incumplidas, cuántas poblaciones destruidas, cuántos seres humanos humillados? Humillado y ofendido debería ser el inri de Dostoyevski sobre la frente de cada colombiano. Humillado y ofendido este individuo que pide limosna para él y su familia en una esquina bogotana bajo el chubasco de las 6 de la tarde. Humillado y ofendido el que roba, el que siembra coca porque no puede sembrar algodón o repollos, el que pasa meses de meses en un calabozo esperando a que alguien pague su rescate, el viejo que pierde su hijo y el hijo que pierde su padre y la mujer que queda viuda o deja viudo a un hombre que la espera y la esperará frente a la ventana hasta el fin de los siglos. Y los niños: humillados y ofendidos todos los niños de Colombia. Todos esos seres indefensos, el viejo y el desplazado y la mujer y el herido por una mina o una bala, se han visto sumidos en una tragedia sin nombre en nombre de la igualdad, de los derechos humanos, de la defensa de unos principios, de un futuro. En la búsqueda de un futuro hipotético los colombianos hipotecamos nuestro futuro. Quién sabe cuántas de estas personas volverán al país algún día, tal vez alguna lleve en sus intestinos un cargamento de coca, es posible que una u otra vaya de turismo a descansar de nuestras miserias, y otra más intente volver mañana mismo con un contrabando de cualquier cosa. Aquí voy yo, con mi hija, desplazado por la violencia. Que salga yo no importa. ¿Pero Manuela? ¿Qué será de Manuela? ¿Cuándo volverá? Cada vez que un niño sale de Colombia, Colombia se hace menos Colombia. Y son centenares de miles los niños colombianos que hoy viven y estudian y piensan en otros países, que sorpresivamente sienten que se hacen poco a poco mexicanos o argentinos o ecuatorianos o canadienses o españoles o británicos o japoneses. En Colombia quedará algún abuelo, un tío calavera, un primo lejano. Pero ellos no volverán. Y ya, me acuerdo: "Pero aquellas que el vuelo refrenaban / tu hermosura y mi dicha a contemplar, / aquellas que aprendieron nuestros nombres... / ésas... ¡no volverán!".

En Le Fígaro se publicó en febrero un estudio de Guy Sorman. El sostiene que la comunidad internacional no entiende, ni quiere entender, el conflicto en Colombia. El diagnóstico que hace de las Farc es descarnado. "En Colombia, el último refugio del guerrillero revolucionario, las Farc, tiene sobre las armas cerca de 30 mil hombres, que asesinan por año unas cinco mil personas y secuestran tres mil. Su cifra anual de negocios supera los 1.500 millones de dólares, de los cuales dos terceras partes provienen del tráfico de cocaína y el saldo de rescates y otras extorsiones". Aunque la pregunta que se formula Sorman es apenas obvia: "¿Tanta violencia y tantos recursos tienen por destino el servicio de los pobres?", en su dramática realidad la respuesta no lo es tanto: "Al contrario -explica él-, son los más débiles en la sociedad colombiana los que sufren lo peor de las acciones de las guerrillas y particularmente de las FARC marxistas. Los campesinos son expulsados de sus tierras para darle lugar a la cultura de la coca y de la amapola y las extorsiones golpean los humildes, mientras las élites tienen al menos el consuelo de pagar guardaespaldas y encerrarse entre vehículos blindados. Son también los pobres los que sufren más directamente la destrucción de la economía colombiana: las infraestructuras bombardeadas, las inversiones que se alejan y los empleos que decrecen, he ahí cómo el narcotráfico prospera a costa de las empresas y de los empleos. Si hace 20 años los guerrilleros marxistas aún podían hacer creer a los campesinos y a los intelectuales crédulos que adelantaban una revolución social, hoy nadie cree en Colombia semejante embuste. Todos los colombianos saben bien que el guerrillero no es más que un empresario de narcotráfico y de secuestros".

Ni más ni menos. Pero, sobra decirlo, no siempre fue así. Al comienzo de la insurgencia comunista, decenas de jóvenes estudiantes a quienes sólo protegía la fuerza de su ideal, siguieron el camino señalado por la guerra campesina. En ese entonces Colombia era un país marcado por la pobreza y las desigualdades, pero no por el delito. Un lúcido analista político, el profesor Ricardo Sánchez, analiza a profundidad ese proceso inicial en su libro *Crítica y alternativa: Las izquierdas en Colombia* (Bogotá, 2001, 358 páginas). En él se entienden a cabalidad los caminos que se frustraron. Allí leo: "Las características de estos movimientos guerrilleros (N. Del A. Los primeros grandes núcleos guerrilleros, que hacia 1952 reunían a más de 20 mil hombres), se resumen en la espontaneidad, la resistencia, lo acentuadamente regional y lo profundamente heterogéneo en lo social y político, ya que contó con la presencia de terratenientes, hacendados, comerciantes, trabajadores y campesinos liberales. Además, como guerra campesina, incluyó un fuerte componente caudillista en la dirección" (Sánchez, 2001, página 57). Luchaban por la igualdad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos más elementales, violentados por las dictaduras conservadoras de Ospina Pérez y de Laureano Gómez. El gobierno de este último había llegado al poder a través de una pantomima de sufragio público. Y valdría, la pena extenderse sobre ese momento porque en la circunstancia política de ahora se repiten muchos de los parámetros que se pusieron en boga para darle un pretendido marco jurídico a 247 uno de los gobiernos más represivos que haya vivido América Latina en toda su historia.

En mi maletín de mano, junto a las cosas de última hora, va el capítulo VII de un espléndido ensayo del investigador norteamericano John D. Martz: *Colombia, un estudio de política comparada*, publicado en 1961, que me remitió Camilo Gaitán bajo un título significativo: "De Laureano Gómez de 1950 a Alvaro Uribe Vélez del 2002". En ese texto Martz analiza un momento de crisis en el cual "el monstruo", mote con el que se conoció popularmente a Laureano, pone "como fundamento de su administración a la autoridad, el orden y la ayuda norteamericana, en un escenario de intensidad guerrillera, de crisis del partido liberal y actividad de la jerarquía católica". Intentaré hacer un apretado resumen del texto, porque en él se encuentra la razón de ser de muchas de nuestras actuales dolencias políticas. Debo reconocer que entro a saco en el ensayo y que cometo una enorme cantidad de arbitrariedades, aunque creo haber conservado su verdadero espíritu: "Era el año de 1949. Luego de un proceso electoral discutible, en el que sólo participaron los conservadores, Gómez prometió una administración dedicada a la justicia y a la participación equitativa de ambos partidos. Habló repetidamente sobre la restauración de la paz y del respeto por la vida humana, agregando que las clases inferiores serían beneficiadas con su política económica. Los dirigentes liberales condensaron la tragedia que vivía el país en una carta al presidente Mariano Ospina Pérez: 'No puede decirse que los liberales se abstuvieran de ejercer sus derechos, sino que fueron colocados en una posición en que les era imposible ejercerlos. Cuando la libertad de expresión y la libertad de prensa aún existían, esto fue manifestado claramente por los órganos directivos del partido... Privados de sus cédulas de ciudadanía, miles de miembros del partido hostigados por gobernadores sectarios y por oficiales de policía carentes de principios, se vieron en muchos casos imposibilitados no sólo para ejercer sus actividades políticas normales sino también los más elementales derechos de ciudadanía... La coacción sobre la conciencia individual... alcanzó límites insospechados aquí, en la que siempre se había considerado que era una tierra de hombres libres'. Los liberales terminaron su carta afirmando que si el Gobierno había decretado el estado de sitio a causa del malestar interno, pero ahora anunciaba que remaban la paz y la tranquilidad, aquella medida extraordinaria debía levantarse de inmediato. De lo contrario, caeríamos en

'una dictadura de inequívoco tipo totalitario'. "La respuesta de los conservadores no se hizo esperar. Para ellos, la violencia era culpa de los liberales. Según Luis Ignacio Andrade, un prominente miembro de ese partido, eran "los liberales los que habían introducido armas de contrabando procedentes de Venezuela para distribuir entre sus copartidarios. "En marzo de 1950, Semana publicó un artículo de Silvio Villegas en que esbozó el carácter del gobierno de Gómez... Este último, según el articulista, había prometido un regreso a los principios constitucionales, pero con fuertes sugerencias de que se estaba considerando la reforma de la Constitución. Villegas, que proponía un sistema corporativo para Colombia, escribió que 'curada la nación de las heridas abiertas por la demagogia, funcionarán normalmente el sufragio popular y las corporaciones representativas y tendremos de nuevo una prensa libre, sin censura previa, pero eso sí, plenamente responsable, como en todos los pueblos civilizados de la tierra...'. "Para Villegas, Gómez, 'víctima de la injusticia, no dejará que se cometa ninguna sin que sea implacablemente sancionada. Ajeno al odio será el magistrado recto e imparcial... y sin más pasión que la grandeza de la patria'. Pero las cosas resultaron exactamente al revés. "La violencia rural continuó a comienzos de 1950. Una gira nacional de Ospina Pérez, programada 'para calmar los ánimos', se convirtió en un fiasco. Las multitudes lo silbaban y denostaban. Al llegar a la costa del Caribe tropezó con manifestaciones coléricas y con turbas amenazantes. Tanto en Santa Marta como en Cartagena, su presencia casi provocó motines callejeros. En los actos oficiales, la llegada de los conservadores de cada localidad inevitablemente suscitaba coros de gritos y acusaciones de traición y tiranía. El presidente se vio obligado a cancelar el resto de su gira. En el entretanto, Andrade declaró en los Estados Unidos que 'había pequeños choques en que participaban simples bandidos'. "Comenzaron entonces a oírse desde las toldas liberales algunas voces colaboracionistas, y el editorial de El Tiempo del 3 de abril pidió cautela frente a quienes predicaban la conspiración como norma de conducta. Pero esa actitud conciliatoria no le sirvió de mayor cosa. La censura de prensa continuó implacable. Ese periódico no circuló el 31 de julio, cuando después de habersele impedido imprimir un comentario editorial, colocó en el respectivo espacio un aviso comercial. El gobierno se negó a ceder aunque el director, Roberto García-Peña, explicó que el periódico había adoptado esta medida después de que los censores habían rechazado tres editoriales diferentes. "Los conservadores entraron entonces en un terreno donde sólo era posible la hegemonía política mediante el empleo de la maquinaria oficial. Las fuerzas de seguridad fueron fortalecidas en las ciudades... Bogotá fue patrullada por grupos de cuatro hombres, en vez de dos, armados con fusiles Mausser cargados y amartillados. También había en las calles policías vestidos de civil en número considerable. En los campos las fuerzas del gobierno fueron aumentadas mediante el reclutamiento de jóvenes empobrecidos, ansiosos de la seguridad representada por la alimentación garantizada y por un inusitado sentido de autoridad. "Gómez tuvo el cuidado de cultivar el favor de los militares. En un banquete que le ofrecieron en la Escuela Superior de Guerra, el teniente general Rafael Sánchez Amaya, jefe militar bajo el gobierno de Ospina Pérez y nuevo embajador en Londres, le ofreció su respaldo afirmando que el Ejército quería 'una Colombia próspera y feliz, una patria en la cual se combinen sin estorbarse la autoridad y el orden, la libertad, las garantías individuales y el trabajo. Una autoridad suficientemente fuerte para que no se doblegue ante el temor, e inteligente para no caer en el engaño'. "Poco antes de posesionarse, Gómez renunció a los intentos de llegar a un acuerdo con los liberales. De manera que desvió hacia ellos la responsabilidad por la ausencia de colaboración, negó que tuviera cualquier fanatismo religioso o participara de una ideología fascista, y cuando un corresponsal de Newsweek le preguntó por Carlos Lleras Restrepo le contestó: '¿Qué espera usted de mí respecto a un hombre que me ha llamado asesino máximo?' "En su discurso de posesión ante los miembros de la Corte Suprema de

Justicia y el Consejo de Estado (por cuanto el Congreso había sido clausurado por Ospina), Gómez insinuó un control gubernamental aún más firme, con la declaración de que toda la nación estaba cansada de la política... y manifestó la esperanza de mantenerla reducida a un mínimo. Sin mencionar directamente el estado de sitio ni la censura de prensa, indicó que sus intenciones eran las de otorgar mayor importancia al orden y a la tranquilidad que a los derechos individuales. Agregó que no permitiría la adulteración de las instituciones del Estado, y que la libertad no conducía a la verdad, sino al contrario... Prometió favorecer los negocios y desarrollar el capital (lo que) debió complacer a la oligarquía que consideraba que un régimen bajo un dirigente más fuerte, representaría un cambio saludable. Y concluyó su perorata afirmando que '... los hombres sólo somos hojas de hierba en las manos de Dios. Que su mano omnipotente salve a Colombia'. "Pero -concluye Martz- Gómez era mucho más que una flexible hoja de hierba, y su gobierno sobrevino mucho antes de que una mano salvadora se extendiera sobre la agobiada República".

La historia se repite. El paralelo entre lo que se vivió en 1949-50 y lo que se vive en el 2001-02 es impresionante. Un gobierno de derecha, endeble, inmensamente desprestigiado, un presidente que no puede aparecer en público sin que se produzca una estruendosa rechifla, un candidato triunfalista que promete "orden, autoridad y ayuda norteamericana", unos equívocos proyectos de reforma constitucional, conatos de censura de prensa, entusiasmo musitado por el "sentido de la autoridad", persistentes declaraciones en tomo al "cansancio de la política", ofertas electorales de reducir esa actividad a su mínima expresión, manifestaciones del candidato mayoritario que dejan entrever que primero están el orden y la tranquilidad y luego los derechos individuales, desespero laboral que obliga a que centenares de miles de jóvenes miren con esperanza la posibilidad de convertirse en soplones al servicio de las fuerzas de seguridad del Estado, y una avalancha de solidaridades en tomo a un individuo situado en las puertas de la Presidencia de la República, que tiene un pasado oscuro pero que se dice "víctima de la injusticia". Trocando sencillamente un nombre, repitamos con Silvio Villegas: "Uribe, víctima de la injusticia, no dejará que se cometa ninguna sin que sea implacablemente sancionada. Ajeno al odio será el magistrado recto e imparcial... y sin más pasión que la grandeza de la patria".

La dictadura civil de Gómez precipitó el derrumbe de Colombia. Para comenzar, hizo exactamente lo contrario de lo que prometió en su campaña presidencial. José Francisco Socarras, un notable psiquiatra que fue el eje de la reforma educativa puesta en marcha por el gobierno de López Pumarejo, hizo el perfil psicológico del mandatario. En su libro Radiografía de un Resentido, que cito de memoria, lo dibujó atado a una serie de pasiones contradictorias, y se refirió largamente a la condición femenina de su temperamento. Gómez era intemperante, estallaba con facilidad en accesos de cólera, trataba de manejarlo todo con mano de hierro, no aceptaba la crítica ni la discrepancia, se sentía el centro de un destino preciso, y su actitud era la de un iluminado que ponía a la moral por encima de la ley y a los principios religiosos como punto de partida de una ética civil. Todo eso condujo, y no era para menos, a que Gómez tratara de influir directamente sobre el manejo de los asuntos de la religión católica, en ese momento la oficial en Colombia. Su actividad en ese terreno llegó a ser un pequeño cisma. Pero si bien el enfrentamiento directo con el Vaticano, que él planteó hablando casi casi en su condición de nuevo Vicario de Cristo en la Tierra, se convirtió en una de las manifestaciones folclóricas de nuestra política, su enfrentamiento con el país provocó una tragedia inenarrable. En la época aciaga conocida como "la violencia", murieron cerca de trescientos mil colombianos y millones más fueron desplazados y pasaron a formar los cinturones de miseria de las grandes ciudades. En ese período Colombia, que

era un país agrario, comenzó el proceso que la llevó a convertirse en una nación mentirosamente urbana. La libertad de expresión desapareció por completo. Revisar los periódicos de la época es ridículo. Mientras el país se desangraba sumido en la hecatombe, las noticias de prensa daban cuenta de los lejanos sucesos de la guerra de Corea, o de las actividades de un club de jardinería o de una exposición canina. Entre 1948 y 1953 los periódicos colombianos pudieron ser escritos y publicados en Suecia o en Filipinas. Y, de otro lado, los propósitos básicos del régimen: seguridad, orden, fortalecimiento del Ejército y de la Policía, no se cumplieron para nada. Por el contrario, el desorden se generalizó y la seguridad se puso en manos de los particulares siendo, como es, un ejercicio inajenable del Estado. Todo ello condujo al golpe militar de Rojas Pinilla. El país, exasperado con los excesos de Gómez y de sus palaciegos rodeó al hombre que le ofreció una única salida. Sin oponer resistencia, el presidente entregó el poder a un general un poco demasiado gris que quería encarnar a Perón. Pero Colombia no era Argentina ni María Eugenia Rojas, la hija del golpista, era Evita. Para comenzar, era belfa. De todos modos hizo intentos por repetir la historia de los descamisados y fundó un organismo para manejar la demagogia del gobierno, que se llamó Sendas. Los primeros conatos de corrupción del régimen militar se dieron en tomo a esa entidad: se habló de las ayudas humanitarias que se desviaron hacia otros fines y engrosaron las billeteras de los intermediarios. De Sendas no quedó nada. Un horrible edificio que oprime con su sombra la vieja iglesia colonial de San Agustín, y que fue declarado monumento nacional a instancias del hijo y nieto de los protagonistas. Y el recuerdo del opulento matrimonio de nuestra Evita doméstica, en fotografías que inundaron todas las páginas sociales, donde se veía al engominado novio peinado a la manera de Perón, y a la novia con su prognosis, sorprendida de estar en el centro de un acontecimiento que creyó reservado para otras, ella que siempre estuvo dispuesta a vestir santos y a cantar melancólicamente "Susana, ven, Susana". Ah, el Tuerto López. Que no era tuerto sino bizco. Que no era cónsul sino poeta. Que no era divertido sino desolado. De él llevo unos pocos versos en la memoria que afuera no dirán nada, porque el Tuerto fue apenas otro producto típico y a los productos típicos nadie los pone junto a las porcelanas de la sala. Y yo desde mi ventana / limpiando un fusil me digo / ¿qué hago con este fúsil? ¿Hasta qué punto podrán conmovier esos versos al estudiante que escriba una monografía? ¿Qué le dirá a una gruesa y garufa alumna norteamericana la picardía que encierra el cuento de la camarera? De manera que acá tenemos una camarera.../ Así la cosa es otra cosa...

Pero ahora las camareras ya no son camareras. Las de los aviones, por lo menos. De cualquier manera esta no lo es, con sus desabridas formas cansadas que piden a gritos un cuarto de hotel (a solas) para dormir a pierna suelta. Como yo, que no puedo dormir, mientras los demás leen periódicos, cierran los ojos, hacen crucigramas. ¡ Si me hubiera tocado como vecina una muchacha! Miro. La única muchacha va atrás, ¡sentada junto a un cura! Él cierra los ojos, seguramente para no pensar en ese escote que no muestra mayor cosa pero de donde salen efluvios (efluvios, se decía una vez) perturbadores. A ella le es indiferente. Viaja sola, o eso parece, tal vez a estudiar o a conseguir trabajo o a hacer una vida. Quién sabe cómo será su vida, quién sabe qué irá a ser de la vida de Fernando, de Julián Quintero, a quien le prometí tantas y tantas veces escribir una columna sobre la juventud, sobre los jóvenes. Qué será de la vida de Manuel Hernández, mi alumno de la Universidad, de quien hubiera llegado a ser amigo para leer a Nietzsche. O de Carolina Lasso Amaya de mi corazón, o de Bibi Rodríguez, o de Ginna Paola Ojeda, con quien fui tan injusto en la última clase, o de Diego Moreno (que no me ayudó a hacer la antología), o de Lina Collazos y de Andrés Carrascal, que ya no serán, como ocurría antes, Andrés Carrascal y Lina Collazos de Carrascal sino, como ocurre ahora, Lina Collazos y Andrés Carrascal de

Lina. Fernando Garavito de Priscilla. Bernardo Gaitán de Olga. Andrés Pérez de quien habrá de llegar, maravillosa como debe. Amigos, personas, rostros, gentes, autoridades administrativas y alumnos por los corredores, largos corredores universitarios para ir encogido, para sentir que uno pertenece a este ámbito, para pasar frente al cubículo de Sandra Borda y saber que ella está allí, estudiando, estudiando, para saber que en la oficina vecina está Sthépanie Lavaux (¿se escribirá así?), y todos los demás, estudiando. Cursos llenos de muchachos llenos de ilusiones, de amores y de tristezas, de preguntas sin respuesta... El "¡ah de la vida!" de Quevedo, con su desolado "nadie me responde". Nadie nos responde. Nunca les di respuesta a mis alumnos de sexto y séptimo, con quienes jugamos el juego de las elucubraciones fantásticas. Nadie volverá a ponerles, con el mismo cariño, esos ceros redondos y expresivos a mis alumnos de primero. Hay que volver al cero: el cero es el origen del universo, mientras que el uno lo es sólo del individuo. Nadie oirá a Diana Báez, a Nataly Jiménez llena de sensibilidad y de palabras, a Rocío Pachón, a Angélica Alba, a Javier Bocanegra, a Sandra Olaya, con quien hicimos un proyecto que dejaría con la boca abierta a todo el mundo, a Roñal Rodríguez que demostró lo indemostrable, a Nancy Andrea Murillo para quien William Agudelo escribió Mis alumnas de química, un poema que ahora me golpea en el fondo del alma. Qué será de ellos, por favor, qué será de ellos. Ellos en este país desolado, en este país roto, país deshecho, país enemigo. "No nos vamos a ir jamás de este país", les dije muchas veces. Y heme aquí, huyendo, resbalando.

Colombia no quiere a sus jóvenes. Allá abajo, en el horizonte que hoy no se ve como horizonte, en el arco iris que hoy no salió (en los aviones no es imposible ver el arco iris), en las fronteras que alguna vez fueron ríos y hoy son rejas, nosotros arrasamos a los jóvenes. Para los viejos, son apenas la carne de cañón que necesitan con el fin de seguir con la matanza. No hace mucho la UNICEF señaló que en Colombia hay seis mil jóvenes casi niños en las filas de los distintos grupos armados ilegales. Y lo dijo el día en que entró en vigor el Protocolo Adicional a la Convención de Derechos del Niño, que prohíbe la participación de menores en los conflictos armados. Colombia lo firmó en septiembre del año 2000 pero aún no lo ha ratificado. Lo ratificará, claro, porque aquí amamos el cascarón de la norma, el "comuniqúese y cúmplase", el "en uso de sus facultades legales y constitucionales". Pero todo eso es puro blablablá. El 40 por ciento del millón de desplazados que la UNICEF calcula que hay en el país (ya se sabe: los organismos internacionales recortan el 50 por ciento de la realidad para quedar bien con todo el mundo), está formado por niños. Cuatrocientos mil niños desplazados. La UNICEF sabrá porqué lo dice, pero quien conozca lo que es nuestra organización celular, aumentará esa cifra: seiscientos o setecientos mil niños desplazados, detrás de una familia que dejará de ser familia en el momento mismo de su desplazamiento. Yo, por ejemplo. Ya no soy familia. Ya no tengo casa ni palabras, ni sonrisas por la mañana ni recuerdos del día que pueda reconstruir por la noche. Lo que construí con esfuerzo se fue a pique. Tal vez alguna vez vuelva a reunirme con ellos, pero ¿quién me regresará a la memoria de mis padres? El desplazamiento no es dejar esta casa, este sitio, este libro, esta silla, esta lamparilla. El desplazamiento es dejar para siempre el alma en otra parte. En Otra parte. Siento que el país se retrasa, que a medida que avanzo se aleja de mis espaldas. La vida en el avión transcurre normalmente, menos en mi corazón que se va solo, cubierto únicamente de epitelio. Centenares de miles de jóvenes y niños desplazados, miles de niños violentados, heridos, asesinados. En el mundo, la tasa media de mortalidad entre los jóvenes es del 26 por mil. En Colombia es del 76. ¿A quién le importa? En los clubes de Bogotá deben reírse. Para ellos, ser joven es ser cifra. Me lo dice Julián en uno de sus mensajes. Y me pregunta, ¿qué es ser joven? ¿Hasta cuándo se es joven? ¿Para qué sirve ser joven?

Envejezco. Sé que cuando me baje de este avión tendré 90 años. De ahí que piense enamoradamente en mi hijo, ¿cuándo volveré a verlo? Cuando la camioneta de vidrios polarizados arrancó justo al frente de la casa (lo confieso: nunca me había subido a uno de esos aparatos), él levantó su brazo con ternura. En ese gesto vi una sombra de duda. Detrás de esos espejos ¿iba yo, o quién iba? ¿Era tal vez el mismo yo del bus y de las clases, del reloj a las 3 de la mañana, del terror cuando se demoraba después de alguna fiesta? "Este hijo fue un pacto que yo hice con Dios", escribió Gerardo Valencia. Gerardo Valencia. Tal vez nunca vuelva a leer a Gerardo Valencia. Vaya y venga. Pero, ¿cuándo veré a mi hijo? Mi vida entera se queda en esta esquina. Mientras él levanta su brazo para decir adiós, siento que me sustraen de mi vida. Ahora, no sé muy bien qué pueda ser "mi vida". Mi vida que estuvo hecha, como todas, de una enorme cantidad de pocas cosas esenciales. No escribí, no pensé, no enseñé, no hice un libro. Este yo que soy yo ha sido poco yo, se ha dejado por dentro. Alguna vez escribí algo que decía, ya no recuerdo bien lo que decía, el problema de uno mismo es que uno mismo viaja por todas partes con uno mismo. Falso. El problema de uno mismo es que uno mismo se queda abandonado en cualquier parte. El otro sigue. El yo por fuera, este que viaja aquí rumbo a quién sabe dónde, forma un pequeño estruendo, dice cosas, escribe en un periódico, perora. Esa es la palabra exacta: perora. Farfulla, emperifolla. El otro, el yo por dentro, permanece atado a un solo sitio, es el anacoreta al que nadie visita sobre una montaña. Palemón, el estilista, sucesor del viejo Antonio. El yo por fuera sabe dónde queda la cueva del otro, pero la evita. Cada vez que la ve en el horizonte, huye. Huye. El yo por dentro siente al enemigo, pero es cobarde y no lo enfrenta. Sabe que está afuera, hablando en voz alta, que estornuda, que opina, que expone su posición, que polemiza, sabe que está a gusto con los demás -y a disgusto-, que lanza dardos envenenados o damos enamorados según sea. El yo por dentro pertenece a su infancia. Juega, solo, con un carrito, en un comedor con cancelas. Es sábado y el sol entra a raudales por las ventanas y hay silencio. Un enorme silencio. Tararea entonces ("tararea para no pensar"), y siente miedo. Adentro hay uno más, agazapado.

Afuera, en el avión, cada uno en lo suyo. Lo mío es reconstruir papeles, historias, documentos, inventarse una vida. Cuando en la universidad -si hay universidad- me pregunten de dónde la tragedia de Colombia, tendré que hablar de los culpables que no tuvieron culpa. Rojas, por ejemplo, quiso afirmarse sobre un binomio, Pueblo-Fuerzas Armadas, y comenzó a pensar en términos económicos, con Antonio García propuso nacionalizar la banca y cambiar la base tributaria y nacionalizar los bienes productivos, y eso está prohibido. Todo está permitido, pero hay algo, eso, que está terminantemente prohibido. Revivió entonces el binomio macabro, y el monstruo se hizo carne y habitó entre nosotros. Para que surgiera el Frente Nacional, que no fue otra cosa que una rígida dictadura y un sistema de corrupción repartido milimétricamente, fue necesario que el gobierno militar comenzara a dar bandazos, que matara estudiantes, que no tuviera estilo. En Colombia no se perdona el no tener estilo. Alberto Lleras tenía un magnífico estilo. Rojas no. Ni su régimen. Los periódicos acabaron con él sin que se diera cuenta. Poco a poco el jefe de gobierno comenzó a mostrar su verdadera naturaleza, era un campesino al que le gustaban las ferias y fiestas, en las que lucía un sombrero alón y un zurriago. Y detrás Pabón Núñez. Y la Nena. La verdadera historia de Colombia debería recuperar las fotografías donde se ve al "excelentísimo señor presidente de las República, general jefe supremo" como le gustaba que le dijeran, acariciando a un torete cebú en la feria de Girardot. O de Flandes. El país mal pensaba. Aja, ¿y Girardot no queda ahí no más, a pocos kilómetros de Melgar donde tiene la finca? He ahí la confluencia perfecta: mejillas rozagantes/ zurriago/ foto/ Pabón Núñez/ caricia presidencial en el testuz del torete/ sonrisa de circunstancias. Y la

imaginación colectiva hacía el resto: esa misma noche el torete estaba (estando o no estando) en los establos de Melgar y santas pascuas. A punta de pequeños pellizcos de monja como ese, en los que era experta la sofisticada burguesía bogotana, el binomio hizo agua y terminó por derrumbarse. Más que la clausura de los periódicos y que la represión contra el movimiento estudiantil, las medidas económicas que alguien filtró que tomaría el gobierno y las fotografías de los toretes y de los consejos de ministros en la piscina de la finca (Pabón Núñez en vestido de baño era horrible), dieron al traste con un gobierno que, entre otras cosas, no fue mejor ni peor que los que le siguieron. Diez de mayo de 1957. La primera página de El Espectador, que resucitó ese mismo día, es la premonición de treinta años de historia. En ella se ve la magra efigie de Alberto Lleras, con su sonrisa toda llena de dientes, haciendo la "V" de la victoria. Una victoria implica una derrota. Triunfó el Frente Nacional, perdió la democracia. Triunfó el bipartidismo, perdieron las nuevas expresiones políticas. Triunfó el reparto milimétrico, perdió la política. Triunfó la división del presupuesto, perdió la honestidad con que se había manejado entre nosotros la cosa pública. En medio de la euforia, nadie examinó con rigor los propósitos del Frente Nacional. Como la Constitución de 1863, el Frente Nacional se pensó para una república de ángeles. Pero Colombia nunca fue una tierra de ángeles. Eso se lo dejamos a los suizos (!). La historia contemporánea de Colombia comienza el 1° de diciembre de 1957. Con el plebiscito. Ese día, sin que nadie se diera cuenta, el país le dijo sí al abismo. Ese día nacieron monseñor Concha Córdoba y Tirofijo y José Name Terán y Emilio Lébolo y Castaño y Mancuso y las listas unipersonales y Pablo Escobar y el robo del presupuesto y los sicarios y el dinero fácil y el mono Jojoy y el fin de los partidos. La luna de miel duró muy poco. Como todas las lunas. Ni siquiera el enorme prestigio de Alberto Lleras logró detener la caída. Cuando cuatro años después terminó su gobierno, algunos espontáneos le hicieron una manifestación de respaldo. Pero ya se notaba el cansancio. Desde 1962 llevamos cuarenta años de cansancio.

García Márquez es tan visceralmente nuestro porque ha escrito la historia de nuestra desmesura. Los colombianos sometemos las ideas a las estadísticas. Un libro tan esencial como El coronel no tiene quien le escriba, que es, quizás, la mejor de sus novelas, quedó aplastado por el cuento de los cien años. ¡Cien años! Ideal para el modo de ser colombiano. Cuarenta años de cansancio. Cincuenta años de guerrilla. Treinta y dos años de narcotráfico. Doscientos años de guerra. Cuando un colombiano oye una cifra, saca un lápiz y apunta. Quinientos años de miseria. Y lo que viene. Y lo que vendrá. En lo que viene para mí, en lo que vendrá, tendré que hablar muchas veces de Colombia. Por fuera yo seré "el colombiano". Aquí no. En este avión todos somos colombianos. Si habláramos de alguien tendríamos que hablar de la suiza de la blusa de pepas. Pero acá nuestro denominador común sigue siendo el mismo, y seguirá siéndolo hasta que lleguemos al aeropuerto y nos reunamos alrededor de las bandas metálicas que traerán los equipajes. En ese momento, bajo las luces de neón y con la ropa arrugada, habrá todavía un nosotros para nosotros. Allá estarán la chica de los efluvios y el cura y la familia de vacaciones y el hombre con la droga en los intestinos, y estaremos Manuela y yo, y veremos a la tripulación que pasa por un costado con un no sé qué rictus inevitable. Dentro de pocos minutos cada uno seguirá su camino y será un colombiano más desperdigado por el mundo. A la mañana siguiente irá de compras. -¿Y usted de dónde es? -De Colombia. -Ah, colombiano. Y ahí terminará el diálogo. Si el interlocutor es tremendamente culto y ha visto el noticiero de la noche anterior, tal vez añada una palabra: -Dura la guerra, ¿no? -Dura -dirá uno. Y sonreirá antes de empaquetar el pan y las naranjas. Entonces comenzará a ser el solo, el separado. Cuando, desde la ventanilla del bus, veía la multitud de transeúntes, el único denominador común era ese: "colombiano". Todos, viejos, jóvenes, mujeres y hombres y raponeros y vendedores de

lotería y majestuosas damas en sus carros y gamines y empleados, inclusive perros callejeros y gerentes... todos colombianos. Unos feos, otros lindos, o altos o gordos o los colombianos sometemos las ideas a las estadísticas, viejos o ricos o pobres o buenos o malos o calvos... todos colombianos. Lo único que Julio Flórez escribió bien en la vida, fue su epitafio: "Julio Flórez, colombiano". Y ahí quedó, a la espera del fin de los siglos de los demás porque sus siglos terminaron. ¿Dónde terminarán los míos? Me hubiera gustado que mi placa dijera "Bogotá, 1944 - Somondoco, 2020", o cualquiera otro de esos sonoros nombres nuestros, Turmequé, Guatavita, Tocancipá, Suesca, tan olorosos a hierbabuena y carbón de palo. Pero no. Dirá Bostón. O Lisboa. O Vancouver. O cualquier otro sitio. Pero, eso sí, exigiré que diga, en pulcro castellano: Yo bien, ¿y usted? Porque, seguramente, allá estaré mejor que en este sitio. (Eso, si tengo placa y epitafio). Elucubraciones, elucubraciones. El viaje continúa interminable. De manera que escarbo en mi maletín a ver qué otra cosa se enredó en mi salida. Veo, pues, un artículo de Zuleta, que me hizo llegar Gerardo Rivas, una de las personas que tratan de pensar a Colombia de otra manera: La guerra es una fiesta. Como todas las suyas, la argumentación de Zuleta es muy lúcida. Parte de un supuesto: "una sociedad armónica es una contradicción en los términos". Sigue con una propuesta: "construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan desarrollarse sin que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro". Anota un dato: "todo el mundo conoce de antemano la desproporción existente entre el valor de lo que se persigue y el valor de lo que está dispuesto a sacrificar". Cita a Shakespeare y a Hegel (es Zuleta). Y concluye: "Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría a paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz". Sin conocer a su interlocutor, treinta años después sesenta profesores de los Estados Unidos firmaron la "Carta de América", un "manifiesto a favor de la guerra", que apareció publicado en La Vanguardia, de Barcelona, el 15 de febrero de este año. Ellos hablan, claro está, del terrorismo, del atentado del 11 de septiembre y de la pretendida cruzada mundial contra los países del "eje del mal". Firman los conservadores: Huntington, Fukuyama, Walzer o Putnam. No firman los de avanzada: Chomsky, Sontag o Said. "La guerra es un asunto serio", dicen ellos. De ahí que deban conocerse los motivos por los cuales se desata. En este caso, sostienen, el motivo es la defensa del artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre ("todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y dignidad"), la libertad de opinión y de culto, y la lucha contra los que matan en nombre de Dios. Luego formulan su tradicional autocrítica: "nuestra nación ha sido arrogante e ignorante con otras sociedades" y "ha llevado a cabo políticas mal orientadas e injustas", por lo que, "como nación, hemos traicionado nuestros propios ideales", así que "no podemos imponer nuestros principios morales si, al mismo tiempo, no reconocemos nuestros errores". Pero ninguna invocación a ningún hecho justifica la masacre masiva de inocentes. Y añaden que hay "ciertas verdades morales fundamentales que son reconocidas en todo el mundo", por lo que las características de un atentado como el de Nueva York -con tres mil muertos civiles- "atenían no sólo contra Estados Unidos sino contra la humanidad". Habría que pensar que nuestros muertos civiles superan con creces esa cifra. Según el informe sobre derechos humanos y DHI, publicado por el Ministerio de Defensa {<http://www.mindefensa.gov.co/publicaciones/ministerio.html>}, sólo en el año 2001 los grupos guerrilleros asesinaron a 1.060 personas y los paramilitares a 1.028... Los paramilitares cometieron el 64.1 por ciento de las masacres y la guerrilla el 35.9

por ciento; los paramilitares fueron culpables del 46 por ciento de los desplazamientos forzados y la guerrilla del 12 por ciento. Si le creemos a Alirio Uribe, en los últimos tres años los muertos suman diez mil. Una sencilla multiplicación nos llevará a concluir que en los últimos cincuenta años son más de cien mil. ¿Pensaría Huntington (Fukumaya no, porque Fukuyama nunca ha sido capaz de pensar nada) que ese es un atentado contra la humanidad? O, según expresa Sorman en Le Fígaro, "no despertemos la opinión que duerme ni al político que la anestesia y dejemos que los colombianos mueran: ¡queda tan lejos Colombia!". ¿Hay muertos por estratos? ¿De qué estrato son los colombianos? Cien mil muertos y la guerra sigue tan campante. Y sin que se sepa bien por qué se lucha. ¿Por el pueblo? ¡Pamplinas! ¿Por el artículo 1° de la Declaración de los Derechos Humanos? ¡No me hagan reír! En Colombia luchamos por el narcotráfico. Sorman habla de la soledad colombiana. "El asunto de las Farc no nos concierne en la medida en que combatirlo es un negocio interior de Colombia". "Pero las Farc, añade, trabajan para la exportación. Casi la totalidad de la droga que cultivan y procesan viene destinada a los consumidores norteamericanos y europeos. La toxicomanía lleva envuelto el problema de los verdaderos beneficios económicos del narcotráfico. Un gramo de cocaína significa tres dólares para el coccalero colombiano que la cultiva, mientras se la vende a 100 dólares a los consumidores neoyorquinos o parisienses. Del valor del mercado mundial de la droga, estimado en 150 mil millones de dólares, apenas el tres por ciento se queda en Colombia. Entre tanto, el simpático guerrillero colombiano asesina a cinco mil de sus conciudadanos por año, secuestra a tres mil y arruina a su pueblo para suministrar un poco de placer al jet-set de aquí, pero no al de allá". Aproximado, pienso, no muy riguroso. En la comunidad internacional también hay facciones. Las FARC son un cartel, en efecto, pero faltan los otros, faltan el cartel de los paramilitares y el de los delincuentes comunes (eso que ahora han dado en llamar "delincuencia organizada"), y los carteles que no son de la droga, el cartel de la gasolina, y el de las armas, y el del presupuesto y el de la politiquería. Pero luego entra en su análisis al tema de fondo y se aproxima mucho más a la raíz del problema. "... La llamada guerra contra la droga, que adelantan desde hace más de 40 años los Estados Unidos y Europa, ha fracasado... Cada año, gracias al apoyo de Estados Unidos, se destruyen 150 mil hectáreas de plantaciones de coca por fumigación; los coccaleros replantan anualmente otro tanto, o un poco más... Si mañana la ONU prohibiera la sopa de ortigas, las ortigas producirían tanto como la coca y los campesinos de Colombia se dedicarían a cultivarla. El precio de la coca y de la amapola es apenas la consecuencia de su prohibición y los guerrilleros disfrutaban de esta prohibición, tanto como las mafias americanas se beneficiaron de la prohibición del alcohol en la década del 20. Es así como el guerrillero aparece con la aureola de una doble protección internacional, primero el romanticismo revolucionario y enseguida la prohibición de la droga... Unirse a los colombianos en su lucha contra las FARC supondría reconocer que esos seudomarxistas no son más que un sindicato del crimen. Si llegamos a suponer que este ejército despedaza a las FARC y a las otras guerrillas del mismo tipo, ¿desaparecería la base económica de esos movimientos? Por supuesto que no. La economía de la droga, contrapartida de su prohibición, estará siempre presente. Agreguemos otra paradoja de esta guerra ridícula: no deja de ser extraño, de parte de las naciones que se dicen en alianza contra el terrorismo, el que se dediquen a combatir el blanqueamiento de los fondos que alimentan esas redes terroristas, sin preguntarse si no es la prohibición la causa primera de su prosperidad... Si liquidar las guerrillas y reducir el terrorismo depende de secar las mentes de sus recursos, esta operación exigiría una política más inteligente que la prohibición... Hay varias otras alternativas a la prohibición, y no será del caso citarlas todas aquí. Mencionemos solamente una al pasar, que es la de convertir la droga en un problema médico. Pero ese debate exigiría el coraje político que hace falta en

este momento en Europa y más aún en Estados Unidos. Es que la opinión no ha comprendido todavía la relación que existe entre prohibición, droga y terrorismo. Así que no despertemos la opinión que duerme ni al político que la anestesia y dejemos que los colombianos mueran: ¡queda tan lejos Colombia! Pero al menos, sepamos que esos soldados mueren allá, por nosotros los de aquí".

¡Queda tan lejos Colombia! Hace rato, supongo, dejamos atrás la costa. Viajamos en plena noche, y el avión no oscila siquiera una sola vez de manera que alcance a ver los plateados visos del Atlántico. ¡Lejos! Lejos ¡ay! del sacro techo/ que mecer mi cuna vio/ yo infeliz, proscrito arrastro/ mi miseria y mi dolor. El primer Caro y el primer romanticismo colombiano. No sé por qué se agolpan en mi memoria (en mi mala memoria) todos los versos que aprendí cuando joven, y no precisamente para recitárselos a María Esther Marriaga, de quien estaba profundamente enamorado, porque ¿qué ventaja habría sacado de decirle con voz tribunicia aquello de Patria, te adoro en mi silencio mudo/ y temo profanar tu nombre santo, del segundo Caro, si Mary lo que quería era ser adorada ella sola sin competencia con la Patria? Pero durante años me dediqué con entusiasmo a seguir la pista de Colombia en sus poemas, desde el Tierra buena, tierra buena/ tierra que pone fin a nuestras penas, de Castellanos, hasta el reclamo de X-504 que quería una palabra honda, como pez en el agua, y más adelante hasta el Es ahí, en la aventura de la sopa, de María Mercedes Carranza, sabiendo que era yo, y no otro, quien había intentado convertir a ese ser libertario en alguien doméstico, preocupado por los bombillos que no funcionan, por el pescado frito en la cocina, y constreñido porque ella sabía precisamente que afuera estaba el mundo, un mundo en el que yo no participaba, dado que era la segunda persona de la santísima trinidad formada, además, por el demonio y la carne, y aterrado, claro, por las pompas y las vanidades. Va quedando tan lejos Colombia. Por lo menos esa Colombia de antes, que no era esta de ahora sumida en la hecatombe, a la que Echandía resumió en una de sus frases magistrales: un país donde se podía ir a pescar de noche. Cuando Echandía planteó su idea, ya era por completo utópica, porque ya habían pasado por encima de nosotros Laureano y Rojas y el plebiscito que ellos provocaron. Y ya vivían por ahí, Sangrenegra y Desquite y Efraín González y Chispas y un guerrero menor que, se suponía, iba a ser capturado de un momento a otro: Tirofijo. Pero la hecatombe siguió su curso sin que los potentados de siempre se mosquearan, de manera que las reivindicaciones sociales que dieron origen a la segunda edición del conflicto permanecieron en sus trece, y buena parte del país justificó el comienzo de las guerrillas comunistas, aunque nadie fuera eso tan extraño sino, por el contrario, todos cristianos viejos y de 5 en conducta, con certificados auténticos sobre su creencia en el sagrado derecho de la propiedad y en el Sagrado Corazón y en las instituciones. Pero llegó el narcotráfico. Y con el narcotráfico llegaron las guerras territoriales y la defensa por mano propia: el MAS, los Pepes, los extraditables, las autodefensas, las Convivir, los paramilitares. Y al tiempo con los paramilitares (que reunieron las expresiones más primitivas de un país primitivo como el nuestro) se acabó la política. En Colombia, desde hace años se acabó la política. Hoy son los industriales y los grandes consorcios los que eligen. Y eligen, claro, a quien les conviene, personas de débiles psicologías como Andrés Pastrana, que, para colmo, fue elegido por uno de nuestros grandes consorcios por fuera de la ley, las FARC. El cataclismo en Colombia se ha analizado desde múltiples enfoques, con las más diversas ópticas, con base en los más certeros y en los más peregrinos datos. Tomás Eloy Martínez, por ejemplo, sostuvo en La Nación del 2 de marzo de este año, que Pastrana se empeñó en su proceso de paz porque "estaba convencido de que una campaña masiva contra las FARC desangraría a Colombia", y le podría costar "por lo menos doscientas mil vidas de campesinos inocentes, más de cinco mil millones de dólares a una

economía ya desangrada y, lo que es peor de todo, la destrucción de la democracia". Uno de los supuestos de Martínez es erróneo. ¿De qué democracia habla? En Colombia no hay democracia. Colombia tiene un régimen de fuerza, que se apuntala cada cuatro años sobre unas elecciones aparentes. Y es muy conservador en sus cálculos: ¿doscientos mil muertos inocentes? No. El conflicto, si comienza de acuerdo con los parámetros que ha fijado Alvaro Uribe, va a durar entre diez y veinte años, y le va a costar al país más de un millón de víctimas, la pérdida de la escasa soberanía que aún le queda y la destrucción total de su economía. (Con el fin de llamar la atención de la comunidad internacional, Sorman anota, entre otras cosas, que las FARC arrasan anualmente 150 mil hectáreas de bosques anuales para dedicarlas al cultivo de la coca). Ahora bien, Martínez es muy acertado en una serie de precisiones. "Casi el único proyecto político de la presidencia de Pastrana -dice- era sellar la paz, y sin embargo el precio que se pagó para ganarla fue más cuantioso y terrible que el de una guerra". "En el río revuelto de la guerra colombiana, los únicos que están fortaleciéndose son los paramilitares... Más crueles y bárbaros que ninguno de los bandos en pugna, aprovecharán el conflicto para extorsionar a los indefensos agricultores y entrar a saco en las zonas de las que están retirándose los guerrilleros. No será fácil para el gobierno sacarlos de allí". "Rara vez los adversarios combaten entre sí (porque) su campo de batalla es el cuerpo de los campesinos". Y en las cifras, que se toman mucho más dramáticas si son expuestas por un latinoamericano que vive el conflicto de su propio país y que se horroriza con el nuestro: "En los últimos cuatro años, se han fugado 4.000 millones de dólares, según las cuentas de la Bolsa de Valores, y las inversiones han descendido de un 15 a un 6,6 por ciento del producto bruto. El gasto militar se ha duplicado desde 1990. Las obras de infraestructura que han sido destruidas son irreemplazables: dos grandes acueductos, 1.050 torres del sistema eléctrico, lagos de petróleo derramados. Sin contar el daño que esas catástrofes causaron a las escuelas y hospitales, las muertes derivadas de la guerra civil – sólo durante el último proceso de paz- aumentaron un 66 por ciento". Y una última estadística: en la administración Pastrana los desplazados pasaron de uno a dos millones de personas. No está bien, de todos modos, que le dé a los paramilitares la categoría de "ejércitos armados por los hacendados para protegerse de las guerrillas", porque ellos son tan solo una organización de desalmados sicarios. Tampoco que generosamente los elimine del grupo de "los irregulares", ni que diga que una cuadrilla de malhechores, como las Farc de hoy en día, mantienen en alto unas banderas que hablan del justo reparto de las tierras y de concesiones a los campesinos. Uno no se puede quedar estacionado en los primeros años de la década del 70. Como un Buick. Pero la conclusión es tan positiva como esperanzadora. Martínez resume en pocas palabras la historia colombiana de las últimas décadas, comparándola con la de Argentina y Venezuela, y su balance es positivo. "El caso de Colombia es uno de esos milagros de supervivencia difíciles de explicar... Colombia empezó el siglo XX con una guerra de mil días, que cobró cien mil muertos, y luego soportó las interminables batallas entre liberales y conservadores desde 1930 hasta 1962, en las que perecieron otros doscientos mil. Cuando deja de crecer en una dirección crece en la otra, y los vendavales pasan pero el país sigue en pie, como un árbol flexible. Ahora lo amenaza la sombra de George W. Bush, cuya protección podría asfixiarlo, aunque Colombia sabe cómo sortear esos abrazos. La paz ha terminado, pero si la historia se repite, saldrá airosa una vez más de la tragedia de esta enésima guerra". Pero para salir airosa le falta recorrer un largo camino. El fracaso y posterior derrumbe del proceso de paz de Pastrana llevó al país a embarcarse en un proceso de guerra. La reacción fue lógica. La oscilación a que nos hemos venido acostumbrando los colombianos, nunca nos había amenazado con un bandazo tan profundo. Pescando en río revuelto, Alvaro Uribe Vélez ha anunciado que corregirá de un solo plumazo la torpe política errátil de Pastrana. Y los colombianos, crédulos y

desesperados, están dispuestos a creer cualquier cosa. En un universo que sólo debería oír propuestas de paz, el discurso de Uribe Vélez es drásticamente belicista. Lo inició hace mucho tiempo, cuando su padre fue asesinado en hechos que nunca se aclararon a fondo. En efecto, no hay una providencia judicial que demuestre que lo afirmado por el candidato en el momento de la tragedia sea cierto. "Mi padre -le dijo Uribe a El Tiempo el 14 de junio de 1993- se convirtió en otra víctima de los bandoleros de las FARC, que han condenado a muerte a los hombres del campo". Y acto seguido fustigó la amnistía concedida por el gobierno de Belisario Betancur a los alzados en armas: "El asesinato de mi padre... es uno de los diarios hechos que están ocurriendo en un país que ha amnistiado a los bandoleros pero ha permitido que estos condenen a muerte a los hombres de trabajo". Juez y parte. En un eventual gobierno suyo no se buscará justicia sino venganza. Hay algo extraño en el comportamiento de Uribe. ¿Un dejo inestable? ¿Una profunda inseguridad? No sabría decirlo. Más que un político es un iluminado. Pero no un iluminado a la manera del santón de La guerra del fin del mundo un iluminado a la manera de Trujillo. Por encima de sus educadas maneras de Harvard quedan restos de sus arbitrariedades de hacendado. En esa persistencia hacia la ruana, el carriel y la arepa, algo hay de uniformes, de charreteras y condecoraciones. No es un demócrata, eso es evidente. Es un individuo que se convence fácilmente de su verdad, mejor, de la mentira que él convierte en su verdad, y que entiende a los demás como los seres que vinieron al mundo para aceptarla. No argumenta con facilidad, su discurso es reiterativo y pobre, se apega demasiado al libreto. Su libreto es el de alguien enérgico pero a la vez comprensivo, a quien se puede examinar con lupa. Un buen padre de familia que no se separa de sus hijos cuando llega a los cincuenta años, que no se casa nuevamente, que no se embarca en tener a una niña. Todo eso es ridículo. En el fondo de la admiración que siente por su padre hay mucho de fastidio. Era parrandero, era fachendoso, era mujeriego, era hablador... un auténtico "pico de oro". Él no, él tiene que ser distinto, sano, discreto, fiel, eficaz, preciso. Estudia intensamente pero no por el placer de estudiar sino por el hecho de ser alternativa. (Entre otras cosas, de esos estudios que le atribuyen sus amigos poco queda y queda nada). Hace yoga, ¡qué tal que no lo hiciera! Es un pequeño tirano. No le gusta que le lleven la contraria, porque la oposición lo desconcierta. Sus respuestas son lentas, poco imaginativas. Tiene una voz pausada pero tensa. Una mirada apacible, que en un segundo podría convertir en un incendio. Si tuviera un gato le acariciaría el lomo con ira contenida por tenerlo. Como las brujas. En los cuentos infantiles de brujas, los pobres gatos negros maullan aterrorizados. Ojalá el país no termine por maullar pidiendo misericordia. Uribe no discute: ordena. No argumenta: impone. Debe ser tremendo ser su subordinado. Quién no se acuerda del cuento de Simón Strong en el libro sobre Pablo Escobar (¿Whitewash?). Cuando la conversación sobre la política y el tráfico de drogas que mantienen un flemático periodista británico y un nervioso senador suramericano avanza calmadamente, Strong le pregunta por alguno de sus partidarios que fue ahijado político de Pablo Escobar. A Uribe se le descompone la sonrisa. Pero sigue. Entonces, de inmediato, Strong mete la pata (mete la pata es un decir): le pone sobre el tapete el cargo que tuvo en Aerocivil, y ve, aterrado, cómo su pequeño interlocutor se levanta, grita, salta iracundo, corre escaleras arriba a buscar a sus guardaespaldas. Luego regresa y grita: ¡soy honesto! ¡soy honesto! ¡soy honesto! El pobre Strong anota que él nunca dijo lo contrario. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a suceder cuando la Corte Constitucional rechace uno de sus decretos? Mejor no meneallo. Porque en Colombia, y tal vez por eso nos va como nos va, estamos acostumbrados a la bobada según la cual "el golpe avisa". Pero no, el golpe no avisa: el golpe mata. Para decirlo con suavidad, la fama de Uribe no es la mejor. A lo largo de nuestra historia política reciente hemos tenido una gran cantidad de candidatos con buena fama. Gerardo Molina, por ejemplo. ¡Qué gran presidente hubiera

sido don Gerardo Molina! O el López Michelsen del 62, tan distinto del López Michelsen del 74. En el 62 López hubiera sido un gran presidente, porque en ese momento aún tenía sobre sus hombros la carga de ideas que abandonó poco a poco en el camino. O Lleras Restrepo en el 78. Lleras hubiera sido un presidente de lujo. Como Echandía en el 50, o Indalecio Liévano en el 82. Candidatos con buena fama. Pero la fama de Uribe anda por los suelos. Y no porque tenga enemigos que se hayan dedicado a proclamar a los cuatro vientos sus dolencias y debilidades, sino porque sus hechos han sido de verdad oscuros. Ricardo Ferrer, un periodista colombiano que vive asilado en España, y Mauricio Lázala, un politólogo también colombiano que reside en México, analizaron hace poco algunos de los pormenores de Uribe y le recordaron al país algo que tenía por completo olvidado: "Entre 1976 y 1977, Uribe fue jefe de Bienes en las Empresas Públicas de Medellín y desde ese cargo lideró la negociación de tierras y el traslado de la población del viejo al nuevo poblado de El Peñol. Supuestamente esa experiencia lo puede presentar como un buen administrador. Pero los habitantes de El Peñol y Guatapé en el oriente de Antioquia cuentan la misma historia desde los muertos y desaparecidos que sufrieron durante la negociación por las tierras... El proyecto hidroeléctrico de El Peñol fue más impuesto que negociado, y la población civil sólo conoció gases lacrimógenos, expropiaciones de tierras y destierro forzado". Se trata de un extenso estudio. Leo fragmentos: "Mientras Uribe Vélez gana poder político, ataca sistemáticamente todo lo que se parezca a movimientos sociales, reivindicaciones laborales, jornadas de protesta y grupos defensores de los derechos humanos, porque todo esto para él huele a guerrilla. Tal política le genera apoyo entre la dirigencia empresarial, amiga de recortes en los salarios, bajas pensiones, poca estabilidad laboral y carencia de derechos sindicales". La frase queda en punta. Entonces concluyo: pero no en un país donde las iniquidades sociales y políticas no van a ser solucionadas precisamente con el liberalismo económico y el pensamiento único. "La sombra más sangrienta que pesa sobre las páginas del historial de Uribe Vélez -siguen Ferrer y Lázala- se produjo en 1997, año en el que ocurrieron las principales masacres de Antioquia, debidamente documentadas por periodistas y activistas de derechos humanos, en la zona del río Atrato. Las masacres de civiles fueron cometidas en la jurisdicción de la Brigada XVII, bajo el mando del general Rito Alejo del Río Rojas, quien se encuentra actualmente bajo proceso de investigación judicial. Durante el tiempo en que ocurrieron los abusos contra la población civil, Uribe omitió interceder a favor suyo y no procedió contra Del Río. Si el general Del Río fue el ejecutor de las masacres en Urabá y en el Atrato, el gobernador Uribe Vélez fue el gran encubridor de las mismas. Era imposible ignorar el asunto cuando los muertos flotaban en el Atrato a la vista de todo el mundo: los escuadrones de la muerte habían dado la prohibición de recoger los cadáveres. "(Los paramilitares) tienen interés en las selvas del Atrato porque allí pueden sembrar coca, instalar laboratorios y sacar la cocaína por las rutas de Panamá. Desde mayo de 1997 hasta mayo del 2000, las Autodefensas Unidas de Colombia tomaron el poblado de Vigía del Fuerte como una de sus bases de operaciones. Desde allí sus hombres controlaron el Atrato hasta su desembocadura en el golfo de Urabá. Durante tres años las autoridades locales se hicieron las de la vista gorda ante las docenas de cadáveres que flotaban en el río.

Las pruebas acumuladas contra el general Del Río señalan (que hubo) un trabajo conjunto entre escuadrones de la muerte y el Ejército Colombiano en las regiones de Córdoba, Urabá y el Atrato. En el seguimiento como periodista que Ricardo Ferrer hizo en la zona del Atrato, confirmó dicha cooperación, y lo mismo ha sido denunciado por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch".

Uribe es especialista en plantear disyuntivas a 180 grados de distancia. Ahora mismo la suya es una propuesta sustancialmente distinta de la de Pastrana, como su vida es sustancialmente distinta de la de su padre a pesar de los caballos y de las cabalgatas; como su política pretende ser transparente con partidarios como el general Rafael Samudio Molina, el gran responsable, junto con Betancur, del derrumbe institucional que sufrió el país alrededor de la hecatombe del Palacio de Justicia; como su propuesta busca desarrollar una guerra frontal sin tener una plataforma económica que la sustente... sesenta jóvenes colombianos entre los 16 y los 28 años "que quieren estar vivos y tener empleo en el año 2006" y que, tal vez detrás de ese propósito esencial, mandaron un mensaje a miles de personas por Internet, citan en él a Salomón Smith Bamey, de la Global Emerging Markets Strategy, y afirman que "su programa económico es el más incierto de todos. La financiación de la guerra puede agotar el presupuesto nacional en seis meses, multiplicando todavía más el desempleo, los impuestos y la pobreza. Su retórica podría disparar un incremento en la violencia". Según ellos, Uribe es el candidato de la guerrilla, la cual quiere "demostrar la impotencia del Ejército para ganar la guerra, evidenciar los excesos de la derecha en el poder y recuperar su prestigio nacional e internacional". "Ningún proceso de paz en el mundo en los últimos 50 años ha sido resultado de la guerra -dicen los jóvenes-. Todos han sido producto de procesos de paz serios, persistentes y dignos. En Centroamérica, donde los hubo, la economía crece dos veces más que en Colombia.: Crecimiento del PIB 1990- 1999: El Salvador: 4,4%, Guatemala: 4,2%, Colombia: 2,5%. PIB por habitante: El Salvador: 2,3%, Guatemala: 1,5%, Colombia: 0,5% (Fuente: Cepal. Revista Diners No. 383. Febrero 2002)".

Las lucecitas de la cabina indican que los pasajeros debemos abrocharnos los cinturones y enderezar los espaldares de las sillas. Allá, lejos todavía, se ve la ciudad de destino. Mientras Manuela despierta, feliz por la aventura, y me pregunta si llegamos, la mujer de la blusa de pepas sonríe de soslayo. Tengo la sensación, no sé porqué, de que se siente "hermosamente viva" como en el impecable soneto de Gaitán Duran. Sé que estoy vivo en este bello día/ acostado contigo... Ese verso, claro, no tiene nada que ver con esta señora entrada en años que ha perdido las formas. (La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa y ha perdido la risa y ha perdido el color). ¿Pero tuvo, no Darío ni la princesa, sino el enamorado soneto de Gaitán, tuvo, digo, que ver algún día? ¿Qué hubiera pasado si en lugar del marido, que debe vender salchichas en Los Ángeles, un su enamorado le hubiera recitado, después del amor, Sé que estoy vivo en este bello día/ acostado contigo. Es el verano./ Acaloradas frutas en tu mano/ vierten su espeso olor al mediodía...? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez ella no estaría en este avión, en esta hora, sino sería la reencarnación de Simonetta Vespucci, ese hermoso invento de Germán Arciniegas, o de Lucrecia Borgia, la bella y deseable, la detestada y calumniada por muchos. Pero no es Simonetta ni Lucrecia, y ese instante maravilloso transcurre sin querer detenerlo. Cuando se abra la portezuela del avión y salga hacia el frío nocturno, cuando me sumerja en un sitio que no es el mío, que no me dice nada, un sitio que no conozco, cuando la mano de mi hija se apoye sobre la mía buscando la seguridad que no tengo, y sienta que el mundo ya no es mi mundo ni mis pasos mis pasos, sabré que todo quedó atrás y comenzaré a amarlo, a desearlo. Necesitadamente a amarlo. Enamoradamente a desearlo.

JOSEPH CONTRERAS

Magna Cum Laude por la Universidad de Harvard, y Master of Science for la London School of Economics, lleva 22 años como corresponsal de Newsweek en mas de 40 países. Ha sido

Bureau Chiefes México, Buenos Aires, Johannesburg, Jerusalem y Miami. Actualmente es el director responsable para América Latina, desde la redacción de Miami.

“El ascenso vertiginoso de Alvaro Uribe Vélez, refleja el hartazgo y la desesperación que millones de colombianos sienten hacia dos temas importantes: la cínica explotación del fracasado proceso de paz por parte de las FARC, y la politiquería corrupta e ineficaz de los dos partidos tradicionales de Colombia, liberales y conservadores. Paradójicamente, Alvaro Uribe Vélez podría ser un aliado idóneo para la Administración Bush durante los próximos cuatro años. Uribe ha hecho un llamamiento pidiendo a Washington más asistencia militar, para ayudar a Colombia en su batalla frontal contra la guerrilla y el narcotráfico. No obstante, Uribe podría ser manipulado y manejado a su antojo por los norteamericanos, por las mismas razones que debilitaron a Ernesto Samper frente a Washington durante su gestión como presidente en 1994-1998: la CÍA, tendría a Uribe totalmente controlado, por que el servicio de inteligencia conoce muchos de los secretos más oscuros y nefastos del próximo presidente de Colombia. Para ellos, un Uribe Presidente tendrá que portarse muy bien, a juicio de la administración Bush. La hora del caballero del Apocalipsis ha llegado”.

FERNANDO GARAVITO:

ESCRITOR, coautor de este libro y columnista de El Espectador
EDITOR NO AUTORIZADO

(La necesidad de dar a conocer la verdad es una razón que supera el deber de respetar los derechos de esta obra palpitante para todo Colombiano y en general todo ser humano. Obra de dos demócratas a quienes pedimos disculpas y comprensión por esta imperfecta transcripción pero obligatoria, -obra que por demás recomendamos en su versión impresa- y que nos reportan que ha sido subrepticamente retirada de circulación en Colombia, motivo que nos obliga a reproducirla para que sea conocida la verdad del para- presidente y para poder actuar y poder transformar la realidad en bien de la verdad y la vida, en una patria sufrida como ninguna otra nación, quizá. Pedimos especiales disculpas por esta edición “no autorizada”.

Los errores de transcripción se deben a los recursos limitados de personal, tiempo y equipo, realmente la obra original es una obra bien estructurada y que bien vale la pena adquirirla y leerla analíticamente es un documento de la historia; de la verdad la cual ningún imperio, nada podrá evitarla ni podrá acallarla).